

TERCERA PARTE

LA RESTAURACIÓN

por

Feliciano Montero

conciencia regeneracionista-reformista. Sin embargo, a partir de 1895, la guerra de Cuba se convierte en el factor dominante.

No es fácil integrar en un mismo *tiempo*, en un relato diacrónico, realidades históricas que tienen un ritmo distinto de evolución. Aunque se han intentado introducir adecuadamente las referencias a la realidad económica, social y mental, el eje de la narración es el político. Según ese criterio hemos subrayado los siguientes períodos.

1875-1881. Aunque la transición propiamente dicha de la República a la Monarquía restaurada se opera en los años 1875-76, ese proceso se inicia ya en 1874, en tiempos de la República autoritaria, y se prolonga hasta el primer acceso de los liberales al poder, o primer ejercicio pacífico del turno en 1881. El período 1874-81 está marcado por el objetivo de controlar el orden y recuperar la paz civil y social, a cuyo fin queda supeditado el ejercicio de las libertades. La figura de Cánovas, diseñador y controlador máximo del proceso, llena la época.

1881-1895. La etapa de plenitud del sistema comienza con el primer Gobierno de los liberales (1881-83), culmina con la gestión del Parlamento largo que convierte en leyes las aspiraciones liberales-democráticas de 1869, y acaba con el inicio de la guerra de Cuba. Lo que mejor define este período es la liberalización del régimen; la recuperación de las libertades y valores planteados en la Constitución de 1869. En el marco de la nueva tolerancia se amplía el pluralismo político, pero también el ideológico y estético. La ordenación jurídica de las libertades de imprenta y de asociaciones posibilitan el desarrollo de una rica vida asociativa, y la aparición de algunas movilizaciones y agrupaciones que anuncian nuevas organizaciones sociales y políticas. La obra del Parlamento largo (1885-1890) define políticamente este período. La inflexión de 1890 es significativa: la vuelta de Cánovas marca el inicio de una decidida política proteccionista y los orígenes del intervencionismo social del Estado.

I. LA RESTAURACIÓN (1875-1885)

Algunos protagonistas de los acontecimientos, como el marqués de Lema (*De la Revolución a la Restauración*), publicaron, ya hace tiempo, la crónica de los diversos proyectos e iniciativas restauradoras que se suceden a lo largo del Sexenio liberal-democrático. Posteriormente, el biógrafo de Cánovas, Melchor Fernández Almagro, dedicó un capítulo de su libro (*Hacia la Restauración*) al estudio de la gestión de Cánovas como encargado de la causa dinástica borbónica-alfonsina desde el verano de 1873. Más recientemente, un capítulo del libro de Varela Ortega, *Los amigos políticos*, y sobre todo el libro de Manuel Espadas, *Alfonso XII y los orígenes de la Restauración*, nos ofrecen una visión muy completa y documentada de la gestación de la Restauración o del proceso que desemboca en la proclamación del rey Alfonso XII por el general Martínez Campos, en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874. En estos dos últimos libros citados la visión de los protagonistas y el estudio de su correspondencia es completado con la de los informes diplomáticos de los embajadores extranjeros en Madrid.

La gestación de la Restauración

Las intenciones restauradoras aparecieron en el entorno de Isabel II, desde el inicio mismo de su exilio, con el triunfo de la Revolución del 68. Pero, si nos referimos al específico proyecto restaurador alfonsino que culmina en diciembre de 1874, éste comienza con la abdicación de Isabel II en junio de 1870. El encargo directo de la causa dinástica a Cánovas, en el verano de 1873, tras los fracasos de otros patrocinadores (el duque de Montpensier y el propio general Serrano), en el contexto de progresivo deterioro de la coalición revolucionaria, marca sin embargo el verdadero comienzo del proceso

restaurador, que se acelera notablemente a lo largo de 1874 durante la República presidencialista de Serrano.

El primer paso, la abdicación de Isabel II de sus derechos dinásticos en su hijo Alfonso de doce años, se llevó a cabo casi dos años después del destronamiento, en junio de 1870, tras consulta de Isabel a una serie de personalidades cualificadas. Cánovas aconsejó explícitamente a la reina la abdicación. Ésta lo hizo sin renunciar a la tutela como madre del futuro rey, y por tanto a la intervención directa en todas las iniciativas relacionadas con su educación y, en general, con los preparativos de la Restauración.

Antes de que Cánovas asumiera de forma directa y exclusiva, en el verano de 1873, la jefatura de la causa dinástica, el propio duque de Montpensier había tomado temporalmente el patrocinio de la causa de su sobrino y con escaso éxito, pues nunca contó con la confianza de los moderados y los partidarios de la Restauración. Tras el fracaso de este patrocinio, y en medio de la Monarquía amadeísta, el general Serrano fue invitado a ponerse al frente de la causa alfonsina. La crisis de la Monarquía amadeísta y la posibilidad de perpetuarse en el poder, al estilo macmahonista, que le ofrecía la República presidencialista inaugurada tras el golpe de Pavía de 3 de enero de 1874, frustró también esa vía restauradora.

El proyecto canovista, aunque no descuidaba, como no podía ser por menos en ese momento, los contactos y apoyos militares, se basaba fundamentalmente en la creación de un amplio movimiento de opinión favorable a la causa alfonsina. Ello obligaba a cuidar especialmente la prensa y a crear una amplia red de círculos moderados y alfonsinos que irían agrupando a los partidarios de la alternativa alfonsina. Esa doble red expresaba la amplitud ideológica del proyecto canovista, que trataba de hacer, a partir del viejo partido moderado, en torno a Isabel II, un nuevo partido conservador, en torno al joven representante de los borbones, Alfonso.

Entre los apoyos civiles y militares al alfonsismo, Manuel Espadas ha puesto de relieve la importancia del grupo de presión hispano-cubano francamente preocupado por los proyectos antiesclavistas y, en general, reformistas del estatus colonial de Cuba que habían propiciado los diversos Gobiernos del Sexenio. Cuando Cánovas asumió la jefatura del alfonsismo, se encontró con una red de casinos españoles en Cuba y de círculos ultramarinos en España que se propuso potenciar y desarrollar como plataformas de la conspiración alfonsina.

La conspiración militar que culminó en el pronunciamiento de Martínez Campos y posibilitó la restauración alfonsina se vinculaba precisamente al grupo de presión cubano. Uno de los capitanes generales de Cuba, Valmaseda, era el principal inspirador del pronunciamiento.

En un momento como el del final del Sexenio, en medio de la triple guerra, cantonalista, carlista y cubana, el peso político de los militares era ineludible y se hacia hegemónico, especialmente después del golpe de Pavía, Cánovas y el alfonsismo no lo ignoraban. Muy al contrario, multiplicaban

sus contactos para poner a los militares a su servicio. Una de las debilidades de la República presidencialista de Serrano era que necesitaba apoyarse en militares que en una buena parte estaban vinculados al alfonsismo.

Durante el año 1874 las iniciativas conspiradoras se multiplican y se aceleran. El problema para Cánovas no era tanto impedir la intervención militar como controlarla y someterla a su amplio proyecto restaurador, conciliador, no revanchista. Varela Ortega ha subrayado la tensión moderados-alfonsinos que atraviesa la gestación y el primer año de la Restauración. El apoyo del general Concha —con fortalecido y renovado prestigio en la guerra del Norte— a la causa alfonsista, finalmente frustrado por su muerte en el frente, contaba con el apoyo de Cánovas. En cambio, el disgusto inicial de Cánovas y su desaprobación del golpe de Martínez Campos, no lo era tanto por el carácter militarista con que nacía el nuevo régimen como por el hecho de que se trataba de un grupo de militares vinculado a los moderados. Moderados y canovistas, unidos circunstancialmente en el proyecto restaurador alfonsino, de hecho lo entendían de forma distinta, como se verá muy pronto en el primer año de la Restauración.

Una de las mejores aportaciones del libro de Manuel Espadas es haber situado la gestación de la restauración alfonsina en el contexto internacional. En efecto, las vicisitudes de los diversos Gobiernos del Sexenio liberal-democrático, y las iniciativas y gestiones restauradoras no podían ser ajenas a las presiones y oportunidades que ofrecía la situación internacional.

Desde 1870, Bismarck y el intervencionismo prusiano se convirtieron en el factor hegemónico de la situación europea, y, por tanto, también de la española. En 1874 se produjo un acercamiento canovista a Prusia, y Bismarck no parecía desaprobador los proyectos restauradores.

La dependencia de Bismarck obligaba al imperio austro-húngaro a adoptar una postura muy prudente hacia la Monarquía exiliada en París y hacia el joven Alfonso, alumno en Viena de la academia Teresiana, y visitante casi anónimo de la Exposición Universal de 1873 en Viena.

El exilio de la Monarquía española en París era tolerado y respetado por la República de Thiers. Más tarde, Cánovas observaba con recelo el paralelismo entre la República macmahonista y el presidencialismo de Serrano. Por otra parte, el mismo Cánovas advertía a la familia real española sobre cualquier connivencia con los bonapartistas y con los legitimistas franceses.

En la fase final del proyecto restaurador, la estancia del príncipe Alfonso en la Academia de Sandhurst, en el último trimestre de 1874, fue una opción especialmente meditada por Cánovas para potenciar la imagen de un rey constitucional, además de soldado, que compensara sus anteriores contactos con la Monarquía austro-húngara. Es en ese contexto liberal inglés donde se preparó el manifiesto, que resultará en corto plazo verdaderamente programático del alfonsismo.

A lo largo del Sexenio se sucedieron las demandas, tanto de Isabel II

como de don Carlos, para atraer a su causa el apoyo vaticano. La Santa Sede, por su parte, evitó comprometerse públicamente con ninguna de las opciones monárquicas, mientras mantenía contactos privados, promovía infructuosamente la fusión dinástica de las dos ramas, e intentaba negociar el mejor estatus posible en la relación diplomática con los sucesivos Gobiernos revolucionarios. Ello le impedía reconocer a Alfonso XII como aspirante al trono. Hecha efectiva la Restauración, el Vaticano se colocará al lado de los moderados en su defensa a ultranza de la unidad católica frente a la tolerancia propugnada por Cánovas.

CÁNOVAS, ARTÍFICE DE LA RESTAURACIÓN

Cánovas, artífice de la Restauración. Éste o un epígrafe semejante abunda en cualquier manual sobre la Restauración. A Cánovas se le han atribuido los defectos y virtudes del régimen político iniciado en 1875. En sus escritos se han descifrado las claves ideológicas y políticas de la Restauración.

Aunque haya habido otros protagonistas importantes, ideólogos como Alonso Martínez, políticos como Sagasta o Silvela, que han merecido mucha menos atención, en el inicio de una síntesis sobre la Restauración es ineludible hacer una breve referencia al pensamiento y la figura de Cánovas. No en vano, el tiempo de la Restauración que vamos a sintetizar (1875-1895) es por excelencia la España de Cánovas.

Comencemos por unas *notas historiográficas*. Su figura fue objeto de controversia ya durante su vida. La crítica más destacada fue la del escritor y crítico Leopoldo Alas *Clarín* en 1886: se trataba de una descalificación del personaje humano y del hombre de letras, pero apuntaba fundamentalmente al político, responsable máximo del régimen vigente, objeto principal de la descalificación de *Clarín*.

Su muerte violenta dio lugar a múltiples necrologías de signo fundamentalmente apologético, recogidas por su hermano en un volumen titulado *Juicio que mereció a sus contemporáneos...*

El primer centenario de su nacimiento, en plena dictadura primorriverista (1928), posibilitó unas valoraciones más desapasionadas. Entre las conferencias pronunciadas con ese motivo en el Ateneo de Madrid, destaca la del marqués de Lema, *Cánovas y la Restauración*, en la que recordaba la gestación del alfonsismo, bajo la dirección de Cánovas, durante el Sexenio revolucionario. En ese mismo ciclo de conferencias Francisco Bergamín hacía una valoración muy ajustada del *Cánovas político*: *No consintió jamás que ni el clericalismo ni el militarismo determinaran ninguna clase de obscuridad, de debilidad sobre esta autonomía del poder civil. Él mató el militarismo y los pronunciamientos militares en España. Él redujo a la Iglesia a su verdadero cometido...*

Eduardo Sanz y Escartín, por su parte, aprovechaba esa misma ocasión

—*El pensamiento de Cánovas en el orden político y social* es el título de su conferencia— para criticar el desarrollo exagerado del proteccionismo y del intervencionismo dirigista durante la dictadura de Primo de Rivera. El giro proteccionista de Cánovas, a partir de 1890, recordaba Sanz y Escartín, era compatible con la *concurrentia* y las libertades económicas. Independientemente de su intención coyuntural (la crítica a determinados aspectos de la dictadura primorriverista), el discurso de Sanz y Escartín contribuía a poner de relieve el giro proteccionista en lo económico e intervencionista en materia de protección social, que había impulsado Cánovas desde 1890. Aspectos ambos que sólo la historiografía más reciente ha valorado y estudiado.

En los años cincuenta de este siglo, el perfil biográfico de Cánovas quedó bien planteado por Melchor Fernández Almagro y por J. L. Comellas. En sus estudios predomina la valoración muy positiva de su figura y su obra política. Posteriormente en los años sesenta y setenta, la historiografía, retomando y reproduciendo a veces la crítica regeneracionista a un régimen oligárquico y caciquil, responsabiliza a Cánovas de los límites y defectos del sistema político por él diseñado. Subraya y critica su antisocialismo (cargando sobre él, de alguna manera, la falta de sensibilidad por los problemas sociales), su defensa exclusivista del derecho de propiedad y su consiguiente oposición al sufragio universal, así como su connivencia con la corrupción electoral como práctica habitual.

Más recientemente, algunos autores han situado su figura y su proyecto en un contexto más matizado. Varela Ortega ha realizado su gran capacidad política al subrayar las dificultades que tuvo que superar para sacar adelante su proyecto conciliador en una España mayoritariamente tradicionalista. Este mismo autor llama la atención sobre su fundamental actitud liberal y tolerante frente a los que, confundiéndole con posteriores inquisidores, le achacaban la persecución de los profesores krausistas.

Carlos Seco en un prólogo a un epistolario de Cánovas insiste en la valoración de algunos elementos del proyecto canovista, a menudo olvidados. Un proyecto, recuerda, no democrático (Cánovas siempre rechazó el sufragio universal), pero profundamente liberal, integrador y civilista, a diferencia del proyecto *isabelino* de los moderados. Recuerda su capacidad de integración de la derecha católica a través de Alejandro Pidal y Mon, ministro de Fomento en 1884; y de la izquierda posibilista, con cuyo principal representante, Castelar, siempre mantuvo una buena amistad y relación intelectual, por encima de las diferencias políticas. Destaca, además, su rotunda afirmación del Estado civilista frente al anterior protagonismo de los pronunciamientos militares. Seco destaca también un aspecto más descuidado por la historiografía: su talante conciliador en el tratamiento de la cuestión foral. Rechaza asimismo las críticas historiográficas a la política aislacionista de Cánovas. Recordando las circunstancias internacionales, prefiere hablar de *aislamiento real* para caracterizar su política internacional. Apoyándose en el

tono y estilo a menudo afectivo de la correspondencia epistolar, invita incluso a la recuperación de un perfil más humano de Cánovas frente a la tópica figura del *monstruo*, difundida ya por sus contemporáneos,

Cánovas, historiador y político

Uno de los tópicos más difundidos por las historias de la Restauración y las biografías de Cánovas ha sido la consideración del proyecto político de Cánovas como una proyección-plasmación de su tarea como investigador de la historia de España, y concretamente de la España de los Austrias, de la decadencia. Ésa sería la clave para entender el fondo realista y pesimista, a la vez, de su proyecto restaurador, que él mismo define como *continuar la historia de España*. Así como para comprender la raíz de ese principio básico del liberalismo doctrinario y de la Constitución de 1876, la *Constitución interna*.

Un reciente estudio de Esperanza Yllán ha venido a matizar sustancialmente esta visión tópica de la relación entre el Cánovas historiador y el político. Según esta autora, no es tanto la concepción histórica de Cánovas lo que determina y explica su proyecto político de la Restauración, sino que es la progresiva definición de su proyecto político lo que explica su evolución historiográfica, y, más concretamente, sus tres significativos estudios sobre la España de los Austrias: desde el historiador liberal-romántico (1854, *Historia de la decadencia de España...*), crítico con la Monarquía, hasta su apología del Conde Duque (1888, *Estudios del reinado de Felipe IV*), pasando por la defensa de la legitimidad dinástica (en 1869, *Bosquejo histórico de la Casa de Austria*).

En 1854 con su *Historia de la decadencia*, Cánovas, fundamentalmente historiador, colabora en un proyecto historiográfico nacional de *continuación* de la historia de España del padre Mariana. En 1869 su trabajo como historiador e investigador en Simancas, apartado de la vida política activa, se funde con su proyecto político de dar *continuidad y estabilidad* a la historia de España tras la Revolución del 68. *La Monarquía debía ser no sólo restaurada, sino legitimada y enaltecida en su larga historia, haciendo ver a los españoles un pasado nacional que tan injustamente había sido interpretado*. En 1888, los *Estudios del reinado de Felipe IV* están escritos preferentemente desde la preocupación del hombre de Estado, del político que reflexiona sobre los problemas del pasado y sobre la figura que, en la tradición arbitrista, intentó afrontar esos problemas. En esta tercera obra se observa una identificación de Cánovas con el conde duque de Olivares.

Este importante estudio del Cánovas historiador no invalida, sino más bien confirma, la coherencia fundamental, desde el punto de vista intelectual, del proyecto político canovista, y su estrecha relación con su pensamiento y su obra como historiador. Aunque desde esta nueva perspectiva, lo pri-

mero y determinante sea la comprensión del Cánovas político, pensador y actor, sobre el Cánovas historiador.

Ahora bien, este proyecto político configurado de forma definitiva durante el Sexenio tiene sus raíces en un largo proceso que arranca de la experiencia revolucionaria de 1854 y encuentra su inmediato precedente en el Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863): *Esta línea de continuidad ideológica —afirma E. Yllán—, que comienza con el grupo disidente del moderantismo, continúa con la Unión Liberal y triunfa, al fin, con la Restauración, constituye un hecho fundamental que ha de ser tenido en cuenta a la hora de rastrear los orígenes ideológicos del sistema canovista.*

El Manifiesto de Sandhurst o el programa de la Restauración

Quizá la mejor síntesis del proyecto canovista de restauración alfonsina lo constituye el llamado *Manifiesto de Sandhurst*, que, redactado por Cánovas, remitió el joven Alfonso, el 1 de diciembre de 1874, desde la Academia militar próxima a Londres, como respuesta a las numerosas felicitaciones recibidas con motivo de su cumpleaños. Lo de menos es la fórmula ficticia adoptada de supuesta carta de respuesta. Se trata de un texto redactado por Cánovas, previamente aprobado por los representantes de la causa, con una clara intención propagandística, dentro de la campaña de creación de un amplio movimiento de opinión en favor de la causa alfonsina. La próxima proclamación del nuevo rey (un mes después), tras el golpe de Sagunto, dio aún más relieve de manifiesto programático a un texto breve, síntesis perfecta de los principios inspiradores del nuevo régimen:

— Llenar con legitimidad dinástica un vacío político y jurídico que de hecho se había ido agrandando durante el Sexenio era la principal justificación y argumento del proyecto restaurador: *Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que elevara los ojos a su acostumbrado derecho constitucional...*

— Conciliar, pacificar, buscar vías de transacción, para dar cabida al máximo de posiciones, y evitar exclusiones *a priori*, era la principal aspiración, el objetivo esencial, para dar estabilidad al régimen, y apartarlo de los vaivenes de los pronunciamientos: *... antes de mucho estarán conmigo todos los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos, comprendiendo que no pueden temer exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un régimen que precisamente hoy se impone porque representa la unión y la paz.*

— Este modelo conciliador se fundamentaría en una soberanía nacional compartida entre el rey y las Cortes: *No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron los negocios arduos los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía*

(...) Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten sobre todas las cuestiones por resolver un príncipe leal y un pueblo libre.

— La solución *tolerante* anunciada a la polémica cuestión religiosa sería la mejor expresión de ese carácter conciliador del proyecto. *Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre del siglo, verdaderamente liberal*, fue la fórmula finalmente acordada para presentar este objetivo.

LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN. LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1875-76)

La pugna entre moderados y alfonsinos por controlar el proceso de instauración del nuevo régimen se manifestó inmediatamente después del golpe de Martínez Campos. La primera tarea de Cánovas en el mismo desarrollo del pronunciamiento será afirmar su jefatura política amenazada brevemente por los moderados, que pretenderán usufructuar el golpe de su general. A partir de este momento Cánovas tuvo que ejercer una difícil función de arbitraje entre las dos tendencias, para ampliar el máximo de apoyos, según su proyecto conciliador, pero sin romper la unidad del movimiento alfonsino.

La constitucionalización y consolidación política del nuevo régimen, de acuerdo con las directrices anunciadas en el Manifiesto de Sandhurst, se convierte en la primera y difícil tarea de Cánovas en los dos primeros años de la Restauración. Junto a esta consolidación política y estrechamente vinculada a ella, era igualmente urgente la pacificación militar en el norte de la Península y en Cuba. La pacificación civil y la militar eran objetivos prioritarios y para su logro iba a utilizar dos instrumentos básicos: un nuevo partido liberal-conservador, con la izquierda de los moderados, los unionistas y la derecha de los constitucionales, y un *rey-soldado*, que asumiría protagonismo directo en la guerra carlista para reforzar su imagen, y subordinar cualquier nuevo intento de *pronunciamiento*.

La definición y consolidación política del nuevo régimen pasaba por la elaboración de unas bases constitucionales que se encarga redactar a una comisión de 39 notables, sacados de una asamblea de ex diputados y ex senadores. Elaboradas las bases en el verano de 1875, era preciso elegir unas nuevas Cortes constituyentes (elecciones de enero de 1876) que aprobarían la nueva Constitución (febrero a junio de 1876).

Este proceso político se desarrolló de acuerdo con los planes y directrices de Cánovas, pero con fuertes resistencias de los moderados, principales opositores, junto con los carlistas, al carácter tolerante y abierto de la Constitución que se trataba de implantar. De esta manera el proceso político señalado sirvió también para depurar las posiciones políticas personales y para configurar definitivamente el nuevo partido liberal-conservador sobre la ruina del viejo partido moderado. Esta configuración del partido conservador

habría de ser el pilar fundamental del nuevo régimen, y constituyó, por tanto, en la atención de Cánovas, el principal objetivo de la transición política, la garantía de la consolidación del nuevo régimen.

La dictadura de Cánovas

Cánovas se vio obligado, para desarrollar su proyecto, a maniobrar hábilmente a derecha e izquierda. Hasta *abril-mayo de 1875*, tomó una serie de medidas tendentes a contentar a los moderados, para dividirlos y atraérselos a su proyecto. Entre esas medidas destacan las destinadas al control de la prensa y el orden público, y a la recuperación de la posición de la Iglesia.

La más significativa, sin duda, aunque claramente no contó con el beneplácito del jefe de Gobierno, fue el polémico decreto de Orovio sobre la ortodoxia moral y política de las enseñanzas impartidas por los profesores del Estado, que provocó la llamada *segunda cuestión universitaria*: la expulsión de sus cátedras de los profesores krausistas, que dio lugar a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Numerosas publicaciones han insistido en el episodio para poner de manifiesto la ruptura inicial del nuevo régimen y del canovismo con la intelectualidad liberal. Pero Varela Ortega ha situado el episodio en su verdadero contexto: la pugna moderados-canovistas por la definición del nuevo régimen. El decreto de Orovio, según esta interpretación, sería una maniobra de los moderados para torpedear la presunta apertura del canovismo hacia los unionistas y constitucionales, además de afirmar sus posiciones intransigentes en relación con la estricta defensa de la unidad católica. Cánovas, a pesar de sus esfuerzos para llegar a un acuerdo *de facto* con los krausistas para no hacer efectivo el castigo, se habría visto obligado a encajar de momento esta situación tan contraria a sus proyectos. Sin embargo, como el propio Varela Ortega señala, los krausistas no tendrían ninguna dificultad en la fundación de la ILE y en el amplio desarrollo de sus actividades e influencias, dentro y fuera de la enseñanza pública, durante toda la Restauración.

La pugna moderados-canovistas, siguiendo a Varela Ortega, se va a centrar durante la transición política (1875-76) en tres cuestiones: la vuelta de Isabel II a España, alentada por los moderados y retrasada por Cánovas; la inmediata restauración de la Constitución de 1845, frente a la elaboración de una nueva Constitución, y, finalmente, la cuestión más debatida, la afirmación de la unidad católica frente a la tolerancia de cultos defendida por Cánovas.

— En cuanto al *retorno de Isabel II*, bandera desde el comienzo de la Restauración de los moderados y de los cruzados de la unidad católica, Cánovas logrará retrasarla hasta julio de 1876, cuando la transición política estaba prácticamente concluida, con la nueva Constitución ya promulgada y la guerra carlista terminada.

— El restablecimiento de la Constitución de 1845 y, por tanto, de la unidad católica en ella proclamada, era la mejor expresión del proyecto restaurador de los moderados, exclusivista y revanchista, a diferencia del proyecto canovista, abierto y conciliador, según la caracterización de numerosos historiadores.

— La causa de la *unidad católica* era enormemente popular. La última guerra carlista se alimentaba ampliamente del sentimiento neocatólico y ultramontano. Indudablemente la cuestión religiosa fue la más delicada que tuvo que afrontar Cánovas para sacar adelante su proyecto, y así ha sido destacado por recientes estudios (desde el libro de Varela Ortega, que subraya su habilidad en encauzar positivamente el problema, hasta el libro de Cristóbal Robles *Insurrección o legalidad*, que presenta minuciosamente el punto de vista vaticano en esta operación).

Desde el primer momento, la unidad católica fue el *leit motiv* de la propaganda y movilización de los moderados contra los canovistas, pero especialmente a partir del momento en que sus criterios fueron claramente derrotados en las bases constitucionales preparadas por la Comisión de Notables en el verano de 1875. Perdida la batalla en la alta esfera política, se intensifica la movilización y la protesta en la prensa, recogida de firmas, manifestaciones y peregrinaciones, con el apoyo y las directrices vaticanas. La permanencia de la guerra carlista añadía un factor más de riesgo que la diplomacia vaticana utilizaba como instrumento de presión. Para Cánovas, sin embargo, la respuesta a este reto, es decir, la afirmación de su proyecto conciliador (tolerancia de cultos frente a unidad católica), con todos los riesgos políticos mencionados, se convirtió precisamente en la clave para la disolución de los moderados como grupo, y la configuración definitiva de su partido político, el liberal-conservador.

La Asamblea de Notables y las Bases constitucionales

Si hasta mayo de 1875, la política de Cánovas había tendido a dar confianza a su derecha (los viejos moderados), a partir de este momento, y especialmente con la convocatoria de la *Asamblea de Notables* (mayo de 1875), tenderá claramente a establecer lazos con su izquierda, ex unionistas y ex-constitucionales, para la elaboración de su proyecto constitucional. En la gran Asamblea de Notables, los moderados eran mayoritarios. La maniobra de Cánovas consistió en encargar la elaboración de las bases constitucionales a una comisión de 39 en la que estaban representados paritariamente las tres tendencias: moderados, canovistas y constitucionales escindidos del partido sagastino. Con esa composición, Cánovas logrará sacar adelante su proyecto de Bases (y concretamente la polémica cuestión de la tolerancia de cultos), con el apoyo de los constitucionales y la oposición de los moderados. Con

esta operación política ponía además las bases de la constitución del partido liberal-conservador.

Conviene recordar que la Asamblea de Notables, punto de partida del largo proceso de elaboración de la Constitución de 1876, fue en un principio una iniciativa de los constitucionales monárquicos, con Alonso Martínez al frente, escindidos de la jefatura de Sagasta. La iniciativa fue acogida, ampliada y apoyada por el Gobierno. La magna Asamblea de Notables de 341 ex diputados y ex senadores más 238 adhesiones, se limitó a manifestar públicamente la intención conciliadora y constituyente que estaba en el origen de los convocantes.

El objeto de la reunión —según palabras atribuidas al presidente de la Asamblea, Alonso Martínez— *no es ni puede ser discutir la Monarquía y la dinastía de Alfonso XII; éstos son temas que están fuera de discusión siempre, y que todos nosotros tenemos reconocidos sincera y lealmente. Nos reunimos aquí, pues, según la convocatoria, para tratar de establecer las bases de una legalidad común, afianzar el trono y la dinastía de Alfonso XII y restablecer el régimen constitucional y asegurar la libertad Hermanándola con el orden y con los principios de equidad y de justicia necesarios para la conservación y el orden social. Comprendo que para llegar a este resultado es necesario que todos hagamos grandes concesiones dentro de nuestro honor y convicciones, dando así una gran prueba de patriotismo...*

Pero el verdadero trabajo de redactar las bases constitucionales fue encargado a una Comisión reducida de 39 notables, que a su vez delegó en una subcomisión de nueve. Alonso Martínez, desde dentro, y Cánovas, desde fuera, son los redactores efectivos de esas bases, origen inmediato de la Constitución. Los trabajos de la Subcomisión y de la Comisión se prolongaron durante casi dos meses, principalmente por el encono que suscitó la base 11 reguladora de la cuestión religiosa. En torno a esta cuestión política fundamental se perfilaron las respectivas posiciones: la disidencia de algunos moderados históricos, y la alianza de los canovistas con algunos constitucionales. Un manifiesto de los moderados de 3 de agosto de 1875, firmado por los señores Mons, Mayans, Carramolino, marqueses de Corvera y de Pidal, conde de Guendulain, Casanueva y Amorós, explicaba sus diferencias con la base 11, y llamaba a la protesta católica frente a la amenaza a la unidad católica.

Por su parte, por indicación de Cánovas, la Comisión de los Notables, en vísperas de las primeras elecciones (enero de 1876), presentaba su trabajo. El llamado Manifiesto de los Notables, verdadero manifiesto preelectoral, al justificar las bases constitucionales hacían un nuevo llamamiento al consenso:

Natural era, pues, que los partidos, respondiendo a su llamamiento, se concertaran para llegar a una legalidad común, porque sin un rey universalmente aceptado y una Constitución por todos respetada podrá existir en verdad una dictadura más o menos inteligente y provechosa, pero es de

todo punto imposible el régimen monárquico-constitucional y parlamentario.

La convocatoria de las primeras elecciones que deberían aprobar la nueva Constitución suscitó un debate en el Consejo de Ministros sobre la conveniencia o no de mantener el sufragio universal de acuerdo con la Ley electoral de 1870. El debate concluyó en crisis ministerial y en dimisión de Cánovas que abrió camino a un breve Gobierno presidido por el general Jovellar. Esta solución permitía a Cánovas no implicarse directa y oficialmente en la decisión de mantener el sufragio universal para las primeras elecciones. Al hacerlo así, independientemente de sus propias convicciones, evitaba la descalificación de los moderados históricos, salvando su liderazgo sobre el partido conservador que trataba de crear.

Aprobada la fórmula electoral, tres meses después, Cánovas recuperó la jefatura del Gobierno para afrontar personalmente la realización de las elecciones. Para ello contaba con el que se consideraba ya un gran experto en *fabricar elecciones*, Romero Robledo. En el nuevo Gobierno se había desprendido, por otro lado, de algún lastre de los moderados.

Las elecciones, con las fórmulas habituales de intervenciones fraudulentas, garantizaron una amplia mayoría para el nuevo partido conservador, respetando una minoría significativa para el partido opositor (40 escaños), e incluso para algunas minorías distantes del sistema. La fabricación parlamentaria de la mayoría conservadora consolidaba el proceso de configuración del partido liberal-conservador, que sustentaría la aprobación de la Constitución, así como su aplicación y desarrollo. Con ello Cánovas, como afirma Varela Ortega, *hizo una política, sistemática y literalmente hablando, no democrática. La hizo dentro del movimiento alfonsino, marginando, antes de la Restauración, al partido dinástico mayoritario, el partido moderado, y durante ella anulando su versión contrarrevolucionaria.*

La Constitución de 1876

La Constitución de 1876, por su larga vigencia, ocupa un lugar destacado en la historia del constitucionalismo español. Ha merecido la atención de numerosos estudios que con algunas diferencias de matiz la han valorado como la mejor expresión del proyecto canovista: su pragmatismo, su flexibilidad, su carácter ecléctico y ambiguo, y, por todo ello, su capacidad de ser aceptable y adaptable por unos y otros.

La mayoría la ha valorado como una mezcla dosificada de las Constituciones de 1845 (moderada) y de 1869 (liberal radical). Concretamente la Constitución canovista asumiría casi íntegramente los derechos y libertades proclamados en la del 69, aunque algunos de esos derechos, como la libertad de asociación, serían regulados mucho más tarde. Sin embargo, en lo esencial, la Constitución de 1876 recogía la base doctrinaria moderada de la

del 45. Un riguroso análisis comparativo de la Constitución del 76 con todas las anteriores, desde la de Cádiz, como el que ha hecho el profesor Manuel Martínez Sospedra (*Las fuentes de la Constitución de 1876. Continuidad y cambio en el constitucionalismo español del siglo XIX*) ha cuestionado este punto de vista, subrayando, por un lado, la inspiración burkeana (inglesa) más que doctrinaria (francesa) en el proyecto de Cánovas, y por otro, la estrecha dependencia del articulado del 76 respecto de toda la tradición constitucional española del siglo XIX. Según este estudio, los dos puntos quizá más novedosos de la Constitución de 1876, los que mejor expresan el pacto conciliador, la regulación de la tolerancia de cultos (art. 11) y la composición del Senado (en parte electivo, en parte vitalicio por derecho propio, y en parte por nombramiento real), no son tampoco originales. El régimen de tolerancia estaba regulado de forma análoga en la nonnata Constitución de 1856; y el modelo de Senado, en el voto particular presentado por el *puritano* Pacheco, antiguo jefe de Cánovas, a la reforma constitucional de 1845.

Según el citado estudio, en la Constitución de 1876 influyen no sólo las del 45 y del 69, sino también, y de una manera más fundamental, la de 1837: *La Constitución de 1837 proporciona no sólo el modelo político y la arquitectura de la Constitución canovista, sino también en lo referente a la organización y funcionamiento de las Cámaras, las Fuerzas Armadas y Ultramar.*

En suma, todos los estudios sobre la Constitución de 1876 insisten en su fundamental continuismo con la tradición constitucional española que arranca de Cádiz. La originalidad de la del 76 y la base de su larga vigencia sería esa mezcla realista de fórmulas ya ensayadas, que tan bien se manifiesta en los temas ya citados de la regulación de la cuestión religiosa y la composición del Senado.

LA POLÍTICA DE LOS CONSERVADORES (1876-1880)

El primer objetivo y la condición esencial para el éxito de toda la operación restauradora era la *pacificación* interna y externa. El movimiento cantonalista había sido controlado por la República de Serrano, pero cuando Alfonso XII inició su reinado persistían la guerra carlista y la guerra de Cuba.

El fin de la guerra carlista

La transición política se va a ver acompañada y condicionada por las vicisitudes de la *guerra carlista*. Una guerra cuya liquidación urgía al nuevo régimen, pero que no se hizo sin importantes desgastes financieros y humanos.

Sin entrar en las múltiples vicisitudes bélicas, recordemos brevemente la

evolución final, ligada a la resistencia carlista en tres focos geográficos de desigual importancia: el Centro (La Mancha, Aragón), Cataluña, el Norte (País Vasco y Navarra). Mientras que en el Centro no había propiamente un ejército, sino partidas de guerrilleros atrincheradas en alguna plaza fuerte, en Cataluña la ocupación carlista del espacio era mucho mayor, y en el Norte había un Estado organizado y un ejército regular y numeroso. Las fases finales de la guerra coinciden con la sucesiva liquidación de la resistencia en esos tres focos.

— En la liquidación de la resistencia del Centro jugó un papel importante la declaración del viejo general Cabrera (en París el 11 de marzo del 75) reconociendo la legitimidad de Alfonso XII. La acción conjunta del general Jovellar, jefe de la campaña del Centro, y de Martínez Campos, al mando de la campaña de Cataluña, logró en el mes de junio la caída de las fortalezas carlistas de Miravent y Cantavieja.

— Cuando en enero del 75 Martínez Campos tomó el mando de la campaña de Cataluña, los carlistas ocupaban las tres cuartas partes del territorio. Aquí la clave de la resistencia militar se localizaba en las plazas de Olot y Seo de Urgel. Por tanto, la toma de Olot (19 de mayo) y la de Seo de Urgel, tras más de un mes de sitio, en agosto del 75, marcó el fin de la guerra en Cataluña, y la dispersión hacia Francia y hacia Navarra de unos 20.000 soldados.

— La campaña del Norte fue la más larga. Aquí había dos ejércitos regulares frente a frente, si bien el desequilibrio de fuerzas llegó a ser de cuatro a uno, a favor del ejército liberal, cuando la liquidación de la resistencia en Cataluña permitió concentrar todo el esfuerzo en el Norte. En diciembre del 75, con Jovellar ministro de la Guerra, tras el breve paréntesis de su presidencia del Consejo, se reorganizaron las fuerzas en dos grandes cuerpos de ejército: el de la derecha, a cargo de Martínez Campos, con unos 50.000 hombres, con la misión de operar en Navarra, y el de la izquierda, al mando de Quesada, con unos 105.000 hombres, y la misión de actuar en el País Vasco.

Se concedía el mando supremo de los dos cuerpos de ejército al rey, que se presentó efectivamente en el teatro de operaciones en la fase final de la guerra (febrero del 76), como lo había hecho también hacía un año en el momento inicial de su reinado. La guerra carlista sirvió así para prestigiar y afianzar la figura del joven Alfonso XII, entre el pueblo, como pacificador del país, y entre los militares, como rey-soldado, supremo jefe del Ejército. Con esta autoridad moral de la Monarquía sobre los generales se afirmaría el carácter *civilista* del nuevo régimen, uno de los objetivos más queridos por Cánovas.

La ocupación de Estella (17-19 de febrero) y la de Tolosa (21 de febrero), la entrada de Alfonso XII en San Sebastián y en Pamplona (28 de febrero), al mismo tiempo que don Carlos pasaba la frontera, marca el final de la guerra y el regreso triunfal de Alfonso XII a Madrid. El final de la guerra

coincidía prácticamente con la apertura de Cortes para debatir la Constitución del 76.

La relativamente rápida victoria liberal se explica por la conjunción de varios factores. Por un lado, las divisiones internas en el seno del carlismo, y algunas desafecciones significativas como la del mítico general Cabrera. Por otro, el esfuerzo financiero, bélico y diplomático del Gobierno de Madrid. La superioridad numérica del ejército liberal era de 4 a 1 según algunas estimaciones, aparte de la mayor disciplina y eficacia de un ejército regular. El tiempo jugaba a favor de un régimen en trance de consolidación constitucional (el final de la guerra coincidía con el final de ese proceso), progresivamente reconocido por las potencias europeas. Además, la causa carlista, en lo que tenía de contrarrevolucionaria, no era tan urgente y pertinente frente a la Monarquía alfoncina, como frente a la amadeísta y la primera República. La guerra carlista había surgido en otro contexto.

Sin embargo, el fin de la guerra carlista no significó, sin duda, la solución del conflicto político-religioso. Frente a la nueva Constitución, los partidarios de la unidad católica, coincidentes mayoritariamente con el bando carlista, seguirían luchando con todos los medios a su alcance. Más allá de la pacificación militar quedaba la pacificación de las conciencias. Sólo muy lentamente la inicial intransigencia católica ante el nuevo régimen se iría suavizando, gracias sobre todo al giro posibilista que el Vaticano imprimió a su política. Los conflictos Iglesia-Estado, la movilización católica antiliberal, las tensiones internas que provoca la aplicación de las directrices vaticanas (unidad y posibilismo) entre los católicos españoles, quedan analizadas en otro lugar. Baste aquí señalar la pervivencia de ese carlismo difuso, o de esa mentalidad tradicionalista ampliamente extendida en la sociedad española del último cuarto del siglo, y aun después.

La abolición de los fueros vascos, otra consecuencia de la derrota carlista, no significó la anulación de algunas particularidades, como la posibilidad de mantener conciertos económicos, dando pie así a una vía de reconciliación.

Desde el final de la primera guerra (1839) pendía sobre el País Vasco la aplicación del artículo 2.º de la Ley de 25 de octubre de 1839, por la que se modificó el régimen foral en Navarra. En 1876, la guerra había terminado sin pactos previos, y, por tanto, sin lugar a concesiones. Consecuencia directa de la guerra fue, pues, la reforma (no estrictamente abolición) del régimen foral. Integrar a las Vascongadas en el régimen fiscal ordinario y en el sistema de quintas eran los dos objetivos de la Ley de 21 de julio de 1876, según expresaba el artículo 1.º de la citada ley: *Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir, en proporción a sus deberes, a los gastos del Estado, se extenderá, como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, del mismo modo que a todos los demás de la nación.*

Los efectos de la ley general de abolición de los fueros quedaron atenuados por el decreto (28 de febrero de 1878) que regulaba los conciertos económicos de las diputaciones forales con el Gobierno. La fórmula del concierto económico era, por tanto, una solución transaccional acorde con el conjunto de la operación política canovista. De hecho, los citados conciertos parece que no fueron excesivamente contestados de momento por la población y las autoridades provinciales, aunque el agravio al sentimiento foralista permanecía potencialmente como fuente del futuro movimiento nacionalista.

Acabada la guerra carlista y consolidada la transición, tocaba abordar de manera más decidida el conflicto cubano, que se venía prolongando desde el inicio del Sexenio revolucionario. De allí habían venido impulsos y recursos financieros para la Restauración alfonsina. La pacificación de Cuba se vincula a la llegada de Martínez Campos en noviembre de 1876, como general en jefe, manteniéndose Jovellar como capitán general (la estrecha penetración entre Jovellar y Martínez Campos ya se había manifestado en la guerra carlista).

El éxito de la gestión militar y política de Martínez Campos en Cuba se debió a la conjunción de varios factores:

- un fuerte incremento de soldados y recursos militares (llegó a contar con unos 70.000 hombres frente a unos 7.000 independentistas), además del grupo de oficiales de confianza que se llevó consigo (Polavieja, Daban, Bargas), le daban una clara superioridad militar;

- una política de contactos con los líderes cubanos para llegar cuanto antes a acuerdos de paz;

- gestos humanizadores en las zonas que iba recuperando, dentro de una política de atracción: *recomiendo, pues, muy eficazmente, que en los poblados no se cometa desmán, tropelía ni violencia de ninguna índole; que nada se tome sin pagarlo; que se trate a los paisanos deferentemente y sin atropellos, y que las vidas de los prisioneros sean respetadas*; decía en sus *Instrucciones a la Comandancia general de Las Villas*;

- el cansancio de una guerra demasiado larga para todos los contendientes.

Como sintetiza Fernández Almagro, *la insurrección moría a causa de un proceso consuntivo que Martínez Campos acertó a precipitar. Militarmente, por medio del movimiento combinado de numerosas columnas que recorrían los campos de lucha en todas direcciones (...) Políticamente, explotando la desmoralización del enemigo.*

Los contactos con los líderes independentistas para establecer unas condiciones de paz dieron un primer fruto en febrero de 1878, con la capitulación de los ejércitos del centro. Los puntos principales del acuerdo eran los siguientes:

- Concesión a la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de las que disfrutaba la isla de Puerto Rico.
- Amnistía política e indulto general.

— Libertad a los colonos asiáticos y esclavos que se hallen en las filas insurrectas. Martínez Campos había anticipado este punto mediante una medida unilateral anterior a la firma de los acuerdos.

La resistencia de Antonio Maceo en Oriente prolongó unos meses más la guerra hasta su rendición en abril de 1878. En total había pasado un año y medio desde la llegada de Martínez Campos, pero diez años desde el comienzo de la guerra. Martínez Campos había acortado la guerra mediante concesiones, como se justificaba en carta a Cánovas: *Se preguntará si yo podría haber llegado a la paz sin concesiones, y contestaré que creo que sí, que para junio esperaba concluir de todos modos; pero habría quedado más gente en los bosques, que hubieran sido una intranquilidad para la agricultura, un peligro para el porvenir; que no habrían plegado su bandera, que ésta la habría recogido la emigración; que como militar hubiera aumentado mi fama, pero como español habría tenido remordimientos de conciencia, porque se hubieran hecho más sacrificios.*

Durante la segunda mitad del año 1878, Martínez Campos, capitán general de Cuba, comenzó la reconstrucción de la postguerra, pero a principios de 1879 sería requerido en Madrid como alternativa conservadora al Gobierno Cánovas.

El acceso a la presidencia del Consejo de Ministros de Martínez Campos tenía que ver con su prestigio como pacificador de Cuba. Los problemas y dificultades que encontró en su breve gestión tuvieron también estrecha relación con la difícil y polémica aplicación de las bases acordadas en la Paz de Zanjón. La resistencia más significativa fue la que el Senado, controlado por los conservadores canovistas, impuso al proyecto de ley de Abolición de la Esclavitud, que era quizá el compromiso más significativo de la paz firmada por Martínez Campos.

Y, sin embargo, la aplicación de las condiciones de paz era tanto más urgente si se quería evitar el rebrote de la guerra independentista, como de hecho ocurrió en seguida en agosto de 1879. *La guerra chiquita* duró escasamente un año, y nunca alcanzó proporciones importantes, pues los líderes no llegaron a desembarcar, y el control militar de la situación, a cargo de Polavieja, fue rápido.

Ahora bien, la Paz de Zanjón no podía acabar con la tendencia profunda de Cuba a la independencia como reconocía el propio general Polavieja en carta al capitán general Blanco en junio del 79: *Convencidos de ello, debemos, en mi opinión, en vez de querer impedir a todo trance y en todo tiempo la independencia de Cuba, que vano empeño sería, prepararnos para ella, permanecer en la isla sólo el tiempo que en ella racionalmente podamos estar y tomar las medidas convenientes para no ser arrojados violentamente con perjuicio de nuestros intereses y mengua de nuestra honra, antes de la época en que amigablemente debamos abandonarla.*

Finalmente, el nuevo Gobierno Cánovas, que sustituyó al de Martínez

Campos, logró sacar adelante la ley de Abolición de la Esclavitud (13 de febrero de 1880), pero no las otras reformas administrativas y económicas pactadas para Cuba.

Orden público y control de las libertades

La preocupación por el orden y la legislación restrictiva de las libertades reconocidas en la Constitución es algo que siempre se ha atribuido característicamente a la gestión de Cánovas en los primeros años de la Restauración, a diferencia de la *liberalización* promovida por el Gobierno fusionista de Sagasta en el bienio 1881-83.

En efecto, Cánovas gobernó durante la transición (enero del 75 a enero del 77) con un régimen de excepción —*estado de sitio y suspensión de garantías constitucionales*— que se prolongó incluso más allá de la aprobación de la Constitución del 76. Ahora bien, esta situación se había decretado ya durante el año 74. Como señala el libro de Manuel Ballbé *Orden público y militarismo en la España constitucional*, Cánovas habría aprovechado, para consolidar su régimen, las medidas excepcionales que los liberales septembrinos en 1874 habían dictado para reprimir los movimientos carlistas y cantonalistas. Por otra parte, Cánovas aplicó la represión y el control de las libertades con un cierto carácter selectivo, *sin revanchismo, y no impidiendo la actividad política de los grupos desgastados*.

La Ley de 10 de enero de 1877, que exculpaba y justificaba toda la política represiva excepcional llevada a cabo desde enero del 74, supuso el final de la *dictadura de Cánovas* y el inicio de la regulación, aunque restrictiva, de las libertades. Entre ellas, la de una de las más polémicas a lo largo del siglo XIX, *la libertad de imprenta*.

Según la Ley de 7 de enero de 1879, la libertad de imprenta quedaba sometida a las siguientes condiciones: autorización gubernativa para las nuevas publicaciones; depósito previo; respeto a la religión, sobre todo a la religión del Estado, al rey e institución monárquica, a la propiedad y a la familia, al orden público y al Ejército; establecimiento de un tribunal especial para delitos de imprenta. El libro de J. Timoteo Álvarez *Restauración y prensa de masas* nos presenta las diversas formas de presión gubernamental que sufrió la prensa en estos primeros años de la Restauración: censura e irregularidades telegráficas en la comunicación de noticias; irregularidades en la distribución postal de periódicos; intervenciones directas de organismos de la Administración; utilización habitual del *fondo de reptiles*, diversas formas de regalos y sobornos.

Su estudio exhaustivo de la censura gubernamental de prensa, en el período 1875-81, revela una mayor cantidad de expedientes a lo largo de 1880, en el marco de la Ley de 1879. Se trata de una censura claramente política, centrada fundamentalmente en periódicos de Madrid de signo antidinástico.

Según el citado estudio, los motivos de denuncias eran: por injuriar al Gobierno o instituciones, por exaltar la libertad y la República, por ataques al Ejército o Guardia Civil, por exaltación y defensa del carlismo, por injurias al rey o a la familia real.

La Guardia Civil y la jurisdicción militar

Más allá de las declaraciones constitucionales y de las leyes reguladoras de las libertades, en la práctica, el ejercicio garantizado de esas libertades se vio muy condicionado por la ausencia de una policía y fuerzas de orden público profesionalizadas y no militarizadas. La Guardia Civil era el instrumento habitualmente utilizado por las autoridades para imponer el orden. Pero una normativa reciente la había convertido de hecho en un cuerpo militar, de forma que cualquier delito contra ella pasaba a la jurisdicción militar.

En general se ha contrapuesto el control y la censura de los primeros Gobiernos conservadores con la liberalización puesta en marcha a partir de 1881. Sin negar la diferencia en la normativa, Ballbé insiste en las escasas diferencias de las respectivas políticas gubernamentales: unos y otros dejaron en manos del Ejército y la Guardia Civil (militarizada) la defensa del orden público ante la práctica inexistencia de un aparato policial específico. Esta utilización de la Guardia Civil frente a delitos comunes implicó en la práctica la presencia de la jurisdicción militar en el juicio de conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos y libertades teóricamente garantizados en la Constitución y en las leyes complementarias.

El propio Gobierno liberal, en circular del 7 de febrero de 1881, aconsejaba a los alcaldes no acudir tan frecuentemente a la Guardia Civil para solucionar los conflictos locales, con el fin de evitar la comisión de delitos. Pero la intervención de la Guardia Civil fue en aumento, en la medida en que se carecía de una administración policial civil y profesional, y cuando los modernos conflictos sociales iban creciendo.

Un proyecto Moret de 30 de diciembre de 1883 se lamentaba de las exageradas atribuciones de la Guardia Civil en el control del orden público. Pero los liberales no alteraron sustancialmente esta situación: la ley de Enjuiciamiento Militar de 29 de diciembre de 1886 reconocía la competencia de la jurisdicción militar en los presuntos insultos a la Guardia Civil.

Esta invasión de la jurisdicción militar matiza en alguna medida la imagen tan extendida del carácter civilista de la Restauración frente al régimen de pronunciamientos de la Monarquía isabelina. Ahora la presencia del poder militar en el sistema político era de otro tipo, pero no menos importante.

La ley sobre reuniones públicas de 15 de junio de 1880 contenía suficiente ambigüedad como para prohibir aún a los círculos democráticos la conmemoración del 11 de febrero, aniversario de la proclamación de la pri-

mera República. Una de las primeras medidas del Gobierno liberal fusionista fue precisamente tolerar esas celebraciones. Pero más adelante, frente a movilizaciones de los gremios industriales catalanes, contra las reformas fiscales de Camacho, se proclamó el estado de sitio en Barcelona (marzo del 82), y en todo el país, en agosto-septiembre del 83, frente a las conspiraciones republicanas.

La *política económica de los conservadores* trató de poner orden en algunos asuntos urgentes, como la deuda pública que no había dejado de crecer en el Sexenio, y en los primeros años de la Restauración por la prolongación de la guerra carlista. Organizar el presupuesto y sanear la deuda fueron los principales objetivos de Salaverría y Barzanallana, ministros de Hacienda con Cánovas. Pero también aquí la política de los conservadores aprovechaba medidas tomadas en el año 1874. *Los hacendistas de la Restauración* se encontraban bastante cómodos en el sistema que les había diseñado don Juan Francisco Camacho en el Decreto de 26 de junio de 1874, por el que se aprobaban los presupuestos del siguiente año económico.

Los dos primeros años de la Restauración están marcados por el efecto de la guerra, cuyo gasto absorbe casi la mitad del presupuesto. Sólo la liberación de gastos de la guerra permitió al Gobierno plantearse como objetivo prioritario el arreglo de la deuda. El ahorro de la guerra pasaba casi íntegramente a saldar los intereses de la deuda.

Una política decidida frente al déficit público creciente obligaba a un presupuesto equilibrado, lo que equivale a decir un aumento de los ingresos fiscales, pues la reducción de gastos era prácticamente imposible.

La *política comercial*. El inicio de la Restauración no significó, como a menudo se ha interpretado erróneamente, un giro proteccionista en política comercial, que vendría dado por la suspensión (en junio de 1875) de la base 5.^a del arancel de Figuerola de 1869. Como ha revisado Serrano Sanz, la suspensión no equivalía a derogación. Más bien lo que se observa es que el objetivo principal de la política gubernamental en los cinco primeros años de la Restauración era favorecer al máximo el comercio como fuente de ingresos aduaneros. La política de los hombres de la Restauración estaba guiada por un sentido más pragmático que ideológico tendente a favorecer la exportación de la principal producción española de la época: el vino.

La política comercial de los conservadores en estos años se basó en el efecto complementario de dos instrumentos: el arancel de doble columna y los tratados comerciales bilaterales.

Hasta 1881 el arancel se planteó más desde necesidades hacendísticas que comerciales. Si no se produjo de forma inmediata el viraje proteccionista fue precisamente porque el Estado necesitaba incrementar los ingresos fiscales, y el impuesto de aduana era una buena fuente. Un cuadro comparativo de los diversos ingresos fiscales en esos años revela la importancia creciente del impuesto de aduanas en el conjunto de los mismos. El ministro García Barzanallana incluyó en los presupuestos de 1877-78 unos derechos extraor-

dinarios sobre la importación y otros sobre los productos más competitivos del comercio de exportación (un 2 por 100 sobre los vinos comunes, minerales y metales; un 4 por 100 sobre los vinos de Jerez y del Puerto).

Los acuerdos comerciales más importantes en estos años fueron los llevados a cabo con Francia (en diciembre de 1877 y enero de 1880), con Bélgica (julio de 1876 y 1878) y con Austria-Hungría (junio de 1880). En 1880, resume Serrano Sanz, *recibían el trato de nación más favorecida y se lo otorgaban a España: Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, Austria-Hungría, Suecia, Noruega, Países Bajos, Rusia, Portugal, Marruecos, Turquía, Francia, República Dominicana, Colombia, China, Japón, Grecia, Dinamarca y Annam*. La ausencia más significativa era la falta de acuerdos con Inglaterra.

En suma, antes de 1881, los conservadores ya habían iniciado una política de apertura al comercio exterior. Lo que se traducía en una evolución favorable de la balanza comercial, deficitaria sólo en 1874 y 1876, y muy positiva en 1880 y 1881, sobre todo por el efecto del creciente aumento de la exportación de vino a Francia.

¿Política de recogimiento? Frente a la imagen de un Cánovas defensor de una política aislacionista, Jover ha caracterizado la política exterior de los conservadores en esa primera fase de la Restauración como política de *recogimiento*, que trata de evitar tanto el aislamiento como el compromiso. Esta política, *dimensión internacional de la pacificación*, se explicaría tanto por las condiciones nuevas que impone la nueva Europa de los setenta como por el pensamiento internacional del propio Cánovas. El Cánovas historiador está influido por la decadencia del imperio español en el siglo XVII. Cánovas, observador de la realidad internacional, ha captado muy bien el auge del mundo anglosajón, la decadencia de la raza latina y la hegemonía alemana en la nueva Europa.

Anteriormente, ya Jerónimo Becker, en su *Historia de las relaciones exteriores de España en el siglo XIX*, y Melchor Fernández Almagro habían matizado esa visión de la política exterior de los conservadores.

Sin considerar las circunstancias en que Cánovas desarrollara su política, se le suele hacer responsable del aislamiento diplomático en que España vivía —dice F. Almagro—. Es mucho más cierto lo contrario: que Cánovas hizo cuanto pudo por dotar a España de vida exterior, procurando no comprometer su futuro ni su independencia en alianzas y empresas para las que, desgraciadamente, no se hallaba preparada: mal provista de Ejército y Marina (...) y sin opinión pública sensible a exigencias de este tipo, extenuada y deprimida por luchas intestinas...

Jerónimo Becker, rechazando el calificativo de aislacionista, afirma rotundamente: *No hubo ni pudo haber alianzas, pero tampoco hubo aislamiento, porque con todas las naciones mantuvo España, durante el período de la Restauración, las más cordiales relaciones*. Sin embargo, este mismo autor al referirse a la política exterior de los liberales en los años ochenta, reconocía comparativamente el carácter fundamentalmente defensivo de la

política exterior de los conservadores, a diferencia de la de los liberales.

La política exterior de los liberales se caracterizó, en primer término, por una mayor actividad y por una mayor iniciativa. Los conservadores no abordaron cuestión alguna que no les fuese planteada por las circunstancias o por otras potencias en ellas interesadas; su acción fue, por decirlo así, meramente defensiva. Este carácter tuvieron, por ejemplo, las negociaciones con los Estados Unidos relacionadas con la Gran Antilla, las seguidas con Alemania e Inglaterra acerca de Joló y Borneo, las comerciales con Austria, Bélgica e Italia, etcétera. (...) Los conservadores procuraron cultivar por igual la amistad de todas las potencias; su política fue perfectamente neutral en todo lo que no podía dividir a aquéllas; y si alguna preferencia otorgaron, no fue a Alemania, a la que por razón natural debían inclinarse, sino a Francia, de la que estaban separados por un abismo de ideas.

Refiriéndonos más concretamente a la evolución de esa política de *reco-gimiento*, hay que mencionar en primer lugar las gestiones para lograr el reconocimiento del nuevo régimen por los Estados europeos. Entre la inicial desconfianza de Inglaterra ante una Monarquía católica intolerante, y el apoyo de Francia a los refugiados republicanos y carlistas, la Alemania de Bismarck aparece como el más firme valedor. *El acuerdo hispano-alemán de 31 de diciembre de 1877*, dice Jover, *constituye el instrumento diplomático que viene a confirmar el apoyo y la simpatía dispensados por el Gobierno alemán a la Monarquía alfonsina desde los días de su establecimiento. Dicho acuerdo, en todo caso, no suponía la integración plena de España en el sistema de alianzas bismarckiano.*

Aparte de la política de tratados comerciales con los países europeos (uno de los objetivos básicos de la política económica de los conservadores), la cuestión que obliga ineludiblemente a Cánovas a intervenir en el foro internacional es la creciente presión colonial europea sobre África. Iniciativas comerciales, como la del inglés Mackenzie que establece una factoría en Cabo Juby, o la presión francesa sobre el débil reino de Marruecos, obligaron al Gobierno a tomar alguna iniciativa para defender los intereses españoles en la costa occidental del norte de África. Se trataba de aplicar el artículo 8.º del tratado de paz que puso fin a la guerra de Marruecos de 1859-60, por el que se concedía a España un establecimiento en Santa Cruz del Mar Pequeña.

La conferencia de Madrid (junio-julio de 1880) sobre los problemas que planteaba la presencia europea en el debilitado reino de Marruecos fue la ocasión para afirmar el protagonismo de España, y en concreto de Cánovas, en el marco internacional.

La iniciativa privada de algunos intelectuales, como Costa, suplía la débil iniciativa gubernamental. A partir de la Real Sociedad Geográfica, fundada a finales de 1876, y la *Asociación Española para la Explotación de África*, fundada en 1877, se creó más tarde la Sociedad de Africanistas, durante

el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil celebrado en Madrid en 1883. Este grupo africanista madrileño, en el que jugó un destacado papel Joaquín Costa, promovió varias expediciones a Río de Oro, Sahara y Golfo de Guinea, y pidió al Gobierno la ocupación de Santa Cruz del Mar Pequeña, la anexión de Guinea y el Muni, y la intensificación de las relaciones políticas y comerciales de España con Marruecos.

LA DINÁMICA POLÍTICA. EL TURNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La prueba de fuego de la consolidación del régimen lo constituía el ejercicio efectivo del turno o acceso alternativo al poder por fuerzas políticas distintas, sin recurrir al pronunciamiento militar o a la presión revolucionaria. Ello implicaba previamente la existencia de dos partidos distintos, pero fieles en lo esencial a las bases constitucionales de la Monarquía constitucional restaurada.

El partido conservador se había ido configurando, no sin dificultades, ya durante el Sexenio revolucionario, en torno a Cánovas y el movimiento alfonsista. Aun así su consolidación no había estado exenta de fuertes tensiones entre el grupo de los moderados (mayoritarios inicialmente en el alfonsismo) y los canovistas. La batalla constitucional, y más concretamente, la definición del régimen de tolerancia del artículo 11, habían terminado de configurar un partido cuyo eje central lo constituían los canovistas, con aportes de la derecha (antiguos moderados), y provisionalmente de la izquierda (la derecha de los constitucionales con Alonso Martínez). Posteriormente, este último grupo, disidente en 1875 de los constitucionales de Sagasta, por su adhesión y compromiso con el proyecto constitucional de 1876, se separaría también del canovismo, y en 1880 contribuiría a formar el partido liberal-fusionista.

El partido liberal tardó más en configurarse y en encontrar un líder indiscutible, y ello explica, entre otras razones, su tardanza en acceder al Gobierno. Inicialmente, en 1875-76, la escisión de los disidentes de Alonso Martínez, por la derecha, y de los seguidores de Ruiz Zorrilla, por la izquierda, había debilitado a los constitucionales. El debate de fondo no era sólo el de la naturaleza monárquica del régimen, cuestión aceptada por todos, salvo por Ruiz Zorrilla, sino sobre su contenido constitucional. La base irrenunciable del programa de los hombres vinculados a Sagasta era la Constitución de 1869.

Durante los primeros años de Gobierno conservador canovista (1876-78) los constitucionales de Sagasta fluctuaban entre la tendencia conspiradora republicana (contactos Zorrilla-Serrano-Castelar) y la posibilidad de llegar a gobernar sobre la base de la aceptación de la Constitución de 1876, como un mínimo a desarrollar.

El desgaste político de los conservadores en el ejercicio del poder, las

divisiones que la Paz de Zanjón, y las concesiones reformistas que ella implicaba, provocaron en ese grupo las expectativas que suscitó el regreso del general pacificador Martínez Campos, parecían anunciar una crisis política y una posibilidad para los liberales.

En efecto, la primera ocasión frustrada para los liberales de acceder al poder se ofreció a finales de 1878: el final de la guerra de Cuba y las condiciones impuestas por la Paz de Zanjón dividieron a los conservadores. Además se cuestionaba la legalidad de prolongar la legislatura más de tres años.

Ahora bien, al igual que en 1875, con el breve Gobierno Jovellar, Cánovas logró prolongar de hecho el mandato de los conservadores a través de un breve Gobierno presidido por el general Martínez Campos (marzo a diciembre de 1879). Se trataba de un Gobierno cautivo de las directrices y del personal político y administrativo canovista, pero que jugará un papel efectivo de transición, contención y solución provisional de la crisis política sin dar aún la opción a los liberales. Sin embargo, a corto plazo, la maniobra política de Cánovas provocó la escisión de Martínez Campos y sus seguidores (fundamentalmente militares de alta graduación), debilitando así el partido conservador.

La sustitución de Martínez Campos por Cánovas provocó el enfrentamiento parlamentario entre los dos personajes sobre su respectivo protagonismo y responsabilidad en el proceso restaurador. En ese debate (junio de 1880) Cánovas enfatizaría la trama civil restauradora frente al pronunciamiento de Sagunto.

La posibilidad de acceder al poder obligaba a los liberales a configurar un partido amplio. A lo largo de 1880 se creó definitivamente el partido liberal-fusionista y se pusieron las bases de su acceso al poder. A mediados de mayo de 1880 se llegó por fin a un acuerdo de fusión entre los constitucionales de Sagasta, los centralistas de Alonso Martínez y los seguidores de Martínez Campos. Era un partido aún demasiado heterogéneo, poco cohesionado, a juicio de Cánovas y los conservadores, que se resistían a ceder al poder. Pero precisamente por esa heterogeneidad contenía suficientes *garantías* (los militares y el grupo de Alonso Martínez) de respetar la Constitución de 1876 y abortar cualquier tentación revolucionaria constituyente.

Durante el segundo semestre del año 1880 se presionó de distintas formas sobre el rey para que, de acuerdo con el poder moderador que le reservaba de hecho la Constitución, encargara a los liberales la formación de un Gobierno. Es lo que ocurrió en enero-febrero de 1881 con la dimisión del Gobierno Cánovas y el encargo que recibió Sagasta.

Este primer ejercicio pacífico del turno, por más que se tratara de una operación sin riesgo, controlada y facilitada por el propio Cánovas, no debe ser minusvalorada *a posteriori*. Como señala Varela Ortega, *la figura de un Sagasta domesticado es muy posterior*. En aquel momento significaba el fin del exclusivismo, el cumplimiento de uno de los principios básicos del nuevo

régimen, la garantía de consolidación del mismo, o, en un sentido amplio, el final de la transición política.

La permanencia de los liberales en el poder dependía directamente de la capacidad de Sagasta para mantener unido un partido inicialmente tan heterogéneo. Varela Ortega sintetiza así la diversidad de familias que componían el partido liberal-fusionista en 1881, cuando accedió al poder.

El Partido Liberal era una confederación de grupos con diferente origen y tradiciones. Los constitucionales, el grupo mayoritario, procedían en general del Partido Progresista, aunque algunos tenían origen Unionista. Se subdividían en sagastinos, que representaban el centro («La Iberia» era su órgano de prensa), izquierda (Romero Ortiz, Balaguer y «La Mañana»), derecha (Navarro Rodrigo, Gamazo y «El Correo») y serranistas, cuya cabeza visible era López Domínguez. Los centralistas, la mayoría de origen Unionista y algunos de procedencia Progresista, arrastraron a los vegarmijistas, a Vega de Armijo y a Alonso Martínez los colocaron en los Ministerios de Estado y Justicia. Los campistas, por su parte, atraieron algunos conservadores destacados (Tetuán, Bedmar y Águila Real) y consiguieron el apoyo de una fracción que desertó de los restos maltrechos del partido moderado (Xiquena y Valmaseda). Su órgano era «El Pabellón Nacional» y, en general, controlaban puestos militares.

Las rivalidades y dificultades entre todas estas familias se manifestaron inmediatamente a la hora de distribuirse los puestos administrativos y los cargos políticos en las elecciones municipales y generales. Sagasta, para mantener el equilibrio entre tendencias, favoreció electoralmente a grupos de su derecha (centralistas de Alonso Martínez) por encima de su verdadera representación inicial en el partido.

Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, esta variedad de familias se resumía en dos bloques bastante incompatibles: los demócratas o facciones de izquierda, procedentes del progresismo y partidarios de la soberanía nacional, y las facciones derechistas, procedentes de centralistas y conservadores, partidarios del principio doctrinario de la soberanía compartida. Esta divisoria fundamental haría difícil, al margen de las rivalidades personales, el desarrollo de un programa liberal coherente.

La batalla parlamentaria entre las facciones liberales se concentró en algunas cuestiones y frente a algunos ministros: la fórmula de juramento de los nuevos diputados; el proyecto de ley de juicio oral y público de Alonso Martínez; las reformas militares de Martínez Campos; y las negociaciones de Vega de Armijo con el Gobierno francés relativas al *affaire* de Saida.

La división de los republicanos

A los dieciocho meses del Gobierno Liberal, la Unión Republicana aparecía hecha girones. Así, aunque los liberales no hubieran hecho otra cosa,

podían vanagloriarse de haber disuelto en la impotencia al partido revolucionario, resume Varela Ortega recogiendo juicios de la época. En efecto, la llegada al poder de los liberales provocó debates, crisis y escisiones en la familia republicana.

En primer lugar hay que anotar el abandono del republicanismo del grupo seguidor de Moret que constituyó el Partido Monárquico Democrático.

En segundo lugar, entre la primavera y el otoño del año 1881, se sucedieron debates internos en el seno del partido zorrillista entre los partidarios de la lucha real y los del pronunciamiento. Tras el triunfo de la segunda tesis, algunos significados partidarios de la opción *legalista*, Martos, Montero Ríos, Echegaray, Canalejas, Romero Girón, abandonaron el partido.

Unos meses más tarde, tras el fracaso de una tentativa militarista, Salmerón, Muro y Azcárate formaron un grupo parlamentario republicano, distinto del zorrillista, contrarios al golpismo.

La izquierda dinástica

La desintegración de la Unión Republicana y los abandonos del republicanismo, a la vez que fortalecían el régimen (la Monarquía constitucional restaurada) debilitaban aún más el partido liberal-fusionista. Con los antiguos republicanos, Moret, Montero Ríos, Martos y sus respectivos seguidores, se formó en el verano de 1882 un nuevo partido, la Izquierda Dinástica, que aspiraba a desplazar a Sagasta y a constituir el auténtico partido liberal.

Las presiones constantes de este grupo hacían cada vez más difícil el mantenimiento del Gobierno de coalición fusionista. Sagasta, finalmente, se vio obligado, en enero de 1883, a nombrar un nuevo Gobierno, desprendiéndose de algunos de los hombres más significativos de su ala derecha: Romero Girón sustituyó a Alonso Martínez en Gracia y Justicia, y Sardoal, a Vega de Armijo en Estado. Así reconstruía la coalición, ahora basculando hacia la izquierda. Pero el nuevo Gobierno no era monocolor. De él también formaban parte Germán Gamazo (del grupo de Navarro Rodrigo) en Fomento, Pelayo Cuesta en Hacienda, Pío Gullón en Gobernación, y Gaspar Núñez de Arce en Ultramar. Si el nuevo Gobierno fusionista se mantuvo varios meses (hasta el verano) fue sobre todo por los personalismos de las figuras de la Izquierda Dinástica: Serrano, Montero Ríos, López Domínguez, Martos, Moret. La acción unitaria de todos ellos podía acabar en cualquier momento con el Gobierno de Sagasta.

En el verano de 1883 dos hechos vinieron a deteriorar la situación política, dando al traste finalmente con Sagasta y su coalición fusionista. En primer lugar, un pronunciamiento militar republicano (iniciado en Badajoz el 5 de agosto de 1883) alentado por Ruiz Zorrilla con elementos de la Asociación Republicana Militar. Aunque frustrado, y con escasa repercusión real, sirvió para quemar al ministro de la Guerra, obligado a dimitir, por su des-

conocimiento de la conspiración militar y su torpe reacción. En segundo lugar, el deterioro en las relaciones diplomáticas franco-españolas que provocó la visita del rey Alfonso XII a Alemania, acabó con la dimisión del ministro de Estado, Vega de Armijo, otro de los representantes de la derecha liberal. Ambas dimisiones parecían dejar las manos libres a Sagasta para intentar un nuevo reequilibrio de la relación de fuerzas dentro de la coalición liberal que le permitiera seguir gobernando. Pero ahora la oposición conjunta de la Izquierda Dinástica y de los conservadores obligó a Sagasta a dimitir y dar paso a un Gobierno de mayoría de la Izquierda Liberal, presidido por Posada Herrera. Los conservadores aprovecharon las divisiones que se venían arrastrando en el seno de la coalición liberal, y la crisis de orden público en Andalucía (quema de cosechas, acontecimientos de la *Mano Negra*), para desacreditar y deslegitimar el liderazgo de Sagasta en la familia liberal.

El Gobierno de 90 días de la Izquierda Dinástica

El primer bienio de gobiernos liberales en la Restauración durante la Monarquía de Alfonso XII terminó con un breve e inestable Gobierno, presidido por un político de la generación anterior, Posada Herrera, en el que participaban importantes figuras de la Izquierda Dinástica: Moret en Gobernación, Sardoal en Fomento, López Domínguez, sobrino de Serrano, en Guerra, y como jefe de Gobierno en la sombra, Martos. En los proyectos ministeriales había un indudable aliento reformista, muy superior a la posibilidad real de llevarlos a cabo: Moret, en Gobernación, presentó un proyecto de reordenación territorial del país con criterios de regionalización. Él mismo, en diciembre, creó la Comisión para el Estudio de las Cuestiones Sociales (luego llamada Comisión de Reformas Sociales); Sardoal, en Fomento, se propuso sacar adelante una ley general de Instrucción Pública; Linares Rivas, en Gracia y Justicia, proyectó una reforma del Código Penal y leyes de enjuiciamiento; López Domínguez, en Guerra, junto a varias reformas militares, proyectó la implantación del servicio militar obligatorio; Gallastra, en Hacienda, retomaba los reiterados objetivos de nivelación presupuestaria y reforma fiscal; y Suárez Inclán, en Ultramar, suprimió en Cuba los castigos del cepo y el grillete, aún vigentes, propios de la situación de esclavitud.

Ahora bien, el Gobierno había nacido con la benevolencia y el pacto de Sagasta, que pasó a ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados. El nuevo Gobierno, que no logró el decreto de disolución de unas Cortes con mayoría sagastina, dependió constantemente de la *buena voluntad* del líder liberal. Según define la situación el propio Sagasta, se trataba de *un Gobierno sin mayoría y una mayoría sin Gobierno*.

Desde el primer momento los proyectos políticos reformistas, las señas de identidad de la izquierda liberal (el sufragio universal y la reforma cons-

titucional de 1876) tropezaron con las reticencias y el rechazo de Sagasta. Ello adquirió su máxima expresión pública en el debate del mensaje a la nación, donde, con gran regocijo de Cánovas, Sagasta se convirtió en el mejor defensor del principio de la soberanía compartida, pilar fundamental del régimen.

Nosotros no abandonamos por nada ni por nadie los principios fundamentales de la Monarquía constitucional. (...) Sobre ellos giramos con tanta fe como el partido conservador (y) debe observar este Partido, que si nosotros nos hemos opuesto al sufragio universal y a la revisión constitucional, y si no hemos querido aceptar la conciliación (con la Izquierda) bajo esas dos bases, no ha sido sólo en defensa de nuestros principios, sino también en defensa de los principios del Partido Conservador, en defensa de los principios que nos son comunes a liberales y conservadores, y que no pueden menos de serlo a los partidos gobernantes dentro de unas mismas instituciones.

Esta actitud política de Sagasta, además de impedir el Gobierno de la Izquierda Dinástica, y la recomposición de la coalición liberal, y, por tanto, la permanencia de los liberales en el poder, significaba que *el Partido Liberal de Sagasta abandonaba la tradición Constitucional-Progresista de soberanía nacional por la canovista doctrinaria de soberanía compartida*. Lo que Varela Ortega enfatiza con la expresión *el partido liberal se hace canovista*. Así pues, al terminar la primera experiencia del turno liberal, el régimen político quedaba consolidado.

El último Gobierno de la Monarquía de Alfonso XII

Lo más significativo del nuevo Gobierno conservador formado por Cánovas en enero de 1884, fue la incorporación de Alejandro Pidal y Mon en el Ministerio de Fomento. Para Cánovas significaba la ampliación por la derecha de la base del partido y la integración en el régimen de una parte del electorado carlista. Para una parte de los católicos suponía poner en práctica la táctica posibilista del *mal menor*.

La inclusión de Pidal en el Ministerio acarreó al Gobierno varios problemas políticos y diplomáticos, al suscitar las presiones encontradas de los integristas (críticos con la contradictoria posición de un católico en un Gobierno liberal, cuando se proclamaba la tesis *el liberalismo es pecado*), y de los liberales y republicanos (temerosos de una aplicación restrictiva del artículo 11 de la Constitución). Dos incidentes representativos de esta situación ocuparon buena parte del tiempo y de las preocupaciones del Gobierno:

— En el verano de 1884, unas declaraciones parlamentarias de Pidal sobre el reino de Italia y el poder temporal de los Papas (*la cuestión romana*), convenientemente provocadas y explotadas por los liberales, provocaron un delicado problema diplomático difícil de enmendar, pues una rectifica-

ción oficial del Gobierno español ante el italiano provocaría la indignación del Vaticano y la agitación de los católicos contra el Gobierno y contra el ministro Pidal.

— En octubre del 84, el discurso inaugural de la Universidad Central, a cargo de Miguel Morayta, en presencia del ministro, volvió a suscitar la polémica sobre la libertad de cátedra. El contenido del discurso y la personalidad de Morayta, Gran Oriente de la masonería, provocaron la inmediata reacción católica: pastorales de obispos contra el liberalismo, la masonería y las escuelas laicas, y escritos en la prensa integrista cuestionando la presencia de Pidal en el Ministerio. Una pastoral del obispo de Plasencia, en enero del 85, continuando la polémica, apoyaba la tesis integrista y cuestionaba no sólo la presencia de Pidal en el Gobierno sino la legitimidad, desde la ortodoxia católica, del propio régimen. Esta descalificación obligó al Gobierno a obtener, por vía diplomática, la rectificación desde el Vaticano de los criterios defendidos por el obispo de Plasencia.

La cuestión de las Carolinas

Otros factores contribuyeron a desgastar el Gobierno conservador a lo largo de 1885, de forma que, aunque no se hubiera producido la muerte del rey, probablemente se habría producido el relevo de los liberales.

La política exterior española se vio condicionada por el creciente movimiento colonial europeo. La Conferencia de Berlín en 1885, sobre la exploración y colonización de África, estableció, como se sabe, unas reglas de juego para delimitar la soberanía mediante la ocupación real de los territorios explorados por los respectivos países europeos.

A falta de una política decidida del Gobierno, el grupo africanista madrileño impulsaba la exploración y urgía al Gobierno la ocupación de algunas parcelas de la costa occidental norte y centro-africana (Río de Oro), en diciembre de 1884 una real orden oficializaba la exploración y ocupación de Río de Oro promovida por la Sociedad de Africanistas y Colonistas Españoles.

Una derivación más de la iniciativa colonial europea, en el marco de la Conferencia de Berlín, fue la impugnación alemana de la soberanía española sobre las islas Carolinas por falta de ocupación real. Era la aplicación al Pacífico de los principios aprobados en Berlín para la exploración de África. La reclamación alemana (agosto del 85) provocó una fuerte reacción popular (manifestaciones patrióticas en Madrid ante la embajada alemana el 4 de septiembre). Bismarck rectificó y propició el acuerdo negociado proponiendo a León XIII como árbitro. La resolución de la Santa Sede (octubre del 85) reconocía la soberanía de España, pero le obligaba a hacerla efectiva mediante la ocupación militar y administrativa, a la vez que garantizaba a

Alemania la libertad de comercio y de explotación agrícola. Al margen del dictamen concreto, el arbitraje de la Santa Sede sirvió sobre todo para superar definitivamente las tensiones entre León XIII y Bismarck.

El cólera de 1885

La epidemia del cólera, que se extendió especialmente por el Sur y el Levante durante el verano de 1885, contribuyó al desprestigio del ministro de Gobernación, Romero Robledo, que se vio obligado a dimitir, y al desgaste del Gobierno conservador, mucho más que otros factores. Una reciente investigación de Juan José Fernández Sanz así lo ha puesto de relieve. La equivocada política ministerial frente a la epidemia, basada casi exclusivamente en el aislamiento y la cuarentena, y su resistencia a utilizar la vacuna Ferrán, provocaron las críticas generalizadas, y diversas políticas sanitarias cantonalistas al margen de las decisiones del Gobierno.

El cólera puso, por otra parte, de relieve los límites y contradicciones de la sociedad de la época:

- el bajo nivel científico de algunos lugares y autoridades académicas, con su resistencia visceral a experimentar con la vacuna Ferrán;

- las malas condiciones sanitarias e higiénicas de muchas poblaciones (incluidas capitales de provincia). Seguramente la gravedad de la epidemia impulsó en algunas ciudades (como en el caso de Granada) los planes urbanísticos de alcantarillado y abastecimiento de aguas proyectados desde hacía algunos años;

- las fuertes desigualdades sociales quedaron reflejadas en las distintas tasas de mortalidad por barrios y clases sociales. Las clases acomodadas huyeron hacia el Norte, prolongando sus vacaciones en el verano del 85;

- el peso del factor católico y eclesiástico en la sociedad de la época: la predicación de la epidemia como castigo moral pudo revitalizar eventualmente una cierta religiosidad del temor. En un sentido positivo, la atención caritativa y hospitalaria de personas e instituciones religiosas y seglares suplió en buena medida las deficiencias de la beneficencia pública.

Durante el Gobierno conservador, de enero del 84 a noviembre del 85, la coalición liberal volvió a recomponerse en torno al liderazgo de Sagasta, hasta el punto de que independientemente de la grave crisis política provocada por la muerte prematura del rey Alfonso XII (noviembre de 1885), y teniendo en cuenta el desgaste político sufrido por el Gobierno conservador en el año 1885, Sagasta, probablemente, habría vuelto a obtener la confianza para gobernar. En las elecciones generales de 1884, Cánovas y Silvela se habían preocupado de reforzar el grupo parlamentario sagastino frente a cualquier otra tendencia liberal. A diferencia de la política de Romero Robledo, siempre tendente a favorecer al ala izquierda liberal en detrimento del grupo de Sagasta. En las elecciones municipales de 1885 los liberales, en coalición

con los republicanos, consiguieron resultados muy favorables en ciudades como Madrid. A estos avances liberales, se unió la incertidumbre política que provocaba la inminente muerte del rey, y el retorno de las amenazas antidinásticas, de derecha y de izquierda, carlistas y republicanos, respectivamente. Al decir de Cánovas, la muerte del rey, y el vacío político subsiguiente, imponían una *segunda Restauración*. A ello obedeció el supuesto *pacto de El Pardo*, o más bien, la tregua por la que Cánovas ofrecía apoyar un Gobierno liberal presidido por Sagasta.

LA POLÍTICA DE LOS LIBERALES (1881-84)

El nuevo Gobierno de Sagasta inició su mandato con una serie de medidas y circulares que ampliaban el marco de la libertad de expresión, derogando barreras censoras, impuestas en los primeros momentos de la Restauración:

La circular de Albareda (febrero del 81), consagrando la libertad de cátedra, posibilita la vuelta de los profesores krausistas a sus cátedras, anulando los efectos del decreto de Orovio.

La autorización de los actos conmemorativos de la primera República, al amparo de la ley de Reuniones Públicas de 1880, era la primera oportunidad de propaganda pública para los republicanos.

Una circular del fiscal del Tribunal Supremo (marzo del 81) sobre la interpretación del artículo 11 subraya su significado tolerante, *en el sentido amplio y liberal que su mismo texto permite, y que el Gobierno de S. M. se propone, rindiendo culto a la inviolabilidad de la conciencia humana*.

Otra circular del ministro de Gracia y Justicia (marzo del 81) levantaba la censura sobre el tratamiento de cuestiones políticas fundamentales: *nada que se refiera al poder indiscutible e inviolable puede disimularse ni debe consentirse; pero tampoco es lícito confundir la polémica viva, la censura acre y apasionada, con la injuria y la calumnia, siempre que de los poderes responsables de trate*.

Todas estas circulares liberalizadoras ampliaban sin duda el marco de expresión, y despertaban en Castelar esperanzas.

Hemos entrado en un nuevo período político (...) Ha colgado (Sagasta) la ley de Imprenta en el Museo arqueológico de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio derecho de reunión que usa la democracia según le place, y ha entrado en un período tal de libertades prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa alguna a los pueblos más liberales de la tierra.

El talante y la iniciativa reformista del Gobierno fusionista se aprecia en una serie de proyectos educativos, judiciales y económicos que promueven los ministros responsables de esa gestión: Albareda en Fomento, Alonso Mar-

tiñez en Gracia y Justicia, Camacho en Hacienda. A lo que habría que añadir la nueva política exterior de Vega de Armijo.

Uno de los principales objetivos del ministro Alonso Martínez era la promulgación de un nuevo Código Civil. En estos años se avanza significativamente, pero hasta 1889 no va a salir adelante. La compatibilidad con las leyes forales y el difícil acuerdo con el Vaticano sobre el estatuto jurídico del matrimonio canónico retrasaron la aprobación de este Código.

Entre las reformas judiciales promovidas en este tiempo podemos señalar: la promulgación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, la aprobación de las bases para la elaboración del Código Penal del Ejército y de la Armada y para la organización de los tribunales militares; el establecimiento de Audiencias de lo Criminal en toda España; la creación de tribunales colegiados y la institucionalización del juicio oral y público. En todas estas reformas, obra del Ministerio de Alonso Martínez, se aprecian, sin embargo, caracteres fundamentales de continuidad con la política de anteriores Gobiernos conservadores.

En el Ministerio de Fomento, a cuyo frente estuvo Albareda, se cifraron parte de los impulsos reformistas liberales. En ese Ministerio, con poco presupuesto, se atendían cuestiones tan diversas e importantes como la política educativa, el fomento de la agricultura, la regulación de las explotaciones mineras, o el impulso a las obras públicas.

En una *Memoria* publicada por el propio ministro como balance de su gestión, entre febrero del 81 y noviembre del 82, se resumían los principales proyectos y logros.

En Educación, aparte de la derogación del decreto Orovio sobre libertad de cátedra, con que inauguró su mandato, el objetivo prioritario fue la dignificación de la enseñanza primaria pública; garantizar el pago puntual a los maestros de sus salarios y acabar con el mal endémico de los atrasos. La preocupación pedagógica de un Ministerio, en el que influyeron hombres de la Institución Libre de Enseñanza, se aprecia en medidas concretas como la creación del Museo Pedagógico (6 de mayo de 1882) o la implantación de la asignatura de gimnasia en los institutos. La preocupación por la renovación de los planes de estudios universitarios se concretó en la creación de cuatro nuevas de cátedras de estudios superiores en la Universidad Central (*Filosofía de la Historia, Derecho Internacional Privado, Estudios Superiores de Derecho Público Eclesiástico, Estudios Superiores de la Administración*).

La educación popular como instrumento de reforma social, otra de las líneas de acción propugnadas por los krausistas, encuentra también reflejo en la política de Albareda. Por un lado, con el impulso a las bibliotecas populares, creadas en 1869; por otro, con el apoyo a las escuelas de artes y oficios. Refiriéndose a la Escuela de Madrid, decía la *Memoria* de Albareda: *A esta clase de escuela de Artes y Oficios, que son nocturnas y gratuitas, no asisten generalmente más que obreros, los cuales encuentran en ellas motivos de ilustrarse al mismo tiempo que de mejorar su posición social.*

Las directrices básicas de la política agraria, comercial e industrial venían marcadas por el Ministerio de Hacienda, por lo que las competencias del de Fomento en muchas de estas materias eran muy reducidas. Con un escaso presupuesto de poco más de un millón de pesetas, la Dirección General de Agricultura apenas podía dedicarse a algo más que la *organización y desarrollo de la Enseñanza, y la propagación de las beneficiosas prácticas agronómicas entre la masa general de cultivadores*. De ahí las medidas sobre creación de granjas-modelo, concurso para la publicación de cartillas agrícolas, fomento de las exposiciones agrícolas, y reforma del *Instituto Agrícola Alfonso XII*.

La preocupación gubernamental por la emigración, a raíz del conflicto con Francia por las vicisitudes sufridas por trabajadores españoles en Túnez, se concretó en la creación de una comisión específica para el estudio de la emigración. El proyecto de *Repoblación Rural* trataba de frenar la emigración al extranjero.

Otros aspectos de la política de Albareda en Fomento son igualmente significativos de ese impulso reformista: una serie de medidas para elaborar un catálogo de la situación de los montes; regulación de la explotación minera, y, sobre todo, una política de impulso a las obras públicas, especialmente a la construcción de pantanos y canales de regadío.

La Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico impulsó notablemente la publicación de censos de población y estadísticas de emigración.

La gestión económica de Camacho al frente del Ministerio de Hacienda se reflejó en una serie de reformas hacendísticas y fiscales que provocaron importantes resistencias y movilizaciones de los sectores e intereses afectados. No se trata de una política totalmente novedosa, pues retomaba, con más experiencia, proyectos planteados por él mismo en 1874. Tampoco significaba una ruptura con la política de los ministros conservadores. El objetivo prioritario de los primeros ministros de la Restauración, Salaverría y Barzanallana, era la contención del déficit, el equilibrio presupuestario, como paso previo al arreglo de la deuda pública, y éste fue el principal objetivo y logro de la gestión de Camacho.

En primer lugar, el equilibrio presupuestario. Con su gestión, según Serrano Sanz en su libro *Los presupuestos de la Restauración, se altera la tradición de que lo liquidado fuese inferior a lo presupuestado en el lado de los ingresos y superior en el de los gastos*.

Pero, además, los Presupuestos preparados y defendidos por Camacho el 31 de diciembre del 81 fueron acompañados de una serie de reformas administrativas que el autor antes citado califica *como uno de los intentos de nacionalización y modernización más importantes de la Administración económica española*. Las reformas administrativas introducidas por Camacho y eliminadas, en buena parte, por Gobiernos conservadores, eran las siguientes:

— Creación de la Inspección General de la Hacienda Pública.

- Creación de la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo.
- Organización de la administración económica provincial.
- Procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas.
- Creación del Cuerpo de Inspectores de la Contribución Industrial y del Comercio.

La polémica liberales-conservadores en torno a la implantación de esas reformas caracteriza las respectivas posiciones mejor que otras diferencias, apenas inexistentes, sobre el sistema impositivo. En efecto, los cambios en el sistema impositivo planteados por Camacho fueron mínimos. Se suprimieron algunos impuestos, como los que gravaban la fabricación y el consumo de la sal. Estos se sustituyeron por otro nuevo *impuesto equivalente a los de la sal*, contribución directa que *se exige a los contribuyentes por inmuebles, cultivo y ganadería o industrial y del comercio y a quienes paguen determinados alquileres de fincas no destinadas a la industria*. Este impuesto, uno de los más combatidos, influyó decisivamente en el aumento de los ingresos del Estado y en el equilibrio presupuestario.

La contribución territorial (el impuesto sobre inmuebles, cultivo y ganadería) era, con diferencia, el principal de los impuestos directos, pero el aumento de la recaudación por esta partida pasaba por la actualización del catastro. La política de Camacho, en la misma línea de intentos anteriores, consistió en favorecer las nuevas declaraciones mediante la oferta de una rebaja del tipo impositivo (del 21 al 16 por 100) a aquellos que presentaran cédulas de Amillaramiento nuevas. Aunque un porcentaje relativamente alto de pueblos se acogieron a la oferta, siguió dominando el ocultamiento de la riqueza.

La reforma de la contribución industrial fue tan contestada por los gremios que el Estado tuvo que aceptar muy pronto (en febrero del 82) una revisión del primer reglamento. (La reforma trataba de incorporar definitivamente a la cuota dos recargos extraordinarios del tiempo de guerra, suprimir algunas exenciones temporales a las industrias nuevas, modificar las tarifas, introducir la representación estatal en los gremios y crear un Cuerpo de Inspectores de la Contribución Industrial.)

En cuanto a los impuestos indirectos, el impuesto de consumos, el más importante después del de aduanas, fue reforzado por los liberales. Se trató de adaptar mejor la distribución local del impuesto no sólo al tamaño de la población sino al de su capacidad de consumo (en la ley se hacía una estimación del consumo anual por persona en los pueblos). Esta actualización significó tal aumento del cupo de los pueblos, que se optó por una significativa rebaja. A pesar de lo cual, el aumento en la recaudación del impuesto por consumos compensó la reducción de ingresos que, en ese capítulo, había supuesto la eliminación de los impuestos de la sal.

En cuanto a los ingresos por monopolio, la renta del tabaco siguió constituyendo una de las partidas fundamentales, como lo venía siendo desde el inicio de la Restauración. La aportación de Camacho consistió en el proyecto

de invertir una parte importante de esos ingresos en la modernización de las fábricas de tabaco.

Junto al aumento de los ingresos fiscales, el equilibrio presupuestario se basó también en una política de contención del gasto. Sólo en los Ministerios de la Guerra y en el de Fomento se aprecia algún aumento significativo del gasto. Pero la clave de esa contención del gasto estuvo en la importante reducción de los intereses de la deuda pública que supuso la conversión realizada con éxito por Camacho: de los 320 millones que suponían los intereses de la deuda en el presupuesto de 1878-79 se pasó a 268,7 en el presupuesto de 1881-82 y a 221,9 en el del año 1882-83.

Esta conversión de la deuda, considerada como uno de los mayores éxitos de la gestión de Camacho, además de posibilitar decisivamente el equilibrio presupuestario, contribuyó a la recuperación del crédito público en los mercados internacionales, en un momento en que por otra parte el Estado desplegaba negociaciones para la firma de tratados comerciales con distintos países. No conviene olvidar que al éxito de la conversión de la deuda contribuyó también un proceso de transformación del sistema monetario español: abandono del patrón oro, aumento de la circulación fiduciaria y depreciación de la peseta. El respiro respecto al agobio de la deuda sólo duró algunos años. Después del 98, Fernández Villaverde se vería obligado a una nueva reconversión.

En suma, la gestión de Camacho en el Ministerio de Hacienda entre febrero del 81 y octubre del 82, al igual que la de Albareda en Fomento, caracteriza bien los impulsos reformistas del Gobierno liberal-fusionista. Por lo demás, la gestión de Camacho retomaba proyectos, por él mismo presentados en 1874, continuados en sucesivas gestiones ministeriales después de 1885.

Sus reformas fiscales desataron la resistencia y la protesta de grupos económicos afectados. La protesta de los gremios de Barcelona frente a la reforma del impuesto de contribución industrial, en febrero-marzo de 1882, se unió al movimiento proteccionista frente a la negociación del tratado comercial con Francia. Esta negociación provocó movilizaciones y debates en círculos económicos y políticos que nos permiten una mejor aproximación a la realidad social española de esos años.

Una de las iniciativas recaudatorias de Camacho, el proyecto de venta de montes públicos y dehesas boyales, encontró resistencia en el propio Gabinete ministerial, la del ministro Albareda, promotor de diversas iniciativas de fomento de la agricultura. Esta discusión interna fue la ocasión aprovechada por Sagasta para renovar un Ministerio que sufría ya demasiadas presiones de las diferentes familias políticas que habían compuesto el partido fusionista. Albareda y Camacho, dos de los ministros reformistas del primer Gobierno liberal-fusionista, serían sustituidos en el nuevo Gobierno por Pelayo Cuesta, en Hacienda, y Germán Gamazo, en Fomento.

La política de apertura comercial de los liberales es un elemento más

de su política económica, pero también caracteriza su política exterior. El régimen de acuerdos comerciales se generalizó durante la década de los ochenta. Los más trascendentales, por el volumen del intercambio, fueron el de Francia (1882) y el de Inglaterra (1885). En ambos casos favorecer la exportación del vino fue el interés principal, y en las dos ocasiones los acuerdos tropezaron con fuerte resistencia de los grupos interesados. La resistencia catalana, notable ya en febrero-mayo de 1882, frente al acuerdo con Francia, se hizo aún mayor en 1885 contra el tratado con Inglaterra.

El equilibrio presupuestario conseguido hacía menos urgente ahora la utilización del arancel como fuente básica de ingresos fiscales. Por tanto, los liberales se plantearon el restablecimiento de las rebajas arancelarias previstas en la ley Figuerola de 1869, suspendidas en los primeros años de la Restauración. Pero, como matiza Serrano Sanza, cuyo libro seguimos en este tema, se trataba de una nueva base quinta. Ahora las rebajas o reducciones quedaban ligadas a las condiciones concretas que se establecieron en los respectivos tratados comerciales.

Junto a los tratados comerciales, los Gobiernos adoptaron otras medidas favorecedoras del comercio, y compensatorias para los sectores más afectados por aquellos tratados: mayores facilidades para la circulación interior; desarrollo del tráfico con las Antillas (reducción recíproca de aranceles en Cuba y España para los productos peninsulares —1882, textil— y cubanos —1884, caña de azúcar—); reducción selectiva de derechos arancelarios para la importación de aquellos artículos considerados materias primas para la industria. Estas últimas medidas favorecieron realmente a la mayoría de los sectores: el textil (lana y seda), la industria jabonera, químicas de transformación, y la industria en general, por la rebaja del precio del carbón.

En suma, el balance del comercio exterior español en los años ochenta, especialmente hasta 1885, es claramente positivo, como revelan, entre otros signos, la organización de Cámaras de Comercio españolas en el extranjero en 1886, en Londres, París, México, Lima, Valparaíso, Buenos Aires, Nueva York y Tánger, y el sostenido superávit de la balanza comercial, cuyo volumen no dejó de crecer en estos años, aunque con un carácter excesivamente concentrado y dependiente de Francia (vinos) e Inglaterra (minerales).

Política exterior

Toda la historiografía ha identificado la etapa de Gobiernos liberales como el fin de la política de aislamiento o de *recogimiento* de Cánovas. Jerónimo Bécker subrayaba, ya hace años, con tono crítico la agresiva política exterior de los liberales, a menudo de efectos perniciosos: *Se mezclaron en cuestiones que, aunque nos afectaban, no exigían de un modo inmediato nuestra intervención, y lo hicieron algunas veces sin la preparación necesaria...* En contra de lo que podría esperarse de su tradicional orientación ex-

terior, los liberales, de los que era lógico esperar se inclinasen a Francia e Inglaterra, procedieron de tal suerte que disgustaron repetidas veces a estas dos naciones... y se inclinaron decididamente a la alianza con Alemania: Posible es —sigue diciendo Bécker— que su conducta no obedeciese a un criterio fijo, a una orientación determinada, sino que fuera hija de las impresiones del momento e imposición de las circunstancias; pero lo cierto es que en alguna ocasión pudo creerse que, si no marchaban de acuerdo con el Gabinete de Berlín, procuraban acercarse a éste y seguir su misma línea de conducta. Ejemplo: el viaje de Don Alfonso XII a Alemania en el verano de 1883.

Efectivamente, aunque más decidida, la orientación general de la política exterior, en línea de continuidad con la ya iniciada, aunque más tímidamente por los conservadores, tenía que adaptarse a la nueva realidad europea, presidida por el sistema de alianzas de Bismarck. Por otra parte, algunos conflictos significativos con Francia, en el norte de África, y con Inglaterra, en Gibraltar, aconsejaban buscar en la alianza alemana el contrapeso a la política mediterránea de las otras potencias. Ello, sin perjuicio del impulso a las negociaciones para la firma de tratados comerciales.

Vega de Armijo llevó a cabo una serie de iniciativas, en distintos frentes, con escaso éxito, para afirmar de manera más clara la presencia española en el contexto internacional.

La relación con la vecina Francia se vio sometida a varias tensiones por asuntos relacionados con el norte de África. Un incidente en Argelia en el que se vio envuelto un conjunto importante de emigrantes españoles dio lugar a negociaciones conflictivas sobre las indemnizaciones pertinentes. Pero, sobre todo, fue la iniciativa francesa en Túnez la que provocó el recelo de España y de las otras potencias europeas implicadas en el control del reino de Marruecos. Las publicaciones, exploraciones y congresos de los africanistas madrileños contribuyeron a conformar una política gubernamental más decidida en esta zona.

La debilidad real de la posición exterior española en estos años se aprecia en la marginación de que fue objeto en conflictos como el de Suez o el canal de Panamá, en cuyos arreglos se vio apartada a pesar de sus intentos de intervención. La tensión con Inglaterra se manifestó a propósito de la delimitación de aguas jurisdiccionales en Gibraltar. Fernández Almagro, comentando estos fracasos, habla de *adversas peripecias, pero no en puridad de aislamiento diplomático*.

Pero el episodio más significativo de la política exterior de los liberales en este bienio lo constituye el viaje de Alfonso XII por Europa en septiembre de 1883. Su estancia en el Imperio austro-húngaro y en la Alemania de Bismarck, con participación entusiasta en maniobras militares, provocó el desaire público de los franceses, y el consiguiente incidente diplomático, que no se saldó demasiado favorablemente para España. Pues, a pesar de los esfuerzos en esa dirección, España no consiguió por ahora entrar en la Triple Alianza, ni siquiera después de este incidente. Quizá, siguiendo a J. Salom en su

libro sobre *España en la Europa de Bismarck*, habría que distinguir, en relación con esa orientación pro-alemana, la política gubernamental de Vega de Armijo de la política personal de Alfonso XII, que, al menos, en su viaje a Alemania, tomó iniciativas comprometedoras más allá de las directrices del propio Gobierno.

Movilizaciones sociales y políticas

La ampliación del marco legal de expresión, reunión y asociación, impulsada por el Gobierno fusionista, posibilitó la organización de algunas movilizaciones, expresiones y manifestaciones públicas, frente a determinadas políticas (fiscales) o situaciones sociales de crisis (Andalucía).

La propaganda republicana, liberal-laicista, y, en general, de los grupos políticos e ideológicos contrarios al sistema, encuentra más posibilidades de reunirse y expresarse. Una de las primeras medidas del Gobierno fusionista fue el permiso para las conmemoraciones republicanas del 11 de febrero.

Los diversos sectores republicanos se reúnen, polemizan y se dividen sobre la política a seguir frente al régimen. La opción insurreccional de Ruiz Zorrilla se reafirma, pero sus fracasos le aíslan de las otras tendencias y líderes. La Asociación Republicana Militar, cuyos orígenes se remontan a finales de 1880, se constituyó definitivamente el 1 de enero de 1883, con 1.200 afiliados, entre los que se contaban algunos generales. Según Fernández Almagro, en los primeros meses del 83 *llegó a contar con 22 guarniciones, de las que seis correspondían a capitales de otras tantas regiones militares*, lo que da idea del alcance y posibilidades de la conspiración militar republicana que dirigía Ruiz Zorrilla desde París. Los resultados, sin embargo, no se correspondieron con las expectativas. Las sublevaciones aisladas y descoordinadas, en los primeros días de agosto del 83, en Badajoz (5 de agosto), Santo Domingo de la Calzada (8 de agosto) y Seo de Urgel (10 de agosto) fueron fácilmente controladas. Tras el fracaso de las sublevaciones, Ruiz Zorrilla se vio obligado a trasladar su residencia de París a Londres. Lógicamente todo ello debilitó y desmoralizó a un movimiento republicano ya de por sí débil y dividido, al que además las nuevas organizaciones y propagandas obreras amenazaban quitar su tradicional clientela popular.

La política fiscal y comercial del ministro Camacho provocó, como ya se ha señalado, en los meses de febrero a mayo de 1882, la reacción de los grupos afectados. El reglamento de la contribución industrial provocó una campaña de protestas, primero en Madrid, y después en Barcelona, donde se vinculó al rechazo proteccionista del tratado comercial con Francia. Es en Barcelona donde la campaña cobró mayor fuerza. La regionalización de la polémica proteccionistas-librecambistas en Barcelona (Fomento de la Pro-

ducción Nacional) y Madrid (Círculo de la Unión Mercantil) contribuyó a la expresión anticipada de sentimientos nacionalistas, pro y anticatalanistas, que sólo más tarde cuajarán en movimientos.

Movilización católica

En estos años se agudizaron las tensiones y divisiones internas de los católicos españoles en torno a la postura a adoptar ante el régimen. Por un lado, la política de libertades y la afirmación de la tolerancia constitucional provocan la protesta integrista y carlista. Las consignas moderadas y la política posibilista propugnada desde el Vaticano contribuyen a agudizar las tensiones. La fundación en 1881 de *La Unión Católica* por Alejandro Pidal y Mon, con el apoyo y bendiciones de la jerarquía eclesiástica, aunque de momento no pasó de ser una iniciativa minoritaria, contribuyó decisivamente a crear ese clima de división interna entre los católicos españoles.

La peregrinación a Roma organizada por Nocedal en 1882, y desautorizada por la jerarquía por su carácter partidista, iniciaba una larga cadena de enfrentamientos entre seglares y clérigos integristas, de un lado, y Vaticano y algunos obispos, de otro. La llegada a España del nuevo nuncio, Rampolla (luego secretario de Estado de León XIII, y hombre clave para entender la evolución de la Iglesia española en estos años), coincidió con la difusión de un documento pontificio, la encíclica *Cum Multa*, que trataba de mediar en la división, estableciendo unas reglas del juego. La primera tarea del nuncio era lograr la comprensión correcta y la aceptación por todos de los criterios y directrices contenidas en el citado documento.

Movilización obrera incipiente

La conflictividad social del Sexenio liberal-democrático había quedado soterrada y reprimida en los primeros años de la Restauración. La persecución de los internacionalistas, el cierre de sus lugares de reunión y la prohibición de sus órganos de expresión obtuvo un primer respiro durante el bienio liberal 81-83.

Al final de este período, en diciembre del 83, surgirá la primera iniciativa gubernamental de carácter reformista, aunque sólo fuera en el plano informativo: la convocatoria de una información oral y escrita sobre la condición de las clases trabajadoras, para cuya consulta se reglamentaba la creación de *comisiones provinciales y locales de reformas sociales*. Con todos los límites significaba el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de la *cuestión social* como un realidad nueva, políticamente ineludible.

Los anarquistas

Ya en 1871 los internacionalistas españoles habían sufrido una primera represión, como un efecto más de la general condena europea, tras los acontecimientos de la Comuna. Pero a pesar de la declaración de ilegalidad, la Federación Regional española de la AIT siguió celebrando congresos y haciendo propaganda y actividad sindical, llegando a su punto culminante durante la primera República.

La situación cambió radicalmente con las primeras medidas represivas de la República autoritaria. Ahora sí se impone la clandestinidad. El cierre de locales y de periódicos, la imposibilidad de hacer reuniones y congresos públicos repercutió en la vida de la organización. Se reconstruye la *Alianza*; conferencias comarcales clandestinas sustituyen a los congresos públicos, y, en consecuencia, se imponen tácticas insurreccionalistas frente a las propiamente sindicales, como la huelga.

De acuerdo con esta evolución de la organización, el nihilismo y la propaganda por el hecho es la tendencia dominante en el movimiento anarquista en estos primeros años de la Restauración canovista, como lógica respuesta a las condiciones impuestas por la represión. La crisis ideológica y organizativa de la Federación Regional Española se traduce también en un importante descenso de federaciones y militantes.

En torno a 1880 se agudiza el debate interno entre los partidarios de la lucha sindical y del insurreccionalismo. Precisamente el cambio político que supone el acceso al poder de los liberales posibilita el desplazamiento de la tendencia insurreccionalista por la sindical en el seno del anarquismo español. Dicho desplazamiento de tendencia y de líderes se produjo durante la celebración de una conferencia extraordinaria en Barcelona, en febrero de 1881; y se completa con un cambio organizativo. En efecto, en septiembre de 1881 se constituye en Barcelona la *Federación de Trabajadores de la Región Española*, que venía a sustituir a la antigua Federación Regional Española. No era un mero cambio de nombre, sino que respondía a la nueva coyuntura política.

La rápida decadencia de la FTRE, tras el auge inicial de los años 1881-82, no se debió sólo, como la historiografía ha tendido a decir, a los efectos de la represión indiscriminada por los acontecimientos de *La Mano Negra*. En la organización anarquista había desde el principio dos grupos, catalanes y andaluces, con necesidades y problemas distintos, difíciles de poner de acuerdo estratégica y tácticamente. Desde esta división geográfica y sociológica (jornaleros a destajo, artesanos y obreros) se entiende la división ideológica y organizativa entre anarco-colectivistas y anarco-comunistas, partidarios de la lucha laboral o de la insurrección.

Los congresos de Barcelona (septiembre del 81) y Sevilla, un año después, marcan el apogeo de la organización: a finales del 82, según un balance de la propia organización, la Federación contaba con 60.000 adheri-

dos, 274 federaciones locales, 757 secciones y una decena de uniones de oficio, la mayoría de las federaciones, y, por tanto, de la representación en los congresos, correspondía a Cataluña y Andalucía. Pero la división parecía inevitable: *los compromisos acordados en Sevilla*, dice J. Maurice, *entre catalanes legalistas y activistas andaluces no podían disimular el desfase creciente entre las reivindicaciones inmediatas de un proletariado industrial numéricamente débil pero bien organizado y las aspiraciones radicales, más utópicas, de un proletariado agrícola numeroso y sobreexplotado.*

El *affaire* de La Mano Negra viene a acelerar la crisis de la FTRE. Aunque la inaccesibilidad de los archivos militares ha impedido hasta ahora una valoración histórica definitiva de los hechos, parece que la existencia de sociedades secretas como La Mano Negra no fue un invento de la policía para justificar la represión generalizada de los anarquistas. Pero también es cierto que se aprovechó la ocasión para hacerlo. Fernández Almagro subraya la verosimilitud de los hechos, basándose en los estatutos de la organización publicados por Pi y Margall en su *Historia*; en el juicio de Juan Díaz del Moral en su *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, y en la condena formal de los hechos que la propia Federación Anarquista hizo en su Congreso de Valencia. El relato de F. Almagro del proceso a La Mano Negra sigue los informes policiales y judiciales, cargando las tintas sobre el carácter delincuente más que revolucionario de la asociación: *Todo se mezclaba en «La Mano Negra»: el iluminismo ideológico, la degradación criminal, intuiciones de un nuevo orden social, bárbara sed de venganzas, ruindades familiares...* Pero no hace ni una sola referencia a la base social y económica del conflicto, las periódicas crisis de subsistencias, el paro crónico, etc.

El proceso judicial de los implicados en el asesinato de *El Blanco de Benaoaz*, en mayo-junio del 83, que acabó con un veredicto de ocho penas de muerte y siete de trabajos forzados, se convirtió en un proceso general a La Mano Negra y a los anarquistas. La organización de la Federación no salió en defensa de los condenados. Antes bien expresaron la condena de las tácticas violentas. El Congreso de Valencia (octubre del 83), sin dejar de condenar expresamente las acciones criminales, denunció también la represión indiscriminada del Gobierno.

La tensión social en Andalucía, en cuyo contexto se inscriben los acontecimientos citados, había subido mucho desde el verano del 82 por la crisis de subsistencias. El verano siguiente, con mejor cosecha, la presión campesina trataba de aliviar el paro crónico, presionando por la eliminación del trabajo a destajo. El Gobierno, aparte de la represión del terrorismo, acudía en defensa de la *libertad de trabajo*, demandada por los propietarios, con la *siega militar a destajo*.

En el caso de los anarquistas, la liberalización política tuvo efectos efímeros. Tras la represión de 1883, y a causa también de las divisiones internas mencionadas, el anarquismo español entrará en un largo período de decadencia organizativa y sindical, a partir de 1885. La Federación de Tra-

bajadores de la Región Española se disolvió en 1888, justo en el momento en que nacía en Barcelona la UGT. El anarquismo entraba en una fase eminentemente propagandística (publicaciones, escuelas), que coincide de nuevo con el surgimiento de tendencias insurreccionales y atentados terroristas en los años noventa.

Los socialistas

Para los socialistas, la libertad política del bienio es también la ocasión para organizarse sindical y políticamente, tras la clandestinidad forzada del período anterior (1874-81). La primera fundación del partido socialista en 1879, en la clandestinidad, no tuvo apenas trascendencia más allá del pequeño núcleo de tipógrafos e intelectuales que se había configurado durante el Sexenio como el minoritario grupo marxista madrileño frente a la mayoritaria tendencia bakuninista de la sección española de la primera Internacional.

Según ha sintetizado recientemente Santiago Castillo, en la *Historia del socialismo español*, el año 1882 fue crucial para la configuración sindical y política del socialismo. El PSOE y la UGT celebraron en Barcelona, en 1882, sus respectivos congresos pre-fundacionales, en medio de importantes tensiones ideológicas entre la tendencia marxista-guesdiana del grupo madrileño, y las tendencias reformistas, posibilistas y demócratas, vinculadas a sociedades obreras catalanas. En Cataluña es donde se libran las principales batallas entre socialistas y anarquistas, por un lado, y entre marxistas y reformistas, por otro. Los programas fundacionales aprobados en distintos congresos celebrados entre 1882 y 1884, reflejan los pactos entre tendencias.

En la consolidación propagandística y organizativa del primer socialismo español jugó un papel fundamental el grupo de Madrid, y concretamente el de tipógrafos. La larga huelga de tipógrafos de Madrid en 1882 consolidó y prestigió la Asociación General del Arte de Imprimir, *cuna de un gigante*, según la expresión del militante y publicista Juan José Morato. Posteriormente, en 1884, la Información oral, convocada por la Comisión de Reformas Sociales para el Estudio de la Condición de Vida Obrera, fue una excelente oportunidad aprovechada por los socialistas como plataforma pública y legal para hacer propaganda de sus ideas. En esa tribuna intervinieron, por extenso, Iglesias, Morato y Matías Gómez Latorre, entre otros.

En general, la libertad de asociación, regulada por la Ley de 1887, permitió la salida a la luz pública de sociedades obreras de oficios, mutualidades y sociedades de resistencia, no encuadradas en ninguna organización política, socialista o anarquista, que habían pervivido en situación de semiclandestinidad, como testimonian las primeras encuestas gubernamentales sobre asociaciones de 1881-82. En este momento, y aún durante mucho tiempo, este movimiento asociativo no ideológico, será la realidad dominante en

el panorama español, mientras que los partidos y sindicatos obreros, socialistas o anarquistas, eran minoritarios. A pesar de que el escaso estudio de ese mundo asociativo, en comparación con la atención dedicada a las organizaciones anarquista y socialista, pueda dar una impresión contraria.

Entre todas las asociaciones obreras no vinculadas al anarquismo ni al socialismo destaca la agrupación textil catalana *Las Tres Clases del Vapor*, estudiada por M. Izard. Durante los años de la Restauración *Las Tres Clases* se va definiendo como tendencia reformista, tanto frente al insurreccionalismo anarquista de la FRE, como en diálogo y confrontación con los proyectos madrileños de crear un partido socialista democrático. En los años ochenta *Las Tres Clases* constituía la base sindical más sólida del incipiente socialismo y el mejor colaborador en Cataluña de los diversos intentos de crear un partido socialista democrático. Más tarde evolucionará hacia posiciones más reformistas.

LA IGLESIA ANTE LA RESTAURACIÓN. DE LA INTRANSIGENCIA A LA CONCILIACIÓN

Como ya hemos visto, la cuestión religiosa se convirtió en una de las más polémicas y conflictivas durante la transición política. En la Comisión de Notables, y posteriormente en los debates constituyentes, la definición del régimen de tolerancia del artículo 11 provocó, además de numerosos debates, presiones diplomáticas y movilizaciones católicas diversas. En última instancia, al final del proceso se observa un cierto desfase entre el relativo acuerdo diplomático Santa Sede-Gobierno español, y el enfrentamiento y automarginación de la mayoría del catolicismo español respecto del régimen canovista. Este desfase será una constante a lo largo de la Restauración, y constituye un elemento explicativo de primer orden para entender los conflictos que se plantean en el interior del mundo católico, y en su relación con el régimen político.

Aprobada la Constitución de 1876, la batalla se planteaba a la hora de aplicar y desarrollar el artículo 11. Las primeras circulares del Gobierno Cánovas tendían precisamente a tranquilizar a la jerarquía católica, restringiendo al máximo la tolerancia reconocida en la Constitución. El 23 de octubre de 1876 la presidencia del Consejo de Ministros envió una circular a los gobernadores civiles con instrucciones concretas sobre la aplicación restrictiva del artículo 11. Según éstas: *Es manifestación pública (y por tanto sujeta constitucionalmente a prohibición) todo acto ejecutado en la calle o en los muros exteriores del templo o cementerio que dé a conocer ceremonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente. Hay que comunicar a la autoridad local o al gobernador la apertura de un templo o escuela disidente. Las escuelas deben funcionar con independencia del templo.* Estas reglas crearían problemas a la implantación de escuelas protestantes. Liberales como

Alonso Martínez (tan identificado con las bases constitucionales) y José Luis Albareda protestaron ante esta interpretación tan estricta, temerosos de que Cánovas, una vez aprobada la Constitución con el apoyo de los liberales, se apoyara en los moderados para una aplicación restrictiva.

Esta interpretación restrictiva suscitó protestas y presiones también de embajadores extranjeros, principalmente el británico, especialmente interesados en la existencia de un marco tolerante para la propaganda protestante. (Esta presión internacional de algunas potencias como Inglaterra y Alemania había sido uno de los argumentos de peso, esgrimidos por Cánovas y, en último extremo, *aceptado* por la Santa Sede, para defender el texto constitucional.)

Conflictos jurídicos Iglesia-Estado

El marco legal en el que se mueve la Iglesia católica durante la Restauración era bastante ambiguo, pues dependía de dos fuentes hasta cierto punto contradictorias: por un lado, el Concordato de 1851, que seguía vigente, y, por otro, el régimen de tolerancia religiosa y de respeto genérico a las libertades que proclamaba la Constitución de 1876.

Las cuestiones concretas que la aplicación del nuevo principio constitucional suscitó se referían principalmente a los siguientes aspectos: el proyecto de ley de Instrucción Pública y las medidas concretas relacionadas con planes de estudio, enseñanza de la religión en los centros públicos, control y censura moral de los contenidos de la enseñanza a cargo de los obispos, requisitos legales para el reconocimiento oficial de los centros privados.

Nada más comenzar la Restauración se pondrá de manifiesto la dificultad para sacar adelante un proyecto de ley de Instrucción Pública. Presentado inicialmente en el Congreso en diciembre de 1876, pasará por una serie de discusiones, presiones, resistencias, que prolongaron el proceso. Hasta marzo de 1878 no se debatió en el Congreso. El debate en el Senado, mayo-junio 1878, suscitó intervenciones de los obispos senadores promovidas desde la Santa Sede. Paralelamente al debate parlamentario, entre abril y junio de 1878, se sucedieron las declaraciones episcopales de las distintas provincias eclesiásticas contra el proyecto de ley. Finalmente, el proyecto no fue aprobado en el Senado, y su discusión quedó aplazada para la siguiente legislatura. La presión conjunta de la Santa Sede y de la jerarquía católica española parecían haber conseguido frenar esta aplicación a la enseñanza de la tolerancia constitucional. Hasta 1884, de nuevo con el Gobierno Cánovas-Pidal, no se planteará de nuevo un proyecto de ley de Instrucción Pública.

En toda la argumentación episcopal contra el proyecto de ley de Instrucción Pública, el punto de apoyo fundamental era siempre el artículo 2.º del Concordato, y su manifiesta contradicción con los artículos 11 y 12 de la Constitución del 76. Lo que los obispos impugnaban era la obligatoriedad de

la enseñanza primaria, principio que entendían consagraba el monopolio del Estado docente sobre otras instancias (familia, Iglesia). Igualmente entendían que el proyecto no garantizaba suficientemente la ortodoxia doctrinal de la enseñanza, pues el derecho de los obispos a inspeccionar y censurar los contenidos de la enseñanza (derecho reconocido en el concordato), quedaba pospuesto o dependiente de la principal función inspectora que correspondía al Estado.

Aparcado el polémico proyecto de ley, la circular del ministro liberal Albareda, de 3 de marzo del 81, reponiendo en sus cátedras a los profesores krausistas, suscitó condenas y críticas episcopales y la reacción de la recién fundada *Unión Católica*.

La llegada del católico Alejandro Pidal y Mon al Ministerio de Fomento en 1884 era una oportunidad para sacar adelante los criterios católicos. El obispo de Segorbe, Francisco de Asís Aguilar, recibió el encargo de preparar unas bases para un proyecto de ley de Instrucción Pública que fuera aceptable para los intereses católicos. Un proyecto general volvió a quedar frustrado, pero durante su ministerio Pidal aprobó medidas tendentes a favorecer la enseñanza privada religiosa que comenzaba a tener una importante implantación en España. En el verano de 1885 el Gobierno aprobó un real decreto sobre las condiciones mínimas que debían de reunir los colegios privados para recibir el título de *asimilados*, es decir, con todo el reconocimiento oficial.

El matrimonio canónico y el Código civil

La larga negociación sobre la base 3.^a del Código Civil, relativo al estatuto jurídico del matrimonio en España, es otro buen test para el estudio de la relación Iglesia-Estado durante la Restauración.

La ley sobre el matrimonio civil de 1870 había quedado, desde el principio de la Restauración, profundamente modificada por el Decreto de 9 de febrero del 75, y por una Circular del 19 del mismo mes en la que se advertía sobre la plena validez civil, para los católicos, del matrimonio canónico. Bastaba que los párrocos advirtieran a los contrayentes la obligación de inscribirse en el registro civil.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1879 iba más allá: consideraba legal la actuación de un párroco que autorizó un matrimonio canónico de personas casadas civilmente con anterioridad. El matrimonio canónico, según esa sentencia, parecía tener validez superior al civil.

El 17 de mayo de 1880 se inició el trámite parlamentario de un proyecto de ley sobre efectos civiles del matrimonio. Pero la Iglesia no admitía ningún tipo de regulación civil de lo que consideraba ante todo un sacramento, únicamente sujeto, según el derecho canónico, a la jurisdicción eclesiástica.

Con la llegada de los liberales al poder, la Iglesia no pudo eludir por

más tiempo la regulación jurídica del matrimonio. Se iniciará un largo proceso de negociaciones (Santa Sede-Gobierno español) acerca de los términos en que debería redactarse la base 3.^a del Código Civil, referida a la regulación jurídica del matrimonio. Para los liberales era ineludible regular esta cuestión en el marco de un Código Civil largamente gestado. El acuerdo final, en 1887, puso a prueba la relación del Vaticano con los gobiernos liberales, revelando la buena disposición recíproca para el acuerdo y la tolerancia.

En febrero de 1883, en la discusión en el Congreso de la citada base 3.^a del Código, la jerarquía católica mostraba su oposición frontal a cualquier regulación del matrimonio civil. Durante el Gobierno conservador Cánovas-Pidal, el tema quedaba pendiente.

En noviembre de 1886, Alonso Martínez, en aplicación del régimen de tolerancia constitucional, tomó la iniciativa de regular jurídicamente el matrimonio para los no católicos. Las intensas negociaciones culminaron en un acuerdo con la Santa Sede, en marzo del 87, por el que ésta reconocía al Estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio.

El acuerdo final dio lugar a declaraciones optimistas por ambas partes, que confirmaron el buen clima que presidía las relaciones Santa Sede-gobiernos liberales. Más allá del acuerdo concreto, el embajador en la Santa Sede, Groizard, transmitía a su ministro (Moret) el expreso apoyo del Papa al régimen: *He tenido y tengo una gran benevolencia para cuanto afecta a los intereses de la reina regente, a los intereses de su Gobierno y a los intereses de España; y la tendré mientras en ella los derechos y los intereses de la Iglesia sean respetados.*

Pero el acuerdo diplomático se volvió a discutir en el debate parlamentario sobre la base 3.^a del Código (junio del 87 y febrero del 88). Por momentos volvió la polémica con la Santa Sede sobre la consideración de una vía excepcional para los residentes en el extranjero. Finalmente, tras las rectificaciones oportunas, el 12 de mayo del 88 el Senado aprobada el texto definitivo.

Según Cristóbal Robles, que resume este largo proceso: *Se había puesto a prueba la capacidad negociadora de la Santa Sede y el compromiso del partido fusionista para mantener el espíritu del Sexenio en los moldes jurídicos de la Constitución de 1876 y en el marco de la dinastía restaurada en Alfonso XII (...) En los meses largos en que se debaten las exigencias de la Iglesia y las necesidades del Gobierno queda claro que una y otro se dan cuenta del cambio que se ha operado en la sociedad española: ni los liberales en el poder son aquellos revolucionarios deseosos de modernizar España y opuestos, hasta la violencia, a una Iglesia que obstaculiza sus propósitos, ni la Iglesia es un enemigo a derrotar, sino un aliado para sostener la paz social, la tranquilidad pública y la cohesión de la nación frente a las amenazas disolventes de la revolución democrática, republicana y socialista...*

Otra serie de conflictos jurídicos y diplomáticos se suscitaron por la apli-

cación y en el ejercicio de los derechos y obligaciones del Estado con la Iglesia, fijados en el Concordato de 1851, y heredados del régimen de patronato real sobre la Iglesia. El conflicto regalista, tan crucial en el siglo XVIII, pervivía y se manifestaba en conflictos más o menos importantes con motivo de:

- la presentación de cargos eclesiásticos;
- la defensa del fuero eclesiástico, y, en general, de la capacidad autónoma de la Iglesia para reunirse en concilios provinciales y sínodos diocesanos;
- el cumplimiento de las obligaciones económicas del presupuesto del Estado (dotación de culto y clero) y el estatuto jurídico de los bienes eclesiásticos;
- la fundación de casas de religiosos, al amparo de la ambigüedad del concordato;
- la exención del servicio militar para los seminaristas;
- el funcionamiento de instituciones heredadas del antiguo régimen de patronato como *La Obra Pía de Jerusalén* o *La Agencia de Preces a Roma*.

De la intransigencia a la conciliación

Entre 1876 y 1885 —sintetiza C. Robles— se va a producir un giro en la orientación que desde el Vaticano se imprime al catolicismo hispano. Se pasa del recelo a la solidaridad y al apoyo mutuo frente a la amenaza republicana y socialista que aparece en los años ochenta (...) La modificación en el sistema de relaciones Iglesia-Estado se ve acompañada de un fenómeno que va ligado a ella: las tensiones en el interior del movimiento católico.

Las vicisitudes de esta política vaticana ante el régimen de la Restauración, y los recelos, resistencias y fuertes divisiones que suscitó entre los católicos españoles la aplicación de esas directrices vaticanas, es el tema central del reciente libro de C. Robles, *Insurrección o legalidad*. A la luz de esta investigación (hecha con la riquísima e imprescindible base documental del archivo vaticano) se completan visiones parciales, y a veces confusas, que teníamos sobre la cuestión político-religiosa en la España de la Restauración, y sobre la profunda división que afecta al catolicismo español en esta época.

Desde el principio, el objetivo de los gobiernos conservadores y liberales fue conseguir para el régimen político, de parte de la Iglesia jerárquica, el reconocimiento y la benevolencia que les permitiera contrarrestar la intransigencia y la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia un régimen liberal y, por tanto, intrínsecamente perverso (*el liberalismo es pecado*). Se trataba de conseguir del Vaticano la descalificación explícita o al menos implícita de los católicos más intransigentes.

Ya en 1878, Cánovas pidió al embajador Cárdenas que obtuviera de la Santa Sede una aclaración adecuada sobre la cuestión del *liberalismo*, de

modo que se pudiera distinguir entre el liberalismo filosófico o doctrinal y el régimen político liberal restaurado. Dicha aclaración podría quitar argumentos a los que, desde el catolicismo intransigente, descalificaban y rechazaban cualquier tipo de colaboración con la Restauración.

Que la Santa Sede y la jerarquía católica española cumpliesen esa función legitimadora tan vital para la consolidación del nuevo régimen no era fácil. En primer lugar, la mayor parte de esa jerarquía compartía plenamente el criterio tradicionalista-carlista, según el cual el único estatus admisible era el de la *unidad católica* de la Constitución de 1845. Para este sector, muy mayoritario en el catolicismo español, y el más militante, el pacto posibilista alcanzado con el artículo 11, era rechazable y condenable, al igual que todo el sistema político. Esta mayoría católica intransigente iba a aprovechar cualquier ocasión para poner en contradicción la ortodoxia católica antiliberal (el Syllabus) y el concordato vigente, con los desarrollos y aplicaciones legales del régimen de tolerancia. En último extremo iba a malinterpretar las iniciativas posibilistas y conciliadoras tomadas por el Vaticano en sucesivas ocasiones, incluso hasta colocarse frontalmente en situación de desobediencia respecto a sus obispos. (Esto es lo que ocurre con varios conflictos de obispos con prensa y líderes integristas.)

Por otra parte, las directrices posibilistas que marcó claramente, para toda la Iglesia, el nuevo pontificado de León XIII, hay que entenderlas en el contexto de la evolución de la *cuestión romana*. Desbloquear el aislamiento internacional, recuperar el prestigio y la función internacional de la Santa Sede era su objetivo prioritario, y a él se habían de supeditar en buena medida las políticas de las Iglesias locales. Lo que Cánovas podía ofrecer a la Iglesia, a cambio de la benevolencia o la no hostilidad de los integristas, no era sólo un régimen de protección y privilegios para la actividad pastoral y propagandística de la Iglesia española, sino un apoyo internacional al Papa de Roma en la situación sumamente difícil por la que atravesaba en estos años (conflictos con la República italiana, tensión, inicialmente, con la potencia hegemónica, la Alemania de Bismarck).

A los intereses diplomáticos en juego hay que añadir la progresiva convergencia de objetivos. Lo que la religión y la Iglesia en concreto podían ofrecer a los Estados era el auxilio en la predicación y defensa de unos principios y valores sociales burgueses (orden, propiedad...) que se veían crecientemente amenazados por la revolución socialista. León XIII apelaba varias veces a esta tarea-función moral de la Iglesia. Por parte de los gobiernos, también los conservadores y liberales españoles reconocían esa inestimable ayuda, a cambio de la cual se estaba dispuesto a ofrecer garantías a la Iglesia.

Esta convergencia de objetivos y la política posibilista que de ella se derivaba no era, sin embargo, comprendida ni aceptada por los católicos intransigentes, provocando, concretamente en el caso de España, fuertes descalificaciones y divisiones.

La situación se exacerbó y radicalizó especialmente a partir de 1881, coincidiendo con el intento frustrado de crear una asociación de católicos, la *Unión Católica*, que, como su propio nombre ilustra, estuviera en condiciones de aglutinar a los católicos españoles más allá de las divisiones dinásticas (carlistas/alfonsinos). Se trataba de una iniciativa de seglares católicos cualificados, con Alejandro Pidal y Mon al frente, pero impulsada directamente por la jerarquía, en un momento en que el comienzo del turno liberal consolidaba el sistema político. Frente a la política de los liberales no bastaba el abstencionismo de los carlistas, era preciso reorganizarse. El proyecto de la *Unión Católica* constituyó en seguida un rotundo fracaso, pues no pasó de ser una alternativa minoritaria, que de momento agudizó la división y las tensiones.

La capacidad movilizadora de los tradicionalistas en torno a Cándido Nocedal y *El Siglo Futuro* era muy superior, como se demostró en los preparativos de la peregrinación de los católicos españoles a Roma programada para 1882. (Después de la pérdida de los Estados pontificios, y como muestra del apoyo internacional de los católicos al Papa *prisionero* se organizaron peregrinaciones-manifestaciones. La preparada para 1882 tenía como objeto desagraviar los ultrajes de que había sido objeto Pío IX, en 1881, con motivo del traslado de sus restos mortales a la basílica de San Lorenzo Extramuros.) La peregrinación de 1882, inicialmente encargada por la Santa Sede a Nocedal, quiso ser utilizada por éste para afirmar las posiciones tradicionalistas y descalificar a la *Unión Católica* y a los partidarios del posibilismo. Este intento de exclusivismo político generó la desautorización del Vaticano, y una serie de intervenciones contrapuestas de obispos, seglares y periódicos, que provocaron la suspensión de la peregrinación nacional.

La radicalización de posturas, las descalificaciones recíprocas, y, sobre todo, la puesta en cuestión de la autoridad de los obispos, por parte de periodistas clérigos o seglares, obligaron a la Santa Sede a intervenir directamente con un documento específicamente dirigido a los católicos españoles, la *Cum Multa*. Ésta, al igual que las intervenciones posteriores del Vaticano, pretendía salvar la unidad política de los católicos, sobre bases suprapartidistas, y, por tanto, sobre el reconocimiento de un cierto pluralismo político que tendría que respetarse. Ese pluralismo incluía, por supuesto, el respeto a la posición política de los católicos alfonsinos, llamados, despectivamente, *mestizos* por los intransigentes.

El llamamiento vaticano, por tanto, lejos de pacificar los ánimos, suscitaba nuevas descalificaciones a partir de interpretaciones distintas, *interesadas*, por parte de unos y de otros.

La nunciatura de Rampolla

En este clima de fuerte división de los católicos llega a España el nuevo nuncio Rampolla. Su gestión, durante los años 1883-87, coincidiendo con la crisis política provocada por la desaparición de Alfonso XII y el inicio de la Regencia, será decisiva para la consolidación de las posturas posibilistas y el aislamiento de las intransigentes.

Pronto las esperanzas depositadas por los intransigentes en el nuevo nuncio se verían frustradas. Sus llamamientos a la odiedencia jerárquica para la correcta interpretación de la *Cum Multa*, y su invitación a respetar la legalidad vigente, junto a las garantías que acordó con el Gobierno de la Izquierda Dinástica, configuraron los objetivos y el talante de su gestión.

La vuelta al poder de los conservadores, en 1884, y, especialmente, la presencia del máximo representante de la *Unión Católica*, Alejandro Pidal y Mon, en el Gobierno, va a generar tensiones y aumentar el clima de división, poniendo a prueba la gestión conciliadora del nuncio. La presencia de Pidal y Mon en el Gobierno, parece que por expreso deseo del rey, llenaba uno de los objetivos más deseados por Cánovas: integrar a los católicos en el régimen, apartándolos del carlismo y del abstencionismo político. Objetivo, por otras razones, compartido e impulsado por la Santa Sede. (Pidal y Mon aceptó el cargo ministerial con el visto bueno del Vaticano.) Ahora bien, este gesto provocaría la ira y la oposición de la derecha católica, y el permanente recelo de la izquierda liberal. Desde ambos flancos se pondrían obstáculos a la gestión del ministro.

El primer incidente importante se suscitó por una intervención del ministro Pidal y Mon sobre la *cuestión romana* que provocó las protestas del Gobierno italiano. La rectificación exigida al Gobierno español, es decir, un reconocimiento explícito del reino de Italia, era imposible de formular por un representante del catolicismo ultramontano español como Pidal y Mon. La cuestión diplomática se convirtió en una ofensiva, que se prolongó entre junio y octubre de 1884, contra el ministro Pidal y la opción que representaba.

El discurso del catedrático de la Universidad de Madrid, y Gran Oriente de la Masonería española, Miguel Morayta, con motivo de la inauguración oficial del curso universitario 1884-85, presidida por el ministro Pidal, se convirtió en el inicio de otro largo incidente que le desgastó aún más. El discurso de Morayta provocó la reacción indignada de la prensa católica y de algunos obispos, no ya contra el citado discurso, sino contra la tolerancia y la permisividad de un ministro católico ante una forma de propaganda masónica y racionalista.

En medio de esta polémica suscitada por el discurso de Morayta, una pastoral del obispo de Plasencia, Casas y Souto, de 23 de enero de 1885, venía a potenciar la ofensiva integrista contra el Gobierno Cánovas-Pidal y la política conciliadora. Lo más grave era que la pastoral implicaba también a la Monarquía en la dirección errónea de la política tolerante del Gobierno.

Dicha pastoral provocó un importante conflicto diplomático, en el que la gestión mediadora del nuncio Rampolla fue decisiva. Para éste, era clara la intencionalidad política de la pastoral: se trataba de un ataque a Cánovas y a Pidal y una apología de la doctrina y los objetivos que representaba, dentro del partido carlista, Nocedal. El Gobierno consiguió de parte del Vaticano algunas satisfacciones y rectificaciones, pero la división de los católicos españoles se agudizó. El desafío integrista apuntaba ya no sólo a una determinada orientación política de la Iglesia (el posibilismo), sino a la legitimidad y superioridad de la autoridad del nuncio, delegado pontificio, sobre la de los obispos. Según la argumentación integrista, las directrices del nuncio, dependientes por necesidad de factores diplomáticos, no podían estar por encima de las orientaciones episcopales, de por sí más independientes. Éste era el punto de vista defendido por el obispo de Urgel, Salvador Casañas, en una carta privada a Cánovas (marzo 1885), en la que le resumía los contenciosos de la Iglesia con la política de los conservadores.

La ofensiva integrista, al poner en cuestión la autoridad del nuncio sobre los obispos, atacaba los fundamentos de la política conciliadora que por vía diplomática estaban desarrollando, respectivamente, el Gobierno de Cánovas y la Santa Sede. Se imponía, pues, una reacción urgente y contundente por parte de ésta. El 15 de abril, el secretario de Estado, Jacobini, desautorizaba expresamente un artículo del órgano integrista *El Siglo Futuro* (de 9 de marzo de 1885), y le exigía una rectificación pública. Esta contraofensiva del Vaticano frente a los integristas quedó reforzada, en el plano internacional, por la rectificación pública (el 20 de junio de 1885) de otro de los máximos representantes del integrismo, el cardenal Pitra, prefecto de la Biblioteca Vaticana.

La gestión *posibilista* de Rampolla culminó en este año crucial de 1885 con el expreso apoyo de una buena parte de la jerarquía católica española a la Regencia recién inaugurada; pacto mucho menos conocido pero no menos decisivo para la consolidación del régimen, que el pacto Cánovas-Sagasta de *El Pardo*. Un grupo significativo de cinco arzobispos y veinte obispos asistieron en Madrid a los funerales de Alfonso XII, lo que dio ocasión al nuncio para varias reuniones y acuerdos sobre la política más conveniente. El documento más importante fue la declaración de 14 de diciembre de 1885, que significaba la aplicación en España de las directrices políticas dadas por León XIII a toda la Iglesia en la encíclica *Inmortale Dei*. Dicha declaración significaba un apoyo claro a la gestión conciliadora del nuncio, y una descalificación de la postura integrista: partiendo de la legitimidad de un cierto pluralismo político (*sobre la mejor clase de gobierno, sobre tal o cual forma de constituir los Estados, puede haber sobre ello una honesta diversidad de opiniones*), los obispos pedían la obediencia a su autoridad, especialmente de la prensa católica, a la vez que proclamaban una cierta libertad de expresión sobre cuestiones opinables (*honesta libertad de escribir con la amplitud que convenga a los respectivos fines y propósitos*). No es de extrañar

la satisfacción con que la regente y los liberales en el poder recibían estos gestos y estas declaraciones del Vaticano y de los obispos españoles, cuando se iniciaba una nueva etapa política. A cambio de este apoyo, los Gobiernos liberales de Sagasta tendrían la mejor disposición a pactar con el nuncio las cuestiones siempre conflictivas de la enseñanza, el matrimonio, etc.

La regencia se inició, pues, bajo el signo de este pacto entre liberales (el ministro Moret, el embajador en la Santa Sede, Alejandro Groizard) y la Iglesia, sobre la base del respeto y la colaboración recíproca. Para el ministro Moret había objetivos coincidentes que justificaban y garantizaban la perdurabilidad del pacto: la defensa del orden social frente a las nuevas amenazas revolucionarias. Rampolla, como nuncio en España, y Groizard, como embajador español en la Santa Sede, representaban y protagonizaban ese difícil camino hacia la conciliación, defendido por conservadores, liberales y algunos católicos, y torpedeado por el mayoritario catolicismo tradicionalista.

II. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RESTAURACIÓN

Una de las características más típicas del régimen político de la Restauración lo constituye el desfase, tan criticado por los regeneracionistas, entre el país legal (la Constitución de 1876 y sus desarrollos legislativos) y el país real, la oligarquía y el caciquismo.

Teóricamente, la Constitución de 1876 implantaba en España, una Monarquía parlamentaria, análoga, al menos en apariencia, al modelo británico. Ahora bien, la aplicación del principio básico de la soberanía nacional compartida (rey y Cortes) concedía a la Corona además de las atribuciones típicas, un poder moderador supremo, que le convirtió de hecho en el árbitro máximo del ejercicio del turno.

El principio de la *doble confianza* (del rey y de las Cortes) del que dependía la permanencia de un Gobierno, de un partido, en el poder, se traducía en la práctica en la dependencia dominante de la voluntad monárquica. El rey era el que de hecho, mediante el decreto de disolución de Cortes, concedido a la persona designada para formar Gobierno, posibilitaba el ascenso o descenso del poder a los distintos líderes y formaciones políticas. Por supuesto, al hacerlo no actuaba caprichosamente, sino de acuerdo con unas reglas del juego: el partido gobernante debía presentarse lo más unido y homogéneo; ningún partido debía perpetuarse en el ejercicio del poder para evitar la tentación del pronunciamiento, etc. Pero en todo caso esta forma de acceso subvertía la lógica de una práctica parlamentaria. No eran las Cortes las que provocaban crisis políticas y hacían cambiar gobiernos, pues cada partido gobernante se fabricaba una mayoría parlamentaria suficiente, mediante elecciones fraudulentas. Las crisis ministeriales parciales o totales, las alternativas en el ejercicio del poder (el turno), se decidían entre las altas esferas políticas (la élite) al margen del Parlamento, sobre la base de la iniciativa monárquica que decidía primero la persona encargada de formar

Gobierno, le otorgaba después el decreto de disolución de Cortes y la posibilidad de fabricar unas elecciones que le permitieran tener una mayoría parlamentaria holgada.

En teoría, el sistema político era una Monarquía parlamentaria; en la práctica, *Oligarquía y Caciquismo* fueron los términos utilizados por Costa para caracterizar el sistema político canovista. Pero bastante antes de la Información convocada por Costa en el Ateneo de Madrid (1902) sobre *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla*, varios autores habían hecho la denuncia moral del sistema político de la Restauración en términos semejantes. Entre ellos destaca especialmente el libro de Gumersindo de Azcárate *El régimen parlamentario en la práctica* (1885), quien, en un tono radicalmente ético, se refería a las diversas manifestaciones degenerativas del teórico régimen parlamentario de la Restauración: prepotencia del poder ejecutivo sobre los otros dos, impotencia y dependencia del poder judicial, limitaciones del poder legislativo, teóricamente el predominante en un sistema parlamentario.

Su descripción de las diversas formas de corrupción administrativa y electoral anticipaba juicios y denuncias posteriores del caciquismo: las interferencias del poder ejecutivo en el proceso electoral para *hacer las elecciones*; las interferencias caciquiles en la Administración local, provincial y central, tanto en la elección de destinos y cargos como en la gestión de «favores» demandados por las respectivas clientelas.

Durante mucho tiempo la historiografía crítica de la Restauración canovista reprodujo casi literalmente los juicios y denuncias regeneracionistas de Azcárate, Costa y demás regeneracionistas de la Información del Ateneo. Sólo a partir de los años setenta la publicación de varias investigaciones convergentes (Tusell, Romero Maura, Varela Ortega) significaron un avance sustancial en la comprensión del fenómeno caciquil, al situar su análisis, más allá de las valoraciones morales, en el plano de la historia política (el número monográfico dedicado por la *Revista de Occidente*, en 1973, a este tema, fue un anticipo de sus libros respectivos).

Posteriormente, una generación de jóvenes historiadores han completado con investigaciones monográficas el estudio detallado de casos provinciales (Valencia, Castellón, Alicante, Ciudad Real, etc.) aplicando, matizando y completando los conceptos generales. Los análisis provinciales de elecciones y partidos durante la Restauración, tan abundantes en los últimos años, han ido generalmente acompañados de análisis concretos de la vida política local y sus redes caciquiles, a partir del marco general interpretativo ofrecido por los primeros estudios sobre el caciquismo.

OLIGARQUÍA: LA ÉLITE POLÍTICA Y ECONÓMICA

El carácter oligárquico del régimen se aprecia si se analiza la estrecha relación entre la élite política y las élites sociales y económicas, como han puesto de relieve varios y diferentes autores, desde Tuñón de Lara, con su concepto de *bloque de poder*, hasta el estudio de Mateo del Peral, sobre la conexión entre las autoridades económicas y financieras y las políticas, o la investigación concreta de J. Tusell sobre *Oligarquía y caciquismo en Andalucía*.

Hace ya algún tiempo Tuñón de Lara planteó la formación de un bloque de poder dominante, constituido sobre la alianza de la aristocracia terrateniente y la alta burguesía financiera, como concepto básico para comprender la naturaleza oligárquica del régimen político de la Restauración. Trataba de responder a preguntas tales como: ¿cuáles eran realmente los grupos sociales y los intereses económicos que controlaban el poder político durante la Restauración?, ¿cómo se formaba ese grupo o bloque de intereses económicos sociales y políticos?, ¿qué relaciones existían entre los grupos sociales y económicos y la élite política?

Según el análisis de Tuñón, el bloque de poder estaría formado por dos grupos sociales dominantes:

- los grandes propietarios terratenientes, no sólo los antiguos nobles, sino los nuevos propietarios, compradores de tierras desamortizadas, todos o en su mayoría ennoblecidos;
- la alta burguesía, tanto la de negocios (banca, crédito, ferrocarriles, servicios públicos, negocios coloniales, compañías navieras), como los empresarios de la gran industria ascendente (siderometalúrgica, minería, construcción naval, azúcar, electricidad), y los comerciantes y empresarios ligados a sectores agrícolas en auge (vinos, harinas, conservas).

Al repasar los consejos de administración de las empresas, compañías, bancos, se descubren fácilmente las vinculaciones familiares y las estrechas relaciones entre representantes cualificados de esos sectores económicos dominantes. Las mismas personas coincidían en el control de la gran propiedad agraria, las finanzas y los grandes negocios. Enlaces familiares, y los consiguientes ennoblecimientos, venían a reforzar el proceso de integración de la alta burguesía en el bloque de poder oligárquico.

Al margen de este bloque quedaba una fracción de la alta burguesía, compuesta por los empresarios catalanes de tipo medio y algunos empresarios de nuevos sectores en auge en el País Vasco y Asturias. Esta burguesía, no integrada en el bloque, marginada del sistema de partidos dinásticos, sería la base de los partidos nacionalistas y republicanos antidinásticos que se presentarían como alternativa en la crisis del sistema, en el período 1917-1923.

Normalmente, salvo momentos excepcionales, la élite económica no ejer-

cía directamente el poder político, sino a través de unos intermediarios, políticos profesionales, generalmente extraídos de la clase media, que progresivamente se integran en el bloque dominante.

Desde esta perspectiva del bloque de poder es fácil interpretar el verdadero significado social y económico de las principales decisiones políticas que los gobernantes de la Restauración —conservadores o liberales, es indiferente— van tomando: el carácter siempre prioritario de los intereses agrarios sobre los industriales y la preeminencia de los valores aristocráticos sobre los burgueses.

Hasta aquí, resumidamente, la tesis defendida por Tuñón para caracterizar la base social del sistema político de la Restauración. Tesis que ha influido enormemente en numerosos estudios posteriores, aunque últimamente esté siendo sometida a fuerte revisión. Pues el estudio de Varela Ortega sobre los trigueros castellanos o el más reciente de J. Ignacio Arana sobre la Liga Vizcaína de Productores, cuestionan la existencia de un bloque homogéneo e integrado como un grupo de presión proteccionista y, sobre todo, la existencia de una relación directa e inmediata de esos supuestos grupos de presión con las decisiones políticas de los gobernantes de turno.

Como se ha señalado, élite política y élite económica, aunque estrechamente vinculadas, no tenían por qué coincidir en las mismas personas. Fijémonos, pues, concretamente en la élite política de la Restauración. Pero antes recordemos brevemente la naturaleza de los partidos políticos de la Restauración. Según Tusell, los partidos dinásticos, liberal y conservador, no eran ni siquiera *partidos de notables*, pues carecían de una base ideológica mínima. La unidad del partido no se forzaba en torno a una ideología o un programa, sino que se basaba exclusivamente en las relaciones de clientela, mantenidas mediante *favores*. Las divisiones y escisiones dentro de un partido no respondían a diferencias ideológicas o programáticas, sino a tensiones a nivel de clientelas. Por otra parte se trataba de partidos oligárquicos, estrictamente jerárquicos, donde el sistema de nombramientos de los jefes provinciales respondía a los mismos métodos caciquiles de elección de diputados.

Martínez Cuadrado nos ofreció hace tiempo una estimación del número de puestos políticos que tenía que cubrir un partido cuando llegaba al poder.

En el nivel nacional se requerían entre 15 y 20 del más alto rango (ministros, presidentes de cámaras legislativas, alcalde de Madrid, etcétera). Alrededor de 100 a 200 para el segundo rango (subsecretarios, directores generales, gobernadores civiles), al que habían de añadirse de 100 a 400 puestos de diputados y senadores, incompatibles con cargos o funciones en la administración pública. Junto a estos puestos, cada partido debía promover candidatos que fuesen siempre equivalentes a los escaños o puestos a cubrir en los procesos electorales provinciales y municipales (diputados y concejales), teniendo en cuenta los puestos reservados o conquistados por el par-

tido de la oposición (...) En cada cambio de turno rotaban entre 50.000 y 100.000 cargos...

Cada partido político disponía, pues, de los correspondientes equipos de personas para cubrir esos puestos de varias categorías o niveles:

El de los diputados y altos cargos: el objetivo central de la carrera política era llegar al Congreso, pues desde ahí se podía acceder a los más altos cargos políticos (ministro y presidente del Consejo). Pero antes de llegar a un puesto ministerial había que hacer un *cursus honorum*, demostrar las asistencias naturales y personales con las que se contaba para la obtención de un acta de diputado y, en última instancia, demostrar la capacidad para desempeñar el puesto parlamentario.

Tusell nos presenta un modelo de *cursus honorum* del político profesional que se corresponde bastante con las categorías ya mencionadas: 1) cargos municipales (concejal) o provinciales (diputado); 2) diputado; 3) gobernador civil, director general y subsecretarios; 4) ministro, primero de Instrucción Pública o Fomento, finalmente de Gobernación o de Estado, cotas máximas antesala de la presidencia del Consejo de Ministros.

Las condiciones básicas para ascender en esta escalada política eran la fidelidad al jefe y el tener estabilidad propia en el distrito en el que había sido elegido diputado (bien por arraigo económico, bien por arraigo político y administrativo conquistado).

Sobre la relación entre la élite política y la económica de la Restauración es interesante el estudio sobre *las autoridades económicas* que publicó, ya hace algunos años, Diego Mateo del Peral, en la obra colectiva *La Banca española durante la Restauración*. Su estudio confirma los estrechos lazos entre los altos cargos políticos y los grandes negocios: la presencia de los presidentes de Gobierno, ministros de Hacienda y Fomento, gobernadores del Banco de España en los consejos de administración de las compañías de ferrocarriles, las sociedades de crédito y bancos, en las sociedades para la explotación de minas, etc.

Como se ha señalado, algunos miembros cualificados de la alta burguesía ocuparon directamente altos cargos públicos, pero, como advierte Tusell, progresivamente creció la profesionalización de la política, la separación entre el hombre de negocios y el político profesional: *Los políticos, como miembros de la burguesía que son, aceptan consejos, presiden compañías, poseen acciones. El verdadero poder económico, sin embargo, reside en otra parte. Los Comilla, los Basagoiti, los Urquijo, los Girona, no tuvieron tiempo o voluntad de ocupar puestos clave en el poder ejecutivo, conformándose con la condición de espectadores de primera fila, frecuentemente desde el escaño senatorial, mientras controlaban a los políticos profesionales, por la vía de los compromisos en sus negocios. Éstos, por su parte, con una mayor tendencia a fundar su ascensión en una profesión liberal, no desdeñaban intereses y concomitancias económicas que no tenían por qué impedir, por su-*

puesto, enfrentamientos entre ellos, sobre todo en cuestión de política económica.

Tusell plantea asimismo la distinción entre dos tipos de políticos: el notable y el político profesional.

El *notable*: hombre representativo de algún sector económico, que ocupa generalmente un puesto de senador, y no se dedica a la política sino de forma muy secundaria. Su posición política, que se basa en su predominio económico, le permite mantener *generosamente* la necesaria clientela.

El *político profesional*: muy a menudo periodista o abogado, que ocupa generalmente un puesto de diputado, y defiende su posición política gracias a una *gestión administrativa llena de favores personales*.

El tipo de político *notable* parece que se encuentra más, según el estudio de Tusell, en Andalucía, entre los sectores empresariales más pujantes, los empresarios de remolacha azucarera, los eléctricos, los de aceite, caña de azúcar, que entre la nobleza histórica de base económica terrateniente.

En todo caso, la distinción entre *notables* y políticos profesionales no significa, por supuesto, intereses distintos ni encontrados. En la mayoría de los casos se aprecia una clara dependencia del *político* respecto del *notable*.

EL CACIQUISMO

El fenómeno caciquil tiene diversas expresiones, y se manifiesta de varias formas y en múltiples ocasiones, aunque quizá la más llamativa sea el fraude y la corrupción electoral. Pero el caciquismo es, sobre todo, la manifestación y expresión lógica de una estructura social y política que se manifiesta de forma permanente y cotidiana en las relaciones interpersonales (patrón-cliente) y en las político-administrativas. En el tiempo de las elecciones, el caciquismo, al interferir en el proceso electoral, se hace más escandaloso, pero su influencia es constante en la vida política del país, pues el cacique es ante todo el *intermediario* entre la Administración central y los ciudadanos.

Una buena forma de aproximación al fenómeno del caciquismo puede ser el repaso, de la mano de Romero Maura, de las diversas interpretaciones o intentos de explicación.

— Para algunos, según una explicación que ha estado muy extendida, el caciquismo sería *el reflejo, a nivel político, del control económico ejercido por las oligarquías terratenientes y financieras*. Una primera aproximación a la estructura social y económica española, predominantemente agraria, parece avalar esa explicación, pero tanto en el campo, pequeños y medianos propietarios y arrendatarios, como en las ciudades, donde cada vez es mayor el peso de los funcionarios profesionales, hay sectores sociales que no podemos considerar dependientes económicamente. Por otra parte, no habría fortunas personales suficientes para controlar un electorado tan amplio.

— Según otros, *el aparato caciquil funciona porque controla los medios de represión*. Lo que explicaría la permanencia del caciquismo son las diversas formas de violencia y coacción administrativa. Se trata de una explicación insuficiente, pues aunque esas coacciones existieron, parece olvidarse que el régimen constitucional, especialmente a partir de los años ochenta, ofrecía cauces suficientes a las libertades de reunión, expresión y asociación: *La arbitrariedad de la burocracia (...) no debe ocultar la suavidad con que funcionaba la red caciquil en numerosísimos momentos y lugares, ni la existencia palmaria de una serie de libertades constitucionales que permitían proponer, protestar y organizarse*.

— Una tercera explicación parte de la constatación de un electorado *anestesiado* o desmovilizado, a consecuencia del nivel de desarrollo económico y de integración social de las diversas regiones geográficas del país. Ciertamente el grado de fragmentación, aislamiento e incomunicación entre sí de regiones y comarcas era muy alto; pervivían en buen medida economías casi completamente cerradas; la elevada tasa de analfabetismo contribuía a consolidar este alejamiento de la población de las pautas *civilizadas* de un sistema parlamentario y centralizado, y el apego, por contra, a comportamientos cívicos preliberales, es decir, caciquiles. Sin embargo, sin negar estos datos, no se puede sobrevalorar la persistencia de formas y mentalidades tradicionales, después de un siglo de bombardeo de ideas y de formas políticas liberales, y de economía capitalista, aparte de la existencia de cauces de socialización popular masiva como el servicio militar o la emigración.

— Finalmente, la explicación *moralista*, que más que explicar constata la corrupción y la inmoralidad como vicios incorregibles, raciales: la vida política local aparece controlada por *intrigantes, sin fe ni principios, sin abnegación, ni disciplina ni organización*; cada cual camina al logro de su propio y personal empeño sin importarle el interés de partido ni el bien público; a todo ello *sobreponen sus pasiones personales*. Son los argumentos presentados por los regeneracionistas de la *España sin pulso*.

Tras repasar estas explicaciones del caciquismo, poco convincentes, Romero Maura propone una explicación política más cercana al fenómeno en sí mismo, centrada en el análisis del conflicto entre la Administración y los partidos, entre las exigencias partidistas y las administrativas. El cacique sería el intermediario en esos conflictos, entre las respectivas exigencias, el que garantiza la satisfacción de ambos intereses.

El cacique local, que normalmente no detenta ningún puesto en la Administración, tiene que influir eficazmente en ésta para satisfacer las demandas de su clientela: *El cacique reparte cosas que pertenecen a la jurisdicción del Estado, de las provincias y del municipio, y los reparte a su gusto. Puestos en esas administraciones, permisos de edificar o abrir comercios o ejercer profesiones, reducciones o exenciones de obligaciones legales de todas clases, amén del hecho de que, si tiene poder para hacer todo eso, lo tiene también para perjudicar con arbitrariedades a sus enemigos, y librar de ellas*

a sus amigos. En algunos casos el cacique con fortuna personal puede hacer concesiones de su propio peculio, pero normalmente lo que hace el cacique es canalizar favores administrativos. El caciquismo, por tanto, se nutre de ilegalidad (...) El cacique, en la medida en que no puede o no quiere usar su posible fortuna personal para allegar dependientes, tiene que asegurarse de que toda una gama de decisiones administrativas y judiciales importantes para la vida o personas de la localidad se toman en función de los criterios antijurídicos que a él convienen.

En resumen —concluye Romero Maura— el cacique, liberal o conservador, tiene en la localidad una influencia que deriva de su control sobre los actos de la administración; ese control se ejerce en el sentido de imponer a la administración actos antijurídicos; la inmunidad del cacique respecto a los gobiernos deriva del hecho de que él es jefe local de su partido, siendo los gobernantes también jefes nacionales de facciones del mismo o de otro partido o facciones necesitadas de la lenidad gubernamental para perdurar como tales partidos o facciones.

Otro aspecto que conviene recordar es que los beneficiarios de este sistema caciquil son muchos y de todas las clases sociales. Entre los beneficiarios individuales o receptores de favores está tanto el que logra una exención del servicio militar como el que consigue una evaluación a la baja de la riqueza imponible. Por otro lado están los beneficios conseguidos para el conjunto de una población (una carretera, el paso del ferrocarril, una institución escolar...), o la gestión de los intereses de un determinado grupo social y económico, a cuyo frente conviene ponerse un cacique para afianzar su posición.

El cacique con fortuna personal juega indudablemente con ventaja, inicialmente: *el terrateniente andaluz o extremeño, el comerciante de granos castellano, el abogado gallego con un buen bufete, notarios, médicos, propietarios de periódicos, banqueros, industriales fuertes, vinicultores, conocen a las gentes locales, y tienen a menudo sobre ellos un ascendiente fundado. Pero no hay que olvidar la existencia de caciques completamente desdinerados, de origen y condición conocidamente plebeyos, que derivan toda su influencia de su posición de jefes locales del partido respectivo, y que son tan poderosos políticamente como el cacique más fuerte.*

El caciquismo, finalmente, es a la vez un fenómeno local y centralista. Revela justamente el grado de integración del nuevo Estado liberal centralista en un país aún muy atomizado. Pero los caciques eran los intermediarios entre esa Administración en proceso de crecimiento y consolidación y las realidades locales.

EL CACIQUISMO COMO PRACTICA ELECTORAL

El caciquismo afecta a la vida cotidiana española de la Restauración de forma permanente, como acabamos de ver, pero se manifiesta de manera especialmente escandalosa en las elecciones. Para entender mejor la incidencia del caciquismo en el proceso electoral recordemos previamente los elementos básicos del sistema electoral tal como quedó configurado por las leyes electorales de 1878, 1890 y 1907, siguiendo el resumen de Martínez Cuadrado.

En 26 *circunscripciones*, radicadas en 24 capitales de provincia y en capitales importantes, se elegía un mínimo de tres y un máximo de ocho diputados, en función de la población respectiva. Estas circunscripciones fueron creadas casi expresamente para que en ellas obtuviesen representación las minorías opositoras...

En 25 *distritos* correspondientes a capitales de provincia no muy pobladas elegían un diputado cada una. Alcanzaban una personalidad política menos acusada que las circunscripciones aunque más intensa que los distritos uninominales.

En 282 *distritos uninominales*, que elegían un sólo diputado. Éstos son los feudos de hecho de los gabinetes ministeriales, que aseguraban las mayorías parlamentarias de cada turno de poder.

Entre 395 y 404 diputados para el Congreso era el resultado final de este sistema electoral, en consonancia con el principio de la representación política inorgánica por sufragio universal directo y secreto, a partir de 1890.

En correspondencia con los tipos de distritos podemos distinguir tres tipos de candidatos:

— Los *distritos disponibles, muertos o mostrencos* son los uninominales. En ellos la voluntad del ministro es la predominante. Los candidatos reciben el nombre de *cuneros* y *trashumantes*, aludiendo a su falta de arraigo y base en el distrito. Son los distritos más utilizados por el ministro de Gobernación para fabricar las mayorías.

— Los *distritos propios*: en ellos los candidatos se llaman *naturales* y diputados *con arraigo*. Aquí predomina la voluntad del cacique, aunque la independencia respecto del poder central no es absoluta. Serían los caciques en el sentido más estricto porque tienen distrito y fuerza propias.

— *Distritos independientes o emancipados*: escapan a la influencia tanto de los caciques locales como del Gobierno central. Los candidatos elegidos responden a las expectativas de un electorado más urbano, moderno. Se corresponden con las circunscripciones donde triunfa la minoría antidinástica. A medida que el caciquismo va decayendo, y van tomando fuerza los partidos de opinión o de masas, va aumentando el número de estos distritos *independientes*.

El *encasillado* es el concepto clave para entender el funcionamiento de la máquina electoral en la época del caciquismo. Consiste en una compleja

serie de negociaciones entre el Gobierno y las diferentes fuerzas políticas, encaminadas a elaborar, previamente a las elecciones, la composición de la Cámara, con la mayoría necesaria y la oposición también conveniente y necesaria.

Varela Ortega en su libro *Los amigos políticos* hace una descripción minuciosa del funcionamiento de la máquina electoral. La máquina óptima es aquella en que el cacique logra la mayor fuerza local con el menor número posible de electores o *amigos políticos*, y con el mínimo nivel posible de arbitrariedad. La tarea de la máquina consiste en organizar adecuadamente la desmovilización política que preserve su poder.

Al analizar un proceso electoral con intervención de caciques, siguiendo la descripción de Varela Ortega, se encuentran todos los tipos de fraude electoral y de corrupción, tal como, por ejemplo, aparecen previstos en la ley electoral de 1907, en los apartados dedicados a los delitos electorales tanto de funcionarios públicos como de particulares.

Si el candidato cuenta con el favor de las autoridades o los resortes gubernamentales, los caciques se encargan de *arreglar las actas*, suplantando a los ausentes con votos de funcionarios y difuntos, o enviándolas en *blanco* para que se rellenen en la capital de provincia.

Si hay un contrincante fuerte, se impone la negociación previa: el caso se discute en Madrid o en el despacho del gobernador civil. Sólo si el acuerdo no se logra o se rompe a última hora, el candidato se acerca personalmente a la provincia a hacer su campaña: reuniones con el comité provincial del partido, con las autoridades.

Si la competencia es dura, habrá que enviar agentes a los pueblos, ofreciendo un puente, una escuela, etc. En último extremo se decreta la suspensión de un alcalde no dócil. A esto se llama *forzar la máquina*.

A veces el candidato estima necesario visitar y recorrer directamente el distrito, haciendo reuniones en los Ayuntamientos, o en los casinos con los caciques del partido.

Cuando las elecciones se acercan, se redoblan los esfuerzos; se solicita un delegado gubernativo que garantice el orden público. Se reúne en la capital con el comité electoral; se convoca a los *muñidores*, *electoreros*, *fabricantes de votos*, que caerán sobre los pueblos dispuestos a *arañar* cuantos votos sea posible; se difunden falsas noticias sobre retirada a última hora de candidatos rivales...

El día de las elecciones se dan facilidades a los electores propios, mientras se ponen dificultades a los electores opuestos. *Escuadrillas volantes* recorren los colegios intentando votar con nombres supuestos; grupos de matones, *las partidas de la porra* intentan el *pucherazo*. Finalmente, si es preciso, se falsifican los certificados de la elección, se roban las actas o se hacen actas dobles.

MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Se trata de analizar aquí, de forma conjunta, a través de una serie de indicadores significativos (demográficos, agrarios, industriales, financieros, comerciales, etc.) el grado de desarrollo o modernización económica alcanzado por España en el último cuarto del siglo XIX.

En 1875, al inicio de la Restauración, pesan los efectos de la política económica del Sexenio, y su intento de abrir la economía al exterior, liberarla de trabas y facilitar la penetración de capital extranjero para la explotación minera. Afrontar la deuda pública, que no ha dejado de crecer durante el Sexenio y con las guerras carlista y de Cuba, es el objetivo prioritario de los primeros Gobiernos de la Restauración.

La pacificación y la estabilidad política facilitan la inversión y la llegada de capitales, no sólo extranjeros, sino también antillanos. Por otra parte, la política comercial de los primeros gobiernos de la Restauración no cambia radicalmente en un sentido proteccionista, como a menudo se ha dicho. El Gobierno desarrollará en esos años una política combinada de acuerdos comerciales bilaterales y cierta protección arancelaria.

En 1900 permanecen signos de estancamiento y retraso, sobre todo si se compara con la situación de otros países europeos, en las tasas demográficas, el grado de urbanización, o la distribución sectorial de la población activa. Pero se anuncian signos de cambio y modernización que, en muchos casos, sólo se consolidarán en las primeras décadas del siglo XX: apuntes del nuevo régimen demográfico, auge bancario, despegue de la industria siderúrgica, ampliación de la red de ferrocarriles y del tráfico ferroviario, realización progresiva, aunque lenta, de los planes de ensanches y reformas urbanísticas, etc.

En el contexto internacional la coyuntura económica es depresiva. La Restauración coincide con la Gran Depresión (desde 1876), aunque en España sus efectos llegan con retraso, como se aprecia bien en el impacto de la crisis agraria en España.

Régimen demográfico antiguo

Según Vicente Pérez Moreda, desde una perspectiva comparativa, España en 1900 (incluso 1930) estaba lejos de presentar los rasgos típicos de un régimen demográfico moderno.

A excepción de Cataluña, en 1900 las tasas de mortalidad y de natalidad siguen siendo muy altas (*en el último cuarto del siglo XIX todavía el 60 por 100 de las provincias españolas mostraban una tasa bruta de natalidad del 36 al 42 por 1.000, y una mortalidad entre el 30 y el 37*), y la esperanza de vida muy baja (entre 1860 y 1887 seguía siendo sólo de veintinueve años, pero al final del siglo se sitúa en los treinta y cinco años).

Tortella nos recuerda también la elevada tasa de mortalidad en 1900, 29 por 1.000; la baja esperanza de vida, 34,8 años, y la tasa *relativamente* moderada de natalidad: *La natalidad española, aparentemente alta en 1900, es baja en relación con la mortalidad, y baja también en relación con las natalidades de los países europeos en los inicios de sus etapas de transición hacia la modernización demográfica*. Esta moderación en la tasa de natalidad tenía que ver con el descenso gradual de la fertilidad matrimonial estudiada por Livi-Bacci.

Sólo a partir de 1900 se advierten cambios en el *ciclo vital anual* o distribución estacional de la natalidad y la mortalidad a lo largo del año. *El máximo estacional de las defunciones, situado hasta 1863 entre los meses de julio y octubre, se ha desplazado ya en 1900 a los meses invernales*; por su parte, los nacimientos y las concepciones siguen predominando en invierno y primavera, respectivamente.

Que este ciclo estacional de la natalidad —dice Pérez Moreda— se mantuviera sin apreciables cambios en España todavía en 1900 puede ser un reflejo del gran peso que el sector agrario y la población rural mantenían en nuestro país aún a comienzos de nuestro siglo.

Si nos fijamos en el *modelo matrimonial* español se observa una fuerte disminución del celibato y un progresivo aumento de la edad media de primeras nupcias. Lo primero tiene que ver más con transformaciones sociales y mentales que con el desarrollo económico. Lo segundo, en cambio, sí pudo estar relacionado con las transformaciones en la propiedad de la tierra.

En la segunda mitad del siglo XIX se observa un *notable incremento de población urbana*. En 1900 la población residente en municipios de más de 10.000 habitantes suponía ya un 32 por 100, y la que vivía en municipios de 2.000 a 10.000, otro 40 por 100. Pero algunas de las zonas urbanizadas eran las próximas a explotaciones mineras (Vascongadas, Murcia, Asturias, Huelva y Jaén). Por lo que el proceso de urbanización anterior a 1900 tiene que ver más con estos núcleos aislados de explotación minera que con un proceso propiamente dicho de industrialización.

Otro signo clave cual es la *distribución sectorial de la población ocupada* confirma el escaso grado de modernización de la economía española a finales de siglo. El porcentaje de población ocupada en el sector primario permanece a todo lo largo del siglo XIX en torno al 64 por 100. El porcentaje dedicado al sector secundario, a pesar del auge industrial y minero de fin de siglo, permanece en torno al 18-20 por 100. El porcentaje del sector terciario parece descender suavemente en las últimas décadas del siglo.

Pérez Moreda, refiriéndose al período 1830-1930, concluye que la población española no conoce una verdadera transformación hasta el primer tercio del siglo XX. Sólo a partir de 1900 se aprecia una modificación parcial del ciclo estacional de la mortalidad, aunque todavía no en la natalidad. La tasa de urbanización aumenta en las primeras décadas del siglo XX, aunque ya en el segundo y último tercio del siglo XIX se había producido un proceso

de concentración en algunas capitales de provincia. El peso relativo de la población agraria sólo desciende significativamente a partir de 1910, al tiempo que se inicia un despegue de la mano de obra ocupada en la industria, acompañado en la tercera década por el dedicado a actividades *terciarias*.

El grado de urbanización: los ensanches

Jover en su síntesis histórica de la Restauración, ya citada, ha subrayado acertadamente el protagonismo de la *ciudad* y lo urbano, en la España de los años ochenta, por más que el peso de la actividad agraria y de lo rural siga siendo dominante aún en la España finisecular. Los censos demográficos de 1877, 1887 y 1900 dejan constancia de un indudable crecimiento urbano, aunque con ritmo distinto; crecimiento espectacular de Bilbao, Barcelona y Mallorca; notable, de Madrid y Cartagena; discreto, de las grandes ciudades rurales del Norte.

La ciudad es sobre todo el reflejo de unas transformaciones sociales. En los proyectos de ensanches, pero sobre todo en sus realizaciones, van a quedar marcadas horizontalmente la nueva división de clases sociales: el ensanche, principalmente ocupado por la burguesía y clases medias, las nuevas zonas residenciales para la aristocracia, y los barrios obreros marginales. La vivienda familiar constituye también una buena forma de aproximación a las clases sociales y a los cambios que se operan en este momento; vivienda aristocrática, vivienda de la clase media, vivienda popular, *tugurio*.

Un proyecto de reforma de la Administración local, de carácter descentralizador, preparado por el ministro Silvela en 1891, se planteaba el grado de urbanización en España a partir del censo de 1887. Este estudio establecía tres categorías de municipios: los *rurales*, con una población inferior a 3.000 habitantes (según el censo eran 7.992 los municipios de estas características, con un total de 6.893.742 habitantes). Los municipios *urbanos*, con más de 12.000 habitantes, eran 150, con un total de 4.507.671 habitantes. En medio, un total de 1.145 municipios (una población total de 6.143.747 habitantes), con poblaciones que oscilan entre 3.000 y 12.000 habitantes, marcaba la frontera, no siempre fácil de delimitar, entre la población urbana y la rural.

Entre los 150 municipios considerados urbanos, con más de 12.000 habitantes, sólo unos pocos pasaban de 100.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Otro pequeño grupo superaba los 50.000 habitantes: Murcia, Zaragoza, Cartagena, Granada, Cádiz, Valladolid, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Lorca, Córdoba, Bilbao. Como se ve, algunas ciudades tenían más población que muchas capitales de provincia. Varias de éstas tenían menos de 20.000 habitantes: Pontevedra, Lugo, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Logroño, Gerona, Zamora, Palencia, Cáceres, Ciudad Real, Segovia, Orense, León, Huesca.

Tortella señala los límites del grado de urbanización en España a la altura de 1900:

En 1900 la mayoría de la población española continuaba siendo rural, tanto ocupacional como demográficamente. El 51 por 100 vivía en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, y el 91 por 100, en poblaciones por debajo de los 100.000. Sólo el 9 por 100 de la población podía realmente considerarse habitante de una ciudad. Excepto Madrid, casi todas las ciudades de una cierta importancia estaban en la periferia: Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga, Vigo, La Coruña, Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao.

Al margen del número de habitantes, señala Jover, el carácter urbano de algunas pequeñas capitales viene marcado por la existencia de círculos específicos de reunión, formación y expresión de la burguesía: Institutos de Educación Media, Facultades universitarias, Ateneo, prensa local, centros de instrucción y educación popular. Por supuesto, el auge urbano se encuentra íntimamente ligado a transformaciones económicas básicas: una estación de ferrocarril, un puerto, una explotación minera son generadoras de tráfico e intercambio creciente de mercancías y personas.

Los ensanches urbanos, planificados en los años sesenta y comenzados a realizar en el último cuarto del siglo XIX, son síntomas significativos de un auge urbanizador en cuyo marco surgen los elementos de una nueva cultura. Desde luego no se trata de un proceso universal ni homogéneo. Algunas ciudades, como Burgos, crecen por una fuerte inmigración de su entorno rural sin el acompañamiento de cambios económicos capaces de ocupar a la nueva población. (En 1897 el 53 por 100 de los 30.000 habitantes de Burgos no han nacido en la ciudad.) El peso del campo en las ciudades españolas en crecimiento les da un carácter especial: incluso convertidas en ciudades modernas, quedan tributarias del campo. Los novelistas de la época (Baroja, en Madrid) dejan constancia de la presencia de tipos y actividades agrarias en la ciudad.

Entre las ciudades en crecimiento Bilbao es quizá la más representativa del cambio, pasando de 32.724 a 83.000 habitantes en el último cuarto de siglo. Este crecimiento provoca el rechazo y la condena de escritores como Unamuno, recriminado por uno de los mejores representantes de la burguesía vasca, Pablo de Alzola. Una red de ferrocarriles propios, *ferrocarriles vascongados*, ligan la ciudad con la región y con el puerto. Dos líneas de tranvías que entre 1876 y 1882 cubrían las dos orillas del Nervión, son electrificadas ya en 1896.

Los *ensanches*, proyectados en general en los años sesenta, empiezan a realizarse con gran lentitud durante la Restauración. En 1861 Posada Herrera había presentado el primer *Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones*. El marco legal inicial (leyes de ensanches de 1864 y 1876), fundamentalmente respetuoso con la propiedad privada, dificultaba las expropiaciones, facilitaba la especulación y el encarecimiento excesivo de las reformas urbanísticas, retrasando la

ejecución de los proyectos. Pero es la *ley de Expropiación Forzosa* de 10 de enero de 1879 la que impulsará la realización de los planes de ensanche *al dotar a los Ayuntamientos de los instrumentos jurídicos necesarios para poder llevar a cabo las obras de reforma*.

Sin embargo, los casos de Madrid y Barcelona serían objeto de una ley especial de 26 de julio de 1892 que trataba de facilitar el proceso expropiador, al exigir a los propietarios la cesión gratuita de la mitad de los terrenos a urbanizar. Estas dos ciudades son buenos ejemplos del desfase entre los proyectos de ensanches (el de Cerdá y el de Castro) y sus realizaciones que se prolongan a lo largo de las primeras décadas del siglo xx.

La construcción de la Gran Vía de Colón en Granada, proyectada en 1890, puede ser un ejemplo significativo de procesos análogos en otras ciudades españolas. La Gran Vía granadina, según el estudio de Manuel Martín Rodríguez, es un buen ejemplo de cómo las nuevas necesidades económicas (la producción de azúcar de remolacha y su comercialización) y el interés de una burguesía ligada a esos negocios (Juan López Rubio, la Cámara de Comercio e Industria) pueden impulsar una reforma urbanística que trata de enlazar de forma rápida y eficaz el centro comercial con la nueva estación de ferrocarril, atravesando y destruyendo una parte importante del centro histórico.

Los problemas urbanísticos e higiénicos de la ciudad, tan dramáticamente puestos de manifiesto por el cólera de 1885 (que sólo en Granada se cobró 5.000 víctimas) urgió la necesidad de esas reformas.

En 1890 la Cámara de Comercio e Industria, copada por los nuevos empresarios del azúcar (con Juan López Rubio a la cabeza), impulsó una serie de proyectos modernizadores: instalación de la energía eléctrica, solicitud de una fábrica de tabacos, creación de la Caja general de Ahorros y Monte de Piedad. En este contexto, en ese mismo año se planteaba el proyecto de construcción de la Gran Vía. La argumentación esgrimida en la defensa del proyecto era bien representativa de la conjunción de objetivos que normalmente se proponían los ensanches. La apertura de la nueva vía pública la reclamaban conjuntamente *las necesidades del comercio, del ornato y de la higiene (...) procurando a la vez el empleo a millares de obreros...*

Hasta abril de 1894 el proyecto no fue aprobado, y su realización, como el de la mayoría de los ensanches, sería un proceso mucho más lento de lo que sus promotores habían proyectado, a pesar del consenso y apoyo general de la población a una reforma, que, aunque costosa, era contemplada como necesaria y urgente.

El ejemplo de Granada confirma la estrecha correlación entre la marcha del negocio azucarero y el progreso de las reformas urbanísticas: *los hombres del azúcar, además de ser los inspiradores de la idea, se ocuparon después de las obras de urbanización y de la venta de solares, a través de La Reformadora Granadina, de cuyo Consejo de Administración formaron parte los más destacados de ellos*.

Con los planes de ensanche se trataba de facilitar el crecimiento urbano más que de ordenar la ciudad. No es extraño, pues, que el marco legal resultara muy insuficiente para responder a los múltiples problemas urbanísticos que el crecimiento urbano y la ejecución de los propios ensanches generaban. Antes de concluirse, los ensanches ya manifiestan su insuficiencia, su falta de respuesta a los nuevos problemas: los centros históricos viejos se deterioran y aíslan, a la vez que surgen incontroladamente nuevas concentraciones obreras al margen de los ensanches. Se acelera la división horizontal de la ciudad, a pesar de la resistencia de los nostálgicos de la convivencia *armónica* interclasista en la vivienda vertical.

El desarrollo urbanístico trataba, entre otros objetivos, de responder a la aparición de nuevos problemas sociales, de los que dan cuenta con detalle los estudios, entonces de moda, de los médicos higienistas. El IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid en 1898, contribuye a aumentar la conciencia de los nuevos problemas de la gran ciudad. Pero sólo en 1895 una *ley de saneamiento y mejora de poblaciones* se hacía eco de esta situación: infraestructura sanitaria, colectores, abastecimiento de agua, viviendas.

Progresivamente se van introduciendo cambios y mejoras urbanísticas: el alumbrado eléctrico, aunque limitadamente, pues todavía era mayoritario el gas; la electrificación de los tranvías, en cambio, se produce con más rapidez: la desaparición del cochero precede a la del farolero. Algunos medios de transporte nuevos, como la bicicleta, están aún lejos de popularizarse. Son artículos de lujo y recreo de las clases acomodadas. Eso sí, el ferrocarril y la estación son signo de los nuevos tiempos; lugares privilegiados para la utilización de nuevos materiales y el ensayo de nuevos estilos.

La nueva arquitectura urbana también refleja los cambios políticos. Cuida especialmente la construcción de los edificios públicos con estilos históricos que ayudan a legitimar mejor las nuevas instituciones.

Barcelona y Cataluña son el lugar de manifestación de la nueva estética vinculada a las transformaciones urbanísticas, el *modernismo*. La aparición de algunas muestras, más bien excepcionales, en otros lugares de la Península, son síntomas inequívocos de la difusión de una nueva cultura urbana y burguesa. La nueva estética se expresa además en las artes gráficas y en otras artes *menores*.

El ferrocarril como factor dinamizador

Como es sabido, el impacto del ferrocarril en el proceso industrializador europeo fue múltiple y decisivo. La historiografía ha discutido el alcance y el tipo de ese impacto. En efecto, uno de los temas favoritos de la nueva historia económica americana fue precisamente el análisis contrafactual del

proceso industrializador en el hipotético caso de la ausencia de ese elemento dinamizador.

En España, Antonio Gómez Mendoza, en la perspectiva de esa nueva historia económica, ha replanteado el tema del impacto del ferrocarril en el proceso industrializador español, revisando algunos tópicos de la historiografía, como el de responsabilizar al modelo de construcción del ferrocarril en España, fuertemente dependiente del capital y de la producción industrial extranjera, del atraso de la industrialización nacional. Según el estudio de Gómez Mendoza, la siderurgia española de mediados del siglo XIX habría sido incapaz de atender adecuadamente la demanda de material ferroviario. De otra parte, el *ahorro social* generado por la implantación del ferrocarril (reducción de costes, efectos de la integración del mercado, etc.) compensó con creces las diversas formas de subvención estatal otorgadas a las compañías concesionarias por las leyes de 1855 y 1877 para favorecer la rápida construcción de la red. Pondera positivamente los efectos dinamizadores de la inversión extranjera en el conjunto de la economía española del momento, especialmente si se tiene en cuenta el importante factor retardatario que significaba la situación del transporte en la Península en la primera mitad del siglo XIX.

El primer gran impulso constructor de la red de ferrocarriles corresponde a los años sesenta, en el marco de la ley de Bases de 3 de junio de 1855. Durante la Restauración se mantuvo el impulso constructor a buen ritmo en el marco de una ley General de Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877, que venía a confirmar la legislación anterior, y tranquilizar los intereses de las anteriores inversiones, fuertemente afectados en algunos casos por los efectos de la guerra carlista. En 1876 la red ascendía a 6.000 kilómetros, la mitad de la red de ancho normal existente en 1935. Entre 1876 y 1895, según datos presentados por Gómez Mendoza, a una media anual de más de 200 kilómetros la red llegó casi a duplicarse. El objetivo de la ley de 1877, dentro de la continuidad fundamental, era paliar los desequilibrios espaciales, impulsando el tendido de líneas transversales y periféricas. En los años de la Restauración las líneas se completan, cubriendo los tramos de más difícil construcción (puertos de montaña como el de Pajares), construyendo ramales hacia el Oeste (Salamanca, Extremadura, Galicia) y acometiendo la construcción de ferrocarriles de vía estrecha al servicio de la comunicación comarcal de viajeros y mercancías específicas, como combustibles y minerales. En estos años se construye el ferrocarril costero Bilbao-San Sebastián, la línea Madrid-Cáceres-Portugal y la línea Huelva-Sevilla.

Durante la Restauración se afianza la tendencia a la concentración empresarial hasta completar el oligopolio de dos grandes empresas: la Compañía del Norte y la MZA. En 1896 estas dos compañías firmaban convenios sobre reparto de tráfico. Entre 1880 y 1900 las cinco grandes empresas del sistema ferroviario, y dentro de este conjunto, destacadamente, el Norte y MZA, pasaron de controlar el 66 al 86 por 100 de la red.

La inversión del capital extranjero, especialmente francés, en la construcción de la red se mantuvo superior al capital nacional, pero la participación de éste no fue tan pequeña como se habría creído: en relación con el capital total invertido en 1890 (3.750 millones) la aportación extranjera se ha estimado que oscilaba entre un 60 y un 55 por 100, mientras que la aportación española entre 1855 y 1890 se calcula en 1.645 millones (una media de 47 millones anuales).

Pero lo que nos importa sobre todo es valorar el impacto del ferrocarril en el conjunto de la economía española en un doble sentido: como consumidor, cliente e impulsor de la industria metalúrgica, la hullera, la maderera y la específica de material ferroviario; y, en otro sentido, como productor de una nueva oferta de transporte de mercancías y personas que rápidamente se revelará sin competencia y dinamizará el tráfico y el intercambio.

El ferrocarril como cliente-impulsor de otras industrias

En relación con el grado de desarrollo de la *metalurgia-siderurgia* nacional, uno de los tópicos historiográficos más difundidos alude a que las condiciones de las leyes concesionarias al favorecer la importación de material ferroviario extranjero habrían retrasado el desarrollo de la industria nacional. Pero lo cierto es que cuando se inicia la construcción, la metalurgia nacional estaba lejos de responder a la demanda: hasta 1882 no se crearon las primeras fábricas dotadas de la tecnología adelantada de Europa para la fabricación de acero barato. El impulso de la industria siderúrgica del Norte, a partir de los ochenta, tuvo más que ver con la política naval de la Restauración (ley de Escuadra de 1888) que con el ferrocarril.

Hasta 1890 el consumo y la importación de materias relacionadas con el ferrocarril eran prácticamente coincidentes, pero a partir de esta fecha se aprecia un giro importante en los encargos de material ferroviario: desaparecen de los listados los nombres extranjeros, concertándose todos los encargos con fábricas vascas, aprovechando la doble protección del arancel y de la depreciación de la peseta.

Si la producción siderúrgica española antes de 1890 era insuficiente además de cara, la industria de material ferroviario era sencillamente inexistente antes de 1882. En esta fecha se fabrica el primer vagón, y en 1884 la primera locomotora. El nacimiento de la industria coincide con el auge de la industria pesada en general a partir de los años ochenta, con la modernización de los altos hornos vascos, la ampliación de los astilleros y arsenales, y el impulso que significan las demandas del sector público. Pero sólo desde comienzos de siglo las compañías hacen sus pedidos a la *Maquinista Terrestre y Marítima* de Barcelona, cuando el impacto del arancel y la devaluación de la peseta hacen claramente competitiva la producción catalana. Según los datos aportados por Gómez Mendoza, entre 1884 y 1893 se fabrica-

ron en España ocho locomotoras y 913 vagones; en la década siguiente, 36 locomotoras y 2.696 vagones.

La *industria hulla nacional* se va a beneficiar de la creciente demanda ferroviaria. Si inicialmente tiene que acudir al mercado extranjero, el británico especialmente, es por la insuficiencia y deficiencia del carbón español (en 1881 aún se ha llegado al millón de toneladas de producción anual). Son las propias compañías las que promueven algunas explotaciones carboníferas para su autoabastecimiento. Lo cierto es que entre 1875 y 1884 el ferrocarril absorbió hasta un tercio de la producción española de hulla.

Este papel impulsor lo juega también el ferrocarril en relación con la *industria maderera*. Como señala Gómez Mendoza, el tendido de las líneas de ferrocarril afectó poco a la industria española de alto nivel añadido (producción siderúrgica y de material ferroviario); en cambio, *la demanda de la construcción se concentró en sectores de escaso valor añadido, como la industria maderera, la minería de hulla, y también la demanda de mano de obra no cualificada*. Mano de obra *de pico y pala*, pues el personal cualificado, ingenieros y administradores, llegaron de Bélgica, Francia e Inglaterra.

El impacto de la construcción del ferrocarril sobre el mercado de trabajo tuvo un carácter altamente coyuntural y estacional. Se contrataban generalmente *in situ* importantes contingentes de *labradores en paro forzoso* (en 1863 se contrataron en total 66.000 obreros). La plantilla fija, en cambio, no fue relativamente numerosa hasta después de la Primera Guerra, aunque, a comienzos de siglo, la Compañía del Norte, con 18.280 empleados fijos, era, desde luego, la empresa con más asalariados. La Asociación de Empleados del Ferrocarril, con 17.000 socios, era también, en la estadística del Instituto de Reformas Sociales de 1904, la mayor asociación obrera. De todos modos es después de la Gran Guerra, y de la implantación de la jornada de ocho horas, cuando creció la plantilla fija de empleados de las grandes compañías.

Los clientes del ferrocarril

Pronto se vio que ningún medio de transporte antiguo podía competir con el ferrocarril ni en el transporte de mercancías ni en el de viajeros. Entre todas las consecuencias económicas, quizá la más importante fue el definitivo impulso a la integración del mercado nacional, una de cuyas manifestaciones fue la desaparición de las diferencias regionales de precios agrícolas.

El análisis del tráfico ferroviario es un excelente indicador del grado y del tipo de desarrollo, de las desigualdades regionales, de la dirección de los intercambios. Para el período que aquí nos interesa, el último cuarto del siglo XIX, merecen ser destacados algunos hechos que confirman otros análisis sobre la evolución de la economía española en las décadas finales del siglo:

— El claro predominio, hasta 1900, de las mercancías del sector agra-

rio, lo que confirma otros datos sobre el peso de dicho sector en el conjunto de la economía española.

— El auge del tráfico de materiales de construcción es un signo claro del crecimiento en el proceso urbanizador que Jover ha destacado como elemento especialmente característico de las últimas décadas del siglo.

— El auge, en los ochenta, y la caída espectacular, en los noventa, de la producción de vino queda perfectamente reflejado también en el tráfico ferroviario. El ferrocarril fue decisivo en la gran expansión de la producción vinícola de los años ochenta: *las estadísticas ferroviarias muestran que el ferrocarril actuó de potente revulsivo del mercado vinícola español al acercarlo a los mercados franceses* (en 1881 dos millones de hectolitros pasaron a través de la frontera de Irún).

— El tráfico ferroviario corrobora igualmente el impacto de la crisis triguera sobre la fabricación de harina: después de 1890 decae la exportación de la harina castellana a través del puerto de Santander, a la vez que nace la industria harinera catalana.

— También la evolución del tráfico ferroviario da cuenta de la coyuntura. El descenso general del tráfico entre 1883 y 1895 es un signo más de la crisis finisecular.

El despegue de la siderurgia vasca

Uno de los fenómenos más característicos del crecimiento de la economía española en la España de la Restauración es el despegue de la industria siderúrgica vasca, estrechamente ligado a un importante auge previo de la producción de hierro.

El desarrollo de la industria siderúrgica en España se vio condicionado por una serie de factores naturales y tecnológicos que explican el fracaso de algunos intentos anteriores y el triunfo de la siderurgia vasca en el último cuarto del siglo XIX. La *metalurgia malagueña*, en la primera mitad del siglo XIX, al carecer de carbón mineral próximo, dependía exclusivamente del carbón vegetal. La *siderurgia asturiana* se ubicó, de acuerdo con la lógica de este tipo de explotaciones, al lado del combustible, el carbón mineral. Pero desde el principio tropezó con importantes problemas: *las tarifas muy altas del ferrocarril, los fletes igualmente altos, las dificultades del puerto de Gijón y el hecho de que el demandante principal de productos siderúrgicos, el ferrocarril, se proveía en el extranjero*, según resume Rafael Anes. A partir de 1880 la metalurgia asturiana de La Felguera perdió la hegemonía y comenzó a ser desplazada por la vasca. La hegemonía asturiana de la producción de hierro había durado de 1860 a 1880. La industrialización asturiana a partir de ese momento quedó restringida a la explotación de carbón, pero éste, desde el principio, se reveló escaso y de baja calidad, y, en definitiva, competitivamente caro. En torno a 1890 los empresarios asturianos se

organizarán en ligas proteccionistas (La Liga de los Intereses Hulleros de Asturias) para defender con aranceles el carbón asturiano de la competencia del carbón inglés. Las grandes empresas hulleras se crean en estos años: la Sociedad Unión Hullera y Metalúrgica de Asturias (1886), la Sociedad Hullera del Turón (1890), con participación de capital vasco, y la Sociedad Hullera Española (1892), a partir de las minas del marqués de Comillas, en la cuenca del Aller.

En la última década del siglo, según González Portilla, parece llegarse a una cierta complementariedad entre el núcleo asturiano y el vasco: *Mientras la siderurgia vasca se especializaba en la producción de unos pocos artículos que consumían poco carbón y gran cantidad de arrabio, como lingotes de hierro, carril, vigas, barras, llantón y palanquilla, las fábricas asturianas, que disponían de abundante y barato carbón, tuvieron que orientar su producción hacia la fabricación de laminados y productos siderúrgicos elaborados, cuyo nivel de consumo de carbón por unidad... era muy superior al consumido por los artículos semielaborados que producían las grandes siderurgias vizcaínas.*

La siderurgia vizcaína, finalmente triunfante, a partir de los años ochenta, despegue por la conjunción de una serie de factores favorables.

En primer lugar hay que considerar un cambio tecnológico, el convertidor Bessemer, que posibilitaba la producción de acero, pero que exigía como materia prima un mineral de hierro sin fósforo. Es este factor tecnológico el que impulsa extraordinariamente la explotación del mineral de hierro en Vizcaya a partir de los años setenta y tras la interrupción obligada de la guerra carlista. A partir de 1871 se fundan en Vizcaya más de 20 compañías británicas. La producción de hierro crece inmediatamente de forma espectacular: de 1,2 millones de toneladas media en el quinquenio 1875-79, a 4 millones en la década de los ochenta, y a 5,4 millones en el quinquenio 1890-94.

Entre el 80 y el 90 por 100 del mineral producido se exporta, principalmente a Inglaterra. En ese momento España es el mayor exportador de mineral de hierro a Europa. (El vino y el mineral de hierro significaban un 64 por 100 del valor total de la exportación española en los años 1880-1884, según cálculos de Tortella.)

El enorme auge de la explotación minera en Vizcaya es el paso previo al despegue de la industria siderúrgica. Por un lado permite la acumulación de capital necesario para la fundación de las empresas, pues el capital inglés, con ser mayoritario, no fue el único inversor y beneficiario en las explotaciones mineras.

Por otro lado, la exportación del mineral de hierro a Inglaterra permitía la importación relativamente barata, aprovechando el retorno de los fletes, del combustible de carbón necesario para el funcionamiento de las explotaciones siderúrgicas. Resultaba más barato, y sobre todo más productivo, utilizar el carbón inglés de mejor calidad que transportar a Vizcaya el carbón asturiano. La difícil complementariedad entre estos dos potenciales focos de

actividad industrial es un factor de rémora para la industrialización asturiana y del proceso de integración del mercado nacional.

Las empresas siderúrgicas vascas siguieron un proceso relativamente rápido de crecimiento y concentración. En 1879 se constituye la fábrica *San Francisco del Desierto*, propiedad de don Francisco de las Rivas (marqués de Mudela), que se convierte en la máxima productora de hierro colado en los primeros años ochenta. En 1882 se crean *Altos Hornos de Bilbao* y *La Vizcaya*, cuya producción acaba desbancando a la siderurgia asturiana. En 1888 se crea *La Iberia*, que se especializa en la producción de hojalata. Estas tres empresas, fruto a su vez de la fusión de empresas más pequeñas, inician un proceso de cartelización, acuerdos de comercialización, que culmina en 1902 con la fusión en *Altos Hornos de Vizcaya*. Paralelamente, en las décadas de los ochenta y los noventa surgieron numerosas pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la industria derivada del hierro, fundición y construcciones metálicas y de maquinaria. Así pues, hacia 1900, unas cien fábricas y talleres integraban el moderno sector siderometalúrgico vizcaíno.

La presión proteccionista de los metalúrgicos

Como se ha señalado al hablar de la construcción del ferrocarril, hoy se revisa la tesis de atribuir el retraso de la industria siderúrgica española, asturiana y vizcaína, a las concesiones que habían obtenido las compañías ferroviarias para importar material y maquinaria del extranjero. Frente a esta tesis se argumenta que en el momento inicial de la construcción ferroviaria, la industria española no tenía capacidad de responder a la enorme demanda, con lo que la construcción y explotación de la red ferroviaria se habría retrasado considerablemente, con el impacto correspondiente en todo el proceso económico.

Por otra parte, la demanda o la presión proteccionista de los metalúrgicos vascos es posterior al arancel de 1891, según el reciente libro de Arana sobre la Liga Vizcaína de Productores. Dicho arancel no les perjudicaba, pero no respondía a sus necesidades, sino a las de los catalanes, castellanos y asturianos. Pablo de Alzola, participante en la comisión que preparó el arancel, no lo hizo como portavoz o representante de los intereses metalúrgicos. Para la siderurgia vasca la política proteccionista significaba la abolición de los privilegios y franquicias de importación de que gozaban las compañías de ferrocarriles, principales consumidores de productos metalúrgicos. En esa línea dirigirán sus demandas, a partir de 1894, cuando la crisis de exportación de sus productos haga necesaria la sustitución del mercado exterior por otros consumidores nacionales.

Hasta los años noventa los metalúrgicos vascos habían sido partidarios del librecambismo. Sobre esa base habían modernizado su sistema de producción. Además, como se ha señalado, el crecimiento del sector metalúrgi-

co se hizo en los años ochenta sobre la base de un fecundo intercambio de hierro vasco y carbón inglés. Finalmente, una buena parte de la producción de lingotes se dirigía en los años ochenta a Italia, Francia, Holanda y Bélgica. Hasta ese momento el mercado internacional satisfacía plenamente la producción vizcaína. A partir de 1890 esta corriente exportadora disminuyó bruscamente por cambios técnicos en el sistema de producción (la puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos de fusión, Thomas y Siemens-Martin, ya no hacían imprescindible el hierro no fosfórico que tan afanosamente se había importado de las minas vizcaínas) y por el impacto de la crisis económica general. La pérdida de ese mercado es lo que impulsa a los empresarios vascos a organizarse como grupo de presión, ya en la última década del siglo XIX, para demandar la reserva del mercado nacional y en contra de las importaciones de material ferroviario.

Tras el relativo fracaso de la presión sobre el arancel de 1891, fueron las negociaciones de acuerdos comerciales en 1893 las que movilizaron a los metalúrgicos vascos. En ese momento, catalanes y vascos sí coincidieron en una misma protesta proteccionista frente a la política comercial del Gobierno. Por otra parte, la protesta proteccionista de los empresarios vascos encontró una buena oportunidad (y resonancia) en el contexto de la protesta foral, prenacionalista, que tuvo lugar en ese año en San Sebastián, frente a la pretendida modificación por parte del Gobierno del concierto económico, vigente desde 1879.

La presión proteccionista se intensificó en los años siguientes, bajo la dirección de la Liga Vizcaína de Productores, fundada en 1894. La abolición de las franquicias para la importación de material ferroviario, conseguida finalmente en septiembre de 1896, se ha considerado fruto de esa presión, pero hay que matizar, de acuerdo con el libro de Arana, que la nueva tarifa arancelaria no constituyó en realidad una barrera a la importación.

El comercio exterior

La evolución del comercio exterior durante los años de la Restauración es, según los estudios recientes de Leandro Prados de la Escosura, uno de los mejores indicadores del grado de modernización de la economía española, así como de la evolución de la coyuntura en esos años.

Hasta 1890 se observa una fuerte tasa de crecimiento global del comercio español, exportaciones más importaciones, que coincide y contribuye como un factor positivo al crecimiento de la economía española. Esta tendencia que se inicia en 1869, coincidiendo con la liberalización del comercio decretada por los progresistas, se ajustaba, por otra parte, a una tendencia general europea. El impacto de las fluctuaciones y ciclos de la coyuntura económica internacional revelan también el grado de integración de la economía española en el conjunto europeo.

Después de 1890 se aprecia un descenso significativo de las exportaciones (especialmente del vino) y de las importaciones, por efecto del arancel proteccionista y por la devaluación de la peseta. Esta tendencia desaceleradora del comercio exterior, que se prolongará hasta la primera Guerra Mundial, se acompaña de un proceso de diversificación de los productos comercializados y de los destinos.

En el período de auge exportador señalado, hasta 1890, el peso de las exportaciones corresponde de forma muy mayoritaria a los minerales (especialmente el hierro) y el vino. El destino de estos productos se concentra también mayoritariamente en Gran Bretaña, Francia y Cuba. En cuanto a las importaciones, en el mismo período, *los bienes de consumo y alimentos comienzan a ser desplazados paulatinamente por materias primas industriales y bienes de capital: carbón, madera, algodón en rama, maquinaria, manufacturas de hierro y acero...* Signo indudable, una vez más, de modernización. Se observa una notable correspondencia entre los destinos de los productos españoles exportados y la procedencia de los importados: Gran Bretaña, Francia y Cuba. Hacia el final del siglo, otros países, como Alemania y Estados Unidos, irán cobrando importancia.

Para Leandro Prados, en suma, hay una estrecha relación entre la expansión del comercio exterior en el período 1860 y 1890 y el crecimiento económico general.

Las inversiones de capital extranjero

Esta valoración positiva del auge del comercio exterior como signo y factor de modernización de la economía española de la segunda mitad del siglo XIX ha supuesto la revisión, por parte de la nueva historiografía económica, de algunos tópicos sobre los efectos expoliadores de la penetración del capital extranjero, en la construcción ferroviaria, la explotación de minas de hierro, cobre, plomo, o la financiación de la deuda pública. Tortella expresaba de manera rotunda, en su síntesis de la *Historia de España*, dirigida por Tuñón (vol. VIII), los efectos dinamizadores de la penetración del capital extranjero, a la vez que cuestionaba los supuestos efectos positivos del proteccionismo. Para este autor, por ejemplo, la estrecha correspondencia que se observa entre el déficit de la balanza comercial y el volumen de la importación de capital confirma el papel imprescindible que juegan esas importaciones de capital en el proceso modernizador.

La misma valoración merece para este autor la llamada *desamortización del subsuelo*, es decir, la puesta en explotación de minas de hierro, cobre, plomo, por parte de compañías extranjeras. Estas explotaciones, que respondían a necesidades concretas del mercado internacional, no habiéndose podido establecer por iniciativa española, en algunos casos habrían significado la pérdida de una oportunidad. Por otro lado, en las explotaciones tam-

bién participó en alguna medida, especialmente en el caso del hierro vizcaíno, capital español. Y, sobre todo, las explotaciones significaron la construcción de algunas infraestructuras básicas: ferrocarriles para el transporte del mineral, acondicionamientos de los puertos, empleos, etc.

Hasta el fin de siglo la banca privada no comenzó a recuperarse de la fuerte crisis sufrida en vísperas del 68. Un signo del atraso relativo del sector financiero español en estos años de la Restauración lo constituye *la abrumadora importancia relativa que conservaba el Banco de España*. Sus cuentas corrientes suponían el 70 por 100 del total bancario. El privilegio del monopolio de emisión de moneda concedido por el Estado al Banco de España en 1874, a cambio de préstamos urgentes, contribuyó a consolidar su situación hegemónica.

La decadencia de la Banca catalana es especialmente representativa del desmantelamiento de la banca privada. Las delegaciones provinciales del Banco de España absorbían los bancos provinciales en crisis. Sólo en la última década, y especialmente a partir del 98, resurge la banca privada estrechamente ligada a la actividad empresarial e industrial. El Hispano Americano, el Banesto, el Vizcaya cobran auge en ese fin de siglo.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RESTAURACIÓN

La historiografía reciente nos ha dado a conocer con detalle la vida política durante la Restauración, es decir, el funcionamiento general y local del sistema oligárquico-caciquil. Al hacerlo, especialmente en los estudios locales, nos ha mostrado en parte la estructura de la sociedad. Desde la historia económica también tenemos la posibilidad de aproximarnos mejor a las clases sociales, las viejas, las nuevas, las decadentes y las prósperas. Sin embargo, raramente el historiador se ha planteado directamente el estudio de la estructura social, o de las clases y grupos sociales en el último cuarto del siglo XIX.

Los censos de 1887 y 1900 nos permiten una primera aproximación general no exenta de importantes límites. Sobre esta base ya Tuñón o Martínez Cuadrado nos ofrecieron un panorama de conjunto. Además de los censos, otras fuentes, como las Estadísticas de Asociaciones o la Información Oral y Escrita de la CRS, nos permiten una cierta aproximación a las clases sociales populares (artesanos, obreros, campesinos propietarios, arrendatarios, jornaleros).

Algunas monografías recientes, utilizando otras fuentes, como los archivos de protocolo, los registros mercantiles, las estadísticas de contribución industrial, permiten un conocimiento más exacto de ciertos procesos de enriquecimiento personal o familiar que pueden ser considerados prototípicos de una clase social. Es el caso, por ejemplo, del marqués de Mudela estudiado

por Bahamonde y Otero, o el del marqués de Villamejor estudiado por Guillermo Gortázar.

El concepto *bloque de poder oligárquico* ha sido utilizado abundantemente para caracterizar esa alianza entre la vieja nobleza terrateniente-alta burguesía financiera que, según la mayoría de los autores, protagoniza peculiarmente la revolución liberal en España. Esta alianza hegemónica, una de cuyas bases fundamentales sería la explotación en su beneficio del proceso desamortizador, se consolidaría tras la breve amenaza del *Sexenio liberal-democrático*. En efecto, durante el reinado de Alfonso XII se incrementa significativamente el número de títulos nobiliarios. Según este análisis la consolidación de esta alianza y la consiguiente ausencia de una verdadera burguesía de negocios explicaría el retraso de la revolución burguesa en España. La crisis del sistema político de la Restauración, a partir del 98, y, sobre todo, en torno a 1917, sería el reflejo del ascenso de *otra burguesía*, generalmente periférica, vinculada a sectores propiamente productivos.

Esta aproximación general, aunque significativa, ha sido puesta en cuestión últimamente. El estudio sobre los grupos de presión proteccionista y sus relaciones con el poder político ha revelado la heterogeneidad de intereses de los grupos supuestamente copartícipes del *bloque*, y, de otro lado, su incapacidad a veces para traducir sus demandas en políticas de gobierno. El libro de Arana sobre la Liga Vizcaína de Productores contiene un buen estado de la cuestión sobre este tema, en el que se resume el debate historiográfico.

En cuanto al retraso de la revolución burguesa, la supuesta peculiaridad española queda un poco relativizada en un contexto general europeo decimonónico bastante más anclado en las permanencias del Antiguo Régimen de lo que se había pensado (según el estudio de A. Mayer).

Una aproximación a la sociedad española del último cuarto del siglo XIX tiene que empezar por la consideración previa de algunos factores básicos, como el demográfico, las migraciones, los cambios en la estructura urbanística (los ensanches) y otras transformaciones económicas básicas. En definitiva, la pregunta sobre el grado de modernización de la sociedad española, sobre el tipo de burguesía, sobre el grado de proletarización del artesano, por citar algunas cuestiones clave, remite a otras preguntas anteriores sobre el grado de modernización de la economía española, la transformación del sistema productivo, a lo que hemos dedicado las páginas anteriores.

En el *campo* se culmina el proceso desamortizador (progresiva aplicación de la desamortización de bienes propios y comunales) agudizando el endeudamiento y la ruina del pequeño propietario y arrendatario, que se verá obligado a emigrar. Mientras, algunos propietarios, arrendatarios y burguesía urbana completan sus propiedades rústicas. Este proceso es el que ha descrito Ricardo Robledo para la meseta castellana.

En la coyuntura favorable de la expansión vitivinícola participarán, en distinto grado, tanto grandes propietarios con mentalidad empresarial como

pequeños que encontrarán en ello momentáneamente una vía de resistencia a la crisis agraria. La posterior llegada de la filoxera a España arruinará muchos negocios y se sumará a otros factores para provocar la emigración. Al mismo tiempo, en Levante, la producción naranjera y la hortícola se afianzan en el mercado exterior produciendo el enriquecimiento de otros agricultores...

El *crecimiento urbano* de algunas ciudades refleja algunos cambios significativos en la estructura social. Los ensanches y los surgimientos paralelos de suburbios plantean cada vez más claramente una división horizontal de la ciudad que sustituye a la vieja división vertical. Este cambio no deja de suscitar resistencias y temores de los que, desde una concepción paternalista o armónica, consideran que la lejanía física de las clases sociales (la aparición de barrios obreros) agudizará la lucha de clases, dando alas a los propagandistas de la revolución. La cuestión fue objeto de estudio y debate entre arquitectos y políticos, que veían cómo el primer planeamiento de los ensanches (el plan Cerdá para Barcelona, el plan Castro para Madrid) estaba siendo ampliamente desbordado por el crecimiento desordenado.

De todas formas, el grado de urbanización de la sociedad española de la Restauración es aún escaso. Predomina aún la España rural, sobre todo si en ella se incluyen los municipios grandes del Sur, cuyas actividades productivas y tipo de vida son los propios de una vida rural.

Las desigualdades sociales

La Constitución liberal de 1876 proclamaba de nuevo la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, y el libre ejercicio de los derechos y libertades básicas, pero las desigualdades sociales y regionales eran la nota dominante. Diversas y rotundas formas de discriminación política y fiscal eran el fiel reflejo de las desigualdades sociales de base económica.

El sufragio censitario, vigente hasta 1890, expresa con crudeza la principal fuente de discriminación política. Ésta es mayor en las elecciones generales que en las provinciales y locales. En el primer caso sólo un 5 por 100 de la población total (800.000) tiene capacidad de elegir a los diputados del Congreso. En cambio, un 16 a 18 por 100 de la población puede participar en la elección de diputados provinciales y concejales. Considerando, en vez del conjunto de la población, el potencial cuerpo electoral universal, es decir, la población masculina mayor de veinticinco años (4.350.000 en 1882), el porcentaje de electores en las generales era de casi el 20 por 100, mientras que el de electores en las provinciales y locales era del 46 por 100. Según estos cálculos de M. Cuadrado, que aquí resumimos, un 34,5 por 100 de la población masculina mayor de veinticinco años quedaba totalmente excluida de cualquier derecho a participar en procesos electorales. Este porcentaje, re-

presentativo de la población proletaria y subproletaria, es el que mejor define el grado de discriminación política hasta 1890.

El peso abrumador de los impuestos indirectos en el sistema fiscal español, especialmente hasta la reforma de Villaverde, es el signo más evidente de la regresividad del sistema. La batalla contra los *consumos* será uno de los principales factores de movilización popular a lo largo de todo el período.

El impuesto por cédulas personales, el impuesto directo más universal (pues afectaba a los mayores de catorce años), sólo significaba el 1,7 por 100 de los ingresos fiscales calculados en los presupuestos de la década 1881-1890, es decir, unos 6,5 a 7 millones de pesetas, pero a través de las categorías que en él se contemplaban queda perfectamente reflejada la división social como veremos más adelante.

La abolición de las quintas, junto a la de los consumos, era la otra reivindicación popular con capacidad movilizadora. En efecto, la redención del servicio militar, una importante fuente de ingresos para el fisco (en los primeros años de la Restauración la cantidad recaudada era superior a la correspondiente a la contribución industrial y comercial), era otro importante factor de discriminación social. La cantidad a pagar por la redención del servicio, 1.200 pesetas en los años ochenta, estaba claramente fuera del alcance de las clases populares (a partir de 1890, la cuota de redención subió a 1.500 y 2.000 pesetas, en 1882 se redimieron un total de 10.000 quintos y en 1889-90 alrededor de 8.500).

Las estadísticas oficiales muestran sobre todo una distribución geográfica muy significativa de las redenciones: *Aproximadamente de cada 100 barceloneses llamados a filas, 16 pagan la cuota de exención, contra 10 en Madrid, ocho en Alicante, seis en Zaragoza, cinco en Tarragona y Sevilla, cuatro en Córdoba, Navarra, Canarias, Zamora, Oviedo y Jaén son las provincias con porcentajes de gastos por redención más bajos.* Pero es precisamente en esas provincias con menos índices de redenciones donde se dan también los niveles más altos de prófugos, desertores y exentos. Conviene recordar el alto porcentaje, en general para todo el país, que suman los exentos más los prófugos (entre el 45 y el 55 por 100). Índice, una vez más, significativo del grado de integración de la población en el sistema; síntoma, por otra parte, de la actitud popular ante las empresas patrióticas nacionales. (Carlos Serrano en su estudio de la crisis política finisecular destaca estos datos como signos de la reacción popular ante la guerra.)

Clases y categorías sociales

Las fuentes estadísticas fiscales, concretamente la referente al impuesto directo personal (las cédulas), sirvieron al profesor Martínez Cuadrado para

trazar un cuadro aproximativo de las clases, grupos y estratos sociales existentes en la España de la Restauración.

La estructura impositiva de las cédulas personales determinaba once clases que agrupaban dos tipos de situaciones: quienes se encontrasen en la categoría de contribuyentes directos o en la de quienes percibiesen salarios o haberes anuales, según dos series de escalas. Tanto la clasificación legal de la ley impositiva como el número de cédulas expedidas o no expedidas en el año fiscal 1889-90, dada la obligatoriedad casi general de los mayores de catorce años de proveerse de estas cédulas personales, permite establecer una primera clasificación de categorías sociales, así como su distribución provincial.

Según los resúmenes de Martínez Cuadrado, referidos a la década de los ochenta, se pueden agrupar las distintas categorías y tarifas en tres grandes grupos de contribuyentes, acorde con la clasificación social clásica de clase alta, media y popular.

— *El bloque de poder dominante* vendría definido por un reducido grupo de 25.000 personas, incluidas en las seis primeras clases de tarifas (con retribuciones anuales de más de 3.500 pesetas, o contribución de más de 1.000 pesetas), más otras 96.309 pertenecientes a las categorías 7.^a y 8.^a (ingresos anuales entre 1.250 y 3.500). En conjunto, estos 121.819 contribuyentes representan el 1 por 100 del total de la población mayor de catorce años y el 0,7 por 100 de la población total censada hacia 1890.

— *Las clases medias*, que se podrían identificar con las categorías 9.^a y 10.^a (contribuyentes con haberes anuales entre 750 y 2.500 pesetas anuales), representaban un 30 por 100 del total de contribuyentes, un 17,7 por 100 de la población total. La retribución de los oficiales del Ejército, incluida en la categoría 9.^a, marca sociológicamente la caracterización de estas clases medias.

— *Las clases populares*, poseedoras de cédulas, se corresponderían con la categoría 11.^a, correspondiente a los *jornaleros, sirvientes y asimilados*, unos 4,5 millones, que suponían casi el 70 por 100 de los contribuyentes y el 40 por 100 de la población total.

— Una parte importante de población, 4,8 millones, lo que significaba un 41,5 por 100 de la población mayor de catorce años, quedaba totalmente excluida de cualquier identificación fiscal. Este grupo social, al margen de los menores y dependientes jurídicamente, marca la frontera de la miseria, pero quizá mejor aún el grado de integración de la población en el Estado de la Restauración. En una población eminentemente rural era todavía mucha la gente que no necesitaba la cédula, instrumento de identidad o control gubernamental más que fiscal.

La distribución geográfica de las cédulas también resulta significativa. Por un lado, la concentración de la población con más recursos, el 57 por 100 de los poseedores de cédulas de categoría superior, en sólo cinco provincias: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Cádiz. Por otro, la concentra-

ción en el Norte de la población integrada en el sistema fiscal, frente al predominio en el Sur de la población marginada o excluida, la no contabilizada en ninguna categoría fiscal.

El mejor signo de la pervivencia de privilegios estamentales en la sociedad española de la Restauración lo constituye el auge que cobran los *ennoblecimientos*. No se trata de algo nuevo, pues en el reinado de Isabel II habían proliferado los accesos a la nobleza. Durante el reinado de Alfonso XII el número de mujeres, terratenientes y militares que acceden a títulos nobiliarios, en general, como agradecimiento de servicios prestados, es elevado. Por contra, parece observarse una cierta resistencia de algunos industriales y financieros al ennoblecimiento como si empezara a afirmarse una conciencia burguesa.

El proceso de ennoblecimiento suele ir a menudo acompañado con enlaces matrimoniales que expresan, mejor que nada, la alianza vieja aristocracia-alta burguesía terrateniente y financiera, que para muchos expresa el bloque de poder hegemónico durante la Restauración.

La Constitución reserva, como se sabe, una parte importante de los puestos de senadores a la nobleza (los grandes de España son senadores por derecho propio, y una parte de los senadores de nombramiento real son nobles). Por otra parte, la nobleza sigue teniendo preferencia en la ocupación de cargos diplomáticos, altos militares y cargos académicos.

Junto a la élite nobiliaria, claramente privilegiada, hay otros grupos sociales que por su función específica reciben u ocupan situaciones de privilegio, contrarias a la teórica igualdad jurídica proclamada. Por un lado, los viejos grupos estamentales, Ejército y clero. Ambos grupos, a pesar de las reformas liberales, consiguen mantener o recuperar estatutos privilegiados, regímenes de exención, jurisdicciones propias. Las bases de la nueva situación privilegiada de la Iglesia estaban definidas en el Concordato de 1851, vigente a lo largo de toda la Restauración.

El título universitario, realmente minoritario, es un signo de privilegio que generalmente acompaña a otros. Para algunos se convierte en la llave del ascenso social y político. Entre todos los títulos universitarios, el preferido, el que más posibilidades de ascenso ofrece, es con diferencia el de abogado. Seguido del de médico y del de arquitecto e ingeniero. Precisamente durante la Restauración se ponen las bases de la constitución de estos últimos como grupo de élite, al introducir fuertes criterios selectivos en las escuelas especiales.

El reciente libro de Francisco Villacorta se adentra en el mundo hasta ahora prácticamente descuidado por la investigación de los profesionales liberales (abogados, ingenieros, médicos, farmacéuticos, profesores) y de los funcionarios del Estado. El debate sobre la colegiación obligatoria de esos profesionales, que se inicia hacia el fin de siglo nos revela la creciente importancia de este grupo social.

IDEOLOGÍAS, MENTALIDADES Y CULTURAS

Nuestro conocimiento de la vida cultural en la Restauración se ha ido enriqueciendo al compás de la evolución historiográfica en este campo, quizá una de las áreas donde la renovación de la investigación histórica está siendo más profunda. Los enfoques de la nueva historia de las mentalidades, la distinción metodológica entre cultura de élites y cultura popular, así como los estudios sobre las iniciativas de educación popular, han venido a completar las investigaciones sobre las ideologías dominantes (krausismo, positivismo, neotomismo, realismo, modernismo, regeneracionismo), y sobre los cauces de expresión y difusión de esas ideologías y valores dominantes: la literatura, la prensa, los ateneos y otros círculos intelectuales y recreativos.

Las ideologías

Ya hace algunos años Diego Núñez analizó acertadamente la difusión de la mentalidad positivista en España, coincidiendo con la implantación del nuevo régimen político de la Restauración. El pensamiento político de Cánovas y el proceso de implantación del sistema político-constitucional era la obra, como se ha señalado abundantemente por todos los autores, de una mentalidad pragmática, realista, en definitiva positivista. En el plano de las relaciones internacionales triunfaba también el peso de los condicionamientos reales sobre los proyectos ideológicos, la *realpolitik* de Bismarck.

Pero este mismo giro hacia el positivismo se daba también dentro de los intelectuales de la oposición, los krausistas idealistas inspiradores de la Revolución del 68. Debates en el Ateneo de Madrid, en los cursos 1875-76, abren paso a esa nueva corriente que gana a los viejos krausistas. Se ha hablado de *krausopositivismo* para caracterizar el pensamiento de esos intelectuales fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, tan influyentes en distintas esferas del pensamiento, la docencia y la formación y difusión de valores.

La difusión del positivismo va a ir acompañada muy de cerca por la del *evolucionismo*. Según han puesto de manifiesto los estudios de Glick, la recepción de Darwin en España se hizo en un clima fuertemente ideologizado y politizado. Más que la doctrina científica, en realidad Darwin fue tomado como pretexto para continuar la polémica sobre la relación entre la ciencia y la fe. La primera difusión del darwinismo en España se produjo en el contexto de libertades que propició la Revolución de 1868 y el Sexenio subsiguiente. La apología de Darwin era una forma concreta de defender la libertad de cátedra y la superioridad de la ciencia sobre la fe. Por eso la vuelta de la Restauración y sus primeras medidas censoras colocarán el debate sobre el evolucionismo en un plano ideológico y político más que propiamente científico.

Positivismo y evolucionismo impregnan prácticamente toda la actividad científica e intelectual del último cuarto del siglo. Su influencia dominante alcanza a todas las ramas del saber humanístico y científico y a todas las corrientes de pensamiento. Por identificación, adaptación o rechazo, la mayor parte de los filósofos, teólogos y científicos se refieren de manera más o menos directa al positivismo y al evolucionismo.

Las nuevas ciencias sociales, la antropología, la psicología, la sociología, el nuevo derecho penal, nacen en el seno de esa cosmovisión positivista-evolucionista dominante.

Ligada a la recepción y difusión del positivismo y del darwinismo se expresan manifestaciones encontradas sobre la vieja *polémica de la ciencia española*: su presunto retraso y las causas; la contribución de los españoles al progreso científico. La cuestión, planteada en los últimos años del reinado de Carlos III, a propósito del artículo de Masson de Morvilliers en la *Enciclopedia* francesa, se reproduce ahora. Menéndez Pelayo escribe en defensa de la ciencia española frente a la autocrítica de los krausopositivistas. Más allá de la polémica, un poco después, algunas figuras excepcionales como Ramón y Cajal revelan en la práctica la posibilidad del progreso científico en España, superando las limitaciones tradicionales. Una iniciativa impulsada por la ILE, la Junta de Ampliación de Estudios, ya en los primeros años del siglo XX, se propondrá como objetivo el envío de intelectuales e investigadores españoles al extranjero para completar su formación y paliar los retrasos y desfases.

Esta influencia dominante del positivismo se prolonga hasta fin de siglo, cuando en otras latitudes se ha iniciado ya una reacción antipositivista. Los ecos de esa reacción idealista-espiritualista apenas son perceptibles en el ambiente intelectual español de fin de siglo. Sólo algunas excepciones, como el maduro Clarín (atento a la nueva filosofía espiritualista francesa) o los *jóvenes del 98* son sensibles a esa revisión que sobre todo se manifiesta después del 98.

Frente al positivismo y al evolucionismo surgirá polémicamente el tradicionalismo católico y el neotomismo. La incompatibilidad catolicismo-liberalismo en el plano político tenía raíces ideológicas profundas. La defensa de la ortodoxia católica está precisamente en la base de la *segunda cuestión universitaria*, que provoca el apartamiento de sus cátedras de las figuras más representativas del krausismo español.

El pensamiento católico del momento, fundamentalmente defensivo y apologético, está bien representado por Juan Manuel Ortí y Lara, catedrático en la Central. El dominico fray Ceferino González, profesor y escritor en Manila, mentor de jóvenes políticos católicos, durante el *Sexenio*, como los hermanos Pidal, y obispo de Córdoba en los primeros años de la Restauración, es con diferencia el mejor representante del neotomismo español, partidario de la armonía final entre la religión y la ciencia, opuesto por tanto a la condena o el rechazo radical del progreso científico por heterodoxo. A pesar de

la reconocida influencia del pensamiento de Ceferino González, su incidencia en el plano directamente político fue más bien escasa, a juzgar por el carácter minoritario y débil que en el conjunto de la Iglesia española de la época tuvo el posibilismo político de la Unión Católica.

Entre los múltiples enfrentamientos católico-liberales y los casos de censura por la difusión de las doctrinas heterodoxas destaca, por su resonancia nacional e internacional, el del canario Gregorio Chil y Naranjo, autor de *Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias*, que fue censurado públicamente por la máxima jerarquía católica diocesana, monseñor Urquinaona.

A comienzos de los años ochenta la polémica en torno al darwinismo había alcanzado, según el estudio de Glick, enormes proporciones. Pero la reacción católica no era uniforme. Según el mismo autor se podrían distinguir tres tipos o grados de reacción:

— Los antidarwinistas exégetas, *clérigos de mentalidad cerrada que no descendían a los detalles científicos del problema*.

— Intransigentes cultos, *generalmente intelectuales bien informados, tanto clérigos como laicos, que intentaban fundamentar sus opiniones antievolucionistas con las mejores fuentes disponibles*. En este grupo incluye la crítica del evolucionismo que la Pardo Bazán publicó en 1877 en la revista *La Ciencia Cristiana*, y un libro del profesor de Instituto Manuel Polo y Peirolón publicado en 1880.

— Finalmente, *un pequeño grupo de científicos católicos y de eclesiásticos que aspiraban a conciliar las dos posturas, inclinándose con cautela a un evolucionismo deísta*. La obra del jesuita Miguel Mir y, sobre todo, las de Ceferino González son las más representativas de este grupo. En *La biblia y la ciencia*, publicado en 1891, Ceferino González se aproximaba al evolucionismo. Dentro del grupo de dominicos de Salamanca, Arinterro, el mejor representante del evolucionismo cristiano en España, publicaba en 1898 *La evolución y la filosofía*.

Además de tendencias diferentes se habían cubierto unas etapas, desde el virulento antidarwinismo del comienzo de la Restauración al evolucionismo cristiano de fin de siglo. En un sentido más amplio, el citado Glick constata una progresiva despolitización del debate científico, especialmente visible a comienzos del nuevo siglo, y cuando se plantee la recepción de una nueva doctrina como la relatividad. La mayor tolerancia ideológica se expresará en la convergencia y colaboración de intelectuales y científicos, de distinta procedencia ideológica, en iniciativas científicas como la Junta de Ampliación de Estudios o reformistas como el Instituto de Reformas Sociales o el Instituto Nacional de Previsión.

El organicismo

Más allá del fuerte antagonismo ideológico y político entre krausistas y católicos que preside la época, una de cuyas principales manifestaciones es la polémica de los *textos vivos*, Gil Cremades señaló hace algunos años la convergencia que en el terreno de la filosofía del derecho y sus derivaciones políticas, se daba entre el krausismo, el neotomismo y el historicismo. El *organicismo*, la consideración de la base orgánica del conjunto del cuerpo social, sería el denominador común de esas tres corrientes aparentemente tan antagónicas. Esta base filosófica común, el organicismo, es lo que explicaría la convergencia que en un terreno más práctico, el de la organización política y social, se daría entre estas corrientes. Las propuestas reformistas de un Azcárate, un Ceferino González, un Durán i Bas tendrían en común esa concepción organicista. Para los católicos ello significaba la mirada nostálgica al gremialismo medieval; los krausistas expresarán su confianza en las asociaciones de los propios interesados, frente a la excesiva intervención del Estado como vía de reforma social; los nacionalistas catalanes reivindicarán también su concepción de la nación frente al Estado moderno.

Sociólogos y reformismo social

La nueva mentalidad positivista está también en la base de la primera *introducción de la sociología* en la España de la Restauración. En ese momento la sociología nace ligada a la preocupación por la *cuestión social*; tiene, ante todo, una vertiente práctica: analizar y diagnosticar las causas de la *cuestión social*, y proponer soluciones y alternativas reformistas. La mayoría de los propagandistas de la reforma social reciben entonces el calificativo de *sociólogos*; los primeros manuales de doctrina social católica se llaman de *sociología cristiana*.

En efecto, en la preocupación creciente por la *cuestión social*, de acuerdo con una corriente social-reformista, presente en círculos intelectuales y políticos europeos de las últimas décadas del siglo XIX, convergen, con algunos matices, intelectuales y políticos de distintas tendencias. El tema central que aglutina y sintetiza la reflexión sobre la *cuestión social*, en los años ochenta y noventa, es la legitimidad y el grado del intervencionismo social del Estado.

Una primera forma de intervención será precisamente la promoción de una información oral y escrita sobre la condición de vida de la clase trabajadora, y la creación de comisiones locales, provinciales y nacional para la realización de esa investigación *sociológica*. La creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1884 es, en efecto, una de las expresiones más características de ese primer reformismo social español tan vinculado, como en otros países, al nacimiento de la sociología.

Con algunos matices diferenciadores, en los años noventa se va impo-

niendo un consenso entre conservadores, católicos y krausistas sobre la necesidad de una intervención directa, aunque moderada del Estado, de carácter protector y subsidiario, fuertemente paternalista, que se concreta en los primeros proyectos y las primeras leyes sobre accidentes de trabajo y sobre el trabajo infantil y femenino aprobadas finalmente en 1900.

Junto a los *sociólogos*, profesores de derecho (Álvarez Buylla, Posada, Azcárate), otros profesionales se enfrentan también con actitud filantrópica y reformista a la *cuestión social*. Algunos ingenieros vinculados a empresas de construcción, de minas, etc., y, sobre todo, los médicos higienistas, observadores cercanos de los problemas sanitarios nuevos que provoca el crecimiento desordenado de la ciudad, y, especialmente, la condición de vida obrera, en vivienda y alimentación. El estudio de Ph. Hauser sobre Madrid, las conclusiones del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid en 1898, y algunos informes publicados en la información oral y escrita de las comisiones de reformas sociales, son buena muestra de esta participación de profesionales de la medicina...

Las expresiones literarias y estéticas

La novela realista es la expresión literaria más característica y representativa de la sociedad de la Restauración. Hay un paralelismo evidente entre el auge de la novela realista y la difusión de la mentalidad positivista en la España de la Restauración.

Por otra parte, la explícita intención estética de los novelistas hace especialmente aprovechable para el análisis histórico ese testimonio literario. El estudio de J. Le Bouill sobre la obra de Pereda, el de N. Clemessy sobre la obra de Pardo Bazán, los estudios sobre *La Regenta* y toda la obra de Clarín (Lissorgues, especialmente), los de Guadalupe Gómez Ferrer sobre Palacio Valdés, los estudios sobre la nueva serie de novelas de Galdós (*Fortunata y Jacinta*, *Misericordia*, *Miau*), el estudio de Carmen del Moral sobre la trilogía de Baroja, *La mala vida*, son otros tantos ejemplos del valor documental que los historiadores han concedido a la novela realista española.

Ya en los inicios de la Restauración las novelas de Pereda chocan por su realismo con los gustos estéticos aún vigentes, según el excelente estudio de Le Bouill. Entre 1882 y 1883 escribe Pardo Bazán en *La Época* su serie de artículos sobre *La cuestión palpitante*: en realidad, unos estudios divulgativos sobre la nueva corriente literaria de moda en Francia, el naturalismo, y su autor más representativo, Zola. La valoración globalmente positiva de esta estética que hace Pardo Bazán, a pesar de las fuertes reservas que su mentalidad católica presenta, provoca una polémica, en cierto modo análoga, en el plano estético, a la que en los planos científico y filosófico se libraba en torno al evolucionismo. Hoy día la crítica literaria parece estar de acuerdo sobre la matizada recepción del naturalismo en España: naturalismo com-

patible con la mentalidad católica e idealista. Tanto Pardo Bazán como Clarín rechazan todo planteamiento determinista.

El final del reinado de Alfonso XII y el inicio de la Regencia coincide, pues, con el momento culminante de la novela realista española. Las dos novelas más representativas, según algunos críticos, se publican en 1885, *La Regenta*, y en 1887, *Fortunata y Jacinta*.

La literatura popular

Recientemente algunos hispanistas franceses (Botrel) vienen insistiendo en el interés de la infraliteratura, mucho más reveladora que cualquier otra de la mentalidad dominante en una determinada época. Ya en un libro colectivo pionero, *Creación y público en la literatura española* (1974), Botrel incluía un estudio sobre *La novela por entregas: unidad de creación y consumo*. La tesis de Botrel *Pour une histoire littéraire d'Espagne*, se inscribe en un marco amplio, en el que era básico adentrarse en campos apenas investigados como el de la impresión y distribución del libro, o el estudio de la condición económica y social del escritor. Recientemente la publicación de una parte de su tesis, *La difusión del libro. Librería y libreros en la España de la Restauración*, aborda un terreno tan fundamental como descuidado por la investigación, básico para calibrar el grado y las formas de comunicación y difusión de los libros.

Entre la infraliteratura aún vigente en la España de la Restauración está *la literatura de cordel*, aunque se observan signos de decadencia: los temas apenas se renuevan, los acontecimientos de la actualidad tienen poca cabida. Otros medios de comunicación, especialmente la prensa, unido al avance de la alfabetización, empiezan a sustituir esa forma primaria de comunicación impresa, aunque fundamentalmente oral, del pliego de cordel, el romance o la copla. Sin embargo, la difusión de algunas de estas coplas y romances sobre temas de actualidad aún es un medio influyente, a juzgar por la utilización que de ello hacen determinadas instancias propagandísticas, como, por ejemplo, algunas publicaciones obreras.

En esta línea de atención a la literatura menor se inscriben también los trabajos de S. Salaun y de Carmen del Moral sobre el *género chico*, o el de C. Serrano sobre *El teatro obrero a finales del siglo XIX*. También es de gran interés para la reconstrucción de la cultura popular durante la Restauración el trabajo pionero de J. C. Mainer *Notas sobre la lectura obrera en España, 1890-1930*.

El *género chico* es probablemente con mucho el espectáculo más popular en la España de la Restauración, especialmente en Madrid. A partir de 1870 ejerce un auténtico monopolio en el teatro. En la última década del siglo XIX, según Mariano Zurita, se estrenaron en 11 teatros madrileños más de 1.500 obras. Durante la Restauración se opera un cambio importante en

el gusto por el teatro: mientras el teatro clásico y culto está en crisis, *el teatro por horas* (literatura industrial en serie) cobra gran auge. El auge del género chico coincide, pues, con el desarrollo del teatro como actividad empresarial, dirigida a un público de masas: utilización de propaganda, varias funciones, varios tipos de precios según el poder adquisitivo del público. Una aproximación cuantitativa al número de espectadores la obtenemos si se considera que el teatro Apolo tenía un aforo de 2.200 localidades, se celebraban cuatro funciones diarias, y algunas obras permanecieron en cartel mucho tiempo. La enorme popularidad de los autores y actores es un signo más de que se trata de un fenómeno cultural de masas.

Es precisamente esa enorme popularidad lo que despierta el interés de los historiadores actuales, como vía privilegiada de análisis y reconstrucción de una determinada mentalidad. En esta perspectiva Salaun piensa que *en realidad, más allá de ciertas humoradas contra la administración municipal, los consumos o los notables de provincias, el género chico cimenta la opción alrededor de los valores políticos de la Restauración: el militarismo triunfante, el nacionalismo patrioter.* Los temas son próximos a la realidad social cotidiana, siempre en el escenario de Madrid, pero el tratamiento de esos temas se hace desde un mundo de valores conservadores. Ello se aprecia especialmente en algunas obras de contenido social como *La clase baja* (1890), de Sinesio Delgado; *Los trabajadores* (dedicado al Centro Instructivo del Obrero), o *Los descamisados* (1893), de Arniches. En esta última el texto caricaturiza y ridiculiza un supuesto proyecto de candidatura socialista para el Ayuntamiento de Madrid.

Técnicamente el género chico utiliza dos elementos fundamentales, el humor y el melodrama, para sancionar el comportamiento *bueno* o *malo* de una serie de personajes *tipo* en los que los espectadores se encuentran fácilmente identificados. La música de fuertes raíces folklóricas, populares, refuerza eficazmente el efecto.

La eficacia del género chico —concluye Salaun— reside en su habilidad para encubrir estas abstracciones (favorables al sistema vigente), *detrás de una mercancía sensible extremadamente eficaz y placentera.* El éxito y la popularidad del género chico, a juzgar por la ideología que transmite, revela indirectamente la marginalidad y el carácter minoritario de la ideología socialista.

Sin duda es mucho más difícil reconstruir la mentalidad y la cultura obrera y popular en la España de la Restauración que los primeros pasos de la organización y de la propaganda socialista y anarquista en esos mismos años. Pero ya sabemos algunas cosas sobre ese primer nivel. Algunos análisis sobre bibliotecas populares de ateneos obreros, casas del pueblo, etc.; o los estudios de la literatura de consumo popular.

El teatro era indudablemente considerado en la época por propagandistas de todo signo como uno de los mejores vehículos de concienciación y mentalización. En toda fiesta obrera, socialista, anarquista, republicana y cató-

lica, siempre hay alguna representación escénica con la intención de aleccionar (o educar) divirtiéndolo. Con las reseñas de estas fiestas se puede reconstruir la lista de obras y autores más representados.

A finales de siglo, *Juan José*, de Joaquín Dicenta, que no es propiamente expresión de un teatro obrero en sentido estricto, comprometido o militante, es, sin embargo, la obra más representada en los centros obreros con motivo del 1.º de mayo. Es la obra más popular entre los obreros, pero también en otros medios sociales, pues el éxito de *Juan José* coincide con un momento de creciente y universal preocupación por la *cuestión social*. (Como se ha señalado en otro lugar en los años ochenta, a partir de la Información Oral y Escrita de la CRS, pero sobre todo en los noventa proliferan los discursos, conferencias y debates en círculos intelectuales y políticos sobre la *cuestión social*.)

Pero como señalábamos, hay un teatro específicamente obrero, por y para obreros, que rompe temáticamente con el teatro burgués, pero también formalmente con la cultura popular (la literatura de cordel, el teatro rural, el género chico) por la rigidez de sus planteamientos, su constante rechazo del acontecimiento espectacular y su afán de escapar a la referencia histórica concreta. Se trata de un teatro eminentemente didáctico (mostrar la miseria para provocar la actitud revolucionaria); un teatro que escenifica la lucha, el conflicto (*La huelga*, de P. Cares; *El pan pobre*, adaptación libre de *Los tejedores*, de Hauptman). La familia, como lugar de expresión de unos valores tradicionales que hay que sustituir por otros nuevos, ocupa un lugar central. Se trata, finalmente, según la caracterización de Serrano, de un teatro actual, alejado del clásico y del histórico, pero que no plantea acontecimientos concretos de la realidad, sino situaciones abstractas que encarnan tipos más que personajes de carne y hueso. Ello puede explicar su menor repercusión popular, a diferencia de la citada obra de *Juan José*. El éxito de esta obra seguramente reside en el apartamiento de este tipo de teatro convencional y excesivamente didáctico. Por contra, presenta acontecimientos concretos y acude al lenguaje coloquial del pueblo.

Las artes plásticas: la pintura y la arquitectura

En las artes plásticas durante el último cuarto del siglo se aprecia bien la tensión entre la pervivencia de los gustos oficiales y académicos y algunos intentos minoritarios de abrirse a la modernidad y la vanguardia. Estos intentos innovadores se localizan geográficamente en áreas muy determinadas, especialmente Cataluña.

En las dos últimas décadas del siglo XIX se desarrolla en Cataluña un arte original, aunque en estrecha vinculación con el Art Nouveau internacional, pero autóctono en tanto que fuertemente enraizado en la tradición histórica. La obra de Gaudí representa bien esa mezcla de tradición y moder-

nidad. La Exposición universal de 1888 contribuirá a extender por toda Cataluña y aun en otras zonas de España el nuevo estilo arquitectónico.

En la pintura, la misma tensión entre academicismo y modernidad se aprecia entre los dos focos que miran a la vanguardia europea, Barcelona y Bilbao, y el madrileño. Para desesperación de Darío de Regoyos, que lucha por introducir en España la vanguardia europea (francesa, especialmente), en Madrid se premia año tras año la misma pintura histórica, naturalista y regionalista. En Madrid domina el eclecticismo: por un lado, es el principal refugio del academicismo, y por otro, junto a la influencia del naturalismo en la novela, aparece el naturalismo pictórico, mezclado con otras influencias como el paisajismo, el regionalismo y el impresionismo.

La correspondencia de Regoyos, estudiada recientemente por J. Tusell, revela muy bien la soledad y las enormes dificultades que encuentra el grupo bilbaíno por cambiar los gustos tradicionales.

Más compacto y mejor enraizado es el impulso burgués y nacionalista; el grupo de pintores catalanes, Rusiñol, Casas, Nonell, logra abrir nuevos caminos estéticos. Más que en la arquitectura y la pintura, es en las artes aplicadas y en las gráficas (el fotograbado se impone a partir de 1890) donde se desarrolla la nueva sensibilidad estética. Los nuevos artistas trabajan también en un campo nuevo como el del cartel publicitario. Pero este ambiente modernista, en arquitectura, pintura, artes gráficas, que se manifiesta con fuerza en Barcelona, es excepcional en la España de fin de siglo, mucho más anclada en la tradición. Hay un desfase de casi un cuarto de siglo, según algunos autores, entre Cataluña y el resto del país en la adopción de la nueva estética modernista.

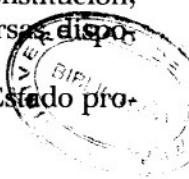
Los condicionamientos de la producción cultural

Una aproximación histórica adecuada al mundo de las ideas y de la cultura requiere previamente la consideración de la infraestructura cultural, es decir, de los condicionamientos materiales, jurídicos, institucionales que marcan sus posibilidades y límites de producción, difusión, etc.

Algunos hispanistas franceses han tratado de hacer esta aproximación a los cauces de producción y difusión del libro (Brotel) y de la prensa (Desvois) en la España de la Restauración.

En primer lugar hay que recordar el marco legal en el que se mueve el impreso. Tras la fuerte censura de los primeros años de la Restauración, la libertad de prensa promulgada por el primer Gobierno liberal amplía significativamente la permisividad. Pero no hay que olvidar que en la práctica la libertad de imprenta, como otras libertades reconocidas en la Constitución, se ve con frecuencia sometida a suspensiones de garantías y diversas disposiciones restrictivas, especialmente debido a presiones militares.

Pero al margen de la controlada permisividad ideológica, el Estado pro-



mueve algunas iniciativas protectoras de la actividad creativa, como la ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879; protege la edición del libro español mediante barreras arancelarias al libro extranjero; incluso ofrece apoyos financieros como el abaratamiento del telégrafo después de 1890.

Significativos avances técnicos en los medios de comunicación facilitan también la mejor y mayor difusión del producto cultural: la red ferroviaria permite que los diarios madrileños lleguen en veinticuatro horas a toda la Península. El número de estaciones telegráficas pasa en España de 199 en 1870 a 1.490 en 1900. El correo postal experimenta igualmente un aumento significativo en estos años.

En cuanto a la industria del papel, la situación en los años aquí estudiados queda relativamente estancada. En 1890 el retraso español es claro: sólo 47 máquinas de fábricas de papel continuo frente a 153 en Italia, 525 en Francia y 891 en Alemania. El despegue en este terreno, factor básico de la producción cultural impresa, no se va a producir hasta el inicio del siglo xx con la fundación de *La Papelera Española*. Por iniciativa de Urgoiti nace *La Papelera Española*, de la fusión de 11 fábricas, con el propósito de monopolizar la producción de papel y del material impreso. Este proceso de concentración económica y empresarial permitirá la modernización del aparato de producción, y, por consiguiente, la multiplicación de las posibilidades de producción impresa. Para Botrel, la fundación de *La Papelera Española* significa un verdadero giro en el historial cultural de España. Pero es un proceso que, recordemos, es posterior a 1900: *En 1894 aún las tres cuartas partes de los medios de impresión están constituidos por pequeñas máquinas*.

Durante los años de la Restauración, la prensa inicia algunos cambios significativos de tendencia dentro de unas permanencias básicas. El número de títulos crece ligeramente entre 1887 (1.128) y 1900 (1.347), pero tiende a disminuir la prensa política (aunque sigue siendo la más importante), en beneficio de las publicaciones científicas, literarias, artísticas y profesionales. Esta evolución, que parece acorde con una cierta despolitización de la época, se observa especialmente en la prensa madrileña.

La mayor importancia de la prensa política madrileña respecto a la de provincia se refleja en las tiradas medias respectivas: 6.000 ejemplares en Madrid frente a 1.650 en provincias. La diferencia entre la prensa madrileña y la de provincias se va haciendo mayor en estos años por el acceso progresivo de la primera a una serie de mejoras técnicas como la utilización del huecogrado. De todas formas, desde el punto de vista técnico y profesional, nos encontramos aún en un período de transición, con periodistas mal pagados, *pirateo* de artículos, redacciones unipersonales y poco estables. Sólo a partir de 1900 la prensa cotidiana, cada vez más dominada por el gran capital, experimenta cambios importantes. En la nueva situación las iniciativas particulares o grupales tenderán a refugiarse en semanarios o revistas mensuales. En la coyuntura crítica del 98, en plena efervescencia intelectual, sur-

girán iniciativas más o menos efímeras. Es también en la última década del siglo cuando se afianzan algunas iniciativas de prensa obrera (*El Socialista*) y surgen nuevos semanarios anarquistas y socialistas.

El libro y su difusión

La crisis económica finisecular también se aprecia en la edición y producción bibliográfica. Sólo a partir de 1895 se observa un aumento de los libros importados; en esos últimos años del siglo la producción bibliográfica española experimenta un crecimiento significativo (1.198 títulos en 1897, 1.376 en 1899, para situarse en la primera década del siglo XX en una media de 1.450 libros anuales).

Varias iniciativas de *colecciones* y *bibliotecas* contribuyen al crecimiento de la producción bibliográfica. Algunas iniciativas, como la creación por decreto de *Registro de Impresores* (4 de diciembre de 1896), y la aparición en esos últimos años del siglo de diversos boletines bibliográficos y revistas de publicaciones contribuyeron a un relanzamiento significativo de la producción bibliográfica. Los autores parecen aspirar también a un estatuto profesional más digno y desahogado. La creación de la *Sociedad de Autores*, por iniciativa de los creadores de los libretos del género lírico, es igualmente significativa de este proceso de profesionalización.

La correspondencia de Clarín con sus editores, estudiada por Botrel, pone de relieve las preocupaciones económicas y profesionales de un autor simbólico del final de una época, y el inicio de otra nueva, menos artesanal, más profesional. Urgido por la necesidad de complementar su sueldo de catedrático de Universidad con otras fuentes de ingreso, sus verdaderos intereses y proyectos literarios se ven frecuentemente interrumpidos, según confiesa el propio Clarín, por la urgencia de una remuneración inmediata. El creciente peso de su actividad periodística sobre la creativa refleja esa opción inevitable e inconfesable que obedece más a esquemas económicos que artísticos. El escritor Clarín es plenamente consciente de estos condicionamientos. En la correspondencia con su editor llega a proponerle incluso un modelo de relación contractual, más global y estable, que le deje más tranquilidad y desahogo para el desarrollo de su actividad literaria, lejos de la constante negociación con el editor, el propietario de periódico o de revista.

Más significativo del nivel cultural alcanzado por un país que la valoración cuantitativa o cualitativa de la producción bibliográfica, es el grado de difusión de los libros y de la producción impresa, cuyos instrumentos principales son los libreros.

En cuanto a las librerías, lo que destaca el importante estudio de Botrel es la subsistencia hasta 1900 de la venta ambulante, junto a las librerías al detall y las de ocasión. Se trata de tres formas de venta del libro y del impreso vinculadas claramente a un determinado estadio social y cultural. La

progresiva pérdida de importancia relativa de las formas más baratas y populares de compraventa del libro (la venta ambulante y la librería de ocasión), y, por contra, la progresiva consolidación de la profesión de librero sedentario e instalado supone un test significativo de una evolución cultural. Pero se trata de un proceso lento que en España no se produce hasta después de 1900. Como en otros factores y signos de la evolución cultural española durante la Restauración, tras algunas buenas expectativas de desarrollo en los años ochenta, en un marco de mayor libertad ideológica, la crisis económica de los noventa parece interrumpir el proceso hasta después del 98. En ese momento, la crisis intelectual actuará como catalizador e impulsor de empresas culturales.

La importancia de las librerías de ocasión como cauce habitual de acceso al libro para una buena parte de la población menos culta o adinerada se mide por el número relativo de estas librerías. Suponen entre la mitad y un tercio de las librerías al detall.

De todas formas, en la última década del siglo XIX, según el estudio de Botrel, se acelera el proceso de transición: la feria desaparece en provecho de estructuras permanentes; la urbanización y el crecimiento de las ciudades (ensanches y suburbios) va relegando las librerías de ocasión a los suburbios. Muchos libreros de ocasión tienden a convertirse en libreros al detall e incluso en editores. Cada vez, concluye Botrel, hay más libreros y menos mercaderes de libros.

Las Bibliotecas

Como en otros aspectos de la política educativa y cultural, la iniciativa del Estado en la creación de bibliotecas es muy débil. La red de bibliotecas públicas es muy reducida: en 1900, sólo 73 bibliotecas con 550.000 volúmenes. El número de lectores es muy bajo (se ha calculado en la biblioteca Arus de Barcelona, en el período 1895-1904 un número de 60 lectores/día).

Pero habría que contabilizar las iniciativas privadas mucho más activas en este momento que la iniciativa estatal. Nos referimos a las bibliotecas de los ateneos, círculos recreativos, mercantiles, políticos, ateneos y sociedades obreras, que proliferan a partir de los años ochenta por toda la geografía.

El acceso de los liberales al poder, en 1881, significó la recuperación y puesta en práctica de antiguos proyectos culturales progresistas. Uno de ellos sería el impulso a la creación de bibliotecas populares de acuerdo con la normativa de 1869. Uno de los principales impulsores de esta política, Nicolás Díaz y Pérez (bibliotecario de la Sociedad Económica de Madrid en 1878), nos ha dejado una buena descripción y balance de la situación en los ochenta, en su *Memoria sobre Las bibliotecas de España en sus relaciones con la educación popular y las instrucciones públicas*.

Para Díaz y Pérez, las 1.113 bibliotecas, con sus cuatro millones de vo-

lúmenes, eran insuficientes, sobre todo si se consideraba el carácter restringido de la mayoría de ellas. Apenas 70 estaban abiertas al público. En su *Memoria* criticaba especialmente el escaso aprovechamiento público que se podía hacer de las bibliotecas eclesiásticas, las mejor dotadas por otra parte (las 41 bibliotecas de escolapios y las 61 de los seminarios conciliares tenían, respectivamente, 316.600 y 443.960 volúmenes, frente a los 156.300 volúmenes de las 43 bibliotecas de sociedades económicas). El acceso restringido a esas bibliotecas eclesiásticas era tanto más injustificado, según su punto de vista, si se tenían en cuenta las subvenciones públicas que recibían.

Frente a esas restricciones elogiaba el carácter generalmente abierto de las bibliotecas de las Sociedades Económicas. Concretamente subrayaba una iniciativa de la Económica de Madrid de la que Díaz y Pérez había sido especialmente protagonista: una propuesta de 1878, que se puso en práctica únicamente durante el año 1881, por la que la biblioteca permanecería abierta al público durante los días festivos.

En el pobre panorama general de las bibliotecas españolas, reflejo indudable del nivel cultural y del grado de alfabetización del país, destacaba especialmente la situación poco desarrollada de las *bibliotecas populares*: *De las 746 creadas no existen instaladas ni 80, y de éstas la mitad están todo el año cerradas*. A ello había que añadir la ausencia de bibliotecas en centros penitenciarios, hospitalarios o militares, todos ellos lugares típicos de concentración popular, donde, según la propuesta ideal de Díaz y Pérez, se hacía más necesaria la creación conjunta de escuelas y bibliotecas populares.

En efecto, para nuestro autor, era evidente la estrecha relación existente entre el nivel de alfabetización, el número de bibliotecas, y, sobre todo, la escasa utilización que se hacía de sus fondos. Los 254.494 lectores contabilizados para las 30 bibliotecas más importantes, con un total de fondos disponibles de 1.726.323 volúmenes, insuficientemente utilizados, guardaban relación con los casi 12 millones de analfabetos. Por eso sus propuestas de difusión cultural y educación popular a través de las bibliotecas, pasaban previamente por la creación de una red escolar mucho más completa.

El día que España tenga 60.000 escuelas; cuando se organicen las de los batallones militares y las de los penales; cuando se funden las que debían existir en las cárceles de audiencia y en nuestros establecimientos benéficos, las bibliotecas prosperarán y se harán necesarias... (En su propuesta ideal y utópica de 61.353 bibliotecas y 23,4 millones de volúmenes, las 60.000 bibliotecas populares, con una media de 229 volúmenes, ocupaban la partida fundamental.)

La carencia de bibliotecas públicas provinciales (18 provincias carecían de ellas en 1883) y municipales debía de ser paliada con la propuesta de 49 bibliotecas provinciales y 100 bibliotecas municipales en los Ayuntamientos mayores, no capitales de provincias.

Las bibliotecas de institutos provinciales y las universitarias no suplían esas ausencias por el carácter restringido de los usuarios. Las bibliotecas de

los institutos, relativamente bien dotadas (314.374 volúmenes en 61 bibliotecas), eran, según se nos recuerda, para uso exclusivo de los profesores.

En la *Memoria* de Díaz y Pérez también se podía apreciar la desigual distribución regional de las bibliotecas. La mayor concentración se daba claramente en Madrid. Las ciudades universitarias, Salamanca, Sevilla, Santiago..., ofrecían unas posibilidades mayores según revelan algunos datos sobre lectores. En el extremo opuesto, 18 capitales de provincias carecían de bibliotecas públicas: Albacete, Almería, Ávila, Badajoz, Ciudad Real, La Coruña, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Jaén, Logroño, Lugo, Málaga, Palencia, Santander, Segovia, Soria, Tarragona y Zamora.

El Gobierno liberal de 1881-83 impulsó notablemente cualquier iniciativa privada (*A todos los centros de artesanos de España que las han pedido, sin excluir a sociedad alguna, ni a las escuelas y municipios de los pueblos. Se han concedido... cuantas bibliotecas han pedido los senadores y diputados...*), pero éstas eran insuficientes. Las 13 bibliotecas de diversas sociedades y ateneos contabilizadas en 1883 deberían convertirse según la propuesta ideal en 100 bibliotecas con una media de 6.000 volúmenes. Quizá esta parte de la propuesta era la menos utópica, a juzgar por la proliferación de sociedades recreativas, círculos mercantiles, casinos y ateneos que contabilizan las estadísticas de Gobernación a partir de la ley de Asociaciones de 1887.

La Iglesia y los medios impresos

Varios son los signos de la fuerte presencia e influencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación impresa del último cuarto del siglo XIX. En ese momento la Iglesia católica española ha ido evolucionando ya desde una primera postura de condena y rechazo general del medio impreso a estimular y coordinar iniciativas católicas tendentes a contrarrestar las *malas lecturas* y la *mala prensa*. La primera reacción católica propagandística, coincidente con la Revolución del 68, había suscitado la aparición de revistas como *La Propaganda Católica*, de Palencia; *La Revista Popular*, de Barcelona, y *El Pilar*, de Zaragoza, por citar algunos ejemplos. Tras los primeros años tranquilos de la Restauración, en torno a 1891 se fundó en Madrid una de las empresas editoriales más representativas de esta reacción católica, *El Apostolado de la Prensa*. En los Congresos católicos de los años noventa la organización de la propaganda católica es uno de los objetivos más reiterados. En 1904 se reunirá en Sevilla la primera Asamblea Nacional de Buena Prensa. Son hitos significativos de una progresiva organización defensiva-ofensiva de la Iglesia, en el ámbito de la comunicación impresa, como, paralelamente, en el de la enseñanza.

Como en otros terrenos de combate ideológico (la escuela), la Iglesia uti-

lizará simultáneamente frente a la prensa y la propaganda liberal varios instrumentos:

— La legislación civil, protectora de los derechos eclesiásticos, vendrá, en casos excepcionales a colaborar en la interrupción y prohibición de algunos impresos.

— Cada vez más, sin embargo, la Iglesia tratará de contrarrestar las otras influencias con medios propagandísticos propios; 1868 marca el comienzo del giro táctico; a partir de 1890 se trata de oponer la *buena prensa* y las *buenas lecturas*.

Antes de 1868 la publicística católica se reducía principalmente a la literatura profesional (boletines oficiales diocesanos, sermonarios y otros auxiliares de la función clerical) y, de otra parte, a literatura de piedad y devoción (vidas de santos, catecismos, devocionarios). La frecuencia y la cuantía en las tiradas de esta literatura piadosa da idea de la permanencia de estos hábitos religiosos hasta bien entrado el siglo xx. Sólo en algunas aglomeraciones urbanas se aprecia descenso en su consumo.

La aparición de una publicística no exclusiva o directamente religioso-piadosa se hace más frecuente a partir del 68 y adopta distintas modalidades según el destinatario. Hay un tipo de publicación muy popular y universal, los *Almanques-Calendarios*, fórmula utilizada también por los órganos de prensa de los distintos partidos políticos. Hay también una abundante literatura católica destinada a la juventud que abarca desde los textos escolares a las lecturas recreativas, pero edificantes, publicadas en colecciones como la *Biblioteca escogida de la juventud*, a partir de 1873. (El joven padre Coloma se va a especializar en este tipo de literatura.) Con destino a los adultos, a los padres, se publican la *Velada de la familia cristiana* o el *Manual de las madres católicas*.

Dando un paso más, es en el campo de la *literatura recreativa* donde la competencia y los peligros morales eran mayores, y donde urgía más la publicación de *buenas lecturas* alternativas. Según la caracterización de Botrel, esta literatura recreativa católica estaba formada por *un puñado de obras, cuidadosamente seleccionadas, de autores en su gran mayoría extranjeros y más bien de profesión eclesiásticos. Estas obras son más clásicas que contemporáneas y muestran una clarísima tendencia histórica y didáctica*. Comparativamente, el espacio que las publicaciones periódicas católicas dejaban a la literatura recreativa (siguiendo la moda de los folletines y novelas por entregas) era muy corto en comparación con el dedicado a la instrucción y a la edificación religiosa. La literatura recreativa católica, tan reducida y pobre desde el punto de vista literario, tuvo, sin embargo, una gran difusión, y debió influir enormemente en la conformación de la mentalidad de muy amplios sectores de la sociedad española de la Restauración. Ahí reside precisamente su interés por el historiador.

En 1890 una revista católica madrileña, *La Controversia*, contabilizaba 199 publicaciones católicas (38 diarios, 64 semanarios), además de 60 bole-

tines diocesanos, corrigiendo así la estadística oficial que en 1887 contabilizaba sólo 118 títulos. La publicación reciente por V. Cárcel Ortí, en su libro *León XIII y los católicos*, de un informe enviado por la nunciatura de Madrid al Vaticano en los años noventa, nos ofrece una evaluación exhaustiva de la prensa católica en el conjunto de la prensa española.

Los *diarios católicos* de la Restauración presentan unas características semejantes al resto de la prensa política. Prensa muy ideologizada y politizada. Las tensiones y divisiones internas del catolicismo español se expresarán, ante todo, en esos diarios. Había tantos diarios católicos como tendencias. Precisamente la escisión integrista del carlismo se materializará por la declaración pública de una serie de periódicos, seguidores de *El Siglo Futuro*, que deciden abandonar la disciplina de don Carlos. *El Correo Español* nacerá entonces como órgano del carlismo. Imposible será en estos años fundar un periódico católico suprapartidista o unitario. Sucesivos intentos como La Unión Católica, El Movimiento Católico (pretendido órgano unitario de los Congresos católicos nacido en 1889) o *El Universo*, creado en 1900, fracasarán. Sólo, a partir de 1910, *El Debate* conseguirá erigirse en el diario católico por antonomasia, al margen de los órganos del carlismo o del integrismo.

La Iglesia disponía de varios instrumentos y formas de control de la producción impresa. Indirectamente, a través de un buen número de editores y libreros seculares de probada y declarada ortodoxia: Miguel Olamendi y Gregorio del Amo en Madrid, Subirana en Barcelona, y otros en capitales de provincias, como Miñón en León, la del Centro Católico de Burgos, Viuda de Pérez en Santander, etc. Si en Madrid y Barcelona estos libreros compiten con otros de signo ideológico distinto, en algunas capitales de provincia la librería católica ejercía un auténtico monopolio. *En estas librerías que vivían a la sombra de las catedrales, iglesias o conventos y seminarios —señala Botrel— todavía a principios del siglo XX había más posibilidades de encontrar* El romancero de la Virgen, tomado de los Santos Padres y Doctores, *por Ramón del Busto, que novelas de Galdós y Baroja*. Lo que da idea del grado de presencia e influencia de lo católico en la sociedad de fin de siglo.

En otros casos se trataba de librerías y editoriales fundadas y controladas directamente por órdenes religiosas que se especializaban en esta tarea, como la Librería Religiosa de Barcelona (fundada en 1848 por Claret), la Imprenta de las Escuelas Pías de San Fernando, la Sociedad Editora de San Francisco de Sales (de iniciativa salesiana), el Mensajero de Corazón de Jesús y el Apostolado de la Prensa (de iniciativa jesuítica).

La *censura eclesiástica* previa era habitualmente citada de forma destacada por toda la prensa y las publicaciones católicas. Los libreros católicos, en sus catálogos, hacían gala de esa aprobación eclesiástica, y proclamaban la exclusión de títulos condenados por el *Índice*. Pero además del *Índice* romano de libros prohibidos, los obispos hacían incluir en los boletines listas

actualizadas de obras reprobadas. En medio de la fuerte polémica suscitada en los años noventa por la prensa integrista, disconforme con la orientación posibilista que la política vaticana iba propiciando, algunos obispos, como el de Salamanca (Tomás Cámara), tendrán que recurrir precisamente a la censura eclesiástica como freno a la desobediencia de los periodistas integristas.

En relación con las publicaciones no católicas, en algunos casos, excepcionalmente, la presión episcopal podía llegar, como en el caso de Conrado Muñíos (por la publicación de su obra *Aires d'a miña terra* en 1880), al procesamiento del autor. Más frecuente era la condena pública de obras y autores, como la publicación en el boletín diocesano de Oviedo de una circular del obispo Martínez Vigil a propósito de la obra de Clarín *La Regenta*, o la condena por el obispo de Salamanca de algunas obras de Dorado Montero.

La política educativa del Estado

La política educativa del Estado de la Restauración fue ya hace algunos años bien sintetizada por Yvonne Turin. El marco legal en el que se inscribe esa política es la ley Moyano de 1857, pues los intentos de aprobar una nueva ley General de Instrucción Pública quedaron frustrados. La política liberal del Sexenio había desarrollado al máximo el principio de la libertad de enseñanza, tanto en lo que se refería a la libertad de cátedra como en cuanto a la libre iniciativa en la creación de centros. De acuerdo con ello, las obligaciones y compromisos del Estado seguían siendo reducidos.

La Restauración va a heredar en gran parte esta postura fundamentalmente abstencionista del Estado, en cuanto a la libertad de creación de centros, no así en cuanto a la libertad de cátedra, pues, como se sabe, pronto va a surgir la *segunda cuestión universitaria* a propósito del decreto Orovio sobre la ortodoxia moral y política de los contenidos de la enseñanza universitaria. De otra parte, los límites ideológicos de la libertad de cátedra venían estrictamente marcados por la amplia capacidad de control y censura que el Concordato de 1851, vigente, concedía a los obispos sobre los libros de texto y la actividad de los maestros y profesores. Este control se ejercerá y reivindicará por parte de la Iglesia especialmente en el nivel de la enseñanza primaria, pero también se ejercerá mediante algunas iniciativas de expedientes sobre algunos profesores de Instituto. Serán los últimos ejemplos, excepcionales pero significativos, de la importante influencia eclesiástica en los contenidos de la enseñanza pública.

Hasta 1886-87 la parte de los presupuestos generales del Estado dedicada a la educación era muy reducida (en 1875-76 sólo equivalía al 0,55 por 100 del presupuesto total). Pero además la mayor parte de ese gasto lo absorbía la enseñanza universitaria, pues la financiación de la enseñanza primaria corrió a cargo del presupuesto municipal (hasta 1901), y la de la en-

señanza media a las diputaciones (hasta 1886-87). En 1887-88 el porcentaje de educación en el presupuesto saltó del 0,86 al 1,59 por 100 por esa razón.

La política universitaria, especialmente hasta 1885, está marcada por la polémica ideológica krausistas-católicos, que afecta a toda la política educativa del período. La Restauración se abre, como sabemos, con el decreto Orovio, sobre la ortodoxia de los libros de texto, que provoca la *segunda cuestión universitaria*. Polémica que se reproduce en el comienzo del curso 1884-85 a propósito del discurso inaugural pronunciado por Miguel Morayta en la Universidad de Madrid.

Después de 1885 se va imponiendo una mayor tolerancia ideológica, y las diferencias entre las iniciativas de los ministros liberales y conservadores apenas afectan a esas cuestiones. La atención y preocupación de los diversos ministros se vuelca en dos cuestiones recurrentes: la reforma de los planes de estudio (donde se aprecia una mayor iniciativa liberal) y los sistemas de acceso y selección del profesorado, cuestión en la que se observa una fundamental continuidad de criterios, independientemente del carácter político del ministro respectivo: progresivamente el criterio de cooptación se va imponiendo frente al anterior intervencionismo del Ministerio en el nombramiento de tribunales y en la libre elección del candidato entre la terna propuesta por el tribunal. En 1881, Albareda eliminó la terna; en 1884, Pidal y Mon introdujo mayor representación de académicos y profesores en la composición de tribunales; en 1886, Montero Ríos reservaba a los catedráticos la mayor presencia en los tribunales de cátedras.

La imagen de la Universidad de la Restauración que nos da el estudio de Mariano Peset o el de Elena Hernández Sandoica (trabajos integrados en la obra en equipo dirigido por J. L. Peset, sobre *Historia y actualidad de la Universidad española*, es el de una Universidad estancada, reflejo de las necesidades y demandas del Estado y la sociedad de su tiempo. Una Universidad que no investiga; *la enseñanza que se da no requiere ni gran preparación (basta el manual propio o ajeno o en su caso la traducción de un manual extranjero) ni tampoco requiere la asistencia a clase*. De hecho casi el 50 por 100 del alumnado es libre.

Algunos datos sobre el profesorado y el estudiantado, que aporta el trabajo de M. Peset, confirma esa impresión general de estancamiento, que se prolonga en las primeras décadas del siglo XX, pero que es especialmente rotunda en el último cuarto del siglo. En términos cuantitativos el número de catedráticos pasa de 341 en 1878 a 423 en 1898; el número de vacantes, que es uno de los mejores indicadores de la necesidad del profesorado auxiliar, oscila entre 70 en 1887 y 57 en 1897. Por su parte, el número de alumnos permanece prácticamente estable en todo el período en torno a los 17.000. En cuanto a la distribución por Facultades, predominan claramente las Facultades de Derecho, con 139 profesores y 9.212 alumnos en el curso 1888-89, y de Medicina, con 139 profesores y 3.515 alumnos.

La dimensión y el peso específico de las distintas Universidades es muy

diferente. Destaca claramente la Universidad de Madrid (la Central), única en la que se puede cursar el doctorado, con 5.149 alumnos en el curso 89-90, seguida de Barcelona, con 2.478 alumnos; en el extremo opuesto, las pequeñas Universidades de provincias como Oviedo o Salamanca, aunque se observa en ellas un significativo aumento del número de estudiantes, desde el inicio de la Restauración: en Salamanca pasan de 372 alumnos en el curso 1878-79 a 804 en el curso 1889-90; en los mismos años la matrícula pasa en Oviedo de 216 a 551.

El estatus social y económico del profesorado universitario refleja también el grado de estancamiento: *catedráticos y profesores* —dice M. Peset— *se conforman con su estatus y sus sueldos, no muy elevados; en su mayor parte hacen de la cátedra una vía para establecer sus clínicas y bufetes, sus aspiraciones políticas o sus estudios personales*. Ya Francisco Giner, al referirse a las diversas causas del absentismo profesoral, aludía a ese carácter secundario de la actividad docente en compatibilidad con otras mejor remuneradas o más prestigiosas: *el ejercicio del foro, de la medicina, y, sobre todo, de la política; la falta de vocación; el corto número de alumnos en algunas ocasiones, la pereza... Cooperan también... las condiciones anómalas del profesorado y la miserable retribución de sus servicios que les obliga a buscar un suplemento en otras funciones*.

El elevado número de vacantes y las diversas formas de absentismo a las que hemos aludido, junto a la precariedad financiera del Ministerio, explican la importancia del número de *profesores auxiliares*. Entre 1877 y 1900 su número creció significativamente de 57 a 109. Su condición era análoga a la del profesorado no numerario de los últimos años del franquismo: *se hallaban en las Facultades adscritos sin la posibilidad de cambiar, con sueldos reducidos que necesariamente les obligaba a obtener por otra parte sus medios principales de vida. Los más antiguos, en virtud de una disposición del principio de la Restauración, podían acceder a la cátedra por concurso; los más recientes debían pasar por la oposición. El sueldo del profesor auxiliar era sensiblemente inferior al del catedrático (entre 1.500 y 1.000 reales anuales en 1876-77; entre 2.250 y 1.750 en el año 1900). Pero el abanico de sueldos dentro del cuerpo de catedráticos, según el puesto en el escalafón, fue abriéndose progresivamente: desde 10.000 reales que cobraban en 1900 un pequeño número, hasta 3.500 que cobraban 165 catedráticos del primer nivel*.

La despolitización de la Universidad, según los estudios de Elena Hernández Sandoica sobre la Universidad de Madrid, es uno de los principales objetivos de los hombres de la Restauración. La función hegemónica y el alto protagonismo jugado por la Universidad de Madrid durante el Sexenio liberal-democrático cambia radicalmente durante la Restauración. Dentro de la Universidad no se podrá hacer política, ni siquiera después de 1881. Las pautas generales de abstencionismo y legitimación de la ortodoxia política se marcaron en el período 1875-81, pero la política de los liberales, a partir de

1881, consolidará esa situación. El control de la ortodoxia doctrinal se ejerce a través del rector de cada Universidad (y su distrito) y del Consejo de Instrucción Pública. Toda falta política es en primer lugar una falta académica. La obligatoriedad de los manuales escolares frente a los *textos vivos* es uno de los principales instrumentos de ese control.

Como se hacía ya durante el período isabelino, la obtención de la cátedra en Madrid es frecuentemente el pago de un servicio, la composición de los tribunales posibilita ese tipo de selección fundamentalmente política. Pero el profesorado, tanto si está vinculado a los partidos dinásticos como a la oposición, sólo puede hacer política fuera de la Universidad.

La movilización estudiantil, muy escasa en todo el país, lo es aún mucho más en Madrid: los estudiantes, la mayoría inmigrantes, han elegido Madrid como forma de *hacer carrera política*. La extracción social de los universitarios, hijos de burócratas de clase media, y de militares, puede explicar también esa desmovilización. En este ambiente, la movilización estudiantil, en el inicio del curso 1884-85, con motivo del discurso inaugural de Morayta, resulta excepcional.

Después del 98 el panorama cambiará radicalmente. El movimiento pro-autonomía universitaria, una constante en todo el periodo subsiguiente, potencia, por un lado, la renovación científica de la Universidad, y, por otro, el compromiso político del universitario. Renovación científica y compromiso político, reforma de la Universidad y reforma del Estado se dan la mano en el discurso de Ortega, *Misión de la Universidad*.

La Enseñanza Primaria

Según las estadísticas oficiales, recogidas en el libro de M. B. Cossío, *La Instrucción Primaria en España* (1897), el grado de escolarización de la población infantil, entre tres y doce años, en el año 1885 era muy baja: el 59 por 100 de los niños y el 48 por 100 de las niñas. Es decir, en torno al 50 por 100 de los niños en edad escolar no asistían a ninguna escuela. No es extraño, pues, que ésta fuera la preocupación prioritaria tanto de los Gobiernos como de los grupos ideológicos más interesados en proyectar su influencia sobre este nivel de enseñanza (la Iglesia católica y los institucionistas).

La Enseñanza Primaria cobró un gran impulso renovador durante la gestión de Albareda en el Ministerio de Fomento en 1881-82; de esta época datan medidas tan significativas como la recreación de la Escuela Normal Central de Maestras, la creación de un patronato para las escuelas de párvulos y de un curso especial para la enseñanza en este nivel, y la fundación del Museo Pedagógico como cauce y motor de la reforma educativa. Reformas que habían sido demandadas en el Congreso Pedagógico de 1882.

El impulso renovador de la Institución Libre de Enseñanza, que está detrás de esta acción legislativa, chocó con los criterios católicos. Como reco-

noce Cossío en el libro citado, a partir de los ochenta se inicia una pugna importante entre los católicos y los institucionistas por el control de la escuela. El estatus de la enseñanza religiosa dentro de la escuela no es más que una manifestación de esa pugna. Según Cossío, la normativa ministerial al respecto, que obligaba al maestro a *enseñar el catecismo de la doctrina cristiana en la escuela, así como a examinarse de religión católica para obtener su título en la Escuela Normal*, chocaba con el espíritu tolerante de la Constitución. Sin embargo, la realidad social paliaba algunas de estas contradicciones. Así, refiriéndose a la obligación reglamentaria de llevar a los niños a confesarse cada tres meses o a la misa parroquial de los domingos, *el maestro es libre de hacerlo o no —dice Cossío—, pudiendo decirse que todo depende, más que de sus opiniones personales, del espíritu dominante en la localidad.*

El peso de la escuela pública en la Enseñanza Primaria era mucho mayor que en la Media. Aproximadamente el número de alumnos y de centros de enseñanza privada no llegaba al 20 por 100, aunque el número de maestros era algo superior (un 27 por 100). En cuanto a la presencia de las congregaciones religiosas en la Enseñanza Primaria, Cossío reconocía, con cierta preocupación, su creciente influencia, aunque menor que en la Enseñanza Media. Su presencia en la enseñanza pública era relativamente pequeña aunque no desdeñable (según las estadísticas de 1885, 10.810 niños y 21.710 niñas en 276 escuelas). En la enseñanza privada su presencia era cuantitativamente mucho mayor: 15.760 niños y 64.358 niñas, en un total de 687 escuelas.

La *Memoria* de Cossío abunda en datos y precisiones concretas sobre la pobreza de medios y recursos pedagógicos en que se movía la Enseñanza Primaria, la insuficiencia presupuestaria, la deficiente formación de los maestros en las escuelas normales, etc. En ese panorama destacaban dos sectores especialmente desatendidos: los párvulos y las escuelas de adultos, apenas inexistentes.

La remuneración de los maestros, a cargo de los municipios, no garantizaba una retribución mínimamente digna y segura, por lo que una de las aspiraciones recurrentes de los congresos pedagógicos de la época fue precisamente trasladar a los presupuestos del Estado la remuneración salarial de los maestros (que se logrará en 1901). Conviene subrayar, por otra parte, la enorme heterogeneidad de las remuneraciones: entre el maestro de Madrid (2.500 pesetas anuales) y los 14.000 maestros y 6.000 maestras que no llegaban a las 1.000 pesetas, todavía 2.000 no alcanzaban las 250 pesetas.

Es interesante también subrayar la distinta procedencia social de las aspirantes masculinos y femeninos al Magisterio: *los varones pertenecen generalmente a la población rural o a la clase menos acomodada, tal como artesanos, comerciantes muy modestos, empleados de corto sueldo, etc., y llegan a la escuela, la mayor parte de ellos, sólo con la instrucción rudimentaria y mal hecha de las escuelas primarias...; la procedencia de las alum-*

nas normalistas es algo mejor, pues pertenecen, en gran parte, a la clase media acomodada de las capitales de provincia y de las villas... El mismo Cossío da la explicación de esta diferente extracción social: mientras los hombres tienen abierta la segunda enseñanza, la Universidad y las escuelas especiales, la mujer, en España, ni dispone para ella particularmente de establecimientos de esta índole... siendo, por tanto, la escuela normal casi el único oficial que se le ofrece, ya simplemente para ampliar su cultura, ya para procurarse una profesión retribuida.

La Enseñanza Media: escuela pública-escuela privada

La libertad de creación de centros, reconocida en el artículo 12 de la Constitución de 1876, va a ser utilizada por distintas instancias sociales e ideológicas, especialmente a partir del reconocimiento de las libertades. Uno de los campos en que estas iniciativas educativas privadas se va a desarrollar más será el de la Enseñanza Primaria y el de la educación popular. Pero también en el nivel secundario, la insuficiente red de institutos de bachillerato propiciará el surgimiento de una serie de colegios privados que aspirarán a la homologación de sus estudios con los centros públicos. El reciente estudio de E. Díaz de la Guardia sobre la Enseñanza Media ha puesto de relieve la importancia de la enseñanza colegiada (colegios incorporados) junto a la oficial durante la España de la Restauración. La participación de las congregaciones religiosas en ese sector de colegios incorporados va a ser creciente a partir de los años ochenta, pero sólo representa una parte. Numerosos colegios seculares o laicos, sin especial compromiso o significación ideológica o política, tenían esta categoría.

El número de alumnos escolarizados en la Enseñanza Media en España durante la Restauración permaneció relativamente estancado: de 28.740 en 1876 pasa sólo a 32.297 en 1900. Este alumnado se distribuía inicialmente en igual proporción entre los institutos provinciales, 12.610 alumnos, y los colegios incorporados, 12.256 alumnos. Pero la tendencia se va a ir decantando a lo largo del período en beneficio de los colegios incorporados, cuyo alumnado pasa a 17.484 en 1889 y 16.046 en 1900, mientras el alumnado de los institutos descende a 11.337 en 1889 y 9.289 en 1900. En todo el período el número de institutos permanece estancado en 58, mientras el de colegios incorporados no deja de crecer (480 en 1888, 511 en 1892). No todos los colegios *incorporados* eran de religiosos en este momento. Al contrario, todavía en 1901 el número de colegios seculares era de 387 frente a 79 pertenecientes a las órdenes religiosas; aunque entre los primeros, algunos pequeños y con escasos recursos tenderán a desaparecer ante la competencia de los segundos mejor dotados.

El número reducido de alumnos matriculados en la Enseñanza Media durante estos años de la Restauración (en torno a 30.000) ya es indicativo

de su carácter elitista. El coste medio de la Enseñanza Media oficial —unas 370 pesetas cuesta obtener el título de bachiller en 1895 según algún testimonio de la época— confirma la inaccesibilidad de los obreros a este nivel de enseñanza. Para ellos estaba destinada exclusivamente la Enseñanza Primaria. Por lo demás, se trababa de un alumnado casi exclusivamente masculino, pues el primer instituto femenino no empezó a funcionar hasta el curso 1910-11 en Barcelona.

Los datos apuntados sobre la relación entre el número de alumnos oficiales y el de colegiados revelan una progresiva preferencia por la enseñanza de iniciativa privada que trata de defender y ampliar su estatuto de homologación. El momento de máxima homologación de centros privados lo posibilita, fugazmente, un decreto de agosto de 1885 del ministro Alejandro Pidal y Mon, por el que se creaba la figura del colegio *asimilado*, a la que se acogieron inmediatamente varios seminarios conciliares y colegios de religiosos. El nuevo estatuto concedía a los colegios la plena capacidad de examinar y conceder títulos, pues la rivalidad entre los institutos y los colegios incorporados siempre giró en torno a la formación de tribunales y la participación respectiva en ellos de profesores de institutos y de los colegios, y, por otra parte, sobre los requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de la docencia. Las excepciones y tolerancia respecto a esto último favorecerían claramente el desarrollo de los colegios de religiosos, que precisamente en estos años estaban implantándose por el territorio español.

En efecto, al amparo de un concordato ambiguo y de una legislación tolerante, durante la década de los ochenta aumentaron considerablemente las autorizaciones gubernativas para el asentamiento de varias congregaciones religiosas y la creación de centros escolares. Las leyes restrictivas de la actividad docente de los religiosos en Francia, en 1880, contribuyen también a explicar el asentamiento y la consolidación en España de algunas de estas congregaciones. (Delaunay ha estudiado con detalle la llegada de los religiosos franceses refugiados: más de 200 jesuitas, otros tantos asuncionistas, 135 capuchinos, otros tantos carmelitas descalzos y 95 dominicos constituyen los grupos más numerosos.) Algunas de las congregaciones que llegaron a desarrollarse más en la enseñanza, como los salesianos, los maristas, los marianistas, las ursulinas, llegaron también procedentes de Francia en la década de los ochenta, aunque no como consecuencia directa de los decretos de expulsión de 1880. Este significativo crecimiento de la influencia católica, a través de las congregaciones religiosas, es el que los liberales de fin de siglo mirarán con alarma, y tratarán de contener, con una interpretación más restrictiva del concordato, y la aplicación concreta a las congregaciones de la ley de Asociaciones de 1887.

Varios estudios recientes, promovidos, en general, por las propias congregaciones, en la celebración del centenario de su implantación en España, han tratado de hacer un balance más o menos apologético en esa presencia. Entre los estudios más críticos destaca el de la inglesa F. Lannon,

que, refiriéndose al País Vasco, ha explicado un modelo de iniciativa docente católica bastante representativo: con el patrocinio financiero de la nueva burguesía, los religiosos y religiosas responden a una doble demanda social: un centro de secundaria para las clases más acomodadas, junto a otras iniciativas de educación popular de carácter filantrópico paternalista, escuelas nocturnas, clases para sirvientas...

Emilio Díaz de la Guardia, en su libro sobre *La Enseñanza Media en España*, presenta datos completos sobre la implantación geográfica de las congregaciones y la creación de colegios. Antes de 1875 los únicos colegios de religiosos establecidos legalmente eran los de las Escuelas Pías. En 1880 los escolapios disponían de una amplia red de colegios de Primera y Segunda enseñanza (11 en Cataluña, 13 en Aragón, 14 en Castilla, seis en Valencia y dos en Cuba); en 1903 tenían 51 colegios y 20.000 alumnos. Los jesuitas, tras la expulsión del Sexenio, se recuperaron rápidamente. Entre 1880 y 1900 sólo los jesuitas y los escolapios poseían *una perfecta red de colegios de segunda enseñanza distribuidos por toda la Península*. El tercer lugar por el número de colegios de religiosos incorporados correspondía a los agustinos. Pero en estos años se implantan también otros religiosos docentes, como los hermanos de las Escuelas Cristianas, los maristas, los salesianos, que crecerán ampliamente durante las primeras décadas del siglo xx.

Ana Yetano en un estudio reciente ha resumido las razones que explican el importante desarrollo de la enseñanza religiosa en la España de la Restauración. Ante todo, no hay que olvidar que las órdenes religiosas con un personal barato y de alta dedicación ocupan el vacío dejado por el Estado liberal abstencionista, que dedica presupuestos muy insuficientes.

La *enseñanza profesional* es prácticamente inexistente a comienzos de la Restauración. En 1876 sólo se contabilizan 1.926 alumnos, es decir, quince veces menos que en el bachillerato. Aquí, aún más, la iniciativa privada, y la municipal y provincial, por delante del Estado, irá lentamente creando *escuelas de artes y oficios* para mejorar la capacitación profesional de los obreros.

Durante el Sexenio surgen varias iniciativas locales y particulares en el terreno de la enseñanza profesional, como una manifestación más de la preocupación reformista. Pero es en los años ochenta, en el clima social reformista impulsado por la información oral y escrita y la creación de la Comisión de Reformas Sociales, cuando estas iniciativas cobran mayor impulso. Una Real Orden de 5 de noviembre de 1886 creaba oficialmente la Escuela de Artes y Oficios Central (en Madrid) y otras siete escuelas de distrito en Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Villanueva i Geltrú. La misma disposición sistematizaba las enseñanzas a impartir distinguiendo las orales, gráficas, plásticas y prácticas.

Reconociendo públicamente el Estado su pobreza de recursos y la insuficiencia de las escuelas creadas, seguía llamando a la iniciativa privada a colaborar en la tarea: *se propone a auxiliar con todos los recursos que sea*

posible a las demás (escuelas) de este género que sostienen las corporaciones populares, las Sociedades Económicas y las sociedades particulares. En el mismo preámbulo de la real orden citada se aludía al objetivo social-reformista, en la dirección, tan en boga en ese momento, de conseguir la armonía social como antídoto de la lucha de clases revolucionarias.

Para estos primeros pasos de la formación profesional, las primeras escuelas de artes y oficios, disponemos de un buen estudio sobre el caso de Barcelona. El libro de Ramón Alberdi sobre *La formación profesional en Barcelona*, estudia con todo detalle y rigor la primera Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios creada al lado de la Escuela de Ingenieros Industriales a partir de 1873, y las Escuelas Municipales de Artes y Oficios creadas en 1889 en los municipios de Gracia y San Martín de Provensals. Junto a estas iniciativas públicas, estudia otras privadas surgidas desde el asociacionismo obrero (el Ateneo Obrero de Barcelona), las agrupaciones profesionales (como la Asociación de Enseñanza Textil creada por la Unión Industrial) o el catolicismo social (como los *Talleres Salesianos* de Sarriá (1882), primera escuela salesiana de artes y oficios en España). El distinto origen de las iniciativas mencionadas ya nos indica la variedad de objetivos e impulsos que están presentes en estas primeras escuelas de artes y oficios.

Educación popular y propaganda político-ideológica: católicos, laicistas, socialistas, anarquistas

La creación de bibliotecas populares como focos de educación popular fue una iniciativa liberal progresista puesta en marcha por el ministro Zorrilla al inicio del Sexenio revolucionario. Durante ese período no dejaron de fundarse a buen ritmo, a partir de las demandas y colaboraciones de alcaldes y maestros. Para su ubicación, las bibliotecas tenían que utilizar inicialmente los locales escolares, y la escasez presupuestaria del Gobierno, así como los pocos fondos bibliográficos disponibles, hacían imprescindible la colaboración de alcaldes y maestros voluntaristas e ilusionados. De modo que la inicial ubicación de estas bibliotecas, según la idea del legislador, en núcleos rurales escolares, acabó siendo de hecho, en núcleos urbanos pequeños o medios, y en asociaciones privadas y círculos recreativos e instructivos, más que en centros escolares.

Los primeros años de la Restauración marcan un claro estancamiento en el proceso de fundación de bibliotecas (de una media de tres a cuatro días por biblioteca, se pasa a 121 en 1875 y 40 en 1877). Sólo con el acceso de los liberales al poder, con el Ministerio de Albareda, se recupera el ritmo, pues se trataba claramente de una iniciativa estatal de inspiración liberal-progresista.

Aparte de la escasez de presupuesto y la ausencia de locales adecuados, el proyecto no disponía de libros adecuados a los objetivos divulgativos pro-

puestos. Entre el libro escolar y el de alto nivel científico y académico faltaba el libro de divulgación, serio pero ameno, válido para la elevación cultural de los alumnos. De ahí la convocatoria de concursos específicos para estimular la producción de esos libros.

El estudio de A. Viñao sobre esta política liberal-progresista de crear bibliotecas populares como instrumentos de extensión y elevación de la cultura popular, pone de relieve los límites y el alcance de ese proyecto. Comparativamente, el estudio de otras bibliotecas, nacidas con la misma intención e inspiración, pero en el seno de asociaciones de educación popular ya consolidadas, como el Fomento de las Artes, nos acerca al modelo de este tipo de bibliotecas populares.

En el tiempo de la Restauración, también en este campo de la educación popular, la iniciativa particular va muy por delante de la estatal. Especialmente, a partir de los años ochenta asistimos a un verdadero combate entre católicos, liberales, socialistas y anarquistas, por atraerse al pueblo a sus respectivos centros de instrucción, propaganda y recreo.

Los Círculos de Instrucción y Recreo son, según Pere Sola, el modelo asociativo de culturización popular de la Restauración. En las primeras estadísticas gubernamentales, al amparo de la ley de Asociaciones de 1887, este tipo de asociaciones es el mayoritario. Formalmente, al margen de la inspiración ideológica y política, este modelo asociativo oferta una serie de servicios culturales análogos: biblioteca, sala de lecturas, exposición de periódicos y revistas ilustradas, veladas literarias y conferencias cubren el objetivo instructivo. El café y los juegos cubren el objetivo recreativo, aunque los centros con más capacidad tienen orfeón, incluso una pequeña orquesta, y grupo teatral. Pero estos Círculos son sobre todo, y más aún que centros instructivos y de difusión cultural, lugares privilegiados de socialización y convivencia.

El carácter ideológico de la iniciativa no cambia sustancialmente este modelo, más bien tiende a adaptarse a él. Por ejemplo, cuando los católicos, a partir del 86, y más frecuentemente desde los años noventa, se plantean la atracción del pueblo, para apartarlo de los focos de descristianización, aluden expresamente a la necesidad de ofrecer lugares de instrucción y recreo con el mismo tipo de ingredientes. La Propaganda Católica de Palencia, nacida en 1868, o los Círculos Católicos de Obreros son un buen ejemplo de esta propuesta alternativa, con intención de competir con otras.

Entre las múltiples iniciativas liberal-republicanas de educación popular podemos citar el *Fomento de las Artes* de Madrid. La presidencia de Rafael María de Labra en los años 1883-86 y 1888-91 marca ideológicamente la actividad propagandística y divulgadora de esta influyente asociación madrileña. En sus ciclos de conferencias tienen cabida los grandes temas de debate del momento: el proteccionismo-librecambismo, la intervención del Estado en la cuestión social, etc. Organiza y acoge un Congreso de Sociedades de Educación Popular en 1890; y en sus tribunas participan representantes de la élite política e intelectual madrileña, especialmente vinculada al libe-

ral-krausismo. El Fomento de las Artes trata de cumplir en un medio artesano-obrero cualificado y culto (aristocracia obrera) una función análoga a la que desempeñaba el Ateneo de Madrid en el medio burgués.

Los ateneos obreros de fines del siglo XIX y principios del XX, no difieren formalmente del modelo señalado, salvo en el rechazo en algunos de ellos del café-bar. Las diferencias se plantearán, lógicamente, en los contenidos de las conferencias, en los programas de las enseñanzas, en la selección de las obras de teatro a representar. Hasta fin de siglo la actividad cultural de iniciativa obrera corresponde mayoritaria y casi exclusivamente, a los anarquistas. Los estudios de L. Litvak nos han recordado muy bien los contenidos y las formas abundantes y variadas que adopta la cultura libertaria en España desde la última década del siglo.

Asimismo, los numerosos estudios recientes sobre la masonería nos permiten conocer, más allá de los tópicos y mitos del pasado historiográfico, su verdadero peso e influencia en la historia contemporánea española, y concretamente en la lucha escolar. Para el último cuarto del siglo es fundamental el libro de Pedro Álvarez Lázaro, *Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración*. Según este autor, *durante la Restauración la enseñanza laica fue para los movimientos masones y librepensadores un campo privilegiado de atención*. Tras distinguir adecuadamente entre las distintas obediencias masónicas, a menudo con planteamientos prácticos muy encontrados, y entre la masonería y el librepensamiento, el citado autor nos recuerda los esfuerzos de masones y librepensadores europeos y españoles por llegar en los años ochenta y noventa a una cierta unidad de acción. Los congresos universales de librepensamiento, uno de los cuales se celebró en Madrid en 1892, tenían como principal objetivo esa coordinación de iniciativas. En los programas de esos congresos la promoción de escuelas laicas ocupa siempre un lugar destacado.

Concretamente, en España, los estudios de Álvarez Lázaro y de Ferrer Benimeli constatan la existencia de numerosas iniciativas escolares laicas directamente ligadas a logias masónicas. La Sociedad Catalana de Amigos de la Enseñanza Laica fue la encargada de organizar el Congreso de Amigos de la Enseñanza Laica en Barcelona en 1888. En Madrid, la Sociedad Amigos del Progreso (1883) cumplió una función semejante. Todo ello nos habla de una importante actividad propagandística que provoca la alarma y la reacción católica. En los congresos católicos de los años noventa las alusiones a esta actividad son constantes.

Las iniciativas de educación popular surgidas en el ámbito universitario inglés del siglo XIX, la *Extensión Universitaria*, arraigan en España, por iniciativa de hombres vinculados a la ILE a comienzos del nuevo siglo. Pero las primeras actividades del grupo pionero de Oviedo (Altamira, Sela, Posada, Buylla, etc.) son anteriores al 98.

III. LA REGENCIA (1885-1895)

El sistema político de la Restauración, puesto en marcha por Cánovas con tantas dificultades, va a encontrar su prueba de fuego, a la vez que la oportunidad para consolidarse, con ocasión del vacío institucional creado por la muerte de Alfonso XII.

La historiografía política clásica se refirió al *Pacto de El Pardo*, explícito o implícito, entre los dos líderes políticos, Cánovas y Sagasta, para explicar la salida política de ese vacío institucional. En efecto, la llamada a los liberales de Sagasta para suceder alternativamente a los conservadores de Cánovas, contribuía, sin duda, a ampliar y consolidar la base política del régimen de la regencia.

Pero, junto a ese pacto entre los dos líderes hay que aludir a otros pactos, menos estudiados y comentados, que contribuyeron decisivamente a esa consolidación. Nos referimos al explícito respeto-acatamiento constitucional que expresaron un importante número de obispos reunidos en Madrid con ocasión de las exequias de Alfonso XII, en coherencia con la política conciliadora desarrollada por el Vaticano, a través del nuncio Rampolla. La jerarquía eclesiástica ofrecía al régimen su importante apoyo, en la medida en que descalificaba implícitamente movimientos tan populares entre los católicos como el carlismo y el incipiente integrismo.

Si la amenaza carlista parecía controlada, en la medida en que no alentada por la jerarquía católica, la republicana también se mostraba impotente. El mejor ejemplo de esa impotencia lo constituye el fracaso, en el comienzo de la Regencia, de la sublevación de Villacampa.

LA OBRA POLÍTICA DEL «PARLAMENTO LARGO» (1886-1890)

El Gobierno de los liberales consolidó el régimen, no sólo implícitamente, por la mera ocupación del espacio alternativo, sino por el contenido legislativo que desplegó en uno de los pocos tiempos de estabilidad política de la Restauración: el *Parlamento largo*, así llamado, comparativamente, por su duración, pues prácticamente agotó el tiempo previsto constitucionalmente para una legislatura.

En esos cinco años, Sagasta desarrolló contenidos jurídicos e institucionales, previstos en la Constitución de 1876, como herencia insoslayable de la de 1869: el sufragio universal, la ley del Jurado y la ley de Asociaciones. Con esta política los liberales completaron la obra de institucionalización de un régimen liberal-parlamentario, iniciada por el fusionismo en el período más breve de 1881-83, y atrajeron por la izquierda a los republicanos *posibilistas* de Sagasta, ampliando la base del régimen.

La estabilidad del *Parlamento largo* no estuvo carente de crisis y tensiones políticas en el seno del partido gobernante que dieron lugar a varios cambios ministeriales. Sin embargo, por encima de estos cambios se aprecia la continuidad de un programa y el protagonismo de algunos ministros fundamentales como Moret en Estado, Camacho en Hacienda, Montero Ríos y Alonso Martínez, especialmente vinculados a Gracia y Justicia, o el general Cassola que trató de sacar adelante, sin éxito, un paquete importante de reformas militares. Precisamente la vinculación de estos notables, jefes de fila de otras tantas familias, a diversos proyectos reformistas, perjudicaron la tramitación parlamentaria de éstos, pues los boicots y las resistencias a determinados proyectos eran esgrimidos con oportunismo político para provocar crisis y recomposiciones de Gabinete.

El primer Gobierno formado por Sagasta reunió a las figuras más notables del liberalismo, los líderes de las principales familias y tendencias. Algunos, como Alonso Martínez, en Gracia y Justicia, o Camacho en Hacienda, ya habían asumido la misma responsabilidad ministerial en el bienio 81-83. Su gestión tendría un claro carácter de continuidad con proyectos y reformas ya planteadas en ese tiempo: la reforma de la Administración fiscal, la elaboración del Código Civil... Otros, como Moret en Estado, Gamazo en Ultramar o Montero Ríos en Fomento (en Gobiernos posteriores ocupó la cartera de Gracia y Justicia), asumían responsabilidades nuevas. La obra política del Gobierno liberal quedó vinculada a los proyectos y la gestión de estos hombres.

El programa político de los liberales expuesto en el debate parlamentario del *mensaje de la Corona*, en mayo de 1886, continuaba en gran medida proyectos y objetivos del bienio 81-83: unos proyectos de claro significado político como el sufragio universal, el juicio por jurados y la ley de Asociaciones, junto a importantes reformas administrativas en Ultramar, en Hacienda.

Camacho, que había sido llamado al Ministerio por su prestigio técnico

y por su experiencia en Gobiernos anteriores, planteó enseguida una serie de reformas que encontraron fuertes resistencias, dentro y fuera del Gobierno. En general no eran reformas nuevas, sino replanteamiento o recuperación de antiguos proyectos: reorganización administrativa que potenciaba la figura del delegado provincial de Hacienda, con competencias extensas y específicas, distintas de las del gobernador civil; creación de la Inspección General de Hacienda; reforma de la administración del impuesto de consumos.

Las resistencias entre sus compañeros de Gabinete procedían de su creciente control sobre el presupuesto: la eliminación de *cajas especiales* y la imposición de *economías* en el gasto de los respectivos Ministerios.

Las resistencias, fuera del Ministerio, se suscitaron por su iniciativa de revisar los múltiples expedientes de desamortización de dehesas boyales que se encontraban paralizados. Su resolución de llevar adelante la expropiación de varias de ellas provocó la reacción de municipios y fuerzas vivas, incluso con el apoyo de un compañero ministerial, Gamazo. Estas resistencias acabaron con la pronta dimisión del ministro, en julio de 1886.

Gamazo, en Ultramar, planteó también en seguida una serie de medidas para favorecer la exportación de cereal a Cuba, además de la aplicación a Cuba y Filipinas de reformas administrativas. El 23 de julio, con la ley de Abolición del Patronato se anulaba el último vestigio de la esclavitud en Cuba.

A los proyectos de Gamazo sucederán otros, que culminarán con los de Maura de 1893. Un balance retrospectivo a cargo del republicano y autonomista Rafael María de Labra puede servirnos para valorar la política ultramarina de los liberales en estos últimos años de dominio colonial.

Desde la perspectiva del republicano Labra, impulsor en 1873 de reformas autonómicas y de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, y defensor constante de un programa autonomista para Ultramar, las concesiones que finalmente se ven obligados a hacer liberales y conservadores en los años noventa en relación con Ultramar son una confirmación de la política republicana. Labra se lamenta, retrospectivamente, de la tardanza y resistencia de los partidos dinásticos en aplicar una política autonómica correcta en la línea de la propugnada por los republicanos.

Respecto a la política de los liberales durante la Regencia, valora positivamente la aplicación a las Antillas del marco constitucional y jurídico vigente en la Península: *La libertad de imprenta y la libertad de asociación se aplicaron a las dos Antillas el 11 de noviembre de 1886 y 12 de junio de 1888, respectivamente. El patronato se abolió en 1886. El 31 de julio del 89 se promulgó en las Antillas el nuevo Código Civil. El 28 de enero del 86, el Código Mercantil. El 14 de junio de 1893, la reforma de la ley Hipotecaria.*

Ahora bien, este marco de libertades estaba de hecho restringido, como criticaba Labra, más aún que en la Península, por las amplias competencias que en materia de delitos civiles concedía el artículo 29 del Código de Justicia Militar a los capitanes generales de Ultramar. A ellos correspondía la aprobación de las sentencias *en que se trate de los delitos de robo en des-*

poblado... o en poblado... secuestro, incendio en despoblado, amenaza de cometer los anteriores delitos... y cualesquiera otros que atenten gravemente a la seguridad de cosas y personas o a los intereses generales de la nación y del Ejército.

Más criticable aún era la interferencia caciquil del Gobierno central en la administración antillana. En palabras de Labra, *la protección decidida, franca e incomparable que las autoridades de todo género han dado y continúan dando a los elementos y partidos conservadores antillanos contra los liberales y autonomistas.*

En el balance positivo de la política en Ultramar durante la Regencia hay que anotar también reformas arancelarias impulsoras del comercio hispano-cubano, aunque en su aplicación resultara más favorable a la exportación de productos peninsulares a las Antillas.

En fin, la política antillana de los liberales en 1881, 1886, 1892 y 1895, parece, según la apreciación de Labra, seguir las iniciativas y propuestas republicano-autonomistas, en el contexto de la política general de Sagasta de atracción de los republicanos.

Las reformas políticas

Pero lo que caracteriza y define mejor la obra política del *Parlamento largo* son tres grandes leyes: la ley de Asociaciones, la del Jurado en el juicio oral y público y la ley Electoral que consagraba el sufragio universal masculino. La aprobación de cada una de estas leyes no fue fácil ni rápida.

El proyecto de ley de Asociaciones, presentado a las Cortes el 11 de julio de 1886, empezó a ser discutido en marzo de 1887 y fue promulgado como ley el 30 de junio de ese mismo año. Dos eran principalmente los tipos de asociaciones a los que la ley iba a afectar: las asociaciones obreras y las congregaciones religiosas que en el marco de una interpretación ambigua del concordato estaban asentándose en la Península. Desde el debate parlamentario sobre la Internacional en 1871, y especialmente desde el control impuesto en 1874, las Asociaciones obreras habían vivido en la clandestinidad o en la semitolerancia. Por primera vez iban a ser legalizadas. En el marco de la ley de Asociaciones nacerán públicamente el PSOE y la UGT en 1888. En cuanto a las congregaciones religiosas, aunque fueron objeto de alguna alusión en el debate parlamentario, de momento quedaron fuera del control gubernamental, previsto en la ley, hasta que en el fin de siglo los liberales apelen a la ley de 1887 para regularizar la situación de las múltiples fundaciones religiosas creadas durante la Restauración en contra de las previsiones concordatarias.

El proyecto de ley del Jurado comenzó a discutirse en el Congreso el 21 de abril de 1887, pero el debate y la tramitación parlamentaria se prolongaron mucho por la interferencia de otras cuestiones (el arriendo de la renta

de tabacos, los debates sobre la sublevación republicana de Villacampa, y, sobre todo, las reformas militares propuestas por el ministro Cassola). Hasta el 20 de abril de 1888 (un año después de presentada en Cortes) no fue promulgada la ley sobre el juicio por Jurados para determinados delitos. Su implantación cubría otra de las aspiraciones clásicas del progresismo decimonónico, al igual que la libertad de imprenta.

El sufragio universal fue el último de los proyectos aprobados, ya en el límite del *Parlamento largo* (aprobado en el Congreso el 28 de marzo de 1890, fue promulgado como ley el 9 de junio), cuando sucesivas crisis ministeriales estaban debilitando la unidad del partido liberal. Lo paradójico, como señala F. Almagro, es que los liberales, responsables de sacar adelante este compromiso histórico, no eran especialmente partidarios del sufragio universal, y de hecho su implantación estuvo sometida a ciertas restricciones: sólo para los varones, mayores de veinticinco años, vecinos de un municipio con dos años al menos de residencia; además en el artículo 2.º se establecían seis motivos de restricción en el ejercicio del derecho y la exclusión de las clases e individuos de tropa.

Sin embargo, su aprobación tenía indudable trascendencia política como subrayaron las distintas posiciones políticas. Para Castelar era la última condición para disolver su partido e invitar a sus seguidores a aceptar el régimen monárquico. Cánovas en el debate parlamentario reiteraría criterios y premoniciones ya expuestos en otros ámbitos: *Yo creo que el sufragio universal, si es sincero, si da un verdadero voto en la gobernación del país a la muchedumbre, no sólo indocta, que eso sería casi lo de menos, sino la muchedumbre miserable y mendiga, de ser sincero, sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad, y si no es sincero el sufragio universal, porque esté influido y conducido, como en este caso estaría, por la gran propiedad o por el capital, representaría... el menos digno de todos los procedimientos políticos, para obtener la expresión de la voluntad del país.*

La aprobación del Código Civil culminaba una red de códigos y leyes (Código Penal, Código de Comercio, ley Hipotecaria) encaminados a la conservación del orden social establecido.

El Código Civil había tenido una larga gestación especialmente por la dificultad de encauzar dos cuestiones conflictivas: la compatibilidad de un Código general con los regímenes particulares, forales, y, por otro lado, el difícil acuerdo con la Iglesia sobre la validez civil del matrimonio canónico. En ambos se llegó a un compromiso.

Las provincias de Derecho Foral —resume F. Almagro— *lo conservarían, según la ley de Bases, en toda su integridad, por ahora, y el Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentaría a las Cortes, en uno o en varios proyectos de ley, los apéndices del Código Civil que contuviesen las instituciones forales que conviniera conservar en cada una de las provincias o territorios respectivos.* El jurista catalán Durán i Bas, luego ministro con Sil-

vela en 1899, fue uno de los principales defensores del mantenimiento de las leyes forales.

La clave del compromiso con la Iglesia, que propició el buen clima de entendimiento entre el ministro de Estado, Moret, y el secretario de Estado, Rampolla, nuncio hasta 1887 en Madrid, consistía en la coexistencia de dos tipos de matrimonio, igualmente válidos desde el punto de vista civil: el matrimonio civil y el matrimonio canónico para los católicos.

Alonso Martínez fue el máximo responsable y protagonista del proceso que llevó a la aprobación del Código. Él había redactado las 27 bases, aprobadas en 1888, sobre las que giró el debate parlamentario, previo a la aprobación del Código el 26 de mayo de 1889.

Jover, al valorar la política de los liberales de los años ochenta, subraya una serie de reformas *encaminadas a la racionalización y modernización del Estado y de la Administración*. Entre ellas hay que destacar las reformas de Camacho en la Administración de la Hacienda, las reformas militares de Cassola, la ley Provincial de 1882, la ley de Santamaría de Paredes de 3 de julio de 1888 sobre la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y la ley de Procedimiento Administrativo de octubre de 1889.

En abril de 1887, a poco de tomar posesión de su cargo, dio lectura el general Cassola a un ambicioso proyecto de *reformas militares* que suscitó amplios debates políticos y fuertes resistencias. Una buena parte de las tensiones internas del partido gobernante se canalizaron en la tramitación parlamentaria de esta reforma. F. Almagro sintetiza así las principales novedades que introducían las reformas de Cassola: *implantación del servicio militar obligatorio, apertura de las escalas cerradas en las armas especiales —Artillería e Ingenieros— para equiparar a éstas con las generales de Infantería y Caballería a fin de que todos pudieran ascender por méritos de guerra, y organización, como «servicios», y no cuerpo, del Estado Mayor, de que formarían parte los jefes y oficiales que mereciesen por sus estudios en la academia creada al efecto el título o diploma de aptitud...*

La resistencia a las reformas propuestas por Cassola fue general: por parte de los profesionales, cuyos intereses se veían afectados, y por parte de los políticos, tanto los de la oposición conservadora como liberal. Los generales más influyentes, Martínez Campos, Weiler y Daban, se opusieron. Cánovas en el debate parlamentario (febrero-marzo 1888) criticó el servicio militar obligatorio y la apertura de escalas en las armas especiales. Cassola demostró una gran brillantez parlamentaria en la defensa de sus reformas, pero al no encontrar el suficiente apoyo en el propio Gobierno para sacarlas adelante dimitió en junio de 1888.

Política exterior: el acuerdo hispano-italiano y la integración en la Triple Alianza

La política exterior de los liberales, durante el *Parlamento largo*, continúa con mayor decisión las iniciativas y la orientación marcadas en el período 1881-83. Las numerosas circulares de Moret, ministro de Estado hasta 1888, a los representantes diplomáticos expresan la voluntad de presencia española en la escena internacional, especialmente en Marruecos, el Mediterráneo y América.

Como en otras ocasiones, los deseos y proyectos iban muy por delante de las posibilidades y capacidades reales de intervención. De todas formas la transformación de algunas legaciones en Embajadas revela algo más que mero voluntarismo. Hasta diciembre de 1887 sólo existían las Embajadas de España ante la Santa Sede y en París. En este momento las legaciones en Londres, Berlín, Viena y Roma fueron elevadas a la categoría de Embajadas. Sin embargo, en esta misma fecha no existía ninguna Embajada en el continente americano.

Dentro de esa línea de continuidad lo más notable de la gestión de Moret fue la vinculación a la Triple Alianza a través del acuerdo con Italia de mayo de 1887. Las tensiones con Francia, por su tolerancia o apoyo a los conspiradores republicanos y carlistas y por el choque de intereses en Marruecos, propició el acercamiento a Italia en la defensa de intereses comunes en el Mediterráneo. Efectivamente, el acuerdo se limitaba a los posibles conflictos que pudieran surgir en el área norteafricana y mediterránea: *«España no se prestará, respecto a Francia, en lo que se refiere, entre otros, a los terrenos norteafricanos, a ningún tratado ni acuerdo político alguno que directa o indirectamente vaya dirigido contra Italia, Alemania y Austria-Hungría, o contra cualquiera de estas potencias (...). En vista de los intereses comprometidos en el Mediterráneo y con el fin principal de mantener el «statu quo» actual, España e Italia se mantendrán en comunicación sobre este asunto, dándose a conocer cualesquiera noticias que puedan esclarecer sus respectivas disposiciones, así como las de las demás potencias.*

Por otra parte, no suponía una plena integración en la Triple Alianza, pues Alemania y Austria-Hungría se negaron a firmar el acuerdo. Sólo mediante un intercambio de notas diplomáticas se reconocería el acuerdo italo-español. La otra gran potencia europea, Gran Bretaña, había llegado también en el segundo semestre de 1887 a un acuerdo con Austria-Hungría e Italia y el beneplácito de Alemania para actuar como garante del *statu quo* en el Mediterráneo.

El carácter secreto y limitado del acuerdo hispano-italiano no quita importancia al hecho quizá más decisivo y de mayor trascendencia de la política exterior española durante la Restauración. Según la valoración de Bécquer, *no respondía este resultado a lo que se propuso el señor Moret; sin embargo, el acuerdo italo-español, robustecido por la adhesión de Alema-*

nia y Austria y el aplauso de Inglaterra, constituía un paso importantísimo, señalaba una orientación clara y definida.

El acuerdo fue renovado en 1891 por el Gobierno Cánovas por cuatro años más. Pero la crisis hispano-cubano-norteamericana de 1895-98 revelaría el alcance limitado del acuerdo y el grado de aislamiento internacional de España en esa coyuntura.

Las crisis ministeriales que se suceden durante el *Parlamento largo* son la mejor expresión de las tensiones y divisiones que atraviesa el partido liberal. La historia política de los cinco años de Gobiernos liberales bajo la presidencia de Sagasta se pueden entender como una lucha por el poder entre las distintas familias liberales (gamacistas, moretistas, dominguistas, maritistas...) y el permanente intento *conciliador* de Sagasta por mantener el partido mínimamente unido y cohesionado. Para las distintas familias liberales el planteamiento de reformas era la ocasión de tomar posiciones en la permanente lucha por el poder. *Las reformas* —dice Varela Ortega— fueron banderas que utilizaron las facciones caciquiles en lucha para lograr más poder dentro de sus partidos, amenazando con romper la unidad de éstos. Para Sagasta lo difícil fue desarrollar el programa de reformas sin alterar sustancialmente ese equilibrio de fuerzas.

No es extraño, pues, que las sucesivas crisis ministeriales se planteen al hilo de algunas de las principales reformas planteadas por los ministros Camacho, Cassola y Gamazo. El primer Gobierno de Sagasta es el más cohesionado, el más representativo de las distintas facciones, por lo que cuenta con la presencia de los principales líderes: Alonso Martínez, Moret, Gamazo y Montero Ríos. El golpe republicano de Villacampa y el indulto subsiguiente provocaron la primera crisis y la salida del Gobierno de los gamacistas, monteristas, tetuanistas y dominguistas. Posteriormente, las reformas militares del general Cassola provocaron un enfrentamiento bastante generalizado entre las distintas tendencias agravando notablemente la división interna.

En el verano de 1888 las disidencias aumentaron y la situación de Sagasta se hizo más delicada. A la división de los liberales se unió el acoso conservador, que anuncia el final de la tregua o benevolencia ejercida desde el *Pacto de El Pardo*.

En mayo del 89 la crisis se hace inevitable, tras la disidencia pública de Martos, que entonces ocupaba la presidencia del Congreso de los Diputados; Sagasta se mantendrá en el poder un año más gracias al apoyo directo de la Corona, que hace uso de su prerrogativa. Pero su fracaso en la reconstrucción de la unidad del partido le ocasionó finalmente la pérdida del poder y el acceso alternativo de Cánovas. El general Martínez Campos, próximo a la regente, jugó el papel de intermediario en la resolución de la crisis, al subrayar la propia división del partido liberal.

En el partido conservador se produjo la escisión de Romero Robledo. Su rotunda oposición al traspaso de poderes en 1885 (*Pacto de El Pardo*), aparte de la tensión permanente con el otro delfín de Cánovas, Francisco Silvela,

le colocó al margen del partido conservador. En unión del general López Domínguez, igualmente escindido del partido liberal, creó un fugaz nuevo partido, *el partido reformista* que no llegará a consolidarse. Silvela, el eterno antagonista de Robledo, ridiculizaba así en el Congreso la formación del nuevo partido: *¿Es que su señoría va a representar en la política una mayor extensión del sufragio, una mayor amplitud en la libertad de comercio, en los derechos de reunión y asociación, en la libertad de imprenta, un cambio de concepto en el poder o en la autoridad pública, una reforma constitucional en lo que se refiere a la soberanía, algo, en fin, que se relacione con sus procedencias revolucionarias? Bien valía la pena de que su señoría hubiese dicho algo acerca de esto, porque esto es lo que constituye la vida, el nervio, el espíritu de todos los partidos y de todas las disidencias más o menos fundadas, más o menos justificadas, y esto hace que después la opinión pública decida, convenientemente ilustrada, si está justificada, efectivamente, una disidencia o no en necesidades o conveniencias públicas.*

Lo malo es que este juicio crítico podía ser aplicable a cualquier otro partido de la Restauración. No era la defensa o vinculación a un programa determinado lo que justificaba la adhesión de la opinión y la adquisición de la mayoría parlamentaria. En la mayor parte de los temas no había apenas diferencias programáticas entre los conservadores y los liberales, mucho menos entre las distintas familias que componían esos partidos.

Durante la Regencia continúa y se agudiza la decadencia del movimiento republicano. Todavía en marzo de 1886 las tres tendencias republicanas, lideradas, respectivamente, por Ruiz Zorrilla, Salmerón y Pi y Margall, se presentan en coalición electoral con un programa común: los derechos del hombre, el sufragio universal y *la República como forma esencial de la organización democrática de los poderes públicos; la Constitución de 1869 y la ley Municipal de 1870 como legalidad provisional*. Pero el fracaso de la sublevación de Villacampa en Madrid (19 de septiembre de 1886) afectó de manera sustancial al partido de Ruiz Zorrilla y a las esperanzas republicanas en general. Significó especialmente el distanciamiento de Salmerón de las iniciativas insurreccionales de Zorrilla y el inicio de la formación de un nuevo partido, el centralista, que se constituirá en 1891 en torno a un programa preciso: unión ibérica, autonomía regional y municipal, servicio militar obligatorio, supresión del impuesto de consumos y representación de Filipinas en el Congreso.

Al otro lado del espectro republicano, el cumplimiento del programa liberal-democrático propició la integración de los posibilistas de Castelar en la coalición liberal, según el consejo del propio líder, quien ya en febrero de 1888 en un discurso parlamentario expresaba la compatibilidad entre la Monarquía y las libertades públicas como de hecho ocurría en algunos países europeos. Los federales de Pi y Margall quedaban como grupo minoritario, casi testimonial, con muy escasa capacidad de penetración e influencia, pues,

además de la propia debilidad organizativa, otras fuerzas políticas nuevas, aún incipientes, comenzaban a competir en la atracción de la tradicional clientela popular y urbana de los republicanos.

LOS CATÓLICOS. LA ESCISIÓN INTEGRISTA

La consolidación del régimen liberal y la política posibilista impulsada por el Vaticano agudizaron las divisiones en el seno de los católicos, que desde el principio de la Restauración se habían manifestado partidarios de la unidad católica y de la otra rama dinástica. En todas las legislaturas había una pequeña representación parlamentaria carlista, elegida en los distritos del Norte donde el carlismo había arraigado más. Pero la gran masa católica se retraía electoralmente o a falta de una opción política específica daba su voto a un partido dinástico, al margen del proclamado antagonismo catolicismo-liberalismo. Frente a estas posiciones acomodaticias, los *íntegros* o puros seguían al pie de la letra el contenido del folleto del jesuita Félix Sardá y Salvany, *El liberalismo es pecado*. Sus criterios y directrices eran seguidos mayoritariamente por los clérigos y los seglares españoles.

La escisión integrista en 1888, es decir, la separación de la obediencia de don Carlos, de Nocedal y un grupo de seguidores y periódicos *íntegros*, es la máxima expresión de la falta de unidad de los católicos en la acción política. En realidad, los orígenes del integrismo se encuentran en el grupo de *neocatólicos*, ultramontanos, constituido en tiempos de Isabel II frente a la política pro-italiana de la Unión Liberal. El Sexenio liberal-democrático había forzado la unión de los católicos en un frente común. Pero el fracaso bélico y político del carlismo hizo resurgir el partido integrista. Rivalidades personales por la jefatura del partido carlista en España contribuyeron a plantear la escisión.

Esta situación, por su propia naturaleza la más ineficaz e inútil, fue lo que impulsó al Vaticano a duplicar sus esfuerzos por conseguir unir a los católicos en una acción legal unitaria. A este objetivo responde principalmente la organización de Congresos católicos a partir de 1889, bajo el impulso de algunos obispos, como Sancha, especialmente identificados con la política vaticana. Pero, lógicamente, los Congresos católicos fueron precisamente lugares para la expresión y confrontación, a veces áspera, de las distintas tendencias (posibilistas o *mestizos*, carlistas e integristas), más que ocasiones para la unidad.

Durante la Regencia, al margen de los partidos clásicos, dinásticos, republicanos, carlistas, aparecen algunas movilizaciones sociales más o menos incipientes, que en algún caso se convierten en germen de futuros nuevos partidos políticos: el catalanismo, la Liga Agraria, el movimiento socialista, el movimiento católico.

La exposición de Barcelona de 1888 y la organización de algunas pro-

testas económicas de carácter proteccionista son una buena ocasión para consolidar el sentimiento nacionalista y los primeros pasos organizativos del catalanismo como movimiento político.

La Liga Agraria fue valorada ya por Gabriel Maura Gamazo, en su *Historia de la Regencia*, como un partido frustrado. Varela Ortega ha enfatizado la explotación política que de ese movimiento hicieron los políticos dinásticos.

En estos años el partido socialista afianzó su propaganda (tras la fundación de *El Socialista*) y dio sus primeros pasos organizativos (congresos fundacionales), pero aún estaban muy lejos de representar algo políticamente.

Alentados por el Vaticano, algunos obispos y seglares intentan en vano configurar en estos años, a través de los Congresos católicos, una acción política coordinada y unitaria.

En este sentido se puede hablar del despertar de movilizaciones sociales, potencialmente partidos políticos, al margen de los partidos dinásticos. A cada una de estas movilizaciones nos referiremos más adelante.

EL IMPACTO EN ESPAÑA DE LA CRISIS ECONÓMICA FINISECULAR

Es difícil entender la historia de la regencia sin considerar el alcance y el impacto de la crisis económica finisecular. Durante mucho tiempo la historiografía no tuvo en cuenta este factor tan decisivo para comprender fenómenos como el movimiento de la Liga Agraria, los conflictos sociales en el campo, la emigración a Ultramar o el giro proteccionista en la política comercial del Estado que se opera a partir de 1890. Sin embargo, el desarrollo reciente de la historia económica, y más concretamente de la historia agraria, nos permite conocer hoy con bastante profundidad los perfiles de la crisis española, sus efectos económicos y sociales, la cronología, las respuestas o alternativas, y, en alguna medida, su impacto, diferente según sectores de producción, regiones y grupos sociales. Quedan aún muchas investigaciones sectoriales por hacer y debates pendientes entre diferentes interpretaciones de la crisis, pero sabemos ya bastante el peso que, al igual que en otros países europeos, tuvo la crisis en el sector agrario y en el conjunto de la economía española.

En primer lugar, como planteó bien el pionero estudio de Garrabou (artículo publicado en la revista *Recerques* en 1975), la crisis española hay que entenderla en el contexto de la crisis internacional. Una crisis de superproducción, de reajuste y redistribución del mercado en el momento en que el sistema capitalista adquiere una dimensión universal. En concreto, la crisis de la agricultura europea es consecuencia de la concurrencia de nuevos países, capaces de producir más cantidad y más barato. El ferrocarril y el vapor, al abaratar y reducir el tiempo de transporte de las mercancías, impul-

saron la competencia de los nuevos países productores. Los efectos sobre la agricultura se reflejaron inmediatamente desde la mitad de los años setenta, en primer lugar en Gran Bretaña, por el aumento sustancial de las importaciones de cereales, el descenso de los precios y la reducción de las explotaciones y, en general, de la renta de la tierra.

Algunos países, como Gran Bretaña y Dinamarca, parece que se adaptaron a la nueva división internacional del trabajo y dejaron que la población y producción agraria disminuyeran en beneficio de otros sectores. Sin embargo, la mayoría de los países europeos, Francia, Alemania, Italia y Portugal, donde el peso económico y político de los propietarios era importante, reaccionaron con barreras arancelarias proteccionistas. En todos ellos se impusieron en todo caso, a medio plazo, transformaciones modernizadoras del sistema de producción, para reducir costes y aumentar la productividad.

Los perfiles de la crisis española

En España, quizá con algo de retraso, y con algunas peculiaridades acordes con las especiales características de la estructura y la producción agraria, se manifiesta igualmente la crisis agraria. Tras un período de expansión desde los años cincuenta, hacia 1885 aparecen los signos de la crisis: aumento sustancial de las importaciones de cereales, descenso de los precios, más en el interior que en la periferia y descenso de la producción. Las expresiones de preocupación de los interesados, Asambleas de Agricultores y Liga Agraria, y las manifestaciones de presión proliferan también en esos años de 1885 a 1890. La Información sobre la crisis agropecuaria convocada en 1887, levanta acta de las preocupaciones y las demandas de los sectores y grupos afectados por la crisis.

La crisis afecta de manera especialmente intensa a la producción de cereales, especialmente al trigo, y a las zonas del interior, Castilla, Extremadura, Andalucía, Aragón, más que a otras. Precisamente éstas son las regiones que participaban más en la Información. Pero también afecta a otras producciones como la seda, la remolacha azucarera...

Un caso aparte lo constituye la vid. La profundidad de la crisis del viñedo, posterior a 1891, está en relación con la gran expansión previa de este cultivo que el impacto de la filoxera en Europa había posibilitado. La llegada de la enfermedad a los viñedos españoles provoca la crisis profunda.

La producción ganadera también es afectada por la crisis. Un caso concreto es el de las exportaciones de vacuno gallego a Inglaterra, que se van a ver súbitamente frenadas.

La crisis afecta de forma intensa, aunque distinta, a los grupos sociales implicados en la producción agraria: grandes propietarios, arrendatarios, pequeños propietarios y colonos y jornaleros. En toda Europa la crisis provocó un inevitable descenso de la renta de la tierra. También en España, aunque

según los estudios de Ricardo Robledo sobre Salamanca y Castilla, la recesión duró poco tiempo, pues a partir de 1895 se observan signos de recuperación. La movilización de los agricultores en esos años es sobre todo una forma de reacción ante la crisis.

Pero, además de la demanda de protección en forma de barreras arancelarias, los empresarios agrícolas desarrollaron una serie de medidas de respuesta a la crisis que Robledo ha analizado con rigor para el caso castellano: cambios en los contratos de arrendamiento.

La crisis afectó a los grandes propietarios y arrendatarios, pero sobre todo arruinó a los pequeños propietarios y colonos, forzándolos en muchos casos a emigrar. Bernal ha puesto especial hincapié en recordar los *costes sociales* de la crisis agraria, ya que las barreras arancelarias favorecieron especialmente a los grandes propietarios y arrendatarios.

La respuesta proteccionista del Estado la asumen los conservadores, con Cánovas a la cabeza. La influencia de la presión de los trigueros en el giro proteccionista de la política comercial es un tema polémico en la historiografía actual, después de que Varela Ortega, en *Los amigos políticos*, planteara la relativa autonomía de los políticos dinásticos respecto a esas presiones, o de otra manera, la incapacidad real de esos grupos para influir en la política económica. No se puede negar, sin embargo, según plantea bien José María Serrano, el indudable impacto de la crisis y de la presión de los agricultores en la conversión de los políticos conservadores, pero también los liberales, al proteccionismo. La vuelta de Cánovas al poder en 1890 tiene ese profundo significado político.

De todas formas, como señala Bernal, la incapacidad de los políticos para dar una respuesta global y completa a los problemas agrarios, aparte de las barreras arancelarias, hace que los agricultores puedan ocasionalmente convertirse en base electoral de partidos regeneracionistas y regionalistas.

Las interpretaciones

Una abundante historiografía reciente centrada en el estudio de la crisis finisecular española, desde que Garrabou planteara, en 1975, la crisis agropecuaria española en el contexto de la crisis general europea, nos permite hoy caracterizar bastante bien los perfiles específicos de esa crisis.

La toma de conciencia de esa crisis y los primeros intentos de explicación y de respuesta se producen precisamente durante el *Parlamento largo*; es entonces cuando según la práctica habitual de la época se convoca una Información general sobre la crisis agropecuaria, cuya documentación nos aporta hoy datos de gran interés, tanto sobre la realidad productiva como sobre la conciencia y mentalidad de los coetáneos, individuos y grupos.

Bernal en una excelente revisión historiográfica sobre el tema resume precisamente la *visión de los coetáneos*, expresada abundantemente, a partir

de los ochenta, en numerosos estudios, informes, discursos, etc. Atendiendo a los argumentos utilizados para explicar la crisis, Bernal distingue:

— los *productivistas*: que achacan la crisis a la falta de productividad por el bajo nivel técnico de las explotaciones y apelan a la modernización como alternativa;

— los *estructuralistas*: para los que la estructura de la propiedad de la tierra, es decir, la persistencia del latifundismo y del minifundismo es la raíz de todos los males.

— los *proteccionistas*: para los que la clave de la solución está en el arancel proteccionista, sin hacer ninguna referencia a otros factores económicos tan importantes como la incidencia del ferrocarril, las disponibilidades de capitales, la cuestión del crédito rural, etc.;

— finalmente, aquellos que, confundiendo las causas con las consecuencias, achacan a la emigración, el asociacionismo obrero, el caciquismo y el absentismo de los propietarios la responsabilidad de la crisis.

Lo que importa subrayar es que esta visión de los coetáneos ha sido reproducida durante mucho tiempo después por los regeneracionistas y los historiadores, que han formulado diversas hipótesis sobre el estancamiento agrícola español en el período 1872-1914: *Reducido a la lógica interna del sector, la economía agraria y los problemas inherentes fueron un pretexto más para reinterpretar, en visión agrarista-reformista o conservadora, toda la historia de España.*

Es precisamente ese tópico del estancamiento agrario español durante la Restauración el que ha sido revisado sustancialmente por la investigación del *Grupo de estudios de historia rural*: el estudio global de la producción agraria y algunos estudios regionales refutan la tesis del estancamiento; es inexacto que el crecimiento se haya logrado sin aumentos significativos de la productividad. Según resume el propio Bernal, esta revisión historiográfica implicaría: *una superación del planteamiento reduccionista que hacía coincidir por completo la crisis agraria con la crisis triguera; un cuestionamiento de las hipótesis que hacían recaer la responsabilidad de la crisis en el atraso e inmovilismo del sector agrícola.*

Aun aceptando los signos de modernización del sistema productivo aportados por la investigación de este grupo, no se trata de un fenómeno generalizable, según Bernal, sino más bien puntual, localizado en algunas zonas, y con relativa escasa incidencia en la economía del conjunto.

En una posición intermedia entre la visión pesimista de una agricultura estancada y la optimista de una agricultura incorporada a transformaciones capitalistas, estaría la visión de Bernal: persistencia de un sistema arcaico aunque rentable, tanto si se analiza la gran explotación como la pequeña. Algo parecido dice Robledo cuando distingue la alta rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas, tras un breve período de crisis (1885-1895), con el bajo nivel de productividad de esas mismas explotaciones si se compara con los niveles europeos de la época.

Los efectos sociales de la crisis

Al margen de esta discusión sobre la naturaleza y el impacto económico de la crisis agraria en el contexto del proceso de modernización, importa también analizar su coste social y su relación con los condicionamientos específicos de la estructura social española. Desde este punto de vista, la pervivencia de restos del régimen señorial (los regímenes consuetudinarios del foro en Galicia y la rabassa en Cataluña), el impacto de la última desamortización de los bienes comunales todavía pendiente de culminación en esos años ochenta, la progresiva concentración de la propiedad de un lado y, de otro, la ruina de pequeños propietarios obligados a emigrar, son rasgos que caracterizan específicamente la crisis española: *El recurso al endeudamiento hipotecario por pequeños y medianos campesinos así como el impago de contribuciones e impuestos originó que en determinados momentos más de un millón de fincas, a finales del siglo XIX, estuviesen confiscadas por la Hacienda Pública o que muchos campesinos perdiesen su patrimonio por abuso del recurso hipotecario.*

Que el coste social de la crisis recayó fundamentalmente sobre las clases populares se demuestra por el relativo estancamiento de los salarios. Entre 1870 y 1890, el salario medio por día trabajado era de una peseta en faenas ordinarias y algo más en faenas de recolección. El estancamiento de los salarios en los niveles de comienzos de siglo, muy por debajo de los europeos, explicaría la resistencia de las explotaciones a la crisis, y la recuperación de su rentabilidad, pasado el peor momento, sin alterar sustancialmente su productividad.

El aumento de la conflictividad social en el campo, no sólo en Andalucía, expresa el impacto social de la crisis. En Levante los colonos protagonizan luchas en 1878-79. En Cataluña la crisis de la filoxera radicalizó la protesta de los rabassaires en la década de los noventa. En Galicia, la lucha por los foros de 1904. También la conflictividad en Castilla, a principios de siglo, genera una de las primeras iniciativas informativas del recién creado Instituto de Reformas Sociales. Numerosos testimonios literarios (Clarín en 1882, Azorín, Blasco Ibáñez, Machado, Unamuno) levantan acta de la miseria campesina y la conflictividad social que genera (*La Mano Negra* en 1883, la ocupación de Jerez en 1892).

Según la investigación de Robledo sobre la renta de la tierra en Castilla, especialmente en Salamanca, la incidencia de la crisis aparece con retraso, como ya había señalado Garrabou, y dura menos tiempo; según varios indicadores, se puede fijar cronológicamente entre 1885 y 1896. Constata como signos de la crisis la disminución de la renta y una sustitución momentánea de la renta en especie por el pago en metálico.

La protesta de los Congresos agrícolas y de la Liga Agraria y de contribuyentes en los años 1885-90 es, según el análisis de Robledo, el mejor testimonio de la inquietud de los propietarios por el descenso de la renta. La

política proteccionista es, por tanto, desde la perspectiva de los propietarios, la alternativa a la crisis.

A diferencia del impacto de la crisis en Europa, en Castilla no se produce un retroceso de la propiedad territorial, ni un alza de los salarios o un declive de la renta territorial. Lo mismo parece ocurrir en Extremadura o Andalucía. El propietario resiste bastante bien y logra traspasar al rentero una parte importante del coste de la crisis. En la periferia, sin embargo, la situación se parece más, en este sentido, a la europea. En Mallorca y en Valencia, el propietario cede en muchos casos la propiedad a los colonos. También en Galicia se produce el acceso de los arrendatarios a la propiedad.

La emigración ultramarina

Uno de los costes sociales más claros de la crisis es el aumento de la emigración rural y ultramarina. La corriente migratoria a Ultramar se intensificó en los comienzos del siglo xx (la media anual de emigrantes en el decenio 1904-1913 es de 148.177), pero es un fenómeno ya relativamente importante a partir de los ochenta del siglo xix, coincidiendo con el impacto de la crisis agraria. La media anual de emigrantes en el período 1882-89 es de 62.305, y en los años 1890-1903 es de 59.072.

Los emigrantes españoles a Sudamérica son mayoritariamente, como subraya Ricardo Robledo (de quien tomamos estos datos), agricultores arruinados por el impacto de la crisis agraria. Para el período 1891-1900, de un total de 728.282 emigrantes se declaran labradores un 43,46 por 100. Contando con una parte de los que no especifican profesión, Robledo estima que el porcentaje de emigrantes campesinos hay que situarlo entre un 60 y un 70 por 100. Otros datos significativos, como la coincidencia de los meses de más alta emigración con los de paro estacional en el campo, confirman el carácter eminentemente campesino de la emigración a Ultramar. Se trata, por otra parte, de una emigración progresivamente definitiva, sin retorno. Pues si en 1890-1900 el porcentaje de los emigrantes con familia es del 25 por 100, en la década siguiente este porcentaje sube al 42,2 por 100. En cuanto al destino, a pesar de las normas restrictivas que tratan de encauzar la emigración hacia las colonias, los emigrantes se dirigen preferentemente a Argentina, Brasil y Uruguay, además de Cuba.

La estrecha relación de la emigración con el impacto de la crisis agraria es evidente. En algunos casos especialmente llamativos, como el caso de la emigración masiva del pueblo salmantino de Boada, en 1905, citado por Robledo, se trata de una verdadera expulsión. Las condiciones de arrendamiento, especialmente duras, la pervivencia actualizada de prácticas señoriales, la progresiva expropiación de los bienes comunales, colocan a los agricultores en una situación tal de ruina que se ven forzados a la emigración como única alternativa.

Que este proceso migratorio ha cobrado antes de terminar el siglo unas dimensiones importantes, lo pone de relieve el hecho de que el V Congreso Católico Nacional, celebrado en Burgos en agosto de 1899, incluya como tema de estudio este problema dentro de la sección dedicada al estudio de la cuestión social, preferentemente rural.

EL MOVIMIENTO PROTECCIONISTA COMO RESPUESTA A LA CRISIS

Entre las movilizaciones de la opinión con alguna pretensión de influir en la vida política durante la Regencia se encuentran las manifestaciones y asambleas proteccionistas. La polémica proteccionismo-librecambismo se plantea de forma recurrente a lo largo de toda la Restauración. La suspensión o desarrollo de la base 5.^a del arancel de Figuerola (1869), que implicaba un progresivo desmantelamiento de todas las barreras arancelarias, fue el argumento central de la polémica ideológica y política en las últimas décadas del siglo XIX. Recientemente, José María Serrano Sanz ha sintetizado muy bien la historia de la política comercial española entre 1875 y 1895 en su libro *El viraje proteccionista en la Restauración*, matizando adecuadamente ciertos tópicos, como el de atribuir exclusivamente a los conservadores, y desde época muy temprana, la adopción de una política proteccionista.

El giro proteccionista no se da en el inicio de la Restauración, sino a partir de finales de los ochenta coincidiendo con una crisis agropecuaria y con la revisión doctrinal del pensamiento económico liberal que se opera en toda Europa. Durante el *Parlamento largo* son los trigueros castellanos y la Liga Agraria quienes protagonizan y lideran la demanda proteccionista. A partir de 1890 los políticos de turno, preferentemente los conservadores, pero también los liberales, asumen como directriz básica de su política comercial los aranceles proteccionistas.

La historiografía más reciente está revisando la imagen clásica del frente común proteccionista, de textiles catalanes, trigueros castellanos y siderúrgicos vascos, para explicar el giro proteccionista de 1890.

En primer lugar, parece claro que la presión proteccionista no fue convergente en el tiempo, lo que ya había sido puesto de relieve por algunos historiadores. Primero protestan los textiles catalanes frente al tratado comercial con Francia de 1882 y con Inglaterra en 1886; después toman el relevo los trigueros castellanos (la Liga Agraria se constituye en 1887). En 1894, con la fundación de la Liga Vizcaína de Productores, los metalúrgicos vascos encabezan el movimiento proteccionista.

Además se ha puesto de relieve, revisando también la tesis de la presión homogénea y convergente de un bloque de poder integrado, las diferencias reales de intereses entre distintos grupos de empresarios, con intereses a menudo contradictorios. Aranceles o acuerdos favorables para unos, son perjudiciales para otros, incluso dentro del mismo sector de producción.

Por otra parte, la presión de los grupos económicos no siempre es eficaz políticamente. La imagen de la estrecha correspondencia entre la demanda de unos grupos patronales y la política económica del Estado en un determinado momento no se ajusta siempre a la realidad. Ya Varela Ortega, refiriéndose a la presión de los trigueros, había insistido en el desfase entre sus demandas proteccionistas y la política económica del Gobierno, en su incapacidad para incidir en las directrices económicas del Gobierno, pues el político que en definitiva apadrina y capitaliza el movimiento de la Liga Agraria, Germán Gamazo, utiliza la presión del movimiento en función de sus coyunturales intereses políticos. Las luchas de facciones dentro del partido liberal se anteponen a la presión de los grupos económicos. La tesis de Varela Ortega ha sido contestada o matizada por otros autores, que consideran, por ejemplo, la fuerte incidencia de la demanda proteccionista de los trigueros en el giro proteccionista de la política comercial de los Gobiernos a partir de 1890.

Al final de los ochenta sí se puede hablar de un frente común castellano-catalán que se expresa en el Congreso Económico Nacional, celebrado en Barcelona en 1888. Es en este momento cuando los políticos conservadores y un sector de los liberales (Gamazo) se convierten al proteccionismo, en el contexto de la crisis agraria y de una revisión general, en toda Europa, de los principios y de la política librecambista. Pero la presión proteccionista de los metalúrgicos es en todo caso posterior a 1890, como ha argumentado el reciente libro de Arana sobre *La Liga Vizcaína de Productores*.

Los trigueros castellanos y la Liga Agraria

El movimiento de presión en pro de una política proteccionista en la segunda mitad de los ochenta lo protagonizan de manera destacada los trigueros castellanos, como ha estudiado J. Varela en *Los amigos políticos*. Se trata de un capítulo especialmente pertinente en su obra, pues ayuda a entender, según su óptica, la verdadera naturaleza, predominantemente caciquil, del sistema político de la Restauración. Según Varela, los diversos intentos de creación de plataformas y organizaciones expresamente apolíticas, muy principalmente la Liga Agraria, resultan ineficaces e inútiles como posible alternativa política, precisamente en la medida en que son manipuladas y controladas de forma *oportunist*a por los partidos dinásticos. Concretamente subraya el control que Gamazo y la facción liberal que lidera establece sobre ese movimiento proteccionista, anteponiendo sus intereses estrictamente políticos, dependientes de la relación de fuerzas existente en cada momento en el partido liberal entre las distintas facciones, a los intereses de los agricultores. Son constantes las quejas de traición y las expresiones de desencanto de la prensa agraria (*El Norte de Castilla*) ante los silencios, ausencias y faltas de apoyo de Gamazo y su grupo en situaciones políticas concretas.

Lo que ocurre con la *Liga Agraria* o la *Junta Protectora de la Agricultura* es revelador del sistema de poder existente en la Restauración: los partidos no son de ninguna manera partidos de opinión; para su acceso o defección del poder no dependen de ese apoyo, y, por tanto, según esa tesis, se pueden permitir el lujo de prescindir, hasta cierto punto, de esas presiones. El historiador Maura Gamazo recoge esta significativa manifestación de Romero Robledo en la segunda Asamblea de la Liga Agraria: *En cuanto a mí se refiere, ya comprenderéis que no puedo esperar nada de la Liga; en cambio, ella puede esperar mucho de mí.*

Ya Gabriel Maura Gamazo en su historia de la Regencia se lamentaba de la frustración política que significó el movimiento en torno a la Liga Agraria, tras ponderar la importancia y el significado original de dicho movimiento en el panorama político del momento:

La Liga Agraria, que sacó del retraimiento lugareño a numerosos terratenientes urbanos y labradores rurales, reforzada por las entidades económicas catalanas, propugnadoras también del proteccionismo arancelario, llegó a adquirir gran autoridad proporcionada a su notoria consistencia; mas luego de alcanzar este primer desarrollo no creció ni se robusteció normalmente, y pereció, al fin, víctima de la raquitis. Estimuláronla sus directores para que, posesionándose de lo que era suyo, condicionase el apoyo electoral de sus miembros, decisivo en muchas comarcas, hasta tener representantes propios en las corporaciones provinciales y municipales. La malicia madrileña vio en estos estímulos un ardid caciquil inédito; la timidez de los ligueros, para tales andanzas ineducados, prefirió seguir esperándolo todo de la política al uso, y no llegó a formarse siquiera el incipiente núcleo de ciudadanía activa, que habría de permanecer neutral entre las parcialidades de personas y aun de ideas abstractas, para atender tan sólo a secundar cualesquiera obra de gobierno, positiva y acorde con sus intereses.

Si en aquella época y en las regiones más agrícolas de España llegara a establecerse de veras una fuerza social y política tal como se proyectó, quizá se hubiera transformado en plazo breve la estructura interna de España...

Las asambleas, congresos y manifiestos agrarios castellanos se sucedieron desde 1885 (contra el tratado con Estados Unidos que propiciaba su relación económica con Cuba en detrimento de los intereses harineros castellanos en las Antillas) hasta la primavera de 1888 en que se celebra en Valladolid una manifestación y asamblea multitudinarias, seguidas en el verano de otras asambleas en Sevilla, Guadalajara, Tarragona y Borjas Blancas (Lérida). Anteriormente, en el otoño de 1886, el movimiento de oposición al ministro de Hacienda, Camacho, partidario de continuar adelante con la desamortización de dehesas boyales, marca un hito de esa movilización agraria.

Aparte de las asambleas y congresos, dos organizaciones merecen ser destacadas: *La Junta Protectora de la Agricultura*, fundada con pretensiones de independencia en la Asamblea Regional Agrícola de Medina del Campo

(otoño 87), y, sobre todo, *La Liga Agraria*, fundada asimismo con carácter apolítico y pluripartidista. La 2.^a Asamblea de la Liga Agraria se celebraría en enero de 1889 con mayor presencia de políticos y periodistas que de agricultores, lo que dice mucho del verdadero carácter de esta organización y del control político que progresivamente ejercerá sobre ella la facción gamacista del partido liberal.

Varela enfatiza el desfase entre los objetivos sinceramente *regeneracionistas* y *democráticos* de los agricultores castellanos y la política oficial y caciquil, que controla, encauza y utiliza ese movimiento, desnaturalizando y frustrando sus verdaderos objetivos. A principios de 1888 había aumentado notablemente la presión proteccionista, pero apenas tenía eco parlamentario. En cambio, en el verano de ese mismo año los gamacistas deciden apoyar el movimiento proteccionista dentro de la operación política general de acoso a Sagasta por parte de varias facciones disidentes del partido liberal. Más adelante, en el verano de 1889, los gamacistas que ahora buscan el acuerdo con Sagasta, tratan de controlar y frenar el movimiento proteccionista. Al final de este año y principios de 1890, según Varela, *Gamazo se había hecho ya con el control de toda la Liga*.

Otros autores discrepan más o menos matizadamente de la tesis de Varela Ortega, y conceden al movimiento de los trigueros castellanos una importante responsabilidad en el giro proteccionista de los políticos dinásticos, con Cánovas a la cabeza, a partir de 1890.

El partido Liberal revisa sus planteamientos librecambistas

El final de los ochenta significó el fin del optimismo librecambista. Tanto entre los liberales como entre los conservadores se cuestiona el librecambio, con lo que el pensamiento económico español, por otra parte muy pobre, acogía las nuevas tendencias en Europa.

Durante el *Parlamento largo* los liberales evolucionan hacia un prudente *oportunistismo* (tercera vía pragmática entre el proteccionismo y el librecambismo doctrinales) que pone las bases del giro proteccionista, protagonizado por los conservadores desde 1890. Este giro en la política comercial coincidía con el cambio de coyuntura económica, la crisis agropecuaria y los problemas económicos subsiguientes.

En un contexto internacional de revisión del liberalismo doctrinal clásico, en toda Europa triunfa la tendencia prointervencionista en lo económico y en lo social. Los catalizadores de este giro doctrinal son el auge nacionalista (nacionalismos imperialistas), la creciente preocupación de las clases dirigentes por la cuestión social y la Gran Depresión o crisis económica (1875-95).

En suma, la subida de aranceles se generaliza en toda Europa en los años ochenta: Austria-Hungría en 1882, Italia en 1883 y 1887, Suiza en 1884

y 1891, Suecia y Portugal en 1887, Bélgica en 1888, y Rusia en 1880, 1891 y 1893; también en Estados Unidos en 1890 (ley Mackinley). A partir de 1890 España se incorporaba, pues, a una corriente internacional.

La crisis agropecuaria se manifiesta en España, como ya se ha señalado, con cierto retraso respecto a la europea, pero con características similares. En primera instancia los liberales evitan responder a la crisis con medidas arancelarias (por otra parte, los aranceles estaban ya altos). Por el contrario, ensayan medidas alternativas de apoyo a la producción: rebajas fiscales, promoción y subvención de reformas técnicas, abaratamiento del transporte interior (en 1888 se presenta un proyecto para completar la red mediante ferrocarriles secundarios). Pero la ineficacia de estas medidas alienan el afianzamiento, dentro del mismo grupo liberal, de las tesis proteccionistas (revisión de los aranceles): es lo que expresa el grupo de Germán Gamazo en 1890.

Cada vez más, destacados miembros del fusionismo, López Puigcever, Moret... abandonan el librecambismo radical. Sagasta propicia, como política de equilibrio entre las distintas familias liberales, el paso hacia el *oportunismo*. En el frente librecambista sólo quedan algunos republicanos de formación krausista: Azcárate, Gabriel Rodríguez...

La mejor expresión de ese cambio de criterio en la política comercial de los liberales es su actitud hacia la famosa Base Quinta: *ni la aplican ni se deciden a derogarla. Lo primero, porque han comprendido su incompatibilidad con el régimen de tratados; lo segundo, porque no se quiere herir la sensibilidad de la corriente librecambista del partido*. Pero la ambigüedad es sólo aparente; pues en la práctica no aplican las rebajas del arancel previstas para 1886, y mediante algunas medidas significativas ponen las bases de la nueva política proteccionista de los conservadores:

— Mediante la creación de una comisión arancelaria (Real Decreto de 10 de octubre de 1889) encargada de informar sobre la conveniencia de aplicar la rebaja de aranceles. En esta comisión, presidida por Moret, triunfan, sin embargo, de manera clara las tesis proteccionistas (conservadores, gamacistas y representantes de la industria catalana, miembros de esa comisión, dejan claramente en minoría a los librecambistas);

— mediante la autorización para modificar el arancel, contenida en el artículo 38 de la ley de Presupuestos de 1890-91. Autorización amplia que dejaba las manos libres a futuros Gobiernos.

El giro proteccionista de 1890

El viraje proteccionista no es patrimonio exclusivo de los conservadores al igual que la posición anterior librecambista no se puede atribuir exclusivamente a los liberales. Sin embargo, en la encrucijada de 1890 Cánovas expresa muy bien, con sus discursos en el Ateneo, el giro hacia el proteccio-

nismo económico y el intervencionismo social del Estado. Pero no se trata de un viraje total, global y absoluto hacia el proteccionismo. El arancel de 1890 es una primera respuesta, de carácter defensivo, a la crisis del cereal. Pero el arancel de 1891 es un viraje forzado ante la imposibilidad de renovar el acuerdo comercial con Francia.

El cambio político que supone el acceso de Cánovas al poder en julio de 1890 tiene un profundo significado económico: en ese momento la *cuestión económica* se había convertido en la hegemónica, una vez materializado en leyes el programa político de los liberales.

Para los analistas de la época la cuestión económica presentaba tres problemas fundamentales: el déficit presupuestario, la cuestión monetaria y la política comercial (en lo que se refiere a esta última, la cuestión central eran las demandas de los sectores de producción cerealistas, textiles catalanes, metalúrgicos), partidarios de un giro proteccionista, frente a otros sectores (vinícolas) interesados en el mantenimiento de la política de acuerdos comerciales.

Cánovas accede al poder con un amplio programa que pretendía responder a la vez a la demanda proteccionista de los trigueros y a la librecambista de los viticultores. Estas demandas no eran en principio incompatibles, por lo que no era imposible satisfacerlas a la vez.

Según Serrano, no se puede aceptar la tesis de Varela Ortega sobre la total ausencia de relación entre los políticos de la Restauración y los grupos económicos. Más bien lo que se revela es que la política comercial del Gobierno Cánovas (1890-92) responde prioritariamente a los intereses agrarios (cerealistas y vinícolas) mayoritarios en la sociedad española de la época. En 1890 la oferta proteccionista de Cánovas era la más sólida, frente a la de Romero Robledo (más oportunista), y a la de Gamazo (sectorial dentro del partido liberal).

LOS AÑOS NOVENTA

Según la periodización propuesta por Jover para el último cuarto del siglo XIX, la unidad fundamental de la etapa 1875-98 bajo el signo de la Restauración canovista, presenta caracteres significativamente distintos en cada una de las décadas. El inicio de los años noventa significa un giro. No se trata sólo del final de una larga etapa de gobierno de los liberales (*el Parlamento largo*) y de la culminación del desarrollo legal de las libertades contenidas en la Constitución de 1876. Significaba también el fin de la optimista era de los acuerdos comerciales y la imposición, como en toda Europa, de barreras arancelarias proteccionistas.

El reto político principal de la nueva etapa, la *aplicación del sufragio universal*, era prácticamente imposible de cumplir honradamente. Se trataba de una decisión prematura, que al no ir acompañada de las correspon-

dientes transformaciones económicas y sociales, no serviría para ampliar el campo de la ciudadanía, la participación política y la igualdad jurídica, sino que más bien, como el propio Cánovas había advertido, obligaría a extender las prácticas caciquiles. De todas formas, el sufragio universal posibilita quizá una mayor capacidad propagandística e incluso electoral a viejas y nuevas fuerzas políticas extradinásticas. Coaliciones electorales republicanas logran algunos triunfos significativos en las ciudades, especialmente en la elección de concejales. Socialistas y regionalistas comienzan también a plantearse como alternativas políticas específicas. Los intentos vaticanos de impulsar, desde los Congresos Católicos, la organización política unitaria de los católicos tienden también a aprovechar ese nuevo marco del sufragio universal. Por tanto, aunque incipientemente, es posible que el sufragio universal propiciara antes del 98 una cierta movilización política. Lo que ocurre es que todo quedará condicionado y en cierto modo paralizado, a partir de 1895, por el factor dominante, la guerra de Cuba.

La paz social de la Restauración se iba a encontrar alterada temporalmente con un movimiento obrero, aún muy minoritario y escasamente influyente, pero con una fuerza propagandística y organizativa creciente y alarmante: los mítines y manifestaciones del 1.º de mayo de 1890, 91 y 92; los atentados anarquistas de Barcelona; algunas huelgas especialmente virulentas, como la de Bilbao de 1892. Todo ello crea entre la burguesía y la opinión pública un estado de alarma y de especial preocupación por la llamada *cuestión social*, que da lugar a numerosos discursos y debates académicos, encuestas periodísticas, y algunos proyectos parlamentarios de leyes de protección laboral, que de forma recurrente, siempre en torno al 1.º de mayo, presentan, sin éxito y con escasa convicción, los Gobiernos de turno, hasta 1900, en que los proyectos presentados por Dato se convierten en leyes.

El desenlace de la guerra del 98 marcará la generalizada toma de conciencia regeneracionista, pero ya desde el principio de la década hay expresiones conscientes de la crisis del sistema político y de la necesidad de su regeneración. Además de publicaciones como las de Costa o Macías Picavea, desde el propio Gobierno el proyecto de reforma de la Administración local y provincial que presenta Silvela en 1891, o las reformas de la Administración ultramarina que defiende Maura en 1893, responden a ese clima reformista o pre-regeneracionista.

La celebración del IV centenario del descubrimiento de América es una ocasión para la recuperación del papel internacional de España y, sobre todo, para el desarrollo de las relaciones hispanoamericanas tras el trauma de la independencia de comienzos de siglo.

Pero la década está marcada sobre todo por la presión de la situación colonial. Primero en Melilla (1893), y a partir de 1895, en Cuba, en un conflicto que cada vez se hace más absorbente. A partir de 1895 toda la vida económica, social, política y cultural está marcada por la guerra de Cuba y sus múltiples incidencias: el empréstito económico para financiarla, las re-

clutas de soldados, los llamamientos patrióticos, las reformas de la Administración ultramarina para quitar razones a la rebelión, el fuerte debate en la opinión pública sobre la legitimidad de la guerra.

La política de los conservadores (1890-92)

La presencia de Silvela, como ministro de Gobernación, parece dar el tono al Gobierno formado por Cánovas el 5 de julio de 1890. Sus primeras circulares a los gobernadores civiles y la organización de las primeras elecciones con sufragio universal expresan una voluntad de aceptación sincera de las leyes liberalizadoras aprobadas en el *Parlamento largo* y una intención reformadora de los usos y prácticas habituales. Ahora bien, el caciquismo no se eliminaba por una mera inhibición o mayor neutralidad del Ministerio de Gobernación. En todo caso, el resultado de esa mayor pasividad o *neutralidad* del Gobierno fue una mayoría relativamente precaria y un ascenso significativo en las ciudades de las candidaturas republicanas (según los datos que ofrece F. Almagro, 271 diputados conservadores, 95 liberales, 29 republicanos, seis carlistas, ocho martistas, 13 de Romero Robledo y tres independientes). El mayor éxito republicano se produjo, sin embargo, en las subsiguientes elecciones municipales (10 de mayo de 1891): triunfaron en Madrid, Valencia, La Coruña, Córdoba y algunas otras ciudades importantes, donde las distintas tendencias republicanas acudieron en coalición.

El otro dato significativo de las primeras elecciones generales por sufragio universal fue el retraimiento del partido autonomista cubano, en protesta por el mantenimiento en la isla de unas condiciones electorales restrictivas, muy alejadas precisamente del sufragio universal.

La mejor demostración del fracaso inicial en la aplicación del sufragio universal fue el alto grado de abstención. Según algunos cálculos sólo participó en los comicios una tercera parte del censo. Las fuerzas políticas emergentes, socialistas, católicos y regionalistas, aún no tenían capacidad organizativa, ni de convocatoria.

Aunque no llegó a prosperar parlamentariamente, uno de los objetivos reformistas más característicos de la gestión de Silvela, como ministro de Gobernación, fue la preparación de un proyecto de reforma de la Administración local, antecedente directo de los proyectos descentralizadores presentados por Maura en el comienzo de siglo. Sánchez de Toca, colaborador de Silvela en la elaboración de ese proyecto, glosaría con orgullo, después del 98, este antecedente reformista, capaz, por un lado, según él, de encauzar el movimiento regionalista, y, por otro, de socavar algunas de las bases del caciquismo. El proyecto encajaba dentro de un objetivo más amplio de moralización de la Administración muy característico del programa de Silvela.

La vuelta de Romero Robledo a las filas del partido conservador agudizó la tensión Silvela-Romero en el seno del partido y del Gobierno. Según ca-

racteriza bien F. Almagro, se trataba de dos temperamentos políticos absolutamente incompatibles, aunque igualmente necesarios al jefe de los conservadores: *Mientras el arte romerista de gobernar —dice F. Almagro— consistía en ir tirando, el de Silvela cifraba su puro empeño en la reforma del Estado, en la educación del ciudadano, en el saneamiento de los usos políticos (...) En cambio, evidentemente, le faltaba temperamento político. Muy intelectual, de extremada agudeza crítica, animado por una constante preocupación eticista, refractario al vulgar juego de los intereses, no podía convivir en el mismo partido y Gobierno que Romero Robledo, sin un rozamiento continuo. Le dolía la estimación que Cánovas dispensaba a Romero Robledo porque su «modus operandi» le era útil, y el partido mismo prefería al «pollo de Antequera», tan amigo de sus amigos.*

De modo que el acceso de Romero al Ministerio de Ultramar provocó al poco tiempo la dimisión de Silvela (19 de noviembre de 1891). Ya desde fuera del Gobierno, pero con el apoyo desde dentro de algunos partidarios, como Fernández Villaverde en Gobernación y Dato como subsecretario, impulsó la revisión de la gestión como alcalde de Madrid de Alberto Bosch, cualificado romerista. Este asunto haría cada vez más irreconciliables a los dos líderes, y a corto plazo debilitaría la posición gobernante de Cánovas, provocando la crisis total y el acceso de Sagasta en diciembre de 1892.

Si la primera etapa del Gobierno Cánovas (en 1891) estuvo presidida por la gestión de Silvela, la segunda etapa lo estaría por la de Romero Robledo (en 1892). Como ministro de Ultramar impulsó una serie de reformas que alteraron la situación en Cuba y provocaron una fuerte oposición de los autonomistas. Las medidas tendían a paliar los efectos económicos del tratado comercial de 1891 con los Estados Unidos, mediante un considerable aumento de los impuestos.

La celebración del IV centenario del descubrimiento de América fue impulsada por el historiador Cánovas para recuperar el prestigio internacional de España. A las celebraciones conmemorativas en Madrid, Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, La Rábida y Palos de Moguer, hay que añadir sobre todo la celebración de varios congresos hispanoamericanos, histórico, geográfico, jurídico, mercantil, pedagógico, etc., y de tres exposiciones: la histórica-americana, la histórico-europea y la internacional de Bellas Artes.

Varios conflictos sociales, los acontecimientos de Jerez en 1892, las huelgas de Barcelona, Bilbao, Valencia y Valladolid, más la huelga de telegrafistas de julio de 1892, acosaron la imagen del Gobierno, poniendo a prueba sus declaraciones y propósitos social-reformistas. Cánovas, en 1890, había afirmado su giro intervencionista en un discurso en el Ateneo. Y en 1891 presentó sendos proyectos de ley sobre el trabajo de los niños, el de la mujer y sobre el descanso dominical. Sólo llegó a ser discutido este último, pero más como un proyecto político-religioso que propiamente social. Lo que se discutió, y lo que, en definitiva impidió su aprobación, fue la polémica sobre

las respectivas competencias de la Iglesia y del Estado en materia religiosa, según definían, por un lado, el Concordato y, por otro, la Constitución de 1876.

El Gobierno de los liberales (1893-95)

En diciembre de 1892 vuelve Sagasta al poder con un Gobierno de *notables*, con la excepción del joven Antonio Maura para la cartera de Ultramar, Vega de Armijo en Estado, Montero Ríos en Gracia y Justicia, López Domínguez en Guerra, Gamazo en Hacienda, Venancio González en Gobernación y Moret en Fomento. En suma, todos los jefes de fila de las familias del partido liberal. La desaparición de algunos líderes, como Martos y Casola, favorecía la reunificación del partido liberal, aunque pronto surgirían las disensiones internas, especialmente en torno a las reformas planteadas por el hombre fuerte del Gabinete, el ministro de Hacienda, Gamazo, y su cuñado, el joven ministro de Ultramar, Antonio Maura.

Los liberales volvían a gobernar con un programa moderado y prudente de reformas, en el que predominaba un sentido práctico y eficaz en la gestión, más que el planteamiento de grandes principios. La principal voluntad reformista la van a protagonizar, en buena medida, Gamazo en Hacienda y Maura en Ultramar, con su ambicioso proyecto descentralizador de la administración de Cuba. Otras reformas administrativas de la Administración judicial y de la militar provocaron la habitual reacción localista de las ciudades afectadas por los cambios de ubicación en las capitanías o la eliminación de audiencias en partidos judiciales.

Las elecciones generales se celebraron en marzo de 1893, sin sorpresas, deparando a los liberales una cómoda mayoría de 274 diputados. Junto a los 53 conservadores aparecía ahora una minoría silvelista de 14 diputados. Lo más destacable fue el triunfo de la candidatura republicana en Madrid, formada por la coalición de centralistas (Salmerón y Pedregal), federales (Pi y Margall y Benot) y progresistas (Ruiz Zorrilla y Esquerdo). Más importante aún fue la participación del partido autonomista cubano en estas elecciones, gracias a la importante ampliación del censo electoral que supuso una de las primeras medidas de Maura: la rebaja de la cuota para el ejercicio del sufragio a cinco pesos. Otra de las novedades políticas la constituyó la incorporación de posibilistas republicanos en el Gobierno de Sagasta, como expresión del apoyo manifestado por Castelar a la Monarquía democrática.

Además de la resistencia a los proyectos reformistas de Maura, y su fracaso subsiguiente, durante el año 1893 el Gobierno de Sagasta tuvo que afrontar algunos problemas nuevos y graves: los atentados anarquistas de Barcelona, la movilización prenacionalista en San Sebastián y, sobre todo, el conflicto militar en Melilla, con las consiguientes pérdidas humanas y el desgaste y desprestigio internacional. La atención del Gobierno se vio inevitable-

mente absorbida y condicionada por estos acontecimientos, que obligaron a respuestas excepcionales: una primera ley de represión del anarquismo, reclutamientos y envío de refuerzos a Melilla, y negociaciones con el sultán de Marruecos para obtener las correspondientes compensaciones.

Algunas de las medidas tomadas por Gamazo en Hacienda retomaban reformas administrativas planteadas por Camacho en los primeros Gobiernos liberales de la Restauración: la Inspección General y las provinciales, reorganización de la Tesorería central. Los Presupuestos generales de Gamazo preveían un superávit a fuerza de importantes recortes en los diversos Ministerios que desencadenaron las consiguientes tensiones y resistencias. Gamazo era el hombre fuerte del Gabinete; Moret y los demócratas monárquicos eran sus principales antagonistas. A esos planes de austeridad presupuestaria respondían la reorganización administrativa judicial y militar que tantas resistencias provocó. Las negociaciones de acuerdos comerciales con Alemania y otros países fueron ocasión para la discordia política entre las distintas familias del Gobierno: Moret los alentaba, mientras Gamazo, vinculado a criterios proteccionistas, los combatía.

Las reformas de Maura en Cuba

La situación en Cuba, a la altura de 1892, hacía urgente la adopción de una serie de reformas administrativas. A partir de 1888 había crecido en la isla el malestar económico por las consecuencias derivadas de la relación colonial. La demanda de una mayor flexibilidad en el comercio con Estados Unidos fue finalmente atendida por el acuerdo firmado por Cánovas, en junio de 1891, a costa de perjudicar algunos intereses peninsulares. Además, para compensar el descenso de los ingresos fiscales, como consecuencia de la rebaja arancelaria en el comercio cubano-norteamericano, el ministro Romero Robledo había planteado una serie de reformas (entre ellas una subida de impuestos) que provocaron el crecimiento del descontento insular y daban argumentos al partido autonomista. Atender los legítimos intereses comerciales cubanos atentaba directamente contra otros intereses metropolitanos. Ésta es la contradicción insalvable en que se veía inmersa la política reformista de Maura.

Los proyectos reformistas de Maura enlazan de alguna manera con la política planteada por Gamazo en 1886. En aquella ocasión, Maura, vicepresidente segundo del Congreso, ya intervino en defensa de las reformas administrativas planteadas por Gamazo.

La primera medida urgente fue la reforma electoral (Real Decreto de 28 de diciembre del 1892) por la que se rebajaba sustancialmente la cuota económica para adquirir la capacidad de elector. La medida tuvo como efecto inmediato la vuelta del partido autonomista a la contienda electoral, que consiguió siete de los 30 escaños en las elecciones generales. Estratégicamente,

el éxito de la política reformista de Maura dependía de su capacidad para integrar a los autonomistas en el sistema, lo que equivaldría a quitar fuerza al partido revolucionario independentista que se acababa de crear en el año 1892. Ahora bien, la política de Maura aceleró la división del partido españolista, la Unión Constitucional, y, en opinión de sus adversarios políticos, más que retrasar impulsaría el movimiento independentista.

Maura presentó en el Congreso su proyecto para el Gobierno y Administración civil de la isla de Cuba y Puerto Rico, el 5 de junio de 1893. El proyecto rectificaba la anterior división administrativa en seis provincias planteada por Romero Robledo, devolviendo de nuevo la máxima representación política al gobernador general, y a una sola Diputación Provincial, a los que se le concedían una serie de competencias administrativas significativas. Según la distribución de competencias prevista en el proyecto, los asuntos de Guerra y Marina, Relaciones Exteriores, Justicia y Orden Público y Política Financiera eran asignados al poder central; Obras Públicas, Comunicaciones, Fomento, Instrucción y Sanidad competían al Gobierno de la isla. La intención descentralizadora, que inspiraba el proyecto, se concentraba además en la confianza que otorgaba a los Consejos municipales electivos para la gestión de los intereses locales.

Las reacciones inmediatas que se registran en la Península y en Cuba anuncian los escasos apoyos y las múltiples resistencias parlamentarias que el proyecto encontraría en el debate parlamentario. En Cuba, la Unión Constitucional se opuso desde el principio frontalmente, mientras el partido autonomista, tras los primeros recelos, decidió apoyar claramente la reforma. La intervención parlamentaria de Labra en defensa del proyecto es la expresión del apoyo posibilista que los autonomistas le concedieron. En el seno de la Unión Constitucional se materializará la escisión de un grupo identificado con los proyectos de Maura, que constituirán el partido reformista.

El debate parlamentario, entre el 6 de junio y el 14 de julio de 1893, reveló la falta de apoyos suficientes, poniendo a prueba la unidad del partido liberal. Sólo el grupo gamacista defendió el proyecto. La actitud ambigua de Sagasta es fiel reflejo de esa situación. Finalmente, Maura se verá obligado a dimitir, y posteriormente, como compañero de Gabinete en otro Ministerio, a apoyar otro proyecto descentralizador más moderado, el de Abárzuza en 1895.

En julio de 1896, ya iniciada la guerra, cuando se debatían en el Congreso otros proyectos reformistas, presentados por el Gobierno conservador, Maura recordaba el significado de su proyecto de 1893, y estimulaba la adopción de reformas descentralizadoras. Frente a las vacilaciones de algunos, Maura entendía que la adopción de esas reformas era compatible con la situación de guerra. Frente a la acusación de los *constitucionales* rechazaba que su política de 1893 hubiera acelerado la rebelión y el movimiento autonomista.

James Durnerin, en su interesante estudio sobre *La política colonial de*

un ministro liberal, considera agudamente que el fracaso de 1893 significó para Maura la toma de conciencia regeneracionista que para la mayoría supuso la crisis del 98. Las reformas descentralizadoras de Maura para la Administración de Cuba prefiguran otros proyectos de reforma de la Administración local, que con la pretensión de *descuajar* el caciquismo presenta el primer ministro Maura en los inicios del siglo. Pero, según concluye Durnerin, tanto la reforma de la Administración cubana como de la Administración local española chocan con el peso de una realidad cuya reforma estructural de fondo nunca se planteó decididamente.

El fracaso de las reformas ultramarinas de Maura contribuyó a acelerar e impulsar el movimiento independentista en Cuba. Rechazadas las reformas, cada vez eran más insostenibles las posiciones intermedias, conciliadoras, de los reformistas (escisión de la Unión Constitucional surgida en apoyo de los proyectos de Maura) y de los autonomistas. *Mientras se discutían en Madrid las reformas —dice F. Almagro— aumentaba en Cuba la agitación política bajo la ola separatista de creciente empuje.*

Cuando un año después se aprueben finalmente los proyectos descentralizadores de Abárzuza, más moderados que los de Maura, ya no hubo tiempo de aplicarlos, pues el 24 de febrero de 1895 estalló la insurrección en Cuba y la ley fue promulgada el 12 de marzo de ese mismo año.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL. MOVIMIENTO OBRERO Y REFORMAS SOCIALES

La conflictividad social del Sexenio liberal-democrático había quedado soterrada y reprimida en los primeros años de la Restauración. La persecución de los internacionalistas, el cierre de sus lugares de reunión y la prohibición de sus órganos de expresión les había mantenido en la clandestinidad forzada hasta las medidas liberalizadoras de 1881-83. Una de las últimas medidas del Gobierno de la Izquierda Dinástica fue precisamente la creación de una comisión informadora para el estudio de la condición de vida obrera, posteriormente denominada Comisión de Reformas Sociales. La Información oral y escrita recogida por esta Comisión en 1884-85 nos permite hoy un conocimiento bastante preciso de la realidad de la *cuestión social* en la España de fin de siglo.

La ley de Asociaciones de 1887 es la que permite de manera más clara y definitiva la aparición legal del asociacionismo obrero. Las estadísticas gubernamentales de 1887 y 1890 nos dan la imagen de un cierto auge de las sociedades de resistencia, pero aún las sociedades de socorros mutuos son el modelo asociativo dominante.

En agosto de 1888 celebran en Barcelona sus congresos fundacionales el partido socialista y la Unión General de Trabajadores, pero la implantación socialista, tanto sindical como política, especialmente esta última, es aún muy débil y minoritaria a fin de siglo.

También al amparo de la nueva legalidad crece la implantación y propaganda anarquista en todas sus direcciones, desde las iniciativas educativas hasta las acciones terroristas, provocando de nuevo la alarma de la Iglesia católica y de la burguesía.

Entre la fundación de la Comisión de Reformas Sociales en diciembre de 1883, con objetivos y medios muy limitados, y la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, con una infraestructura administrativa y presupuestaria más acorde con las tareas que se le encomiendan, se va abriendo progresivamente camino en la élite política una mentalidad social intervencionista, y se preparan los proyectos de las primeras leyes de protección social de los trabajadores.

La reciente reedición por el Ministerio de Trabajo de la *Información oral y escrita sobre la condición de vida de las clases trabajadoras*, llevada a cabo en 1884-85 por *comisiones de reformas sociales* locales y provinciales, creadas al efecto, nos ofrece una fuente de primera mano para aproximarnos a la realidad social española de la Restauración, en especial a la condición de vida obrera.

Los informes remitidos por las comisiones respondían a un cuestionario extensísimo en el que parece estar presente la mentalidad reformista de Gumerindo de Azcárate y los criterios de los primeros *sociólogos*.

Las respuestas al cuestionario expresan más una mentalidad, una determinada conciencia, que un testimonio estadístico objetivo de la realidad, aunque también hay mucho de esto.

La reducción geográfica de los informes publicados —hay ausencias significativas de áreas socialmente conflictivas como Andalucía y Cataluña— y la diversa calidad y riqueza de esos informes (a veces elaboraciones sintéticas y subjetivas de los miembros de la comisión, sin adjuntar las informaciones de base) indican los límites del documento como fuente. Sin embargo, con todas las limitaciones, la *Información oral y escrita* de 1884 (publicada en 1889-90) nos da datos precisos y concretos sobre jornada laboral, jornales y salarios, accidentes de trabajo, trabajo infantil y femenino, asociacionismo obrero, educación popular, mentalidad obrera, instituciones de beneficencia y previsión.

No es posible entrar aquí con detalle en esos datos, como lo han hecho algunos estudiosos del tema. Baste resumir aquí algunas informaciones significativas del perfil obrero y de su condición de vida, y ofrecer algunas consideraciones generales.

Lo primero que salta a la vista es lo difícil que resulta delimitar en muchos casos la frontera de la pobreza. Lo que se desprende de las informaciones es una condición de vida obrera tan precaria que en muchos casos es difícil distinguirla de la pobreza. Por otro lado, el deslizamiento de una situación a otra es relativamente fácil. Una crisis de subsistencias, frecuentes todavía en la época, pone inmediatamente al descubierto la eventualidad del

empleo; la total invalidez por accidente de trabajo provoca normalmente una situación de indigencia.

Las Sociedades de Socorros Mutuos, la realidad asociativa obrera y popular más extendida en esos años, sólo podían cubrir con regularidad el jornal no ganado por enfermedad durante unos meses, pero son insolventes para cubrir el retiro obrero (seguro de vejez), la invalidez permanente por accidente, y, en algunos casos, la asistencia sanitaria y farmacéutica. Y téngase en cuenta que los socios de las mutualidades constituyen un grupo cualificado dentro de la población obrera.

Las informaciones sobre cultura, educación y moralidad obrera y popular denotan la persistencia de hábitos y actitudes tradicionales, reflejo de sus raíces rurales. Muchos obreros, emigrados recientemente del campo, viven el choque de la aculturación. Los filántropos y estudiosos de la *cuestión social* se congratulan con frecuencia de esa *bondad* natural del obrero español aún no influido por las doctrinas revolucionarias. Los obreros *conscientes*, ideologizados, constituyen una minoría, por lo que, desde la perspectiva de esos analistas, todavía, a diferencia de otros países, era posible contrarrestar la propaganda revolucionaria.

El desarrollo del asociacionismo obrero en estos años finales del siglo es uno de los mejores indicadores del desarrollo industrial y económico y del grado de modernización de la sociedad española. Las estadísticas que promueve el Ministerio de Gobernación, al preparar la ley de Asociaciones de 1887, y las elaboradas a principios de siglo por el recién creado Instituto de Reformas Sociales nos permiten una buena aproximación a la realidad nacional y provincial.

Las primeras estadísticas de asociaciones del Ministerio de Gobernación a partir de 1882 se inscriben dentro de la dinámica oficial que implica la aplicación de la ley de Reunión. En cumplimiento de una Real Orden de 17 de enero de 1882, los gobiernos civiles tenían que enviar *Relación del número de casinos, sociedades y círculos de recreo y sociedades corporativas o colectivas*. Con los datos provinciales de que disponemos para ese año 1882, se observa claramente el predominio de las sociedades de recreo sobre cualquier otro tipo de asociación. Seguramente el carácter restrictivo de la normativa sobre asociaciones en estos primeros años de la Restauración y el temor a la represión oculta una realidad asociativa obrera mayor. Pero ya en ese año aparece constituido un número significativo de sociedades de socorro mutuo.

Pero es en 1887 cuando, en el marco de la ley de Asociaciones que se proyecta, disponemos de un primer resumen del asociacionismo en general y obrero en particular. Según dicho resumen, elaborado por el Ministerio a partir de los informes provinciales, entre los 24 tipos de asociaciones que se recogen, figura un total de 663 sociedades de socorro mutuo, el tipo de asociación más numerosa después de las sociedades de recreo. La estadística de 1887 no distinguía aún, como lo hará la elaborada por el Instituto de Refor-

mas Sociales en 1904, entre mutualidades obreras y no obreras. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el objetivo del socorro mutuo era perfectamente compatible con otros más directamente profesionales o ideológicos: hay que suponer que entre las 84 asociaciones de obreros, 49 católicas, 66 de sociedades de intereses materiales, 32 de agricultura, 59 cooperativas e incluso 94 caritativas, que con esas denominaciones se incluyen en el resumen estadístico, algunas tuvieron entre sus objetivos el socorro mutuo.

Si nos fijamos en la distribución geográfica de las mutualidades se observa el predominio del área catalana (149 en Gerona y 143 en Tarragona). Otras provincias con un alto nivel de mutualismo eran: La Coruña, con 49; Baleares, 40; Valencia, 23; Santander, 28; Cádiz, 26; Vizcaya, 24; Oviedo, 19; Madrid capital, 17; León, 13, y Zaragoza, 12.

En febrero de 1890 se insta desde el Ministerio a los gobiernos civiles para la elaboración de una estadística específica de asociaciones obreras, *Estado de las sociedades literarias y círculos de recreo y de obreros o de protectores de éstos*. Comparando algunos datos provinciales con los de 1887, se observa un notable incremento de mutualidades en este corto período de tiempo, significativo del impulso que la ley de Asociaciones dio seguramente al mutualismo. (Si bien conviene no olvidar que el registro de asociaciones, base de las estadísticas aquí utilizadas, no tiene que coincidir estrictamente con la realidad. Hay asociaciones de existencia mucho más antigua que lo único que hacen es legalizar su situación. Hay otras que siguen sin registrarse.)

Esas estadísticas dan todavía un contingente muy elevado de sociedades de socorro mutuo, aunque empiezan a ser importantes cuantitativamente las sociedades de resistencia. Dicho incremento, especialmente desde principios del nuevo siglo, marca claramente la creciente influencia de las agrupaciones socialistas. Pero en la última década del siglo XIX la realidad asociativa dominante es sin duda la mutualista. Un tipo de asociación que no es exclusivamente obrera, sino popular.

La estadística del Instituto de Reformas Sociales de 1904 tiene especial cuidado en distinguir las *asociaciones obreras* de las *instituciones de ahorro, cooperación y previsión*. Aplicando esta distinción a las mutualidades, y aun con el riesgo de solapamientos o repeticiones, según la citada estadística, a principios de siglo había en España un total de 1.691 montepíos, con 351.629 socios, de las que sólo 309 eran mutualidades obreras, con un total de 84.426 socios.

Luis Jordana de Pozas, en un informe de 1922 sobre las sociedades de socorro mutuos en el Reino de Valencia, presentaba tres tipos de mutualidades: las *sociedades generales*, heterogéneas social y profesionalmente, localizadas en una sola población; las *sociedades de gremio o de oficio*, y las *sociedades de taller y oficina*. En el fin de siglo, el modelo más extendido era seguramente el de *sociedad general* o *sociedades de constitución mixta*: 245 sociedades y 42.436 socios según la estadística de 1904. Pero también eran

importantes algunas sociedades de oficio (especialmente numerosa la Asociación General de Empleados y Obreros de Ferrocarriles, con 17.300 socios); y algunas sociedades de taller o fábrica, en algunos casos de iniciativa y subvención patronal (según la estadística de 1904, 23 sociedades de este tipo, con 10.454 socios). La distinción entre socios ordinarios, honorarios y protectores es un buen indicador del carácter obrero o patronal de la iniciativa y de la solvencia financiera en la cobertura de los riesgos que ofrecen las mutualidades.

Hasta tal punto la idea del mutualismo está extendida, que no hay asociación obrera de resistencia o círculo educativo y recreativo para obreros, del signo ideológico y político que sea, que no se plantee como objetivo y sección el socorro mutuo. Tanto los Círculos Católicos de Obreros de Madrid, fundados por la Asociación General *para el estudio y defensa de las clases trabajadoras*, como las sociedades de resistencia madrileñas vinculadas a la Casa del Pueblo (*La Mutualidad Obrera*), ofrecerán a sus asociados a principios de siglo un servicio médico-farmacéutico.

Se conocen las dificultades financieras que atraviesan con frecuencia las mutualidades al intentar cubrir los riesgos ofrecidos a los asociados, especialmente cuando la sociedad envejece por ausencia de nuevos socios. La limitada acción de las mutualidades no se refleja sólo en las importantes situaciones de riesgo que expresamente renuncia a cubrir (invalidez permanente, vejez), sino además en el carácter siempre aleatorio o provisional que tienen la percepción de esos socorros, de un lado, por la ausencia de cálculos actuariales (defecto técnico que le achacarán los propagandistas del seguro), y de otro, por los rígidos controles de tipo moral y a veces ideológico que se impone a los socios.

En todos los reglamentos de las mutualidades hay siempre un artículo con la relación de enfermedades que expresamente quedan exceptuadas del derecho al socorro: enfermedades crónicas y enfermedades *vergonzosas*. Igualmente se exceptúan del socorro las situaciones de enfermedad, accidente o desamparo derivadas de un comportamiento considerado inmoral.

Las sociedades de socorro mutuo, al margen de la función estrictamente previsora y asistencial, cumplen sobre todo una función socializadora de primer orden. Son el lugar y el cauce de socialización popular más importante: educan en hábitos y comportamientos propios de la moral burguesa como el ahorro, la previsión, la autoestimación, frente al analfabetismo y el alcoholismo. Las prestaciones y la permanencia en las sociedades de socorro estaban condicionadas al mantenimiento de los comportamientos morales.

La composición socio-profesional de las sociedades de socorro mutuo nos permite también una aproximación indirecta al grado de industrialización, al tipo de empresas dominante en la España finisecular: los oficios y los trabajos artesanos, los pequeños talleres y las empresas familiares. Por el

número de socios destaca con mucho la Asociación de Empleados del Ferrocarril, y muy por debajo, algunas sociedades de pintores, porteros, camareeros, cocineros y reposteros y dependientes de comercio.

Los primeros pasos del socialismo español

Siguiendo una síntesis reciente de Santiago Castillo, en la historia del socialismo español durante el último cuarto del siglo XIX se pueden distinguir tres etapas que se corresponden aproximadamente con las tres últimas décadas del siglo; una primera fase de *clandestinidad forzada*, entre 1874 y 1881; una segunda etapa de actividad fundamentalmente *propagandística* (de *toma de la palabra* la denomina Castillo), en el marco de libertades implantado por los liberales en los años ochenta, y una tercera fase de *maduración ideológica y consolidación organizativa*, entre 1888 y 1898. Aunque sin perder de vista que sólo a partir de 1910, con la llegada de Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados, se inicia la verdadera proyección política del movimiento socialista.

A las dos primeras etapas de clandestinidad forzada y propagandística ya nos hemos referido anteriormente. Durante la primera coexisten tres tendencias del asociacionismo de resistencia con concepciones y metodología diferentes: los anarquistas (que radicalizan sus posturas en el contexto represivo), los socialistas ligados en Madrid al arte de imprimir y en Barcelona al Centro Obrero de Barcelona, y los reformistas, en Barcelona principalmente, que rechazan la lucha de clases y se vinculan políticamente a partidos democráticos.

La entrada en la legalidad, al amparo de las libertades reguladas por la Izquierda Dinástica, coincide con importantes tensiones entre distintas fracciones del socialismo español: un núcleo madrileño y un círculo catalán, a su vez dividido entre una tendencia más vinculada a los planteamientos madrileños y la tendencia reformista de *Las Tres Clases de Vapor*. Las tensiones se manifiestan en los sucesivos programas y congresos que se celebran entre 1882 y 1884.

La ruptura entre la tendencia marxista y la reformista se hará patente con la fundación de *El Socialista*, en 1886, y cristalizará definitivamente en los congresos constituyentes del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores.

El nacimiento de *El Socialista* (1886) marca el definitivo despegue y consolidación de la tendencia socialista madrileña al que se vinculan algunos catalanes separados de la tendencia reformista. En torno a *El Socialista* se afirman unas orientaciones o directrices básicas y nacen los gérmenes de las agrupaciones socialistas participantes en el Primer Congreso del PSOE y la UGT (Barcelona, agosto 1888).

De las bases fundacionales a las que debía ajustarse la redacción del pe-

riódico, tres de ellas no suscitaron ninguna discusión: la defensa del programa del partido; apoyar y sostener las huelgas; propagar constantemente el principio de asociación entre los obreros hasta constituir una asociación nacional de resistencia. No así la cuarta sobre las relaciones del partido con cualquier otro partido burgués incluidos los federales: *Combatir a todos los partidos burgueses y especialmente las doctrinas de los avanzados, si bien haciendo constar que entre las formas de gobierno republicana y monárquica, «El Socialista» prefiere siempre la primera.* Esta definición provocó el distanciamiento del partido de uno de los intelectuales fundadores, el doctor Jaime Vera, y significó a medio plazo, hasta 1910, la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos-electorales con los partidos republicanos. Más tarde la fugaz colaboración de Unamuno en *La Lucha de Clases*, órgano de la agrupación socialista bilbaína, estuvo teñida de esa ambigüedad: entre el deseo, por un lado, de prestigiar el partido socialista con la adhesión de intelectuales, y el recelo, por otro, de su excesiva influencia.

Sobre la relación de jóvenes intelectuales con el socialismo, la bibliografía reciente es bastante abundante. El caso mejor estudiado es sin duda el de Unamuno, tanto en el estudio de Pérez de la Dehesa como en el de Gómez Molleda, que ha publicado una edición crítica de la relación epistolar de Unamuno con líderes obreros.

Con la fundación del periódico, los madrileños retomaban la iniciativa, volviendo a la idea originaria del programa de 1880 de construir un partido netamente obrero: *Puede decirse —afirma S. Castillo— que el PSOE se estructura definitivamente a partir de «El Socialista», en base a la orientación política marcada por el periódico. Porque dicha orientación se asume tanto en los núcleos preexistentes de Madrid y Barcelona como por los que se van creando.*

La publicación de *El Socialista* se inicia en marzo de 1886, previo a un viaje de propaganda por Cataluña y otras poblaciones del Sur. Las dificultades materiales para su edición, impresión y distribución se salvan en los primeros años sólo mediante el esfuerzo y la colaboración gratuita de algunos militantes: *A Iglesias pudo ya pagarle el periódico su sueldo a mediados de los años noventa, cosa que no pudo extenderse a la cuestión del molde. Durante dieciséis años, el molde de «El Socialista» se compondría gratuitamente en la mañana de los domingos y las noches de los lunes y los martes por diversos tipógrafos.*

La precaria red de distribución de *El Socialista* coincidía con la implantación geográfica de las agrupaciones socialistas: *«El Socialista», único órgano estable del partido durante varios años, es, sin duda, el motor fundamental en la creación y animación de las organizaciones socialistas. Por un lado, fomenta la constitución de nuevos grupos en función de los postulados ideológicos y tácticos defendidos por sus redactores. Por otro, sirve de medio de expresión para las nuevas agrupaciones que van generándose (...)*

El semanario será, pues, un arma de propaganda, de información y de ataque o defensa en manos de las agrupaciones...

Los años noventa (1888-1898) coinciden con una fase de consolidación organizativa, cierta expansión territorial y afirmación de los medios específicos de propaganda. *Con la palabra a la acción* es la denominación que Santiago Castillo utiliza para caracterizar esta etapa del socialismo.

En agosto de 1888 se celebran en Barcelona los congresos fundacionales del Partido Socialista Obrero y de la UGT. El esfuerzo por separar la iniciativa sindical de toda vinculación política no impide el que varios participantes del Congreso sindical coincidan con miembros de las agrupaciones socialistas.

La vinculación a la II Internacional, desde el inicio; las celebraciones del 1.º de mayo, fiesta socialista por excelencia, y la implantación del sufragio universal contribuyen a esa consolidación organizativa y propagandística.

La paulatina superación del guesdismo, a partir de 1895, marca el hallazgo por parte del sindicato y del partido socialista de una táctica propia, basada en la combinación del mantenimiento de unos objetivos programáticos, revolucionarios, con la lucha concreta por reformas sociales.

En todo este tiempo la proyección del partido y sindicato socialista es muy escasa; menor, sin duda, que la que representa, con todas sus vicisitudes también, el movimiento anarquista.

La evolución del partido socialista se puede seguir a través de los sucesivos congresos: Barcelona (1888), Bilbao (1890), Valencia (1892), Madrid (1894). El número de agrupaciones asistentes a los congresos expresa las oscilaciones en la débil implantación del partido. Hay un significativo crecimiento inicial en 1891 y 1892: se constituyen 16 y 13 agrupaciones, respectivamente. Se da un descenso igualmente significativo en los años siguientes: cuatro agrupaciones nuevas en 1894, y sólo dos en 1895. Sólo a partir de 1898 se inicia un auge sostenido.

Los acuerdos de los congresos afirman los objetivos estratégicos y tácticos específicos. Destacan entre ellos los que se refieren a la participación electoral, desde 1890, tanto en las elecciones generales como en las municipales. Dicha participación se entiende como una candidatura estrictamente de clase, lo que afirma su rivalidad con las opciones electorales republicanas, tradicionalmente votadas por los obreros. El Congreso de 1892 elabora ya un programa municipal específico. Es importante también el apoyo, desde el principio, a la fiesta del 1.º de mayo entendida como manifestación pública, propagandística y reivindicativa, más que como huelga, a diferencia de los anarquistas.

La organización del sindicato

Uno de los objetivos fundacionales de la UGT era *reunir en su seno a las sociedades, federaciones y uniones de resistencia*. En su cumplimiento la UGT inicia contactos con desigual resultado con otras federaciones preexistentes. La relación con la federación textil catalana *Las Tres Clases de Vapor* es siempre conflictiva y polémica, al complicarse con muy diferentes formas de entender la estrategia socialista o reformista (esta relación fracasa a partir de enero de 1892). En cambio, la UGT establece una buena relación, aunque efímera, con *La Unión Fabril Algodonera*, cuya base fundamental estaba constituida por los trabajadores de *La Fabril* de Málaga (1.000 afiliados). (La quiebra de la fábrica malagueña implicó la de la propia federación.)

Además de la estrecha relación de la UGT con la Federación Tipográfica —no hay que olvidar que la madrileña *Asociación del Arte de Imprimir* había sido, según la expresión de Juan José Morato, *la cuna de un gigante* (el partido y el sindicato socialista)—, la UGT mantuvo también muy buenas relaciones con la Federación de los trabajadores del hierro y con la de toneleros. Ambas uniones o federaciones se habían constituido con anterioridad al nacimiento de la UGT.

Respecto al otro objetivo fundacional, *crear nuevas federaciones de oficios y constituir las en federaciones nacionales*, los logros son muy limitados en este tiempo: *la estructura de oficios que integraba la UGT y la cantidad numérica de ésta imposibilitaban la formación de federaciones nacionales en su seno... Sólo la Federación Tipográfica se mantendrá en la UGT. Y aún ésta en una situación de precaria supervivencia* (de 1.391 afiliados en 1888 a 860 en 1899)

Respecto a su organización interna, la UGT intenta consolidarla, en un proceso paralelo a la organización del partido: a partir de 1894, el secretario general pasa a ser elegido directamente por los congresos y se le atribuye un sueldo semanal fijo de 30 pesetas. La UGT no logra, en cambio, tener de forma periódica un órgano de prensa propio. *La Unión* sólo saldrá esporádicamente. En este tiempo se reafirma también el proceso reglamentario para la convocatoria de huelgas.

La UGT sostiene una línea de acción paralela a la del PSOE, pero manteniendo su identidad e independencia. Algunas propuestas tendentes a una mayor identificación y dependencia de la organización sindical respecto del partido (propuesta, por ejemplo, de apoyo explícito del sindicato al partido en las elecciones) fueron rechazadas en los Congresos de 1894 y 1896, con la intervención decisiva del propio Pablo Iglesias.

Las vicisitudes económicas e intelectuales del periódico, la ausencia de materiales propios, la escasez de intelectuales y divulgadores, junto a la necesidad de ofrecer a los militantes una base ideológica, obliga a una gran dependencia de textos extranjeros, principalmente franceses e italianos, como

testimonian las referencias de J. J. Morato sobre *El Socialista*, y de García Quejido sobre otras empresas periodísticas, como *La Nueva Era* y la *Biblioteca Socialista*.

Las estrecheces materiales, conjugadas con el peso de la influencia francesa, producirán un «El Socialista» cuyo contenido es en gran parte fruto de una labor de traductores... Como indica el propio Morato, «El Socialista» en su misma presentación externa era ya un facsímil de «Le Socialiste».

Santiago Castillo resume así la dependencia ideológica del primer socialismo español respecto del francés:

Si quisiéramos enumerar las características de este período del socialismo español, podríamos indicar en resumen y esquemáticamente: precariedad y oscilación de medios y militantes; carácter de obreros manuales de la práctica totalidad de estos últimos, que añaden a su amplio horario de trabajo como asalariados el tiempo dedicado a la organización y propaganda. Todo ello, unido a la limitación subsidiaria de idiomas conocidos, produce el que los socialistas madrileños, en sus diez primeros años, además de realizar una amplia y repetitiva traslación a nuestro idioma de las teorías francesas, se asomen al socialismo mundial a través de las ventanas que las publicaciones galas les ofrecen.

Esta influencia decisiva del guesdismo sobre el primer socialismo español (tan subrayada), a juzgar por las obras traducidas y publicadas, no significa, sin embargo, la adopción por los socialistas españoles de las directrices guesdistas en sentido estricto. Por el contrario, en contra de los principios doctrinales divulgados, los socialistas españoles insisten en la acción sindical reivindicativa, y en la importancia de las reformas graduales conseguidas por esa vía: *En la labor de propaganda, por un lado, está la difusión de textos externos en que se minusvaloraba la acción sindical. Y al mismo tiempo, en diversos textos propios, y sobre todo en su praxis cotidiana, la negación de tales postulados, con una constante labor organizativa de sindicatos de todo tipo y en todo lugar, atribuyéndoles un carácter no sólo defensivo, sino de reivindicación de mejoras...*

A partir de 1896 se observan signos de renovación: *El Socialista* cambia de papel, función, forma y fondo. La *Biblioteca Socialista* publica nuevos e importantes folletos de divulgación. En 1897 se intenta crear una revista del partido, *La Ilustración del Pueblo*. En 1897-98 se imprime por entregas *El Capital*. Las dificultades financieras, por falta de suscriptores, que acompaña la empresa de publicar íntegramente la primera edición en español de *El Capital* ilustra elocuentemente, junto a otros muchos testimonios, la inconsistencia teórica del socialismo español. Lo que explica la coexistencia de propagandas y publicaciones contradictorias.

La acción política y sindical del socialismo español (partido y sindicato) en la última década del siglo XIX hay que situarla en el contexto de las directrices generales que marcan los congresos de la II Internacional, pero sin perder de vista la situación social y económica española. El nivel de indus-

trialización, y la tardía implantación del primer intervencionismo sociolaboral del Estado imponen condiciones y límites a dicha acción.

La débil preocupación de los partidos por las reformas sociales afecta incluso a los republicanos. Sólo algunos conservadores y algunos liberales-republicanos vinculados al ideario institucionista se muestran partidarios de avanzar, aunque sea *tutelariamente*, por el camino intervencionista. Mientras, los socialistas, a pesar y en contra de la influencia guesdista, insistirán progresivamente en el desarrollo en España de esa parte del programa de la II Internacional.

En la lucha electoral se revela una gran rivalidad especialmente con los partidos republicanos, que tradicionalmente habían captado el voto obrero. Más que en las elecciones generales, donde acuden más bien con un carácter testimonial y propagandístico es en las municipales donde el partido tiene la oportunidad de defender un programa.

Al final del período aquí estudiado, el socialismo español tiene la oportunidad de expresar una posición política propia y distinta ante la guerra de Cuba, como veremos más adelante. Su crítica social a la forma de reclutamiento le reportará pronto un sustancial crecimiento sindical y político. A partir de 1898 se inicia una nueva etapa, fundamentalmente expansiva, del socialismo español, muy minoritario hasta entonces.

Las tácticas del anarquismo español

El anarquismo español no se puede identificar con una sola forma de acción. Las diversas tácticas adoptadas por el movimiento anarquista dependen fundamentalmente de las distintas coyunturas políticas: unas condiciones más permisivas facilitan el triunfo de la tendencia sindicalista y la lucha laboral; otras condiciones más represivas (primeros años de la Restauración, leyes antiterroristas de fin de siglo) provocan el predominio de la tendencia insurreccional y la violencia terrorista. Por otro lado, en el movimiento anarquista coexisten siempre diversas formas de lucha: desde la lucha ideológica, con especial incidencia en la escuela, hasta la propaganda por el hecho pasando por la acción sindical.

1. El auge asociativo y la lucha sindical y huelguística predominan en los períodos de permisividad legal: durante el Sexenio liberal-democrático y a partir de la liberalización de 1881.

2. La acción violenta, el insurreccionalismo y las *represalias* dominan durante el período de clandestinidad forzada de los primeros años de la Restauración. Posteriormente, la propaganda por el hecho y el atentado terrorista como táctica política se imponen en el cambio de siglo (1893-1906). Si bien en esta segunda fase violenta coexiste con otras formas pacíficas y legales de propaganda ideológica.

3. La propaganda pública de las ideas se ve facilitada a partir de 1881

por la mayor permisividad. Con algunos altibajos motivados por posteriores leyes antiterroristas, surgen varias iniciativas publicitarias y escolares durante los últimos años del siglo. Se trata de unos años especialmente propicios para la ideología anarquista. Intelectuales y jóvenes escritores participan de unas ideas que cobran popularidad creciente.

4. Mucho más soterrada en este último cuarto de siglo, poco a poco se irá abriendo camino una nueva forma de lucha sindical, más radical, cuyo eje táctico lo constituye el mito de la huelga general.

La desintegración de la Federación de Trabajadores de la Región Española en 1888 dejó un vacío sindical y organizativo en el anarquismo español que fue ocupado en esos años finales del siglo por la *propaganda por el hecho* pero también por la propaganda oral y escrita.

Los atentados anarquistas, especialmente los de los años noventa, son —según Rafael Núñez Florencio, cuyo estudio seguimos en este apartado— *actos desprovistos de una finalidad clara; son más bien manifestaciones cercanas a la desesperación, de un anarquismo romántico y violento que, al mismo tiempo que causa a veces víctimas inocentes, va comprobando cómo no se cumplen sus confusos objetivos revolucionarios, y va atrayéndose progresivamente una mayor represión policial, generando mártires, que a su vez producen más atentados como represalia, más víctimas y más mártires...*

El terrorismo anarquista español hay que enmarcarlo en un contexto europeo (los grandes atentados de fin de siglo), aunque el fenómeno en España, y concretamente en Barcelona, adquiere dimensiones especialmente relevantes por la repercusión internacional del proceso de Montjuich. Se pueden distinguir dos momentos (1888-1897 y 1904-1909), separados por un paréntesis de relativa calma. Son dos etapas distintas. La primera es la más representativa del terrorismo anarquista: acciones individuales asumidas públicamente por los autores.

La gran amenaza terrorista y las leyes represivas subsiguientes se concentran en el breve espacio de tiempo que va del atentado del Liceo de Barcelona (1893) al asesinato de Cánovas (1897), pero hay un período de incubación, a partir de 1888, que guarda estrecha relación con la disolución de la Federación de Trabajadores de la Región Española, en ese mismo año, con las represiones que provocan los intentos de celebración anarquista del 1.º de mayo, a partir de 1890, y, sobre todo, con la represión por los sucesos de Jerez.

Hay una directa y estrecha relación entre la violencia terrorista y la represión policial, por un lado, y, por otro, entre la decadencia de las organizaciones de masas y el auge de las soluciones individualistas. En este sentido, para algunos autores, la *propaganda por el hecho* y la justificación anarquista de la violencia, las *represalias* y la *insurrección* que aparecen como tendencia dominante en el período de forzada clandestinidad de 1874-1881, constituyen claros antecedentes de los atentados terroristas de los años no-

venta. Indudablemente, la desintegración progresiva de la organización de masas, especialmente a partir de la represión de la *Mano Negra*, aboca a partir de 1888 a la acción revolucionaria individual, martirial.

Una vez producidos los primeros atentados, la represión subsiguiente provoca nuevas acciones y nuevas represiones en una espiral creciente: el atentado de Pallas contra el general Martínez Campos (septiembre de 1893) y la inmediata ejecución del anarquista (6 de octubre de 1893), provoca, a su vez, el atentado de represalia del Liceo de Barcelona (noviembre), en la inauguración de la temporada de ópera. Este atentado, mucho más sangriento (22 muertos y 35 heridos, según la prensa de la época), provoca la represión indiscriminada de anarquistas, la práctica de torturas, etc. En este clima fuertemente *defensivo* se aprueba la primera ley Antiterrorista (10 de julio de 1894) *contra los atentados por medio de explosivos, contra su fabricación y venta, contra la conspiración, amenaza, apología y asociaciones relacionadas con estos delitos.*

Tras el breve paréntesis de 1895, un nuevo atentado en la calle Cambios Nuevos al paso de una procesión religiosa, con numerosas víctimas, provoca una represión aún mayor y una segunda ley Antiterrorista (2 de septiembre de 1896) más dura: se agravan las penas tanto para los autores como para los cómplices y encubridores, se considera cualquier tipo de sustancia inflamable constitutiva de delito, y, sobre todo, se encargan las causas a la jurisdicción militar. El proceso por el atentado en la calle Cambios Nuevos adquirió una gran resonancia internacional y quedó en la memoria de los anarquistas para futuras represalias. Los últimos atentados del período, concretamente el de Cánovas, fueron represalias directas por el proceso y las ejecuciones de Montjuich. (El proceso había estado lleno de incidentes: el relato de las torturas que hicieron algunos acusados ante el tribunal, la falta de garantías ante el juicio y el suicidio de uno de los abogados defensores.)

No todo el anarquismo, ni siquiera en el breve período al que nos referimos, era partidario de la *propaganda por el hecho*, a pesar de la descalificación generalizada que cayó sobre él por parte de la reacción defensiva de la burguesía. Ahora bien, entre las tendencias anarquistas que polemizan a finales del siglo XIX, los partidarios de la *propaganda por el hecho* están más próximos a los anarco-comunistas que a los anarco-colectivistas, *en tanto los colectivistas preferían la legalidad y sostenían la ilicitud de algunos medios, los comunistas tendían al ilegalismo y a utilizar cualquier medio si era válido para los fines que se proponían. Los colectivistas confiaban en la masa obrera como sujeto revolucionario; los comunistas, en el hombre aislado, el rebelde; los colectivistas confiaban en la organización federación de sociedades de oficios; los individualistas desconfiaban de cualquier organización, y preferían organizarse en pequeños grupos.* No es extraño, pues, que los anarquistas terroristas encontraran la justificación y el apoyo entre los anarco-comunistas (aunque no todos fueran partidarios de los atentados),

y el rechazo, por contra, de los anarco-colectivistas, aunque no dejaran de defenderlos en los procesos, una vez cometidos los atentados.

La opinión burguesa distingue cada vez mejor, en los últimos años del siglo, el reformismo socialista del radicalismo revolucionario anarquista. Las distintas formas de celebrar el 1.º de mayo, pero sobre todo los atentados terroristas, contribuyen a configurar esa distinción. De ahí que la incipiente respuesta reformista ante las peticiones socialistas del 1º de mayo se torne fuertemente represiva frente a la ola de atentados anarquistas de los años noventa.

Sindicalismo reformista

Junto al anarquismo y el incipiente socialismo marxista del núcleo madrileño, hay durante la Restauración algunos núcleos de obrerismo societario reformista. El más representativo de esta tendencia y el mejor estudiado es la agrupación del textil catalán denominada *Las Tres Clases del Vapor*.

Durante los años de la Restauración *Las Tres Clases* se va definiendo como tendencia reformista, tanto frente al insurreccionalismo radical anarquista de la FTRE como en diálogo y confrontación con los proyectos madrileños de crear un partido socialista democrático. En los años ochenta *Las Tres Clases* constituyen la base sindical más sólida del incipiente movimiento socialista, colaborando en los diversos intentos de creación de un partido socialista democrático.

A partir de 1886, cuando se agudiza la crisis del sector textil, *Las Tres Clases* adoptan una posición *oportunista*, de apoyo y coincidencia con las manifestaciones proteccionistas de los patronos catalanes.

En febrero de 1888 algunas secciones obreras de las *Tres Clases*, de tendencia marxista, participan en la organización del Congreso Nacional Obrero que sería el fundacional de la UGT.

En 1889 la tendencia *oportunista* de *Las Tres Clases* se concreta en la asistencia al Congreso Socialista-Posibilista de París. Esta decisión marcó ya la ruptura, que se venía fraguando, con los socialistas madrileños.

En 1890 las largas huelgas de solidaridad con Manresa marcan, según Izard, el punto álgido, pero también el principio de la decadencia de *Las Tres Clases*. Con motivo de las huelgas colaboraron con socialistas y anarquistas. La actitud posibilista de esta asociación se manifiesta de nuevo con motivo de las primeras celebraciones del 1.º de mayo. A finales de 1890 culminaron la escisión con el socialismo madrileño creando el Partido Socialista Oportunista, en cuyo comité figuraban varios hombres de *Las Tres Clases*. El primero de mayo de 1891, frente a la concepción anarquista de esa celebración —la huelga general— socialistas y posibilistas de *Las Tres Clases* coinciden en una misma táctica reformista: manifestación pacífica, mítines y expresión de peticiones-reivindicaciones a las autoridades. A partir de

1890, Izard constata una progresiva decadencia y desintegración de esta asociación textil. Su oportunismo sindical y político le había ido enfrentando cada vez más, tanto con los anarquistas como con los socialistas, provocando escisiones en su seno. Organizaciones sindicales nuevas como el *Arte Fabril*, nacida en 1902 en Badalona, como federación de distintas asociaciones obreras del algodón, sustituirán progresivamente a *Las Tres Clases*.

Los orígenes de la política social del Estado: de la Comisión al Instituto de Reformas Sociales

Durante los años ochenta, a partir de la *Información oral y escrita* de 1884, sobre la condición de vida obrera, y, sobre todo, en los noventa, se dan lentamente los primeros pasos que desembocarán en 1900 en la primera legislación social protectora del trabajo. Los últimos años del siglo XIX son, por tanto de preparación, de mentalización, más que de realizaciones. Se avanza en el terreno de la discusión ideológica hacia el triunfo progresivo de los principios sociales intervencionistas, y el abandono consiguiente de los criterios liberales abstencionistas. En estos años son numerosos los discursos, los debates académicos y las publicaciones que se ocupan de la llamada *cuestión social*, especialmente a partir de las manifestaciones del 1.º de mayo de 1890. En todo caso, el debate académico en el que participan las principales figuras políticas del momento es mucho más abundante y frecuente que los proyectos y las iniciativas políticas concretas.

Recientemente, la investigación se ha centrado en el estudio de los orígenes de la política social del Estado contribuyendo a llenar un vacío historiográfico. La intervención estatal ante la cuestión social se inicia propiamente a partir de 1899-1900, con la aprobación de las primeras leyes de responsabilidad industrial en accidentes de trabajo y de protección al trabajo infantil y femenino. Ahora bien, la aprobación de estas leyes era el final de un lento proceso en el que los criterios liberales dominantes fueron cambiando en medios políticos y académicos. La necesidad de tutelar a los menores imponía la intervención del Estado como protector, rompiendo el molde del liberalismo puro.

En este cambio de criterios, que se acelera especialmente en la década de los noventa, convergen políticos e intelectuales de procedencia ideológica y política diversa. El impulso reformista no es sólo patrimonio de los liberales krausistas, como a menudo se ha dicho, pues el sincero reformismo social de Gumersindo de Azcárate, el más representativo de ellos, es profundamente antiintervencionista. Por otra parte, Cánovas, en 1890, expresa su *conversión* no sólo al proteccionismo, sino al intervencionismo social del Estado, siguiendo el modelo alemán. No en vano Dato, ministro en el Gobierno conservador regeneracionista de Silvela de 1899, fue el que logró sacar ade-

lante dos proyectos, que, por otra parte, con menos empeño, venían planteando desde 1890 tanto Gobiernos conservadores como liberales.

La creación de una Comisión para el estudio de las cuestiones sociales, en diciembre de 1883, por iniciativa de Moret, fue una de las pocas medidas reformistas del breve Gobierno de Posada Herrera que tuvo alguna trascendencia y continuidad. Como primera tarea se le encargó una amplia *Información oral y escrita* sobre la condición de vida de las clases trabajadoras, que dio la posibilidad a personalidades y grupos minoritarios, preocupados por la *cuestión social*, de hacer propaganda, crear conciencia y difundir proyectos. Al incipiente movimiento obrero, concretamente a los socialistas, les dio una oportunidad para hacer propaganda de sus ideas. Iglesias, Morato, Matías Gómez Latorre y Quejido, intervinieron con amplitud y en algún caso con brillantez en la *Información oral* madrileña.

Las comisiones provinciales y locales, creadas para responder al cuestionario, funcionaron de forma diversa, si se juzga por la variedad de los informes que llegaron a ser publicados, y por las ausencias de algunos informes, especialmente significativos, como los de Cataluña y Andalucía.

La claridad y riqueza de la información aportada es ciertamente muy diversa. Aparte de la de Madrid, amplia y abundante, tanto la oral como los informes remitidos por instituciones, como el Ateneo o el Fomento de las Artes, es la *Información* de Valencia la más rica y completa, reflejo de la existencia allí de un grupo reformista, con el profesor Eduardo Pérez Pujol a la cabeza.

La composición de las comisiones concedía lugar preferente a los representantes de las fuerzas locales. Si se analizan las respuestas de los informes se observa la participación cualificada de algunos profesionales, más próximos a la *cuestión social*: el maestro, el ingeniero de minas, el registrador de la propiedad, el médico...

El alcance de la iniciativa reformista de 1884, puramente informativa, era deliberadamente reducido; debía preceder a cualquier proyecto de reforma. La comisión central y las comisiones locales habían sido creadas con este único objeto y no tenían por qué tener continuidad. La Comisión de Reformas Sociales central siguió perviviendo aunque precariamente, casi sin recursos ni local, hasta ser sustituida en 1902 por un organismo autónomo, el Instituto de Reformas Sociales, que ya desplegó una verdadera actividad no sólo informativa, sino estadística, y directamente elaboradora de anteproyectos de leyes sociolaborales.

En 1890, nuevos factores, como la reorganización de la II Internacional y las celebraciones del 1.º de mayo, acrecientan el interés y la preocupación de los políticos e intelectuales por el estudio de la *cuestión social*. Se trata, por otro lado, de un fenómeno internacional. En ese mismo año el emperador alemán Guillermo II convocaba en Berlín una conferencia internacional para el estudio de posibles medidas de protección social consensuadas entre diversos países.

En este contexto se explica la reorganización de la Comisión de Reformas Sociales en España y, en general, el incremento del debate sobre el intervencionismo estatal en medios académicos y políticos madrileños. Progresivamente se va creando un consenso ideológico en torno a la aceptación de criterios intervencionistas. Esta evolución de la opinión de las élites se sigue especialmente bien en los discursos y debates de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Uno de los más reveladores de ese cambio de mentalidad es el largo debate sobre *el socialismo de Estado*, que ocupa varias sesiones, de 1894 y 1895.

Paralelamente, la renovada y ampliada Comisión de Reformas Sociales, aunque con la misma precariedad de recursos, prepara una serie de proyectos de ley sobre el trabajo de la mujer, el infantil, el descanso dominical, la responsabilidad industrial por accidentes de trabajo, que en algunos casos son presentados parlamentariamente sin éxito, por Gobiernos conservadores y liberales indistintamente. Estos proyectos se convertirán finalmente en las primeras leyes sociolaborales, cuando las presente el ministro Dato en el Gobierno Silvela de 1899-1900.

En 1873 la iniciativa social reformista era republicano-federal. En 1890 el reformismo social intervencionista es un lugar común en el que convergen krausistas, conservadores y católico-sociales. Moret crea la CRS, presidida inicialmente por Cánovas; Dato presenta las primeras leyes sociales. Canalejas presenta el proyecto del Instituto de Trabajo, que Silvela unos años después utiliza como base para la creación del Instituto de Reformas Sociales.

Esta evolución hacia la adopción de una política social implicaba un cambio de mentalidad, de la beneficencia a la previsión y la reforma social, que sólo se da lentamente y con resistencias. Nos encontramos en época de transición lenta de una mentalidad a otra, en la que predomina la ambigüedad en los conceptos y en las expresiones.

— *El recelo antiintervencionista*: el peso de los criterios liberales es muy fuerte en todos, aunque más en la tradición liberal que en la conservadora. El intervencionismo tutelar o protector es el primer paso admitido. El modelo alemán, el *Socialismo de Estado*, actúa como estímulo, pero a la vez se contempla como un exceso o exageración que hay que evitar. Los debates y discursos de intelectuales y políticos madrileños, en el seno de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sobre la Conferencia de Berlín de 1890, y sobre el Socialismo de Estado, en 1894, revelan el choque de criterios.

— *El restablecimiento de los gremios* es el modelo orgánico ideal, reivindicado tanto por los krausistas como por los católicos. Frente al auge del Estado se propone el protagonismo de los interesados, asociados, y los jurados mixtos como lugar de encuentro donde se realiza la utopía armónica.

— *Persiste la mentalidad asistencial-benéfica*: la acción protectora del Estado no se diferencia en exceso de la acción asistencial-benéfica: es una acción paternalista, tutelar, no exigida obligatoriamente, jurídicamente. Al-

gunas medidas *sociales* del Estado tienen este carácter asistencial, como el asilo de inválidos por el trabajo, las cocinas económicas o repartos gratuitos de sopa para mendigos, o los trabajos públicos en tiempos de paro.

LA ECLOSIÓN DE LOS REGIONALISMOS A FINALES DEL SIGLO XIX

A la altura de 1899 el político conservador Joaquín Sánchez de Toca, al observar con cierta alarma la eclosión de los regionalismos en el fin de siglo, recordaba su carácter minoritario unos años anteriores. En 1884 un proyecto de reforma de la Administración local planteado por Moret aludía a los conceptos de región y regionalismo con un tono meramente técnico-administrativo, como cauces de un saludable proceso descentralizador. En 1885, Romero Robledo, aunque en un sentido distinto, insistía en el mismo tema. Muy lejos estaban estos políticos dinásticos de pensar que estos conceptos cobrarían en pocos años una carga emocional y popular tan generalizada. Es verdad que inmediatamente después, reconoce Sánchez de Toca, aparecen varias publicaciones, manifiestos, etc., de reivindicación claramente regionalista. Pero, como él mismo subraya, se trataba de opiniones minoritarias debatidas por intelectuales en sus lugares de reunión, los Ateneos. Es el desastre del 98, según la percepción acertada del autor, quien ha convertido el regionalismo en un movimiento y sentimiento verdaderamente popular e incontenible. Un movimiento que amenaza, de ahí su alarma, a su concepción de la *patria mayor*, y que los gobernantes se ven incapacitados de afrontar y encauzar.

Para el político conservador, y ése es el objeto de su folleto *Centralización y regionalismo ante la política unitaria de patria mayor*, el movimiento regionalista había de ser encauzado y contrapesado con un amplio proyecto descentralizador, cuyo modelo había sido propuesto en 1891 por el propio Sánchez de Toca, colaborador del ministro Silvela, con el anteproyecto de reforma de la Administración municipal. Pero lo que nos importa ahora subrayar es esa percepción por un contemporáneo del alcance y dimensiones del regionalismo en la España de fin de siglo:

Por descontado, esas voces nuevas de regionalismo, cuyas teorías se manifiestan con tal falta de precisión, no tenían entonces, ni en la propia comarca cuya representación pretendían ostentar aquellos comisionados, virtualidad alguna para impresionar y conmover muchedumbres. Empezaban a despertar pasión únicamente entre un núcleo reducido de intelectuales y ateneístas, inspirándoles discursos entusiastas y avivando la controversia en sus escuelas. Sólo años después se advirtió que la teoría regionalista desarrollaba fuera de esos centros fuerzas de activo proselitismo, hasta tomar, por último, impulso vertiginoso, estallando como con gran explosión en el espíritu público al sobrevenir la tremenda crisis del desastre en que perdimos las colonias y los prestigios internacionales.

Así, en esta hora crítica, las invocaciones al regionalismo adquirieron de improviso sobre parte considerable de nuestro suelo patrio el maravilloso poder de esas fórmulas mágicas de misteriosa acción para promover formidables tempestades en el alma popular.

El reciente crecimiento de la historiografía sobre los nacionalismos en la España contemporánea nos permite conocer y valorar mucho mejor lo que significa el inicio de esa eclosión generalizada de manifestaciones y movimientos regionalistas en la última década del siglo XIX.

Con las debidas diferencias, de acuerdo con la variada entidad de cada movimiento, y teniendo en cuenta los diversos conocimientos que en la actualidad tenemos de cada uno de estos movimientos, se observan, sin embargo, algunos rasgos característicos comunes.

Se trata en primer lugar de una prolongación del proceso de recuperación lingüística e histórica de los respectivos pasados, iniciada en los años cincuenta del siglo XIX. La conciencia regionalista se afianza y avanza al hilo de celebraciones de Juegos Florales, o de campañas de defensa de los particularismos institucionales o jurídicos, frente a proyectos unificadores como el Código Civil.

La base social de estos movimientos es eminentemente urbana e intelectual, lo que no impide su fuerte vinculación con el mundo rural, donde en general se conservan mejor los rasgos lingüísticos, históricos y folklóricos que se tratan de recuperar o conservar. En todo caso, es esa base social, su arraigo y relación concreta con la realidad socioeconómica, lo que explicaría el relativo éxito o fracaso de estos regionalismos. En el caso catalán, el más estudiado junto con el vasco, sólo la incorporación de la burguesía al catalanismo después del 98 convertirá un movimiento minoritario y eminentemente cultural en un movimiento político. En el caso vasco, el divorcio inicial de importantes sectores industriales y urbanos respecto del primer nacionalismo se compensa con la progresiva integración de algunos sectores liberales. En el caso gallego, la ausencia o debilidad de una base social explicaría el fracaso político de un regionalismo con una personalidad lingüística y cultural tan definidas.

Los componentes ideológicos que configuran esos regionalismos son bastante heterogéneos. En casi todos ellos aparece una paradójica combinación, más o menos integrada, de contenidos del liberalismo y del tradicionalismo, sin olvidar el poso federal del Sexenio. Junto a Prat de la Riba y Almirall, el catalanismo católico de Torras i Bagés. En Galicia, el regionalismo liberal de Murguía frente al tradicionalista de Brañas. Vizcaya, en el núcleo fundacional aranista (foralista e integrista) se integrará pronto un grupo más liberal y urbano.

El grado de maduración alcanzado por el catalanismo, el nacionalismo vasco, el galleguismo, el valencianismo y otros regionalismos en la última década del siglo XIX es diverso, pero prácticamente en todos hay signos y manifestaciones de una conciencia renovada:

— El catalanismo, a la cabeza, consolidada la recuperación histórica y lingüística, aunque todavía minoritariamente, y sin el apoyo de la burguesía, avanza en la conciencia a través de campañas y movilizaciones específicas.

— El nacionalismo vasco está aún muy en germen, muy vinculado a la lucha foral. En 1893, a partir de un conflicto por la renovación del concierto económico de 1878, aprovechará la ocasión para expresarse públicamente.

— El regionalismo gallego, sobre la base de su propia recuperación lingüística (Rosalía) e histórica (Murguía), su *rexurdimento*, da a la luz en el período 1886-89 tres publicaciones representativas de los tres idearios presentes en el movimiento.

Los orígenes del catalanismo político

El catalanismo como movimiento político no cobra fuerza hasta después del 98, cuando la burguesía se incorpore decididamente al movimiento nacionalista. Pero durante buena parte del siglo XIX, y especialmente en las últimas décadas del siglo, se van poniendo lentamente las bases ideológicas y culturales. Un movimiento intelectual de recuperación (*Renaixensa*) de la lengua, las tradiciones y las instituciones y leyes históricas canalizó y expresó el primer sentimiento y conciencia regionalista-nacionalista.

La Restauración de 1875 se había implantado con el apoyo explícito de sectores influyentes de la burguesía catalana, y, a pesar de algunas manifestaciones y movilizaciones económicas (protestas proteccionistas) y culturales, la hegemonía política de los partidos dinásticos del turno nunca fue puesto en cuestión. El catalanismo como movimiento político aún no había nacido, y como reivindicación o sentimiento regionalista-nacionalista era minoritario.

La mejor expresión de la debilidad del catalanismo en los años ochenta del siglo XIX lo constituye el fracaso de la propuesta defendida por Valentín Almirall. Éste había evolucionado desde el federalismo de Pi i Margall hacia posiciones francamente nacionalistas: en 1882 fundó el Centre Català; en 1885 promovió la entrega a Alfonso XII del *Memorial de Greuges*, aprovechando la protesta proteccionista contra el acuerdo comercial con Inglaterra; en 1886 publicaba *Lo Catalanisme*. Pero pronto se quedó solo. Sin el apoyo de la burguesía, que no pasaba de una protesta puntual ante la política comercial, y que progresivamente se vincularía estrechamente a la política ultramarina de los Gobiernos del turno hasta 1898. En los años noventa la exportación de tejidos de algodón a las Antillas constituía la cuarta parte de la producción catalana. Por otro lado, en 1887, el grupo de la revista *La Renaixensa* y algunos intelectuales se salieron del Centre Català de Almirall y crearon la *Lliga de Catalunya* con *La Renaixensa* como órgano de expresión. Simultáneamente otro grupo de jóvenes universitarios, separados también del Centre Ca-

talá, fundaron el *Centre Escolar Catalanista*. La propuesta de Almirall desaparecía.

La *Lliga de Catalunya*, que no hay que confundir con el partido fundado después por Prat de la Riba, y el *Centre Escolar Catalanista*, ambas agrupaciones minoritarias de intelectuales, liderarán durante la última década del siglo XIX una serie de iniciativas y campañas que contribuirán a profundizar y extender la conciencia catalana: de una conciencia regionalista a otra propiamente nacionalista.

En 1888 la celebración de la Exposición con la asistencia de las más altas autoridades del Estado fue aprovechada en el marco tradicional de los Juegos Florales para dar una expresión pública del sentimiento regionalista. En otro sentido, en el marco de la Exposición se celebró un congreso económico que se convirtió en plataforma de un frente proteccionista amplio, con la participación de los cerealistas castellanos y textiles catalanes. La campaña de 1889 contra el proyecto de reforma del Código Civil, la fundación de la Unió Catalanista en 1891, como confederación de grupos, periodistas y personalidades; la aprobación por esta entidad, en marzo de 1892, de las Bases de Manresa son otros tantos hitos importantes en el avance de la conciencia.

Pero el principal problema de la Unió Catalanista era su carácter minoritario y su escaso arraigo social, su falta de apoyos sociales, burgueses o populares. Sus planteamientos eran demasiado abstractos e idealistas, sin apenas capacidad de incidir en la realidad social y económica catalana del momento. Como Borja de Riquer subraya: *Esta automarginación del movimiento catalanista respondía también a su falta de fuerza y representatividad. La Unió Catalanista era una organización reducida y representaba sobre todo sectores relativamente marginales de la vida económica y social catalana, los más ajenos al proceso industrializador. Dentro de la Unió predominaban elementos del mundo rural, de la Cataluña agraria y de la intelectualidad barcelonesa, y no del capitalismo burgués ni de los trabajadores industriales.*

En la década de los noventa, poco a poco, algunos sectores más jóvenes e inquietos del Centre Escolar Catalanista tomaron iniciativas más concretas, intentando salvar esa automarginación. Entre ellas hay que destacar la ocupación de los puestos directivos del Ateneo barcelonés (Ángel Guimerá, presidente, y Joan Maragall, secretario), desde donde impulsarán, en este lugar de reunión de la burguesía catalana, la utilización de la lengua catalana en los discursos y conferencias. El apoyo de los catalanistas a la lucha griega contra Turquía por la liberación de Creta, en 1897, provocó la censura y represión gubernamental y dio ocasión para la consiguiente campaña de protesta. Las iniciativas se dirigieron sobre todo a la progresiva generalización de la utilización del catalán.

A todo ello hay que añadir la irrupción del *Modernismo* como nuevo movimiento literario y artístico, que vino a sustituir a la romántica *Renaixença* como vehículo de expresión del sentimiento nacionalista. Significaba la

irrupción de este nuevo catalanismo, mirando al presente y al futuro más que al pasado.

La progresiva aceptación del término nacional, referido a lo catalán, marca significativamente la sustitución de la conciencia regionalista por otra nacionalista.

Pero, en todo caso, no hay que olvidar que nos encontramos siempre en una fase prepolítica. El catalanismo como opción política, con capacidad de alterar el turno de los partidos dinásticos, es un fenómeno posterior al 98. La pérdida de las colonias puso en cuestión los lazos que ligaban los intereses económicos de la burguesía textil catalana a la política de Madrid. Ésta fue la ocasión, tras el fracaso del Gobierno Silvela, en el que Polavieja y Durán i Bas representaban los intereses catalanes, para que los catalanistas lograran integrar a la burguesía en su movimiento.

El regionalismo gallego

Según la periodización de la evolución del galleguismo que Ramón Villares hace en su *Historia de Galicia*, las expresiones *regionalistas* que aparecen a partir de los años ochenta venían precedidas de unos momentos de reivindicación y redescubrimiento de la especificidad gallega: el provincialismo juntista, de carácter progresista de 1846; el *rexurdimento* o recuperación cultural, lingüística e histórica de Galicia en los años sesenta, Rosalía y Murguía; la aportación federal del Sexenio, que se prolonga y coexiste en los años ochenta con las dos tendencias regionalistas fundamentales.

Según el estudio de Ramón Maiz sobre *O rexionalismo galego*, en el breve espacio de tiempo de 1886-89 aparecen en Galicia expresiones muy características de las tres corrientes que configuran el regionalismo gallego: el liberal de Murguía, el federal de Aureliano J. Pereira y el católico tradicionalista de Brañas. En ese período en Pontevedra se celebran certámenes literarios y en toda Galicia se publican revistas de carácter regionalista. Pero sobre todo es la publicación en Barcelona, en 1889, del libro de Alfredo Brañas, *El regionalismo*, lo que marca la consolidación en Galicia de la conciencia regionalista.

A semejanza del catalanismo, en la configuración ideológica del regionalismo gallego convergen componentes liberales, federales y católicos. Si bien, en el caso gallego, más que de integración hay que hablar de concurrencia y confrontación de tendencias. Una de las debilidades del regionalismo gallego en este momento, junto a la ausencia de una base social específica, reside precisamente en esa división ideológica que hace difícil los acuerdos y colaboraciones.

Entre 1890 y 1894 una asociación regionalista gallega, vinculada a la tendencia de Brañas, organiza algunas actividades propagandísticas. En Tuy, en 1891, bajo el impulso de Murguía, se celebran Juegos Florales. En esa mis-

ma época el Centro Gallego de La Habana celebra actividades regionalistas. Ligas regionalistas comienzan a actuar en 1894 en La Coruña y Santiago, pero siempre con escasa incidencia.

Maiz en el estudio citado interpreta la debilidad del regionalismo gallego por las condiciones estructurales, sociales y económicas de la Galicia de fin de siglo, y, en relación con ello, por lo limitado de su base social. Ni la hidalguía escucha a Brañas ni la burguesía a Murguía. La burguesía gallega se encuentra perfectamente integrada en el sistema político de la Restauración, como demuestra la permanente hegemonía de los partidos dinásticos en todos los procesos electorales. La convocatoria regionalista llega a un reducido grupo de intelectuales y pequeña burguesía, que además se encuentra dividido entre dos ofertas, la liberal y la católica, y sin líder con capacidad de aglutinarlos. Sólo el federalismo apela específicamente al campesinado gallego.

Todo ello explicaría que a principios de siglo, a diferencia del catalanismo, el regionalismo gallego no esté en condiciones de presentarse como opción política. La fase regionalista del galleguismo se prolonga, según la periodización de Ramón Villares, hasta la aparición en 1916 de las Hirmandades de Fala, aunque a partir de 1907, con el pacto de Solidaridade, se puede hablar de una nueva fase dentro del regionalismo gallego.

El nacionalismo vasco

También durante la Regencia se configura el pensamiento nacionalista de Sabino Arana y se dan los primeros pasos del nacionalismo vasco. A diferencia del catalanismo y de los otros regionalismos, el nacionalismo de Arana se caracteriza por su radical exclusivismo racista, antiliberal y antiespañolista. El independentismo es el objetivo natural de esos planteamientos nacionalistas.

Como acertadamente ha sido planteado por varios autores (J. Corcuera, entre otros), los planteamientos de Arana hay que situarlos en su contexto histórico: la polémica sobre la abolición de los fueros, de un lado, y las transformaciones provocadas en Vizcaya por el proceso de industrialización, por otro. El purismo racista del pensamiento de Arana reacciona contra la fuerte inmigración obrera *maketa*. De aquí derivará el radical enfrentamiento del nacionalismo vasco con el socialismo y sus dificultades iniciales para presentarse como una alternativa integradora e interclasista. Los efectos económicos de la industrialización dividen también a la burguesía vasca. Los más beneficiados del proceso, los siderúrgicos, integrados en el sistema político de la Restauración, se oponen al nacionalismo; están de acuerdo con el régimen de conciertos económicos de 1878.

La abolición de los fueros, confirmada después de 1876, es el punto de referencia común de todos los planteamientos nacionalistas iniciales: para el

carlismo y el integrismo católico, foralismo y regionalismo son perfectamente compatibles con sus respectivos idearios españolista y católico. Un sector de los liberales, vinculados también al foralismo, evolucionan hacia un nacionalismo moderado compatible con el Estado liberal y español de la Restauración. Finalmente, la referencia de Arana a la *Ley vieja* como signo de identidad nacional va más allá de la reivindicación foral.

En el primer nacionalismo vasco, como en el catalanismo y el galleguismo, hay también una mezcla de componentes ideológicos y políticos:

— La componente tradicionalista del pensamiento de Sabino Arana enlaza con el fondo carlista y foralista, pero sus planteamientos racistas le enfrentan radicalmente con esos orígenes.

— La componente liberal-moderada: antiguos miembros de la Sociedad Euskalerria, miembros de la burguesía comercial y de la construcción naval, partiendo de la reivindicación foral, abogan por planteamientos nacionalistas. Desde 1898 hasta la muerte de Sabino Arana se libra dentro de la organización una lucha entre estas dos tendencias. El contexto político español de fin de siglo, al obligar a la marginación y la clandestinidad al radicalismo independentista de Arana, favorece la progresiva evolución del partido y del propio Arana hacia posiciones más moderadas. Los contactos con el catalanismo potencian esa evolución.

En suma, la peculiaridad del primer nacionalismo vasco, a diferencia del catalanismo y de otros regionalismos de fin de siglo, lo constituye la referencia a la raza como signo de identidad exclusivista, y su catolicismo antiliberal acorde con el integrismo católico vigente en otras latitudes.

LOS CONGRESOS CATÓLICOS Y EL MOVIMIENTO CATÓLICO

Los primeros Congresos Católicos en España (1889-1890) coinciden con el momento de consolidación del sistema político de la Restauración en la fase liberal y democratizadora de los Gobiernos de Sagasta. Ello implicaba el inicio, en esos años, de una política más claramente secularizada y un avance de la propaganda laicista al amparo de las libertades.

En el plano eclesial la política general de León XIII (que sintetiza el término *ralliement*) se concreta en España en un llamamiento específico a la unidad de los católicos para desarrollar una acción política suprapartidista más eficaz desde dentro del sistema político liberal. Desde la *Unión Católica* de Pidal y Mon (1881) al programa político y la unión electoral aprobados en el Congreso de Burgos (1899), la constitución de un partido católico es un proyecto, alentado por el Vaticano, una y otra vez frustrado por la fuerte división política de los católicos españoles: carlistas, integristas y mestizos.

En este doble contexto de consolidación política de la Restauración y de la política eclesial de León XIII se inscribe la experiencia de los seis Congresos Católicos (Madrid 1889, Zaragoza 1890, Sevilla 1892, Tarragona 1894,

Burgos 1899 y Santiago 1902). Al igual que otras experiencias anteriores, en el catolicismo europeo (especialmente la *Opera dei Congressi* en Italia desde 1874) los Congresos suponen un intento de respuesta católica organizada frente al avance y consolidación de una sociedad liberal y la consiguiente desaparición de una sociedad de *cristiandad*. Constituyen (o pretenden constituir) plataformas unitarias de propaganda doctrinal y de iniciativas prácticas muy variadas (las *Obras católicas*) frente a iniciativas públicas y privadas de carácter secularizador. Los objetivos formulados en el reglamento del primer Congreso Católico definen ya los temas que serán objeto constante y continuo de atención en las *Memorias* y en las conclusiones de los Congresos:

Defender los intereses de la religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir la educación e instrucción cristiana, promover las obras de caridad y acordar los medios para la restauración moral de la sociedad.

Se trataba fundamentalmente de propiciar, a través de los Congresos, la unidad de los católicos españoles (fuertemente divididos entre sí y con la jerarquía) en un proyecto político nuevo que partiera de la aceptación posibilista del sistema político de 1876 como *mal menor*. Era una iniciativa predominantemente clerical y jerárquica, aunque a ella se incorporaron numerosos y significados seglares como miembros de las Juntas organizadoras, oradores, ponentes y socios participantes en las diversas actividades de los Congresos.

Los Congresos Católicos tenían la pretensión de constituirse como una estructura permanente coordinadora de todas las *Obras* católicas (Junta central de AC), pero no lo lograron y ésa puede ser la clave de su fracaso y desaparición. No pasaron de ser encuentros masivos de hombres, grupos e iniciativas que todo lo más habían llegado, en algunos casos, a una coordinación diocesana (como la Liga de Sociedades Católicas de Barcelona). A pesar del nombramiento de una Junta central de Congresos y de AC, la organización efectiva de cada uno de los Congresos corrió a cargo de una Junta diocesana creada *ad hoc* para cada uno de ellos. Y entre Congreso y Congreso no funcionó de verdad una estructura o comité permanente.

Tanto en el plano doctrinal como en el de las iniciativas, los Congresos constituyen en gran medida una anticipación de objetivos y experiencias que madurarán ya en el siglo XX. Y, en todo caso, son quizá la expresión global más significativa para calibrar el catolicismo español de fin de siglo, en los años finales del pontificado de León XIII, en la década que sigue a la encíclica *Rerum Novarum*. Tanto por el número de participantes, obispos, clero, seglares, prensa y asociaciones católicas, como por la amplia representación geográfica, su estudio nos permite una primera aproximación al movimiento católico español de fin de siglo.

Con el término *Movimiento Católico* se hace referencia al conjunto de asociaciones e iniciativas católicas que se proponen en distintos frentes —la catequesis, la educación, la beneficencia, la propaganda escrita, la cátedra y la escuela en general— la defensa del objetivo católico, restaurador o re-

cristianizador. La coordinación e impulso de ese movimiento católico es el primer objetivo declarado de los Congresos Católicos.

Desde el primer Congreso (Madrid, 1889) se planteó la necesidad de crear Juntas diocesanas de *obras católicas* para la coordinación de todas las iniciativas. En el Congreso de Sevilla (1892), una *Memoria* de la *Liga de Sociedades Católicas de Barcelona* concretaba la propuesta coordinadora de las obras católicas, señalando los objetivos, los medios y la organización concreta que deberían tener las Juntas diocesanas, el objetivo común a todas las asociaciones católicas debía ser afirmar el reinado social de Jesucristo. Las actividades a desarrollar deberían incluir desde el establecimiento de escuelas católicas en cualquier pueblo hasta la difusión de los catecismos, el apoyo a los patronatos de obreros, la fundación de Cajas de Ahorro para la clase trabajadora y el auxilio a la prensa católica. Un *Consejo superior de las obras católicas*, de carácter diocesano y bajo la dirección efectiva del obispo respectivo, englobaría iniciativas clasificadas en estos cinco grupos: piedad, caridad, enseñanza, propaganda y patronato de obreros.

El Congreso de Tarragona (1894), fin de un ciclo homogéneo y continuo, de una periodicidad casi anual, propone desde una cierta frustración (sección especial dedicada a analizar las causas de la ineficacia de los Congresos) un balance de la experiencia. La autocrítica sirve para insistir en el objetivo coordinador citado. Se apuntaba como causas de la ineficacia de los Congresos *la gran división de las obras católicas que a pesar de tener fines análogos entre sí se multiplican, y la falta debida de organización, pues las Juntas diocesanas lo son casi de nombre*.

Entre 1894 y 1899 los Congresos Católicos se interrumpen, sin haber cubierto los objetivos fundacionales. Los dos últimos Congresos Católicos (Burgos 1899 y Santiago 1902) se enmarcan en la específica coyuntura finisecular española, en el contexto de movilizaciones que provoca el 98. Ahora sí, un empuje mayor de la opinión anticlerical (anticongregacionista) exige una respuesta más organizada. En el Congreso de Burgos la propuesta coordinadora adopta un carácter más directamente político-electoral. Varias *Memorias* de los más importantes publicistas y propagandistas católicos del momento sobre los *Medios de realizar la unión sincera de los católicos españoles...* coincidían en un conjunto de propuestas concretas, tendentes a la organización política de los católicos al margen de los partidos existentes, en torno a un programa común político y social, cuya definición urgía a los obispos. Dicha unidad requería la creación de un periódico unitario, una estructura orgánica estable de juntas parroquiales, diocesanas y central, y la organización de la actividad electoral, designando candidatos católicos dispuestos a defender el programa católico.

La reiteración del objetivo coordinador en todos los Congresos no hace sino revelar el fracaso en la práctica de este proyecto. La responsabilidad de esta frustración se atribuye, por parte de los propios protagonistas, a la fuerte división política de los católicos entre carlistas, integristas y *mestizos*. Se-

gún otra hipótesis, la situación real de la Iglesia y del catolicismo español a principios de los noventa estaba tan consolidada que no urgía la constitución de un fuerte movimiento católico. El pacto posibilista de la Iglesia-Jerarquía con las *fuerzas vivas* de la Restauración contradecía y dejaba fuera de lugar las iniciativas integristas, y, por otra parte, desmovilizaba de hecho los intentos más *modernos* de organizaciones posibilistas. Entre el integristismo y el posibilismo se debatían las diversas propuestas de acción de los católicos en el nuevo orden liberal.

Las secciones de trabajo que se constituyeron en los Congresos Católicos se correspondían con los principales frentes del movimiento católico. Recordemos brevemente directrices y propuestas presentadas en algunos frentes significativos: el de la propaganda católica, el de la enseñanza (cuestión escolar) y el del catolicismo social.

Con el término *propaganda católica* se alude, en un sentido amplio, al conjunto de instrumentos de mentalización-educación que utiliza el movimiento católico para lograr sus objetivos. En ella se incluyen, por tanto, no sólo las obras estrictamente publicitarias o propagandísticas (prensa, revistas, colecciones de folletos como el del Apostolado de la Prensa), sino también las iniciativas educativas y las benéfico-sociales. En ese sentido se hace referencia a un modelo de acción católica integrada que, como en el caso de la *Propaganda Católica de Palencia*, incluía en una misma institución obras publicitarias (una revista), educativas (escuelas para niños y adultos) y benéfico-sociales (Caja de Ahorro y sociedad de socorro mutuo).

Junto a este modelo de institución integrada de propaganda o acción católica global se encuentran en las crónicas de los Congresos referencias a varias iniciativas centradas preferentemente en la labor publicitaria: *El Obrero*, de Sevilla; *La Lectura Popular*, de Orihuela. La *Revista Popular*, de Barcelona dirigida por el padre Félix Sardá i Salvany, y la *Biblioteca católico-propagandística*, de Pamplona. En la sección de Propaganda Católica del Congreso de Sevilla, el vicepresidente de esa institución navarra proponía las *bases para el establecimiento de asociaciones católicas de propaganda en todas las diócesis de España*, cuyo objeto sería *la difusión gratuita de opúsculos, folletos y hojas de sana lectura católica en las cárceles, hospitales, patronatos de obreros, fábricas, escuelas, romerías, fiestas populares, ejercicios de misión... y la creación de bibliotecas católicas populares*. Por esas mismas fechas el *Apostolado de la Prensa* iniciaba la publicación de una serie de folletos de propaganda católica que se proponían salir al paso de los tópicos fundamentales de la propaganda liberal-laicista y socialista.

La lucha por la escuela era uno de los frentes más significativos del movimiento católico. No es extraño que ocupe uno de los mayores espacios en los discursos públicos y en las secciones de trabajo de los Congresos Católicos. La distinción entre *libertad doctrinal* (libertad de cátedra) y *libertad académica* (facultad de creación de centros docentes) es el eje de una doble reivindicación presente en todos los Congresos: de un lado, control y censu-

ra, con el apoyo eficaz del Estado, de la *libertad doctrinal*; y de otro, reivindicación de la *libertad académica*.

La posición de la Iglesia y del movimiento católico en relación con la cuestión escolar se definía eminentemente por reacción frente a los peligros o enemigos que, según la percepción de los Congresos, era fundamentalmente de dos tipos: la política educativa de los Gobiernos liberales y conservadores, y las iniciativas educativas del movimiento laicista. Frente al *monopolio del Estado docente*, así expresado por los propios católicos, se reivindicaba la plena validez académica de los estudios en centros católicos; frente al influjo de la Institución Libre de Enseñanza en la política oficial y la profusión de *escuelas laicas* de iniciativa librepensadora, se exigía del Estado una política de control y represión más acorde con los artículos del Concordato de 1851 que con la tolerancia del artículo 11.

Pero la acción de los católicos no se podía reducir ya a sacar el máximo partido de la legalidad vigente, una legalidad beneficiosa y protectora, sino que exigía una movilización positiva, no meramente defensiva, en forma de creación de escuelas, preparación de maestros católicos, e iniciativas educativas y pedagógicas propias.

En el movimiento católico español, tal como se manifiesta en los Congresos, hay un debate de fondo sobre la estrategia más adecuada a emplear para la defensa de los ideales restauradores católicos: la integrista o la posibilista. En la *cuestión escolar*, tal como aparece en los debates, *Memorias* y conclusiones de los Congresos, se manifiesta de forma clara la apelación a esa doble estrategia: por un lado, interpretando el marco legal del Estado confesional de la forma más restrictiva, se reclama el máximo control ideológico de los contenidos de la enseñanza (censura de textos y profesores, intervención en tribunales, oposiciones, Juntas locales y provinciales de Instrucción Pública, obligatoriedad de la enseñanza religiosa, prohibición de las escuelas no católicas). Por otro lado, ante la consolidación del orden liberal y la asunción creciente por el Estado de tareas docentes se intentan consolidar los colegios católicos de religiosos fundados durante la Restauración, con el reconocimiento legal de sus estudios; y se impulsa la creación de escuelas populares para contrarrestar otras propagandas. En definitiva, presión legal y movilización católica, dos tácticas compatibles, que eran propuestas de forma reiterada a lo largo de todos los Congresos.

Los Congresos Católicos son también el lugar donde va madurando el primer catolicismo social en España. Desde el primer Congreso no falta una sección dedicada a las obras sociales, aunque las alternancias en la denominación de esta sección (unas veces llamada de *asuntos de caridad* y otras de *cuestiones sociales*), revela, muy significativamente, la ambigüedad y la vacilación que acompañan esa primera toma de conciencia del problema social por parte de los católicos españoles. Esta reflexión es aún excesivamente tributaria, especialmente en el primer Congreso, de una concepción más benéfica que social, más en la perspectiva de la caridad que de la justicia social.

Las *Memorias* y las conclusiones sobre la *cuestión social* revelan el *techo* y las limitaciones del catolicismo social español del momento en comparación con el de otras latitudes, así como la lentitud con que aquí se reciben y difunden los planteamientos de la encíclica *Rerum Novarum*. Sin embargo, es en el marco de los Congresos donde algunos propagandistas pioneros, como el padre Vicent, encuentran un lugar de especial resonancia para la difusión de las nuevas ideas.

En general, se observa un progresivo avance en la recepción de esas nuevas ideas entre el primer Congreso (Madrid 1889) y el cuarto (Tarragona, 1894). Si bien en el segundo Congreso se había creado una sección específica, distinta de la de asuntos de caridad, dedicada a la cuestión social, es en el Congreso de Tarragona donde se aprecia ya una recepción madura de las directrices de la *Rerum Novarum* sobre el salario justo o el asociacionismo obrero mixto.

Quizá el principio de la *Rerum Novarum* más y mejor propugnado en los Congresos Católicos sea el del legítimo intervencionismo del Estado en las cuestiones socio-laborales para proteger a los más débiles. En todas las conclusiones sociales, desde Zaragoza, se encuentra la defensa concreta de ese criterio. Esta línea culmina en el Congreso de Santiago (1902) con el apoyo explícito a la política que el conservador Dato había iniciado en 1900 (leyes de accidentes de trabajo y del trabajo infantil y femenino).

Pero los Congresos no son sólo la ocasión para la definición y divulgación de una doctrina. Fueron también el lugar de intercambio de modelos de acción social-católica. El prototipo de acción social-católica más propugnado en los Congresos será con diferencia el de los Círculos Católicos de Obreros y el del asociacionismo profesional mixto (patronal-obrero), restaurador del ideal armónico de los gremios.

En la línea de promoción de la acción social católica, lo más significativo es, sin duda, el conjunto de propuestas que se hacen en el Congreso de Burgos (1899) para apoyar las condiciones de producción de los pequeños propietarios campesinos, con especial énfasis en el crédito rural. En el explícito llamamiento que ese Congreso hace a la participación activa del clero rural en la organización de cajas rurales está la base del amplio movimiento rural católico castellano de las primeras décadas del siglo XX (la CONCA).

Si se compara el nivel del catolicismo social español, en la última década del siglo XIX, con el francés, belga, alemán o italiano, se observa un notable retraso y una significativa dependencia. Ahora bien, si se compara el nivel del catolicismo social español anterior a los Congresos con el desarrollo alcanzado en esa última década del siglo XIX, bajo el impacto de la *Rerum Novarum*, se aprecia un progreso significativo, tanto en la conciencia como en la acción.

IV. LA GUERRA DE CUBA

El inicio de la insurrección y su creciente éxito a lo largo de 1895 obligó a la inmediata reacción política y militar en la Península. La situación urgía el inmediato relevo del partido en el poder, y Sagasta pronto se sintió inclinado a facilitar la alternativa. El 23 de marzo quedó constituido el nuevo Gobierno (el último presidido por Cánovas), que tendría como principal y absorbente tarea la organización financiera y militar de la guerra cubana.

Inmediatamente el nuevo Gobierno sustituyó al capitán general Calleja por Martínez Campos, el antiguo pacificador, al que envió con nuevos recursos militares. Pronto Martínez Campos percibió que no podía repetir la pacificación de 1878, y aconsejó a Cánovas la adopción de una política dura e intransigente, que, personalmente, no se sentía capaz de llevar a cabo. En julio del 95, el propio Martínez Campos aconsejó el nombramiento de Weyler como su sucesor, pero el relevo no se producirá hasta enero de 1896, cuando la situación militar había evolucionado muy desfavorablemente para España. A lo largo del año 1895 la insurrección se había extendido ampliamente por toda la isla, de Oriente a Occidente, amenazando seriamente La Habana, sede del propio capitán general.

El envío de refuerzos militares se incrementó sustancialmente de forma bastante rápida (2.668 en mayo, 9.193 en junio, 26.835 en agosto) en medio de exaltaciones patrióticas oficiales y algunas resistencias populares. Pero, en el otro bando, el número de insurrectos, encuadrados militarmente, llegaba a fin de año —según algunos cálculos— a 40.000 hombres, y tendía a aumentar. Pero, sobre todo, lo que pesaba en la evolución de los acontecimientos bélicos era la incapacidad estratégica y táctica de Martínez Campos, según él mismo reconocía, para hacer frente a una guerra de esas características. Los métodos humanitarios y conciliadores de la guerra del 70 no tenían ahora ningún efecto desmovilizador.

La sustitución de Martínez Campos por Weyler en enero de 1896 significó, en efecto, un cambio sustancial en la manera de hacer la guerra, y tuvo, como se sabe, efectos inmediatos. En pocos meses (primavera-verano de 1896) logró *pacificar* las provincias de Oriente, mediante una táctica extremadamente dura de aislamiento de la guerrilla de su medio natural, concentrando a la población campesina, y acotando mediante *trochas* la geografía de la insurrección.

Por tanto, la evolución de la guerra en los años 1895 y 96 se corresponde claramente con los períodos de gestión de los dos capitanes generales: muy desfavorable en 1895, con Martínez Campos, y de recuperación favorable con Weyler.

La vida política en la Península se encontraba totalmente condicionada por la marcha de la guerra. La preocupación básica del Gobierno era allegar fondos suficientes para financiar el esfuerzo bélico y lograr el máximo consenso político para la defensa de los objetivos nacionales.

Inicialmente Cánovas contará con la benevolencia de Sagasta para la aprobación urgente de los presupuestos ordinario y extraordinario de 1895. Éstos fueron aprobados en 1895 por unas Cortes aún de mayoría liberal, que no se volverán a reunir, aunque tampoco fueron disueltas hasta enero de 1896. La vida política y parlamentaria quedaba reducida al máximo para evitar la manifestación de discrepancias. El retraso en la celebración de las elecciones generales (abril del 96) parecía reflejar ese carácter relativamente superfluo del régimen parlamentario en la coyuntura bélica.

La apertura de las nuevas Cortes de mayoría conservadora y la discusión reglamentaria del mensaje de la Corona, a partir de junio del 96, dan lugar a la expresión encontrada de ciertas discrepancias sobre la gestión de la guerra, y, sobre todo, sobre los proyectos descentralizadores presentados por Cánovas. Frente a las críticas de la oposición, Cánovas defendió claramente la administración de Weiler en Cuba. En cuanto a las reformas descentralizadoras, que finalmente aplicó por decreto, en los territorios *pacificados*, chocaban con la crítica de la oposición liberal, partidaria ahora de la concesión de autonomía, y con la tradicional oposición de los asimilistas.

Parece que la marcha favorable de la guerra permitía la expresión de algunas críticas a la política de Cánovas. En mayo de 1897 Sagasta, defensor ahora de la autonomía cubana, se pronunciaba abiertamente contra la política militar del Gobierno: *Después de haber enviado nada menos que 200.000 hombres a Cuba, de haberse derramado tanta sangre y gastado más de 1.000 millones de pesetas, resulta que, aun admitiendo que la Isla está pacificada en su mitad, que es mucho admitir, en la otra mitad no son dueños nuestros soldados más que del terreno que pisan*. Declaración inoportuna, según F. Almagro, pues contribuyó indirectamente a la aprobación por el Senado norteamericano de la proposición Morgan por la que se concedía a los cubanos el derecho a la beligerancia. Aprobado ese principio, se legitimaba la ayuda económica a los insurrectos.

El otro frente de la política gubernamental en el conflicto cubano era el diplomático, y especialmente la relación con los Estados Unidos. Los políticos, plenamente conscientes del riesgo de la intervención, trataban de retrasarla lo más posible. El fin de la presidencia de Cleveland, que había manifestado reiteradamente su respeto a la soberanía española a la vez que su estímulo a una política de concesiones, hacía prever un giro importante de la posición norteamericana. El giro no se produjo de forma inmediata (el nuevo presidente McKinley, elegido en noviembre del 96, no asumió la presidencia hasta marzo del 97). Sería el reconocimiento por el Senado del derecho a la beligerancia, antes citado, en mayo del 97, el comienzo de una nueva etapa más abiertamente intervencionista.

La presión exterior e interior (las críticas de Sagasta) llevaron a Cánovas a plantear la crisis total en junio, pero su posición y la de Weyler saldrían reforzadas, pues en esa situación los liberales no estaban realmente inclinados a asumir la tarea de gobierno.

Hacia el desastre

Un hecho fortuito, el asesinato de Cánovas, en agosto de 1897, imprimió un giro importante a los acontecimientos en España y en Cuba. La desaparición de Cánovas obligó, tras un breve Gobierno de transición presidido por el general Azcárraga, a la alternancia en el poder. Pero el acceso de los liberales significó un giro inmediato y radical en la política cubana: la destitución de Weyler y el abandono de sus planes militares y de la política que su gestión había representado en los dos últimos años. Gestión dura, fuertemente criticada por los Estados Unidos en nombre de los derechos humanos, pero eficaz en el sometimiento de la insurrección, como lo prueba un balance de la situación militar y política de la Isla en el verano de 1897: la mitad occidental de la misma estaba prácticamente *pacificada* y se disponía a hacer lo propio en la mitad oriental.

La sustitución de Weyler por el general Blanco, y la decisión política de los liberales de reducir al mínimo las acciones militares, a la vez que se otorgaba, por fin, a la Isla un amplio estatuto de autonomía, expresan bien el cambio en la política cubana: *La pacificación* —según una nota del primer Consejo de Ministros— *ha de venir ahora por la acción política*. Los planes militares de Weyler quedaron congelados de acuerdo con instrucciones expresas de Madrid: *renunciar a toda ofensiva, y reducirse a batir las partidas que maniobraban todavía o que pudiesen surgir en las provincias ya pacificadas*. El 6 de noviembre el Gobierno de Madrid concedía una amplia amnistía a los presos políticos de Cuba y Puerto Rico. Pero la concesión más importante fue, sin duda, la aprobación de un régimen de Autonomía para el Gobierno de estas islas. En el Consejo de Ministros del 22 de noviembre, Moret presentó los reales decretos por los que se establecía la igualdad de

derechos políticos de los españoles residentes en las Antillas y los peninsulares, se hacía extensivo a Cuba y Puerto Rico el sufragio universal y se regulaban las instituciones del nuevo régimen autonómico. Aunque tardía e ineficaz, pues apenas pudo ser puesta en práctica, vale la pena recordar los términos de esa autonomía. En palabras de Fernández Almagro, *la Constitución de Cuba y Puerto Rico era un trasunto, a menor escala, de la Constitución de 1876. El gobernador general comparte, como el rey con las Cortes, el poder legislativo. Los secretarios de despacho vienen a ser respecto al gobernador general como los ministros de la Corona. El Consejo de Administración es el Senado; la Cámara de Representantes, el Congreso de los Diputados...*

Esta política de concesiones, propiciada por los liberales, con el ministro de Ultramar, Moret, al frente, llegaba demasiado tarde —el primer Gobierno autónomo en Cuba, presidido por el jefe del partido autonomista, José María Gálvez, comenzó a ejercer sus funciones el 1 de enero de 1898—, y lejos de frenar, alentó aún más el movimiento independentista y la presión norteamericana, cada vez más agobiante y directa.

De todas formas, el año 1897 terminaba con aparentes buenas perspectivas. A la aprobación del régimen autonómico para Cuba hay que añadir el pacto cerrado en Filipinas con los insurrectos, en diciembre del 97 (paz de Biac-Na-Bató). En la Península los conservadores cerraban la crisis abierta por la herencia de Cánovas con el Manifiesto de la Unión Conservadora y la aceptación del liderazgo de Silvela.

La presión norteamericana, muy considerable desde el inicio de la guerra, tanto por vía diplomática como mediante la creación de la *opinión pública*, aumentó sustancialmente a partir del *affaire* del Maine. La voladura de este navío, el 15 de febrero del 98, cuya responsabilidad fue atribuida al Gobierno español, sin pruebas contrastadas, por una comisión de investigación norteamericana, daba a los Estados Unidos el argumento y la justificación definitiva para una intervención más decidida y directa en el conflicto hispano-cubano. La presión diplomática norteamericana exigía tal tipo de satisfacciones y de concesiones al movimiento independentista, que, de hecho, equivalía a una intervención directa en el conflicto hispano-cubano, en forma de declaración de guerra ineludible.

Antes de llegar al conflicto, Estados Unidos hizo una nueva oferta de compra de la Isla por 300 millones de dólares. El rechazo de esta alternativa, en el momento en que se daba a conocer el informe americano sobre la voladura del Maine (últimos días de marzo), aceleró los pasos hacia la guerra, al tiempo que por parte española se procuraban vías de mediación. El 7 de abril los embajadores europeos en Washington llegaban a entregar al presidente McKinley una nota mediadora. Pero, pocos días después, en el mensaje al Congreso el presidente justificaba abiertamente la próxima intervención: *La situación actual de la isla de Cuba es una amenaza constante para nuestra paz interior e impone al Gobierno de los Estados Unidos gas-*

tos enormes, consecuencia de un conflicto que dura desde hace años en una Isla tan próxima a nuestro país, y tan unida a nosotros por importantes relaciones comerciales, y corren constante peligro la vida y la libertad de nuestros conciudadanos... En este mensaje el presidente solicitaba autorización al Congreso para adoptar medidas pertinentes, incluidas el empleo de las fuerzas militares y navales.

El 18 de abril, una resolución conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes, en respuesta a la solicitud del presidente, constituía ya un verdadero ultimátum: 1.º) *Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente.* 2.º) *Que es deber de los Estados Unidos exigir, como por la presente su Gobierno exige, que el Gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales de las tierras y mares de la Isla.* 3.º) *Se autoriza al presidente de los Estados Unidos y se le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo las milicias de los distintos Estados de la Unión en el número que sea necesario para llevar a efecto estos acuerdos.*

El ultimátum, verdadera declaración de guerra, aunque ésta se proclamara de manera oficial el 25 de abril, coincidía con la apertura de las Cortes españolas (20 de abril), y provocó, junto a manifestaciones patrióticas, motines populares en varias ciudades. El Gobierno, confirmada la confianza de las Cortes, había dispuesto el envío a Cuba de una escuadra al mando del almirante Cervera.

El desenlace de Cuba tuvo un inesperado precedente en Filipinas. Los conatos independentistas parecían controlados, después de la paz de Biac-Na-Bató, pero fue la directa intervención naval norteamericana, que provocó el desigual enfrentamiento de Cavite, lo que impulsó el movimiento insurreccional indígena.

La derrota naval de Cavite (1 de mayo) provocó una crisis ministerial (fueron destituidos los ministros de Estado, Marina y Ultramar) y una reacción popular en la Península en motines que han sido estudiados como *motines de subsistencias*. Reacciones muy significativas de descontento social que ponían en cuestión la popularidad de la guerra, pero de alcance político muy escaso. Los motines fueron especialmente graves, además de en Madrid, en Valencia, Cáceres, Alicante, Sevilla, Bilbao, León, Ciudad Real, Soria, Cartagena, Gijón, Alcoy, Talavera de la Reina, La Línea de la Concepción, Valdepeñas y Linares.

Tras el ultimátum norteamericano del 18 de abril, una escuadra al mando del almirante Cervera fue enviada a Cuba, en medio de las reticencias de los mandos, plenamente conscientes de la inferioridad española. Dicha inferioridad aconsejaba, en primer lugar, no dejar desguarnecidos, frente a eventuales ataques, otros intereses más próximos que los antillanos: las propias costas peninsulares y la costa canaria. Una vez en Santiago de Cuba (el 19 de mayo), una evaluación de los recursos propios (navíos no acorazados,

mal dotados de artillería y mal abastecidos de combustible) aconsejaba no salir de puerto para una autoinmolación segura frente a la escuadra norteamericana que bloqueaba el puerto desde el 26 de mayo. El desenlace final, el 3 de julio del 98, no pudo ser otro que el pronosticado por Cervera, y conocido previamente por los políticos de Madrid. Pero la situación interna, la presión de la opinión pública, el miedo a un pronunciamiento militar, en definitiva, la salvaguarda del sistema político y del propio régimen, aconsejaban sacrificar la escuadra y el prestigio de los militares. La rendición incondicional de Santiago de Cuba se hizo el 12 de julio. La resistencia de Manila se prolongó durante el mes de julio, después de la rendición de Cuba, mientras se cerraban las negociaciones del protocolo de Washington. El 14 de agosto, dos días después de la firma del protocolo, se firmaron las bases de la capitulación de Manila, a pesar de lo cual no se pudo evitar que la liquidación del archipiélago filipino también formara parte de ese protocolo final.

Los gobernantes y los militares españoles, conscientes de la inevitabilidad de la guerra y de la inferioridad naval española, trataron de evitarla, demandando la mediación y el arbitraje de las potencias europeas. Esfuerzo infructuoso. Unas gestiones de buena voluntad, como las del Vaticano y el emperador de Austria-Hungría, resultaron vanas. Otras mediaciones, como la de Alemania e Inglaterra, no eran realmente neutrales por su implicación en los repartos coloniales en ese momento en juego, tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental y en el estrecho de Gibraltar. Un reciente libro de Rosario de la Torre ha puesto de relieve la complejidad de factores diplomáticos que estuvieron presentes en el conflicto hispano-norteamericano del 98, y el especial protagonismo de Inglaterra en el planteamiento y solución de las cuestiones pendientes.

A los componentes clásicos —guerra colonial, con su epicentro en Cuba; guerra con los Estados Unidos y pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, inhibición de las potencias europeas, y, como apéndice final, la venta a Alemania de Marianas, Palaos y Carolinas—, José María Jover ha añadido otros cinco elementos fundamentales: la importancia del papel jugado por Inglaterra en la decisión norteamericana de ampliar sus fines de guerra con la anexión de las Filipinas, el carácter de acuerdo entre las grandes potencias que tuvo la venta de los archipiélagos menores a Alemania para compensar su renuncia a Filipinas, la amplitud de las ambiciones y temores que suscitó entre las potencias la redistribución del imperio colonial español, la importancia que tuvo dentro de la crisis un contencioso hispano-británico sobre Gibraltar, y la aparición del problema de la garantía territorial de la metrópoli y de sus islas adyacentes nada más consumarse la derrota militar de España.

Por tanto, no se trata sólo de que el 98 español haya que situarlo en el contexto internacional de otros *noventaiochos*, como señaló Pabón en su clásico estudio, sino que las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Alemania, no habrían jugado un mero papel de espectadores inhibidos ante un conflicto que se desarrollaba, aparentemente, fuera del ámbito y de los inte-

reses europeos. La implicación directa de estas potencias se aprecia más claramente a la luz del reparto de influencias, en el Pacífico y en el estrecho de Gibraltar, que se pactaron en el Tratado de París (diciembre del 98), y en otros acuerdos bilaterales firmados en ese mismo momento. La atención española del momento, y de los historiadores posteriores, se ha centrado tanto en la pérdida de Cuba que casi se ha echado en olvido la pérdida en el Pacífico de Filipinas, las Carolinas, Marianas, Palaos...

SIGNIFICADO POLÍTICO E IMPACTO SOCIAL DE LA GUERRA DE CUBA

La crisis interna que precede y acompaña a la guerra en el trienio 1895-98, y, sobre todo, sigue al desastre, tiene también paralelos muy significativos en otros *noventaiochos* europeos. El *Fachoda* francés tiene su reflejo interno en el *affaire Dreyfus*, y la crisis italiana en Abisinia (1896) tiene su repercusión en la fuerte crisis política y social del 98. Jover ha subrayado la común frustración colonial y crisis interna (política, social, moral e intelectual) que sufren los países de la Europa latina en torno al 98.

Uno de los mejores conocedores de este período, el hispanista francés Carlos Serrano, ha estudiado especialmente el impacto político y social de la guerra de Cuba en la historia española en dos publicaciones: *Final del imperio. España, 1895-98* (1984) y *Le tour du peuple* (1987). Siguiendo estos estudios podemos agrupar las posiciones y declaraciones de los líderes y partidos políticos en dos grandes bloques: el *belicista* y el *pacifista*. En el primero se encuentran no sólo los partidos dinásticos, sino algunos antidinásticos, como la mayoría de los republicanos y los carlistas. En el segundo, además de los federales, los socialistas y los anarquistas, los incipientes nacionalistas.

La guerra obliga a definirse a favor o en contra a todos los políticos, los grupos de intereses, los intelectuales (que precisamente en torno al 98 toman conciencia de tales), el pueblo. Las respuestas son más diversas y contrastadas que la imagen homogéneamente patriótica que a menudo ha venido dando la historiografía.

Los partidos dinásticos y la guerra

La guerra es contemplada como un *mal menor* por los *políticos dinásticos*, en tanto que un desenlace rápido pero *honroso* como el que se esperaba (conscientes, más allá de las proclamaciones públicas, de la inevitabilidad de la independencia y de la superioridad militar norteamericana) era la mejor manera de salvar la Monarquía constitucional. A partir de un determinado momento lo que más preocupaba a los políticos conservadores y liberales no era tanto la inminente pérdida de Cuba y Filipinas como las con-

secuencias políticas que de ello podían derivarse: un pronunciamiento militar de un Ejército frustrado y humillado conjugado con movimientos populares convenientemente instrumentalizados por los partidos antidinásticos, carlistas y republicanos.

Esta preocupación esencialmente política de los líderes dinásticos no era sentida de forma homogénea por todos. Los sectores más vinculados a los intereses económicos cubanos lógicamente se resisten, en mayor o menor grado, a la pérdida de las colonias e incluso a reformas autonómicas. Según el grado de vinculación al negocio colonial, se pueden distinguir tres grupos de intereses económicos:

— El *grupo colonial* en sentido estricto, cuyos intereses estaban en Ultramar: comerciantes y hacendados cuyas fortunas radicaban en el monopolio de la producción y la comercialización; también los funcionarios y militares que se habían enriquecido en su cargo; en el caso de Filipinas, la Iglesia era la principal terrateniente. Este grupo colonial se manifestó persistentemente en contra de cualquier reforma autonomista.

— Un segundo grupo está formado por los que conjugan funciones políticas e intereses en España con intereses en las colonias. Romero Robledo y el marqués de Comillas son representantes significativos de este sector. Romero Robledo, por su matrimonio, enlazaba directamente con los Zulueta, dueños de uno de los ingenios azucareros más importantes de la Isla. Comillas consiguió para la Compañía Trasatlántica, al inicio de la década, el monopolio del comercio antillano. A partir de 1895 obtiene el transporte de tropas. Por otro lado, está también presente en la constitución de seguros aplicados a la redención militar. Con todas estas vinculaciones no ha de extrañar su aliento a todas las manifestaciones patrióticas en favor de los combatientes.

— En tercer lugar, los empresarios españoles interesados en el negocio colonial, aunque no posean bienes territoriales en la colonia: textiles catalanes (*El Fomento*), cerealistas castellanos (*La Liga Agraria* de Gamazo), industriales bilbaínos (P. Alzola).

El Fomento del Trabajo Nacional, el representante más cualificado de los patronos catalanes, se alinea constantemente a favor del mantenimiento del régimen colonial. Antes de 1895 se opone a las reformas autonomistas de Maura. Hasta el final de la guerra no varía su posición proteccionista.

Los *cerealistas castellanos* ya habían experimentado negativamente en 1891 y 1892 las consecuencias de una cierta liberalización de los aranceles, en beneficio de la relación cubano-norteamericana. A lo largo del conflicto se van a manifestar más flexibles y abiertos a reformas en la relación colonial. Apoyaron los proyectos de Maura de 1893, pero en 1897 vacilan ante los proyectos reformadores de Cánovas.

En realidad, los vallisoletanos —según Serrano— estaban en una encrucijada. Liberales en política pero proteccionistas en economía, conscientes de la necesidad de modificar el estatuto colonial por una reforma polí-

tica, pero deseosos de preservar un importante mercado por un arancel elevado, sabedores además de que cualquier solución chocaba con el hecho de la concurrencia, fuera y dentro de la metrópoli, de las harinas catalanas o nacionalizadas, no conseguían encontrar una salida a situación tan contradictoria.

La estrategia de los portavoces castellanos fue, pues, bastante diferente de la del Fomento catalán. Favorables desde un principio a reformas políticas en las colonias, esperaban atraerse de esta forma las simpatías de sectores de la burguesía criolla... Más adelante, cuando se percataron del inevitable desenlace del proceso, se mostraron de acuerdo en liquidar el conflicto lo antes posible, a la vez que organizaron una protesta política (el movimiento de las Cámaras) pidiendo responsabilidades al régimen.

Pablo de Alzola, ingeniero, representante de la burguesía vasca, expresa una postura también más flexible y pragmática en relación con el conflicto colonial. En 1895 Alzola trata de conjugar las reformas administrativas de carácter autonómico con la defensa de un arancel proteccionista favorable a la siderometalurgia vasca. Cuando la guerra se recrudece, con criterio pragmático se muestran partidarios de abandonar.

La deshonra de España —escribe en septiembre de 1896— para el día en que, convencida de lo ruinoso del dominio de Cuba, acuerde evacuarla en la forma y término en que le convenga, es un asidero de convencional carácter, explotado por las pasiones de partido y por los intereses privados que habían de lesionarse para salvar el general de la madre patria.

El mejor reflejo de la vinculación social y económica con la guerra de Cuba es la suscripción del empréstito nacional de aduanas de 1896: *fue un excelente revelador, según Serrano, de la localización geográfica de los intereses en las colonias: Madrid, Barcelona, el País Vasco en su conjunto, Asturias, Baleares, el triángulo andaluz Sevilla-Cádiz-Málaga y las capitales cerealistas como Valladolid y Santander, fueron las que mayores contribuciones arrojaron, mientras en el otro extremo Galicia, Extremadura, la Andalucía del interior o La Mancha que en nada o casi nada contribuyeron...*

La prensa, los aparatos culturales y la Iglesia son los principales instrumentos al servicio de la legitimación ideológica de la guerra.

La Iglesia apoya y legitima desde el principio el esfuerzo bélico. Más allá de las divergencias en relación con otros temas (enseñanza, libertades), en esta cuestión se identifica plenamente con el régimen. El 15 de agosto de 1895, en Vitoria, el nuncio acompaña a la reina en la revista de las tropas destinadas a Cuba. Aparte del apoyo oficial vaticano (mucho más decidido a partir de la implicación del conflicto en Filipinas), múltiples manifestaciones religiosas organizadas por el clero presiden las despedidas de tropas. El Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras y la Asociación General Madrileña, por ejemplo, organizan en los Círculos Católicos de Obreros veladas y actos de apoyo a la causa santa, la nueva cruzada. Organizan Batallones de voluntarios (financiación de un cupo de soldados).

Mucho más conocida es la contribución propagandística de la *prensa* a la creación de falsas expectativas y mitos sobre la superioridad cultural y militar española sobre los *yankees*. Además del editorial y del artículo de opinión se utilizó abundantemente el cuento, el teatro, el poema y el romance al servicio de la exaltación patriótera.

Los partidos antidinásticos

En general, hay que decir que los partidos antidinásticos no supieron aprovechar la coyuntura de la guerra para liquidar el régimen. En unos casos por su identificación con la causa colonial, siempre por su debilidad y escasa implantación social y popular.

Al inicio de la guerra, el carlismo renuncia a cualquier pretensión para no obstaculizar la política nacional. En ese momento la Iglesia apoyaba explícitamente el régimen; para ella la opción carlista era progresivamente marginal. A medida que la guerra avanza, junto con los descontentos sociales, el carlismo se ve tentado a aprovechar la oportunidad de un eventual derrumbamiento de la dinastía. Así lo perciben algunas medidas preventivas del Gobierno y algunos informes diplomáticos extranjeros. Pero se trata de una amenaza muy débil: *el carlismo carecía de fuerzas e ideas en el interior y de apoyos en el exterior*. Sólo podría hacer algo apoyándose en el pronunciamiento de algún militar descontento.

El inicio de la guerra coincide con un momento de gran debilidad y división entre los republicanos: máxima aproximación de Castelar al régimen, enfermedad de Ruiz Zorrilla.

Por lo demás, los máximos representantes del republicanismo se manifiestan defensores del colonialismo. Su programa colonial no iba más allá de las reformas autonómicas. Por tanto, se oponían radicalmente a los independentistas cubanos. En el transcurso de la guerra radicalizaron sus declaraciones procolonialistas y en favor de la guerra, porque creyeron que podían aprovechar la crisis colonial para dar al traste con el régimen. La prensa republicana se convierte en defensora del Ejército y la Marina. Carlos Serrano caracteriza duramente la estéril postura de los republicanos (exceptuados los federales) durante el conflicto colonial:

Optando por la exaltación militar cuando crecía el malestar frente al Ejército, pregonando la guerra cuando regresaban demacrados los repatriados, ensalzando las glorias de Weyler cuando lo desacreditaban la brutalidad de la reconcentración y la ineficacia de la trocha, no provocaron más que esporádicas explosiones sentimentales, ajenas a los reales sentires de un pueblo al que proclamaban soberano. Por táctica pretendidamente política más que por convicción adoptaron actitudes maximalistas, situándose en los mismos supuestos del régimen que pretendían derrocar.

¿Una guerra popular? El movimiento obrero frente a la guerra

Se ha aducido como prueba de la popularidad de la guerra de Cuba la participación del pueblo en diversas manifestaciones: despedidas de soldados, recibimientos de generales... Hay que valorar en su justa medida esa supuesta exaltación nacionalista del pueblo, su carácter más o menos espontáneo, etc.

En todo caso, hay más pruebas de lo contrario: el rechazo y resistencia ante el reclutamiento y los motines provocados por crisis de subsistencias (mayo 1898). En general, es verdad que los motines populares carecieron de planteamientos políticos. Aunque a veces relacionaron su situación (paro) con el desarrollo de la guerra. Por parte del pueblo, lo que hay es más falta de entusiasmo que hostilidad ante la guerra, a juzgar por las escasas revueltas de quintas que se pueden contabilizar. Mucho más importante como síntoma es el número de prófugos y desertores del Ejército, especialmente en algunas regiones (Galicia, costa cantábrica, Pirineos, Sureste, Canarias). Se trata, por otro lado, de zonas de fuerte emigración, por lo que manifiesta no tanto un rechazo a la guerra como un problema social estructural.

El internacionalismo y el pacifismo obrero marcaban una gran distancia respecto a las demás posiciones políticas. Si bien, el pueblo *consciente*, la élite socialista y anarquista, no supo o no pudo explotar y canalizar adecuadamente el movimiento popular espontáneo. Ahí se revelan las debilidades organizativas y propagandísticas de socialistas y anarquistas en ese momento.

La postura socialista evoluciona desde un rechazo global de la guerra (que incluye también la lucha cubana por su independencia) a una condena más específica de la posición colonial española en Cuba (a partir del Congreso de la II Internacional en Londres, verano 1896), para confluir y canalizar, hacia el final del conflicto, el descontento popular ante la guerra (celebración del 1.º de mayo de 1898). El partido socialista desarrolló campañas (en septiembre de 1896 y en 1897) contra la injusticia social que implicaba el servicio militar, al permitir mediante el sistema de la *redención* eximir a determinadas clases sociales. La campaña significó un éxito de movilización y tuvo una gran rentabilidad política. La implantación del partido creció considerablemente a partir del 98. Según el estudio de Serrano, el partido socialista *fue el único partido que trató, por su propaganda primero, por sus campañas públicas luego, de organizar una protesta popular contra la guerra, dando cabida en su actuación al sentir de muchos trabajadores*.

En cuanto a los anarquistas, no se puede hablar de una posición homogénea, sino de varias actitudes anarquistas. Por un lado, por sus estrechas relaciones con la emigración, conocen de primera mano el problema colonial y están en condiciones de comprender la posición independentista. La guerra confirmaba su tesis internacionalista, la necesaria superación de

las patrias. (Azorín traduce y prologa para la *Biblioteca Ácrata* el libro de A. Hamon, *De la patria*.) Por otra parte, la guerra les permite marcar aún más la distancia con los republicanos.

Sin embargo, sus posiciones teóricas tan rotundas no se traducen apenas en acciones movilizadoras. La represión del anarquismo terrorista dificultaba la organización y la propaganda. En todo caso ésta se veía absorbida por sus propios problemas: la defensa de los procesados.

Junto a la reacción popular, espontánea y organizada, hay que incluir también en el bloque antibelicista la actitud de algunos intelectuales, como Costa y Unamuno, que adelantan propuestas regeneracionistas, la de los republicanos federales, con Pi y Margall a la cabeza, y la de los regionalistas y nacionalistas.

La posición de los federales ante el conflicto cubano es una de las más coherentes y definidas. En la tradición federal del partido y en su proyecto político de 1873 encajaba perfectamente la autonomía cubana. Nada más iniciado el conflicto abogan por la concesión de una amplia autonomía, con lo que se colocan en una posición singularmente crítica con respecto al régimen. A medida que la guerra se agudiza, Pi pasa a posiciones proindependentistas, ante la perspectiva de un conflicto sin salida.

La posición de Pi resulta excepcional entre los políticos y la prensa del momento, pero no pasa de ser testimonial. No tiene capacidad movilizadora (lo que le reprochan los socialistas). Por lo demás adolece de gran ingenuidad en su análisis de la posición norteamericana. En su benévola consideración de la República federal estadounidense no cabía la hipótesis de una intervención imperialista.

La guerra de Cuba contribuyó a potenciar los movimientos regionalistas y nacionalistas, especialmente después del *desastre*, pero también antes.

El malestar popular, especialmente rural, durante la guerra impulsó el nacimiento de las ligas agrarias en Galicia. El antiespañolismo de Sabino Arana encuentra en la coyuntura de la guerra una ocasión más para manifestarse, si bien tampoco comparte, inicialmente, la lucha nacionalista cubana (sin base indígena). Progresivamente se muestra más comprensivo con la causa nacional cubana. En todo caso, la primera ideología nacionalista vasca rechaza cualquier proyecto colonial incluso aunque pudiera favorecer al capitalismo vasco.

Los catalanistas ligados económicamente a la colonia coinciden inicialmente (en 1895) con la posición gubernamental. Los fracasos militares y la crisis económica les van haciendo cambiar de postura. El *desastre*, y la liquidación consiguiente de los intereses que les ligaban a la política de Madrid, marcarán la definitiva ruptura con los políticos dinásticos y el surgimiento alternativo de una nueva fuerza política, la Lliga.

En conclusión, todo el abanico de fuerzas políticas de la España finisecular se vio obligado a definirse ante el conflicto bélico. Por conveniencias,

convicciones y oportunismos se alinearon en dos campos, a favor o en contra de la guerra, que Serrano caracteriza así:

El campo belicista lo componen desde luego todos los partícipes tradicionales del juego político de la Restauración, desde los partidos de turno hasta las entidades económicas dominantes, pero además consigue captarse a sus principales opositores, carlistas y republicanos...

El otro bando no dejaba tampoco de aunar momentáneamente grupos opuestos: entre el nacionalismo católico y antimaqueto de Arana y el internacionalismo no siempre exento de anticlericalismo de Perezagua, no era fácil realizar una síntesis. Débiles todos, los unos con Pi, por estar ya moribundo el partido federal, los otros, movimiento obrero y nacionalistas, por incipientes, discutían en formas diversas los principios mismos sobre los cuales estaba asentado el poder de la Restauración.

La guerra había puesto de relieve la naturaleza íntima del régimen, provocaba la consolidación de nuevas fuerzas políticas disidentes cargadas de futuro (socialistas, nacionalistas) y parecía propiciar la constitución de un *bloque democrático*, alternativo al que venía ocupando el poder desde 1875. En definitiva, la guerra de Cuba amenazaba al propio régimen. Sin embargo, tras el *desastre*, el sistema político de la Restauración saldrá renovado y fortalecido. A ello contribuirá, por una lado, la rápida superación de la crisis económica, y, por otro, el cansancio y alivio popular ante el final de la guerra, la ausencia de verdaderas alternativas políticas (el fracaso de la Unión Nacional y del movimiento de las Cámaras es revelador), sin olvidar la capacidad de los partidos dinásticos para asumir parte de las aspiraciones regeneracionistas expresadas en esa coyuntura (el Gobierno Silvela).

LA QUIEBRA IDEOLÓGICA EN EL FIN DE SIGLO

La abundante bibliografía sobre el 98 ha insistido, sobre todo, en la quiebra ideológica que el desastre colonial supone para el andamiaje de la Restauración. La crisis política pudo ser superada, al menos de momento, pero el sistema ideológico y de valores que sustentaba la Restauración desde sus inicios sufrió un importante quebranto. En esa crisis ideológica jugó un papel destacado, como catalizador, el desastre colonial, pero la revisión ideológica se había iniciado ya antes en todos los frentes, y de ello podemos encontrar algunos testimonios elocuentes. Lo que ocurre es que esa revisión se hacía en círculos y ámbitos relativamente minoritarios, mientras que después del 98 obtendrán una gran ampliación, cuando el regeneracionismo se convierta en lugar común y tópico de todo discurso, debate, o artículo de periódico.

El que la revisión ideológica preceda al desastre colonial no ha de extrañar si se tiene en cuenta que una élite intelectual, literaria y artística se esforzaba por mantener contactos con la cultura europea, de modo que, con

pequeños desfases, el pensamiento de Schopenhauer o de Nietzsche, la nueva criminología social italiana, el teatro de Ibsen, los escritos de Kropotkin, etcétera, fueron conocidos y difundidos, aunque en pequeña escala, a través de *La España Moderna* o en círculos intelectuales cualificados como el Ateneo de Madrid.

Hacia el regeneracionismo

La conciencia regeneracionista, en cuanto revisión crítica del sistema político y de la ideología dominante de la Restauración canovista, se manifiesta de forma generalizada después del desastre, pero ya antes encontramos expresiones lúcidas de crítica al sistema político y denuncia de los problemas sociales.

La crítica al carácter pseudoparlamentario del sistema establecido está bien representada en la obra de Gumersindo de Azcárate, *El régimen parlamentario en la práctica*. La puesta en práctica del sufragio universal, al exigir la utilización a mayor escala de las prácticas caciquiles, aumentó las críticas al régimen.

— Desde dentro de los partidos dinásticos no faltan proyectos que revelan conciencia reformista, como el de reforma de la Administración local preparado por Silvela en 1891, o el de Maura (1893) sobre la reforma de la administración colonial en Cuba.

— La preocupación social reformista, que, como se ha señalado, cobra especial auge a partir de 1890, puede considerarse como otra manifestación prerregeneracionista. El pensamiento social-reformista se expresa a través de la renovación de las ciencias sociales.

— La ciencia jurídica revisa sus presupuestos individualistas. En España se traduce *El Derecho civil y los pobres*, de A. Menger. Dorado Montero, por su parte, importa de Italia el nuevo Derecho Penal.

— A España también llegan, aunque con dificultad, los ecos de los economistas alemanes, *los socialistas de cátedra*, pues los más prestigiosos de los nuestros, Gabriel Rodríguez y Piernas Hurtado, se alinean en el frente antiproteccionista.

— Una nueva ciencia incipiente, la Sociología, es el principal cauce de expresión de la inquietud reformista. *Sociólogos*, en un sentido genérico, se llama a todos los que tratan de la cuestión social o investigan y encuestan esa realidad.

— El auge de la Psicología es otro síntoma de la reacción idealista. Una nueva forma de aproximación a la realidad de un pueblo no es ya la Historia sino la Psicología (Altamira), la intrahistoria de Unamuno.

Desde el principio de la Restauración la actividad de los krausistas se vuelca hacia la regeneración del hombre como cauce lento pero eficaz de reforma del país y del pueblo. En ellos pesaba el fracaso de la Revolución

del 68. Pronto la Institución Libre de Enseñanza se convierte en algo mucho más importante que en un centro privado de enseñanza, creado como alternativa a la escuela pública por los profesores expulsados de sus cátedras en 1876. Como hace tiempo subrayó el libro de Gómez Molleda, la Institución *difusa* es mucho más importante e influyente que el centro de enseñanza. El *Boletín de la Institución* (el *BILE*) se convierte en el órgano de expresión y coordinación del pensamiento y las iniciativas de un grupo de personas, más o menos vinculadas a Giner. En él tienen cabida no sólo los estudios estrictamente pedagógicos, sino también los jurídicos de J. Costa, los psicológicos de U. González Serrano, y las noticias sobre las primeras actividades de *extensión universitaria* del grupo de Oviedo.

No es preciso insistir más en ello, pues la bibliografía de los últimos años ha subrayado esa omnipresencia de los hombres de Giner en las diversas plataformas culturales: revistas de pensamiento, cátedras de los Ateneos, Universidades e Institutos de Enseñanza Media.

Los círculos de reunión y expresión

Entre los numerosos lugares de reunión y expresión de la intelectualidad de la Restauración vamos a fijarnos en dos de los más influyentes y representativos del fin de siglo: la revista *La España Moderna* y el Ateneo de Madrid.

La España Moderna es una revista representativa de la recepción de la cultura europea por una élite selecta. El gran mecenas de ésta y otras empresas culturales fue José Lázaro Galdiano.

En 1889 nacía una empresa editorial con pretensiones de reproducir en España modelos europeos como el de la *Revue des deux mondes*. Raquel Asun, principal estudiosa de la revista, define así los objetivos de su mecenas: Lázaro quiso hacer la revista de la burguesía ilustrada del siglo XIX, una burguesía que imaginaba al modo de la europea y que necesariamente debía contar con una publicación a la altura de los tiempos presentes; una revista que estuviera, como necesario punto de referencia, en Universidades, Ateneos, tertulias, Ayuntamientos, consulados, y, en último extremo, en las manos de todo aquel que quisiera estar al día en el diverso y complejo suceder de los acontecimientos literarios, culturales y sociológicos.

El pequeño número de suscriptores, nunca más de 750, y la dificultad inicial para conseguir la colaboración asidua de las mejores plumas del país, indican los límites reales del proyecto inicial. Sólo el mecenazgo de José Lázaro Galdiano explica la pervivencia de una revista y una empresa editorial (desde 1891) que claramente está por encima de las posibilidades culturales del país en ese momento.

Pero el inevitable carácter elitista del público que lee la revista o compra los libros que la editorial publica no quita interés a la importante labor

que desempeña como introductora y traductora de la literatura europea más reciente y valiosa, o de las corrientes de pensamiento filosófico, jurídico y sociológico en boga.

Desde el primer momento la revista se muestra con un talante independiente, ecléctico y fundamentalmente abierto a todo lo que de nuevo y valioso había en el panorama literario y científico europeo. La solvencia económica del mecenazgo garantiza la independencia y la contratación de las mejores plumas, nunca antes tan bien pagadas. A pesar de lo cual, la falta de colaboración de algunos de los autores convocados obligará pronto a prodiigar las traducciones para llenar el espacio.

En la selección de autores extranjeros juegan un papel decisivo los consejeros de que Lázaro Galdiano se rodea: Pardo Bazán, los jóvenes krausoinstitucionistas Posada, Altamira y Dorado; a partir de 1894, Unamuno y Menéndez Pelayo influyen también en la selección de autores.

Fruto de la colaboración con los jóvenes profesores krausistas, introductores de la Sociología y del nuevo Derecho Penal, es la fundación de otras revistas dedicadas específicamente a la difusión de las nuevas ciencias sociales: *La Nueva Ciencia Jurídica* (1891), *La Revista Internacional* (1894) y la *Revista de Derecho y Sociología* (1895). Todas ellas, de vida efímera, testimonian junto a las traducciones publicadas por la editorial, la temprana recepción en España, aunque fuera en círculos muy minoritarios, de autores tan significativos como Spencer, Schopenhauer, Renan, Ferri, Engels, Kropotkin, Taine, Lombroso.

Círculo de convivencia intelectual, así es como lo define F. Villacorta, el Ateneo es el lugar de reunión y expresión de la élite intelectual y política, principalmente madrileña, aunque a sus cátedras acudirán invitados de provincias. Durante los primeros años de la Restauración es el refugio de los liberales-demócratas expulsados del poder, donde disponen de un cierto margen de libertad para la exposición y el debate de sus ideas. En esos años se discute con libertad sobre el positivismo y el evolucionismo. Un indicador del clima intelectual y político que se respiraba en el Ateneo lo constituye el recelo que despierta la presencia del rey Alfonso XII con motivo de la inauguración de la nueva sede en 1884.

Después de 1885, con el régimen más consolidado y el progresivo asentamiento de las libertades, se amplía también entre la élite el margen de diálogo y tolerancia. En la presidencia del Ateneo se reproduce, a la inversa, la alternancia en la presidencia del Gobierno: Cánovas y Moret van de la presidencia del Ateneo al Consejo de Ministros, y viceversa.

La actividad del Ateneo de Madrid es uno de los mejores escaparates del pensamiento y la cultura durante la Restauración. En él se debaten las grandes cuestiones de actualidad: el régimen parlamentario democrático, la reforma de la Administración local, el regionalismo, la nueva *cuestión social*.

La Escuela de Estudios Superiores creada por iniciativa de Moret en

1896 es la mejor expresión del nivel intelectual y científico español de fin de siglo. Repasando el cuadro de profesores y los títulos y programas de los cursos programados e impartidos, se confirma la presencia en la *academia* española de las corrientes intelectuales en boga. Destaca también la pluralidad ideológica, síntoma de la ampliación de la tolerancia: junto a Montero Ríos, que imparte un curso sobre *Consideraciones sobre el restablecimiento de la unidad religiosa en el mundo cristiano*, Juan Manuel Ortí y Lara imparte otro sobre *La filosofía de Santo Tomás*, con gran disgusto de la prensa integrista que aborrece esta presencia de un católico en un centro liberal tan cualificado como el Ateneo. Y Leopoldo Alas explica otro curso sobre *Teorías religiosas de la filosofía novísima*, es decir, sobre la renovación espiritualista e idealista de la filosofía francesa.

Los cursos de la Escuela de Estudios Superiores se celebraron hasta 1906 con regular asistencia y algunos problemas financieros a pesar de las subvenciones conseguidas. El Ateneo, finalmente, no podía suplir las deficiencias de la propia Universidad y convertirse en centro de estudios de doctorado. Y ello resultaba especialmente claro en el caso de los cursos experimentales. Pero, independientemente de su éxito o fracaso, la Escuela de Estudios Superiores levanta acta del nivel y de las corrientes dominantes en el pensamiento español de fin de siglo.

La crisis del positivismo

Hacia el fin de siglo, con notable retraso respecto de Europa, entra en crisis la fe positivista que tan bien configura la primera etapa de la Restauración. Veamos algunas manifestaciones de esa revisión antipositivista:

— Gil Cremades, en su libro fundamental sobre el Reformismo, constata en el plano de la filosofía del derecho (derecho natural), en las tres corrientes más influyentes en España (el krausismo, el historicismo y el tomismo), una inflexión de carácter idealista o espiritualista. El ideal de un armonicismo organicista parece ser compartido por todos; un interesante denominador común o punto de convergencia que permite el diálogo e incluso la colaboración en proyectos reformistas comunes.

— La influencia de Nietzsche en la España finisecular coincide con el atractivo que el anarquismo ejerce sobre jóvenes intelectuales (Azorín o el propio Unamuno). El anarquismo se pone de moda entre los intelectuales. La cultura y la estética libertarias, estudiadas por L. Litvak, se manifiestan en múltiples iniciativas educativas y publicitarias: escuelas para niños y para adultos, bibliotecas populares, revistas de altos vuelos como *Acracia*, *Ciencia Social* (que aparece en 1895) y, sobre todo, *La Revista Blanca*, que nace en 1898, como un eco de la campaña contra los procesos de Montjuich. Es en estas revistas donde se materializa la colaboración de algunos intelectuales,

entre la simpatía de unos y el recelo de otros, que rechazan la estética modernista del arte por el arte.

— El sustantivo *intelectuales*, como grupo con conciencia de una misión crítica frente al poder, comienza a utilizarse en España, según el estudio de Inman Fox, un poco antes del 98, casi al mismo tiempo que en Francia para designar el compromiso de Zola y sus seguidores frente al *affaire Dreyfus*. En España la campaña de los intelectuales frente a los procesos de Montjuich juega un papel análogo. El obrerismo de los intelectuales, los jóvenes del 98, ha sido bien subrayado por diversos autores. La revista *Germinal*, por ejemplo, estudiada por Pérez de la Dehesa, expresa bien ese acercamiento de un grupo de jóvenes intelectuales republicanos al socialismo.

— En los grandes novelistas del realismo y naturalismo español, Clarín, Galdós Pardo Bazán (y no hay que olvidar que en la última década del siglo estos autores son más leídos e influyentes que los *jóvenes del 98*) se aprecia también una evolución estética que se puede definir como crisis del realismo. Determinados cambios en la técnica narrativa, como la importancia que se concede al diálogo, expresan, según Lissorgues y Salaun, el desconcierto del novelista ante nuevas realidades sociales difícilmente encuadrables en la cosmovisión positivista anterior. *Toda la obra literaria de Galdós, desde Realidad, puede circunscribirse en esta dialéctica que va de lo que es a lo que debería ser*. Es la tensión que atraviesa a *Torquemada*, *Ángel Guerra*, *Nazarín* y *Misericordia*.

El hecho de que la popularidad y el prestigio de Zola se incrementen y difundan especialmente a partir de su toma de posición en el *affaire Dreyfus* no es contradictorio con la crítica y el rechazo del naturalismo. En suma, según los citados autores, *en torno a 1900, los novelistas españoles que, entre 1880 y 1890, se han comprometido, por necesidad ética tanto como estética, en la novela realista (enriquecida por algunas orientaciones naturalistas) parecen empujados por la obligación de devolver un sentido (una dirección) a la realidad social y humana, el de su propia convicción*.

También se pueden encontrar en la España finisecular algunos ejemplos aislados del nuevo clima de renovación idealista y religiosa en cuyo contexto surgirá la llamada *crisis modernista*. Dentro del pensamiento católico español algunos, como fray Ceferino González y el dominico Arintero, tratan de establecer un diálogo entre la ciencia y la fe (el evolucionismo cristiano). Pero es sobre todo fuera de la Iglesia donde mejor se expresa esa aspiración renovadora. En las novelas de Valera, Clarín y Galdós no sólo hay críticas del catolicismo tradicional, sino propuestas y modelos alternativos. El reciente libro de A. Botti, *La Spagna e la crisi modernista*, traza muy bien ese panorama.

En Clarín (como ha estudiado Lissorgues), la atención, desde 1891, a las corrientes de renovación espiritualista va más allá de la mera expresión literaria. El curso que da Leopoldo Alas, en el otoño de 1897, en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, sobre *Las teorías religiosas*

de la filosofía novísima, es un testimonio interesante, por más que excepcional, de la penetración en España de la nueva filosofía espiritualista francesa. Más que la crítica literaria, a Clarín le interesa y le parece más oportuno, teniendo en cuenta el clima intelectual español, hablar de la doctrina de Bergson, Renouvier, Sabatier...: *Sigo hace años con cariño* —escribe Clarín a Morret—, *con seriedad de hombre que se hace viejo, el muy simpático, noble movimiento de la filosofía modernísima en sus tendencias de renacimiento metafísico y de alto sentido religioso. Sabe usted mejor que yo cuanto trabaja en este sentido la brillante y poco popular juventud filosófica de Alemania, Francia y algún otro país; pero si usted y otros pocos saben en España de estas cosas, para los más, aun entre los aficionados a tales asuntos, ese gran movimiento es desconocido. A lo sumo, a lo que suele llegarse es a conocer, y no bien, la restauración idealista y religiosa de la literatura; pero eso es otra cosa mucho menos importante, y no en todos sería y pura.*

El Modernismo, en literatura y en las artes plásticas, es la expresión en el plano estético de la reacción antipositivista. *El punto central (...) lo que reúne a todos los modernistas de Europa y América es, más que la lucha por la libertad prosódica, el neoespiritualismo común a toda la vanguardia europea de aquel entonces* (L. Litvak). Octavio Paz, que caracteriza el modernismo como una reacción antipositivista, basa en ello precisamente el triunfo del modernismo en América y su tardío eco en España, donde el positivismo no se había dado en su estado puro, sino corregido por el idealismo krausista (krausopositivismo). Rubén Darío había estado en España en 1892, en la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, pero es en su segunda estancia, en 1898, como corresponsal de *La Nación*, cuando influye decisivamente en Juan Ramón y otros poetas.

En la literatura y en el arte se advierten novedades, anticipaciones, pero siguen pesando estilos y culturas tradicionales: *En la España de 1900* —apunta C. Serrano— *la innovación artística y cultural puede surgir, pero difícilmente llega a sobrevivir en contacto con una sociedad donde la debilidad de los mercados y la estrechez de los públicos hacían precaria la existencia del artista innovador y aleatorio el destino de su obra.*

BIBLIOGRAFÍA

Lo que presentamos a continuación no es una lista exhaustiva de títulos, sino una selección comentada de aquellos títulos básicos, fundamentales, que hemos tenido más en cuenta a la hora de elaborar esta síntesis. Se ha tratado de incluir los títulos más recientes, especialmente sobre las cuestiones menos tratadas por la historiografía.

1. *Síntesis generales sobre la Restauración*: Entre estas síntesis, sigue siendo de gran utilidad y referencia obligada la de M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, *Historia política de la España contemporánea*, ed. Alianza, Madrid, varias edic. Síntesis breve

e introductoria es la de J. L. COMELLAS, *La Restauración como experiencia histórica*, Sevilla, 1977. La obra de José VARELA ORTEGA, *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, Madrid, 1977, ed. Alianza, no es sólo un estudio sobre el caciquismo castellano, sino que constituye una buena síntesis de historia política del último cuarto del siglo. Muy comprehensiva de toda la realidad histórica es la síntesis de J. M.^a JOVER, *La época de la Restauración: panorama político-social, 1875-1902*, en el vol. VIII de la «Historia de España», dir. por M. Tuñón de Lara. Para el comienzo de la Restauración, el libro de M. ESPADAS, *Alfonso XII y los orígenes de la Restauración*, Madrid, 1975, CSIC. Específicamente, sobre la Regencia, la clásica síntesis de Gabriel MAURA GAMAZO, *Historia crítica del reinado de don Alfonso XIII durante la minoridad bajo la regencia de doña María Cristina de Austria*, Barcelona, 1920, tiene un interés no sólo historiográfico. Para la crisis de fin de siglo, 1895-1898, los dos libros de C. SERRANO, *El final del imperio, España 1895-1898*, Madrid, 1984, ed. Siglo XXI; y *Le tour du peuple. Crise nationale, mouvements populaires et populisme en Espagne (1890-1910)*, Madrid, 1987, ed. Casa de Velázquez. Citemos finalmente dos publicaciones de coloquios: J. L. GARCÍA DELGADO, ed., *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, 1985, ed. Siglo XXI (actas del I Coloquio de Segovia, dir. por Tuñón de Lara; A. BAHAMONDE y L. E. OTERO, eds.): *La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931*, Madrid, 1989, ed. Alfoz.

2. *Historia política*: Además de las síntesis ya citadas, cuyo eje narrativo y explicativo es fundamentalmente el político, especialmente las obras de M. Fernández Almagro, la de Varela Ortega y la de G. Maura Gamazo sobre la regencia.

Apenas disponemos de biografías recientes de los protagonistas políticos (un vacío historiográfico notable). Sólo las de Cánovas, especialmente la de M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, *Cánovas, su vida y su política*, Madrid, 1972, 2.^a ed; y la de J. L. COMELLAS, y el estudio de E. YLLÁN, *Cánovas del Castillo, entre la historia y la política*, Madrid. Para los demás hay que acudir a perfiles de la época como el de Miguel MOYA, *Oradores políticos*, Madrid, 1890; recopilaciones de discursos como el de F. Llanos y Torriglia sobre Silvela; historias parlamentarias como las de J. Nido y Segalerva, sobre Cánovas y sobre Sagasta. Sobre la Constitución de 1876, además de las referencias contenidas en las clásicas historias del constitucionalismo de L. Sánchez Agesta, J. Tomás Villarroja, y J. Solé Tura, el número monográfico de la *Revista de Derecho Político* de la UNED, *El sistema político de la Restauración*, n.º 8 (1981), y el libro de A. M.^a CALERO, *El libro de la Monarquía*, incluido en «Estudios de Historia», Madrid, 1988, ed. U. Autón, Madrid. En los últimos años han proliferado las publicaciones sobre oligarquía y caciquismo. Comenzando por la reedición de los clásicos: la obra de G. de AZCÁRATE, *El régimen parlamentario en la práctica*, Madrid, 1978, reed., ed. Tecnos; *La Información en el Ateneo de Madrid (1901)*, dirigida por J. COSTA, *Oligarquía y caciquismo como la forma actual del Gobierno en España*, Madrid, 1975, con una amplia introducción de A. ORTI, ed. Rev. Trabajo. El n.º 127 de la *Revista de Occidente* (1973) dedicado monográficamente al tema con artículos de J. Romero Maura, J. Varela Ortega y J. Tusell. De VARELA ORTEGA el libro ya citado, *Los amigos políticos*, y de J. TUSELL, *Oligarquía y caciquismo en Andalucía, 1890-1923*, Barcelona, 1976. Sobre el caciquismo en Galicia, los libros de J. A. DURÁN. En la línea de estas investigaciones han continuado muchas monografías locales de historia política y electoral, entre los que resulta representativo el libro de A. YANINI, *El caciquismo*, Valencia, 1984; y el reciente estado

de la cuestión presentado por A. Yanini y C. Dardé en el coloquio sobre «El reinado de Alfonso XIII», celebrado en Madrid, UNED, noviembre 1989.

Sobre los regionalismos y los primeros movimientos nacionalistas, el n.º 28-29 (1984) de *Estudios de Historia Social* recoge las actas del coloquio «Os nacionalismos en España da Restauración», celebrado en Santiago en 1983; J. P. FUSI (ed.), *España autonomías*, 1990, ed. Espasa; R. MAIZ, *O rexionalismo galego: organización e ideoloxía*, 1984; J. P. FUSI, *Política y nacionalidad*, en Actas del Congreso de Historia de Euskal Herria, t. VII, Evolución Política (s. XX). F. BORJA DE RIQUER, *Lliga regionalista: la burguesía catalana i el nacionalisme*, Barcelona, 1977, edic. 62; J. CORCUERA, *Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876-1904*, Madrid, 1979.

Sobre la política exterior durante este último cuarto del siglo sigue siendo útil la excelente síntesis de Julio SALOM COSTA, *España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas*, Madrid, 1967, ed. CSIC, y las referencias al período contenidas en la obra clásica de J. BÉCKER, *Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX*, Madrid, 1926; y en la síntesis de J. M.ª JOVER, *Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX*, Madrid, 1961, reeditada en el libro *Política, diplomacia y humanismo popular*, Madrid, 1976, ed. Turner.

Sobre el colonialismo y el africanismo español, la tesis doctoral de Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, *Pensamiento burgués y problemas coloniales en la España de la Restauración, 1875-1887*, Madrid, 1982, Univ. Complutense. V. MORALES LEZCANO, *Africanismo y orientalismo español en el siglo XIX*, Madrid, 1988, ed. UNED.

Sobre el 98, además del trabajo clásico de J. PABÓN: *El 98, acontecimiento internacional*, en «Días de ayer. Historias e historiadores contemporáneos», Barcelona, 1963; el de J. M.ª JOVER, 1898. *Teoría y práctica de la redistribución colonial*, Madrid, 1979, FUE; y el reciente libro de Rosario DE LA TORRE: *Inglaterra y España en 1898*, Madrid, 1988, ed. Eudema.

Sobre Cuba, la administración colonial y la guerra, la citada tesis de E. Hernández Sandoica; el libro de J. DURNERÍN, *Maura y Cuba*, París, 1978; el número monográfico dedicado por *Estudios de Historia Social*, n.º 44-47, *España y Cuba en el siglo XIX*.

3. Nuestro conocimiento de la *historia económica* del siglo XIX ha mejorado considerablemente en los últimos años, a medida que se han publicado las tesis doctorales de la *nueva historia económica*, casi todas en primer lugar en el Servicio de Estudios del Banco de España, principal promotor y editor de estas investigaciones. Las principales novedades se anticipan en la síntesis de G. TORTELLA, *La economía española, 1830-1900*, incluida en el vol. VIII de la «Historia de España», dir. por Tuñón de Lara; y en el n.º 20 de *Papeles de Economía Española* (1984), *La nueva cara de la historia económica de España*. A ello hay que añadir dos libros colectivos: el compilado por Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ, *La modernización económica de España, 1830-1930*, Madrid, 1985, ed. Alianza; y el compilado por P. MARTÍN ACEÑA y L. PRADOS DE LA ESCOSURA, eds., *La nueva historia económica de España*, ed. Tecnos.

Por sectores hay que mencionar, sobre la Banca, el libro colectivo de R. ANES y otros, *La Banca española durante la Restauración*, Madrid, 1974, ed. Banco de España.

Sobre los ferrocarriles, el colectivo dir. por M. ARTOLA, *Los ferrocarriles en España, 1844-1943*, Madrid, 1978, ed. Banco de España; y los libros de A. GÓ-

MEZ MENDOZA, *Ferrocarriles y cambio económico en España, 1855-1913*, Madrid, 1982, ed. Alianza, y el más breve ensayo, *Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España*, Madrid, 1989, ed. Espasa-Calpe.

Sobre el comercio exterior, varios trabajos de L. PRADOS DE LA ESCOSURA y su libro *De imperio a nación, crecimiento y atraso en España (1780-1930)*, Madrid, Alianza, 1988.

Sobre la política comercial, la excelente síntesis de J. M.^a SERRANO SANZ, *El vi-raje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895*, Madrid, 1987, ed. siglo XXI. Este mismo autor tiene una monografía sobre *Los presupuestos de la Restauración, 1875-1895*, Madrid, 1987, ed. I. E. Fiscales. Ver también F. COMIN COMIN, *Hacienda y Economía en la España Contemporánea*, ed. IEF, Madrid, 1988.

La historia agraria ha experimentado también un importante desarrollo historiográfico, la *Historia agraria de la España contemporánea*, compilación a cargo de R. GARRABOU y J. SANZ, Barcelona, 1985, ed. Crítica, es un buen testimonio.

Mencionemos los trabajos del «Grupo de Estudios de Historia Rural» sobre precios agrarios, publicados por el Banco de España. Dentro de este campo, la crisis agraria finisecular ha merecido especial atención: el pionero trabajo de R. GARRABOU, *La crisis agraria española de finales del siglo XIX: una etapa del desarrollo del capitalismo*, publicado en *Recerques*, 5 (1975), y reeditado en el vol. 2 de la «Historia agraria» citada; R. GARRABOU (ed.), *La crisis agraria de fines del siglo XIX*, Barcelona, 1988; el estado de la cuestión de A. M.^a BERNAL, *La llamada crisis finisecular, 1872-1919*, incluido en el colectivo citado «La España de la Restauración», Madrid, 1985.

Sobre el impacto social de la crisis, el estudio de R. ROBLEDO HERNÁNDEZ, *La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León (1863-1913)*, Madrid, 1984, ed. Banco de España.

Sobre el otro gran tema agrario importante del período aquí abordado, la expansión y caída de la vid, la obra de T. CARNERO, *Expansión vinícola y atraso agrario*, Madrid, 1980.

Sobre el desarrollo económico regional, en una perspectiva comparativa, *Industrialización y nacionalismo*, Barcelona, 1985; y *La industrialización del norte de España*, compilado por E. FERNÁNDEZ PINEDO y J. L. HERNÁNDEZ MARCO, Barcelona, ed. Crítica; y J. NADAL y A. CARRERAS (eds.), *Pautas regionales de la industrialización española siglos XIX y XX*, Barcelona, 1990; sobre el despegue vasco, los estudios de M. GONZÁLEZ PORTILLA, *La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco*, San Sebastián, 1981, y *La siderurgia vasca (1880-1901)*, Bilbao, 1985; G. OJEDA, *Asturias en la industrialización española, 1833-1907*, Madrid, 1985, ed. Siglo XXI.

4. Dentro de la *historia social*, entendiéndola en el sentido restrictivo de historia de las clases, los grupos y los movimientos sociales, se advierte aún un notable desfase entre los estudios sobre movimiento obrero y los dedicados a otros grupos y protagonistas sociales.

V. PÉREZ MOREDA y D. S. REHER, eds., *Demografía histórica en España*, ed. El Arquero, Madrid, 1989. J. J. FERNÁNDEZ SANZ, *El cólera de 1885 en España*, Madrid, 1889, tesis doctoral Univ. Complutense.

• Sobre las élites, *Les élites espagnoles à l'époque contemporaine*, Pau, 1984; F. VI-

LLACORTA BAÑOS, *Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo, 1890-1923*, Madrid, 1989; R. GARRABOU, *Engineers industrials, modernisation economica e burguesia a Catalunya*, Barcelona, 1982.

La historiografía española sobre el movimiento obrero ha revisado y autocriticado, como se sabe, sus planteamientos, a partir especialmente del artículo de ÁLVAREZ JUNCO y PEREZ LEDESMA en *Revista de Occidente*. El libro de M. PÉREZ LEDESMA, *El obrero consciente*, Madrid, 1987, recopilación de trabajos anteriores, es un ejemplo de esa revisión. La mejor síntesis del primer socialismo español es la de Santiago CASTILLO: *Los primeros pasos del socialismo español (1874-1898)*, en el vol. 1 de la *Historia del socialismo español*, dir. por Tuñón de Lara, Barcelona, 1989, ed. Conjunto. Esta síntesis es el fruto de varias investigaciones publicadas en numerosos artículos.

Sobre el socialismo, el asociacionismo obrero, el mutualismo y las formas de sociabilidad obrera, son importantes los artículos de M. RALLE, dispersos en revistas y publicaciones de coloquios. Entre ellos, «Socialistas madrileños. De los orígenes de la agrupación a 1910», en *Estudios de Historia Social*, 22-23 (1982).

Sobre el anarquismo, aparte del estudio de ÁLVAREZ JUNCO, *La ideología política del anarquismo español (1868-1910)*, Madrid, 1976; el estudio específico de R. NÚÑEZ FLORENCIO, *Terrorismo anarquista. La propaganda por el hecho*, 1983, ed. Siglo XXI; J. MAURICE, *El anarquismo en el campo andaluz: una interpretación*, «Estudios regionales», 24 (1989), y *El anarquismo andaluz: campesinos y sindicalistas, 1868-1936*, ed. Crítica, Barcelona, 1990; los libros de L. LITVAK, *La musa libertaria*, 1981, Barcelona, y *La mirada roja. Estética y arte del anarquismo español*, Barcelona, 1988.

Sobre la colaboración de los intelectuales y escritores en publicaciones obreras hay también una bibliografía abundante: varios trabajos de R. Pérez de la Dehesa; la edición de la correspondencia de Unamuno con los líderes obreros a cargo de M.^a Dolores GÓMEZ MOLLEDA, *El socialismo español y los intelectuales*, Salamanca, 1980.

Sobre los orígenes de la política social del Estado, en la etapa que va desde la creación de la Comisión de Reformas Sociales (1884) a la del Instituto de Reformas Sociales (1902), publicaciones recientes han llenado este vacío: la reedición de la *Información oral y escrita*, de la CRS, con introducción de S. Castillo; el libro de J. I. PALACIO MORENA, *La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924), la comisión y el Instituto de Reformas Sociales*, 1988; el de F. MONTERO, *Antecedentes y orígenes del INP en España*, vol. 1 de la obra colectiva dirig. por M.^a Dolores GÓMEZ MOLLEDA, *Los seguros sociales en España*, 1989, y el de M.^a Dolores DE LA CALLE, *La Comisión de Reformas Sociales, 1883-1903. Política social y conflicto de intereses en la España de la Restauración*, 1989. Todos ellos publicados por ed. Ministerio de Trabajo. Además hay que mencionar *El reformismo social en España. La Comisión de Reformas Sociales*, Córdoba, 1987, publicación de las actas de un coloquio conmemorativo de la CRS, y los números monográficos dedicados al tema por la revista de la Universidad de Salamanca, *Studia Historica* (1984), y por *Estudios de Historia Social*, 30 (1984).

5. Sobre la Iglesia y el factor católico durante la Restauración, siguen siendo punto de partida las síntesis de J. M. CUENCA y el libro de J. ANDRÉS GALLEGO, *La política religiosa en España, 1889-1913*, Madrid, 1975, y la contribución de este mismo autor en el vol. correspondiente de la *Historia general de España y América*,

XVI, 2. Algunas publicaciones recientes han enriquecido considerablemente nuestro conocimiento. El libro de Cristóbal ROBLES, *Insurrección o legalidad. Los católicos y la Restauración*, Madrid, 1988, CSIC, presenta, desde la documentación vaticana, el punto de vista de la Iglesia ante la Restauración canovista. El libro de V. CÁRCCEL ORTÍ, *León XIII y los católicos. Informes vaticanos sobre la Iglesia en España*, Euns-sa, Pamplona, 1988, contiene información de primera mano sobre la situación de la Iglesia y del catolicismo español en la última década del siglo XIX. Sobre la relación de la Iglesia con los medios impresos es muy importante el trabajo de BOTREL, J. M., *La Iglesia católica y los medios de comunicación impresos en España de 1847 a 1917*, «Metodología de la historia de la prensa española», Madrid, 1982, ed. Siglo XXI. Sobre la Iglesia de los Congresos Católicos y el primer catolicismo social, el libro de F. MONTERO, *El primer catolicismo social y la «Rerum Novarum» en España*, Madrid, 1983, CSIC; y el de J. ANDRÉS GALLEGO, *Pensamiento y acción social de la Iglesia en España*, Madrid, 1984, ed. Espasa.

6. Sobre la política educativa del Estado durante la Restauración sigue siendo útil la síntesis de Y. TURÍN, *La educación y la escuela en España de 1874 a 1902*, Madrid, 1967; pero más allá del estudio de la polémica ideológica, la investigación ha avanzado en el estudio de las realidades, las instituciones, los protagonistas y todo tipo de iniciativas educativas, públicas y privadas, católicas y librepensadoras, para las élites y para el pueblo. Un grupo específico de historiadores de la educación se ha ido creando en las Facultades de Pedagogía. En la *Revista de Historia de la Educación* (Salamanca) y en las actas de los coloquios sobre *Escolarización y sociedad en la España contemporánea*, Valencia, 1983; y sobre *Iglesia y educación en España*, Palma de Mallorca, 1986, hay buenos testimonios del trabajo de este grupo. Sobre la Universidad, la investigación colectiva dirigida por J. L. PESET, y financiada por la Fundación March, sólo publicada en parte. E. HERNÁNDEZ SANDOICA, dentro de ese equipo, ha estudiado la Universidad Central. Sobre la Enseñanza Media es fundamental el libro de Emilio DÍAZ DE LA GUARDIA, *Evolución y desarrollo de la enseñanza media en España de 1875 a 1930*, Madrid, 1988, MEC. Sobre la enseñanza de las congregaciones religiosas, la síntesis reciente de A. YETANO, *La enseñanza religiosa en la España de la Restauración, 1900-1920*, Barcelona, 1988, ed. Anthropos. Sobre las iniciativas de educación popular, J. L. GUEREÑA y A. TIANA, *Cultura y educación populares. Siglos XIX y XX*, Madrid, UNED-Casa de Velázquez. También J. MAURICE (dir.) *Culturas populares, culturas obreras en España, 1840-1883* en «Peuple, mouvement ouvrier, culture dans l'Espagne contemporaine», PUV, Saint-Denis, 1990. Sobre las iniciativas librepensadoras y masónicas, el libro de P. ÁLVAREZ LÁZARO, *Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración*, Madrid, 1985, y las actas de diversos coloquios sobre la historia de la masonería en la España contemporánea celebrados en los últimos años.

La bibliografía sobre la Institución Libre de Enseñanza y el movimiento pedagógico de fin de siglo no ha dejado de crecer desde las obras clásicas de CACHO VIU y de GÓMEZ MOLLEDA; el libro de J. L. BATANAZ PALOMARES, *La educación española en la crisis de fin de siglo. Los Congresos Pedagógicos del siglo XIX*, Córdoba.

7. Sobre la historia de las ideas y del pensamiento, la introducción más útil es la reciente síntesis de J. L. ABELLÁN, *Historia del pensamiento español*, vol 5.º. Siguen siendo fundamentales los libros de Diego NÚÑEZ RUIZ, *La mentalidad positiva en España*, Madrid, 1975, y *El darwinismo en España*, 1977; el de GIL CREMADES, *El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo*, 1969, Bar-

celona; el de E. DÍAZ, *Filosofía social del krausismo español*, Madrid, 1973; los libros de OLLERO TASSARA, sobre Ortí y Lara, uno de los hombres más representativos del tradicionalismo español durante la Restauración. A la abundante bibliografía sobre Menéndez Pelayo hay que añadir el reciente estudio de Marta CAMPOMAR, *La cuestión religiosa en la Restauración*, Santander, 1984, sobre el contexto en el que M. Pelayo publica la «Historia de los heterodoxos».

Para el ambiente ideológico finisecular, son útiles los libros de R. PÉREZ DE LA DEHESA, sobre Costa y Unamuno; los de INMAN FOX, sobre los intelectuales y literatos del 98; el de A. BOTTI, *La Spagna e la crisi modernista*, Brescia, 1987; el colectivo C. SERRANO y S. SALAUN (eds.), *1900 en Espagne*, Burdeos, 1988.

Varios estudios de crítica literaria constituyen buenas contribuciones a la historia de las ideas y mentalidades: la tesis de J. Le BOVILL, sobre Pereda. Entre los numerosos estudios sobre Clarín, los de Y. LISSORGUES, *Clarín político*, 1980, y *La pensée philosophique et religieuse de L. Alas Clarín, 1875-1901*, París, 1983; sobre E. Pardo Bazán, el libro de N. CLEMESSY, *Emilia Pardo Bazán como novelista*, Madrid, 1982. Sobre Palacio Valdés, el estudio de G. GÓMEZ FERRER, *Palacio Valdés y el mundo social de la Restauración*, Oviedo, 1983. Sobre la polémica cuestión del naturalismo I. LISSORGUES (ed.), *Realismo y naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX*, Barcelona, 1988, ed. Anthropos. Interesantes son también los estudios sobre la presencia de lo religioso en los novelistas: el libro de F. PÉREZ GUTIÉRREZ, *El problema religioso en la generación de 1868*, Madrid, 1875; Soledad MIRANDA, *Religión y clero en la gran novela española del siglo XIX*, Madrid, 1982; J. L. MORA GARCÍA, *Hombre, sociedad y religión en la novelística gal-dosiana*, Salamanca, 1981.

Sobre los cauces de difusión cultural, el libro de J. L. BOTREL, *La diffusion du livre en Espagne, 1868-1914*, Madrid, 1988, Casa de Velázquez; F. VILLACORTA BAHOS, *El Ateneo de Madrid (1885-1912)*, Madrid, 1985, CSIC; R. ASÚN ESCARTÍN, *El proyecto cultural de «La España Moderna» y la literatura (1889-1914)*, resumen de tesis doctoral, Barcelona, 1979.